



Diputados y Diputados Locales
Estado de México

SECTEC
E D O M E X

Secretariado Técnico para
el Análisis y Estudio de la
Normativa Constitucional
y el Marco Legal del
Estado de México

GACETA PARLAMENTO ABIERTO REGIONAL TEXCOCO



**ORDEN DEL DÍA
PARLAMENTO ABIERTO REGIONAL
VALLE DE MÉXICO NORORIENTE
22 de Octubre de 2021**

| No. Iniciativa | PARLAMENTARIO/A | PROPUESTA |
|---|---|---|
| PRIMER BLOQUE: DEMOCRACIA Y REGIMEN POLITICO | | |
| 1 | DELIA FIERROS ROJAS CHIMALHUACAN | MODELO DE COSNTITUCIÓN |
| 2 | ELPIDIO MARTINEZ LEON TECAMAC | PARTICIPACION SOCIAL CIUDADANA Y COMUNITARIA |
| 3 | HUMBERTO GUITIERREZ MORELOS LA PAZ | INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO |
| 4 | MAGALY ARISBETH TORRES MORENO HUEYPOXTLA | INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 15 DE LA CONSTITUCION ESTATAL PARA LA REGLAMENTACION Y OTORGACION DE RECURSOS PARA LAS ORGANIZACIONES CIVILES |
| 5 | MARCOS EDUARDO RAMIREZ AVILA | INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE MEXICO |
| 6 | RODRIGO JARAMILLO CRUZ CHICOLOAPAN | INICIATIVA PARA LA PARTICIPACION JUVENIL DENTRO DE |



| | | |
|---|---|--|
| | | LA CAMARA DE DIPUTADOS |
| 7 | PAVELA E. GARCIA BUCIO TECAMAC | APLICACIÓN Estricta a los controles de convencionalidad y constitucionalidad en la emisión de resoluciones judiciales por parte de las autoridades jurisdiccionales de la entidad federativa |
| 8 | ADRIANA M VARGAS GAONA TECAMAC | IMPLEMENTACION DEL VOTO ELECTRONICO EN CASILLAS DE VOTACION |
| SEGUNDO BLOQUE: EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA | | |
| 9 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ MENDOZA HUEYPOXTLA | OBLIGACIONES DEL SECTOR EDUCACION Y SALUD PARA QUE COORDINADAMENTE IMPLEMENTEN LA OBLIGATORIEDAD DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LOS ALUMNOS DESDE PREESCOLAR HASTA NIVEL MEDIO SUPERIOR |
| 10 | IGNACIO HERNANDEZ MARTINEZ HUEYPOXTLA | OBLIGACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO ESTATAL IMPLEMENTANDO LA INCLUSIÓN DE OBLIGATORIEDAD EN NIVEL PREESCOLAR HASTA NIVEL MEDIO SUPERIOR |
| 11 | OSCAR DANIEL TREJO CASTAÑEDA TEXCOCO | INICIATIVA EN MATERIA DE APOYO ECONOMICO A LOS |



| | | |
|---|--|---|
| | | JOVENES QUE CURSAN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS |
| 12 | YAJAIRA XANAT SILVESTRE ESTRADA | INICIATIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EDUCACION SOCIOEMOCIONAL |
| 13 | MARTHA GUTIERREZ FLORES | INCLUSION DE LA LIBERTAD DE ELECCION DE MODALIDAD EDUCATIVA (PRESENCIAL O VIRTUAL) |
| TERCER BLOQUE: DERECHOS HUMANOS | | |
| 14 | BLANCA VERONICA COVARRUBIAS LUGO LA PAZ | REFORMA AL ARTICULO 5 CONSTITUCIONAL PARA LA OBLIGATORIEDAD DEL DERECHO A LA CIUDAD. |
| 15 | GLORIA STEPHANIA GUTIERREZ JIMENEZ TEOTIHUACAN | DIVERSAS REFORMAS A LA CONSTITUCION Y MARCO LEGAL |
| 16 | BRENDA MARYELI RIOS PORTILLO TECAMAC | DESARROLLO ECONOMICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO A LA CIUDAD |
| 17 | MARTHA ANGELICA MAYORALES SILVAS | INCLUSIÓN A RANGO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA A GRUPOS VULNERABLES |
| 18 | JOSE OLIVEROS RUIZ | INCLUSION DE LA VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO COMO CAUSAL GRAVE DE NULIDAD DE ELECCION |
| CUARTO BLOQUE: DESARROLLO URBANO | | |



| | | |
|---|--|--|
| 19 | GAD JAVIER VALENCIA AGUIRRE ACOLMAN | REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MEXICO, REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MEXICO Y CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO PARA VIVIR UN AMBIENTE ADECUADO Y CON UN TERRITORIO SALUDABLE Y DE BIENESTAR |
| 20 | PERLA PENELOPE VELAZQUEZ ALARCON | INCLUSION DEL URBANISMO DENTRO DEL TEXTO CONSTITUCIONAL |
| QUINTO BLOQUE SEGURIDAD Y JUSTICIA | | |
| 21 | SERGIO DELGADO SANCHEZ CHICONCUAC | REFORMA AL DELITO DE EXTORSIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 266 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO |
| 22 | NERI ELI GONZALEZ ESTRADA | PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| SEXTO BLOQUE: FINANZAS, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN | | |
| 23 | ROCIO GOMEZ RAMIREZ | RESPONSABILIDADES ADMISNTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS |
| 24 | MIGUEL ÁNGEL TABLADA MORALES TEPETLAOXTOC | PROPUESTA PARA REVISARLAS CONCESIONES PARA LAS CARRETERAS DEL ESTADO DE MEXICO |
| SÉPTIMO BLOQUE: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | | |
| 25 | JOSE ANGEL RAMIREZ AYALA TEXCOCO | INICIATIVA DE ADICION DEL INCISO C) AL |



| | | |
|----|---|--|
| | | NUMERAL II DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE MEXICO. |
| 26 | JOSE GARIBAY GALLARDO TEXCOCO | INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION ESTATAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES ACOLHUA CHALCA Y TEPENECA ASI COMO EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES Y AFROMEXICANAS |
| 27 | ROCIO ALEJANDRA AYALA PIMENTEL TEXCOCO | REFORMA AL ARTICULO 1 DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE MEXICO Y SE ADICIONEN LOS PARRAFOS A), B) Y C) PARA LA INSTRUMENTACION DE LOS PROTOCOLOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIFINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE MEXICO EN FUNCION DE SUS PROPIOS SISTEMAS NORMATIVOS |
| 28 | NANCY MENDOZA RAMIREZ | INICIATIVA QUE |



| | | |
|---|--|--|
| | | MODIFICA Y ADICIONA EL PARRAFO CUATRO Y SE ADICIONAN LOS PARRAFOS 5 Y 6 DEL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION MEXIQUENSE PARA LA LIBRE DETERMINACION DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS |
| 29 | MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ ZENON | PROPUESTA QUE DEROGA LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE MEXICO Y CREA LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANOS DEL ESTADO DE MEXICO |
| 30 | NANCY MENDOZA RAMIREZ | LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE MEXICO |
| 31 | ARTURO RÍOS ROSAS en representación de MARICELA CUEVAS Tezoyuca | INICIATIVA PARA MANTENER EQUILIBRIO REFERENTE AL CRECIMIENTO POBLACIONAL ANIMAL |
| BLOQUE EXTRAORDINARIA DEL COLECTIVO DE GRUPOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO | | |
| 1 | INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INDÍGENA | PRESENTAN |
| 2 | INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INDÍGENA | |
| 3 | REFORMA AL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO EN MATERIA DE DERECHOS INDIGENAS Y | |



| | | |
|----|---|-------------------------------|
| | AFROMEXICANOS | EN REPRESENTACION |
| 4 | “PROCURADURÍA DE LA DEFENSA INDÍGENA” | DE COLECTIVO DE |
| 5 | DERECHO A LA SALUD (FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL) | GRUPOS INDIGENAS |
| 6 | INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA CONSTITUCION POLITICAN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO | DEL ESTADO DE |
| 7 | INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO PARA LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INDÍGENA | MEXICO: |
| 8 | PROPUESTA DE REFORMADE LOS ARTÍCULOS 5 Y 17 DELA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO | JUAN |
| 9 | LEY QUE CREA EL ORGANISMO AUTONOMO DENOMINADO CONCEJO DE PUEBLOS INDIGENAS RESIDENTES Y AFROMEXICANOS DEL ESTADO DE MEXICO | NEZAHUALCOYOTL CANO TELLEZ |
| 10 | PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CONSULTA INDIGENA Y AFROMEXICANA DEL ESTADO DE MEXICO | ROSA |
| 11 | PROPUESTA DE REFORMA A DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION MEXIQUENSE Y LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE MÉXICO | MARIA VALENCIA JIMENEZ |
| 12 | DERECHO A LA CULTURA | |
| 13 | DERECHO AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, RESIDENTES Y | |



| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| | AFROMEXICANOS DEL ESTADO DE MEXICO | ROCIO ALEJANDRA AYALA PIMENTEL |
| 14 | INICIATIVA QUE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION MEXIQUENSE | |
| 15 | PROPUESTA QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE MEXICO Y EL ART. 17 DE LA CONSTITUCION MEXIQUENSE | |

1. Clausura de la sesión.

Parlamento abierto SECTEC

Categoría: b) artículo

Tema: modelo de Constitución

Una Constitución muerta

Delia Fierros Rojas

Iniciaremos con algunas preguntas que al parecer son muy fáciles de responder

¿Qué es la constitución? Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país.

¿Para qué sirve la constitución?, la constitución es muy importante para un estado soberano porque en ella se recogen todos los derechos y deberes de los ciudadanos, todo esto tiene una fuerte importancia pues sin ella toda la población que integra determinada sociedad se vería en fuertes crisis.

¿Qué tanto conoces los derechos establecidos en la Constitución? el 60% de los encuestados respondió que “poco” y el 35% que “nada”; es decir, el 95% de los encuestados dijo conocer poco o nada sus derechos constitucionales. Los resultados fueron obtenidos en la “Encuesta Nacional” realizada sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas”, levantada entre noviembre y diciembre de 2001 por la Secretaría de Gobernación.

Por tal motivo, podemos decir que la población conoce que existe una carta magna en la que se plasman las leyes que rigen nuestro territorio, sin embargo pocos conocen lo que estipula cada una leyes que la conforman, y de qué manera afecta en la vida cotidiana a de los individuos que conforman un estado o un país determinado, siendo este uno de los factores que propicia las injusticias que viven muchos mexiquenses, por lo cual podemos decir que nuestros ciudadanos carecen de una cultura de los derechos constitucionales que la ley nos otorga. Como bien los menciona Carbonell en su ensayo “Cultura de la legalidad y derechos fundamentales”

“En México, hoy en día los derechos fundamentales como instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas siguen siendo patrimonio casi exclusivo de universitarios ilustrados y de una parte de las cada vez más depauperadas clases medias urbanas, pero no significan nada para los millones de pobres que habitan el territorio mexicano” Carbonell, M.. (2002). *Cultura de la Legalidad y Derechos Fundamentales*. 02/27/20021, de Orden Jurídico Sitio web:<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/2doCongresoNac/pdf/1MCARBONELLPA.pdf>

Por lo cual es urgente que se establezca en nuestra carta magna una ley que se estipule la responsabilidad del Estado en la difusión de las leyes de manera clara, un con lenguaje sencillo y al alcance de los millones de pobres, que muchas de las veces carecen de una formación académica que les permita comprender tecnicismos legales.

En este punto, se requiere de un amplio esfuerzo para difundir los derechos constitucionales hacia toda la sociedad; los medios de comunicación, se convierten, entonces, en una herramienta fundamental para lograr este objetivo, por tal motivo, resulta necesario plasmar en la constitución una ley que obligue a los concesionarios de los medios de comunicación, a ser parte primordial en la difusión de los derechos fundamentales de todo ciudadano mexiquense. De esa manera, acabaríamos con la primera y más obvia violación de un derecho: el conocer que lo tiene, ya que nadie se lo ha explicado, como bien lo plantea Carbonell, y con ello tendríamos una constitución activa. Una constitución ‘viva’ se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes; si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. Ziant, G. (2021). *Qué es una constitución*. 2021, de Museo de la constitución Sitio web: <https://museodelasconstituciones.unam.mx/que-es-una-constitucion/>

Bibliografía

Sitio

web:<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/2doCongresoNac/pdf/1MCARBONELLPA.pdf>

Sitio web: <https://museodelasconstituciones.unam.mx/que-es-una-constitucion/>

PROPUESTA DE INICIATIVA

Título de iniciativa

“Participación social ciudadana y comunitaria”

Exposición de motivos

Con el fundamento del **artículo 26** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal...

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en la sección segunda De las Facultades y Obligaciones de la Legislatura.

Artículo 61 Son facultades y obligaciones de la legislatura:

En la **fracción XLVIII**. Legislar en materia de participación ciudadana;

De acuerdo a (Serrano Rodríguez, 2015) en su investigación de La participación ciudadana en México menciona la importancia de la participación y los diferentes tipos que existen:

El primero es la participación en donde los individuos pertenecen a asociaciones u organizaciones, el segundo se refiere que los individuos participen en comunidades y se organicen para ser acciones ante las adversidades, como tercero hace mención a la intervención de los ciudadanos con el fin de participar en organizaciones de representación social y por último, la participación ciudadana es cuando la sociedad se involucra con el Estado en el cual le da un amplio margen de lo público.

Propuesta

Legislar en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México la propuesta en relación a la participación social ciudadana y comunitaria como una acción de organización de corresponsabilidad social en el Estado y los ciudadanos con la finalidad de construir un bienestar social como una posible propuesta para su análisis y estudio para su promulgación de ley.

Tecámac; Estado de México a 08 de Junio del 2021. C. Elpidio Martínez León.

INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

Transformación Urbana
Internacional A.C.
Calle Gardenias,
Mz. 7 Lt. 37
C.P. 56512
La Pa, Edo. de Méx.
MEXICO

Oficina: 26359300
info@transforbana.org
www.transformación
urbana.org

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los rezagos más notables en la legislación estatal es la ausencia de mecanismos de participación ciudadana expuestos en una legislación específica para ese propósito.

La mayoría de las legislaciones cuenta ya con una Ley de Participación Ciudadana y es conveniente que nuestra entidad deba contar también con una, por lo que será relevante mandar su hechura desde la Constitución.

En esta propuesta se pretende impulsar la obligatoriedad de generar esa Ley faltante en la normativa estatal, así como acentuar e impulsar la figura del Observatorio Social como forma de organización social, que junto con las organizaciones civiles, cuente con la facultad de participar para el bien público.

Proyectos:

ProSalud
Construyendo
ciudades sanas

ACJI
Agentes de cambio
juvenil e infantil

Fortaleza
Fortalecimiento de la
Sociedad Civil

InKrea
Innovaciones
kreativas

INICIATIVA DE REFORMA

Se propone la modificación del artículo 15 de la Constitución del Estado, para quedar como sigue:

| Artículo 15 | |
|---|--|
| Actual | Propuesto |
| <p>Artículo 15.- Las organizaciones civiles podrán participar en la realización de actividades sociales, cívicas, económicas y culturales relacionadas con el desarrollo armónico y ordenado de las distintas comunidades.</p> <p>Asimismo, podrán coadyuvar en la identificación y precisión de las demandas y aspiraciones de la sociedad para dar contenido al Plan de Desarrollo del Estado, a los planes municipales y a los programas respectivos, propiciando y facilitando la participación de los habitantes en la realización de las obras y servicios públicos.</p> <p>La ley determinará las formas de participación de estas organizaciones, y la designación de contralores sociales para vigilar el cumplimiento de las actividades señaladas en el párrafo anterior.</p> | <p>Artículo 15.- Las organizaciones civiles y los Observatorios Ciudadanos podrán participar en la realización de actividades sociales, cívicas, económicas y culturales relacionadas con el desarrollo armónico y ordenado de las distintas comunidades.</p> <p>Asimismo, podrán coadyuvar en la identificación y precisión de las demandas y aspiraciones de la sociedad para dar contenido al Plan de Desarrollo del Estado, a los planes municipales y a los programas respectivos, propiciando y facilitando la participación de los habitantes en la realización de las obras y servicios públicos.</p> <p>La legislatura del Estado deberá expedir una Ley de Participación Ciudadana que determine los mecanismos y las formas de participación de estas organizaciones, y la designación de contralores sociales para vigilar el cumplimiento de las actividades señaladas en el párrafo anterior.</p> |

Estado de México, 25 de septiembre de 2021.

Presenta: Humberto Gutiérrez Morelos

Cel. 5519627823



Diputadas y Diputados Locales
Estado de México

SECTEC
E D O M E X

Secretariado Técnico para
el Análisis y Estudio de la
Reforma Constitucional y
el Marco Legal del Estado
de México.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO PARA LA REGLAMENTACIÓN Y OTORGACIÓN DE RECURSOS A LAS ORGANIZACIONES CIVILES.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que, la iniciativa de cuenta refiere que, a lo largo del presente siglo, hemos presenciado los avances de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, así como su opinión y participación ha permeado en la toma de decisiones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La existencia de las organizaciones civiles es fundamental para el logro de la democracia, la democratización puede asumir las formas de iniciativas de participación por parte de la sociedad civil organizada, o de un conjunto de reformas políticas, de manera específica hacia las reglas o las organizaciones electorales.

La gobernanza supone la necesidad de ir más allá del gobierno al reconocer la forma integrada en la que se presentan las diferentes fuentes de legitimidad, equidad social y acción pública, dependiendo del orden sociopolítico. Es una expresión que abarca un conjunto de valores, un diseño organizacional y un estilo administrativo en la atención a las demandas y la solución de estas; exalta la igualdad de los servicios de gobierno y propugna por la responsabilidad en los

programas públicos. La equidad y la horizontalidad que supone la gobernanza también significan la participación de la sociedad en la agenda pública.

En el devenir histórico, se ha ido fortaleciendo la unión entre lo público y lo privado y los gobiernos que han comprendido la importancia de interactuar con la sociedad ante la rapidez con que fluye la información, son lo que han construido los cimientos para formas de gobierno sólidas enfocadas al desarrollo de las naciones.

Los *gobiernos* no son los principales impulsores del cambio social o institucional, y tampoco son capaces por si solos de producir los adelantos deseados, su papel es clave en la transformación social. Si en una nación se pretende mantener un equilibrio, se busca modificar su constitución tal vez, la triada del Estado, el Gobierno y La sociedad como decía Bobbio tiene que estar conectada pues será con el recurso de cada sector que se llegue a acuerdos, se proponga y se busquen las soluciones.

se debe contar con una ley que fundamente el actuar de las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores fundamentales de la promoción del desarrollo y en cumplimiento del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, siendo coadyuvantes, promotoras, garantes de la rendición de cuentas o participantes en el proceso de las políticas públicas, trabajando de manera coordinada con los gobiernos y otros participantes involucrados e interesados, en una lógica de gobernanza para que los Objetivos se cumplan.

La agenda del fortalecimiento del sector social 2030, impulsada y creada por diferentes organismos a nivel nacional, destaca que uno de los factores que no hacen propicio el entorno de trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México son las leyes que lo regulan, ya que lejos de fomentar su trabajo lo limitan con una falta de coordinación entre las dependencias gubernamentales, la falta de vinculación entre el sector con otros sectores, la falta de transparencia y rendición de cuentas.

El 30 de enero de 2004 se firmó en la Residencia Oficial de Los Pinos el Decreto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con la participación de representantes de organizaciones. El 9 de febrero de 2004 se publicó la en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

En México, la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el proceso de transición democrática ha coadyuvado de manera fundamental a la construcción de una sociedad más abierta y participativa, hechos que se han plasmado en diversos esfuerzos en el sistema legal de nuestro país, el reconocimiento y participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil han contribuido en la atención de los problemas de sociedades plurales y complejas a partir de la descentralización de las actividades del Estado. El nuevo milenio arrancó como un periodo en el que la sociedad civil ha corroborado paulatinamente su importancia como actores de y en lo público, consolidándose como sujetos relevantes en la atención de los asuntos ciudadanos y las problemáticas sociales.

Las OSC mexicanas financian sus actividades por medio de distintas fuentes que pueden clasificarse como ingresos autogenerados y externos. En el primer caso, se encuentran aquellos generados por la comercialización de productos derivados de su objeto social, el cobro de cuotas de recuperación y en algunos casos, como las fundaciones, por los intereses generados de su patrimonio. Los ingresos externos, en cambio, provienen de donativos privados (deducibles o no de impuestos) y recursos públicos.

...existen algunos estudios en los que se realizan estimados respecto a la naturaleza de los recursos con los que cuentan las organizaciones. Por ejemplo, Muñoz (2014), con datos de 2011, señala que, en promedio, el 53%

de los ingresos de las organizaciones corresponden a recursos internos o autogenerados, mientras que el 47% corresponde a fuentes externas, en donde 38% proviene de ingresos privados y el restante 9% de ingresos públicos.

...otros autores como Tapia y Verduzco estiman que, en México, debido a la escasez de fuentes de financiamiento para sus actividades, más del 80% de las OSC autogeneran sus recursos (Tapia & Verduzco 2013: 78). También Verduzco, List y Salamon (2002) establecen que los recursos autogenerados por las OSC mexicanas (cuotas, ventas de productos y bienes) representan el 85% del total, mientras que el financiamiento público correspondía al 8.5% de sus ingresos y las donaciones privadas, el 6.5%.»

PROPUESTA

SE REFORMA EL ARTICULO 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue.

Las organizaciones civiles podrán coadyuvar en la identificación y precisión de las demandas y aspiraciones de la sociedad para dar contenido al plan de desarrollo del Estado, a los planes municipales y a los programas respectivos, propiciando y facilitando la participación de los habitantes en la realización de servicios públicos, así mismo se les otorgara un recurso cada que sea solicitado para el ejercicio de su actividad siempre y cuando haga público la organización civil el uso del apoyo otorgado. Este mismo reglamentado y mencionado en la Ley de Fomento de las OSC del Estado de México (misma que hace falta).

Hueypoxtla Edo. de México a 29.09.21, C. Magaly Arisbeth Torres Moreno.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DERCRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO.

Marcos Eduardo Ramírez Ávila participante del Parlamento Abierto Regional del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, someto a consideración de esta soberanía la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DERCRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO.**

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan 25% del total de la población en el país. En el Estado de México habitan 5, 069,967 jóvenes de una edad comprendida entre los 12 y los 29 años, que representan el 31% de la población total, de la entidad.

Las y los jóvenes mexiquenses son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y cultural del estado de México, ya que en ellos recae la transformación del país.

Sin duda, ser joven y hacer política implica diferentes retos como: a) el nivel de influencia dentro de la participación en un partido político, es decir, la posibilidad de estar dentro de la estructura que direcciona la entidad política b) el acceso a puestos de representación popular c) el participar en un ambiente adulto céntrico d) el participar en condiciones diferentes y adversas como no contar con las herramientas que sí podría tener un adulto como los recursos financieros y la trayectoria política.

Las generaciones futuras están destinadas a vivir con las decisiones políticas tomadas ahora. Solo por esa razón resulta justo que la juventud tenga un asiento en la mesa de toma de decisiones.

La Juventud de nuestro Estado se está preparando para las necesidades y retos que nuestra población tiene y tendrá en un futuro, los jóvenes tenemos una vista diferente a la que la población en general tiene, no quiere decir que llevemos la contraria, pero si tenemos un hambre de realizar un cambio para beneficio de todos.

PROPUESTA

| LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO | |
|---|---|
| TEXTO VIGENTE | PROPUESTA LEGISLATIVA |
| Artículo 24.- Los Ayuntamientos, crearán un Instituto Municipal de atención a la Juventud, que en forma directa promueva las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley. | Artículo 24.- Los Ayuntamientos, estarán obligados en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad a sus recursos presupuestales, a crear un Instituto Municipal de atención a la Juventud o en su caso una Dirección de Atención a la Juventud , que en forma directa promueva las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley. |

DECRETO

DERCRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO.

UNICO. - Se **REFORMA** el artículo 24 de la Ley de la Juventud del Estado de México, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 24.- Los Ayuntamientos, **estarán obligados en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad a sus recursos presupuestales, a crear** un Instituto Municipal de atención a la Juventud **o en su caso una Dirección de Atención a la Juventud**, que en forma directa promueva las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Libre y Soberano de México.

PARLAMENTARIO

LIC. MARCOS EDUARDO RAMÍREZ ÁVILA

A 20 de octubre de 2021, dado en Texcoco de Mora, Estado de México



INICIATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DENTRO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos de la ONU hoy en día, hay 1800 millones de personas entre 10 y 24 años de edad—son la generación de jóvenes más grande en la historia. Cerca del 90% de ellos viven en regiones en desarrollo, donde son la población más numerosa. Estas cifras irán en aumento—entre 2015 y 2030 solamente, cerca de 1900 millones de jóvenes cumplirán 15 años.

- Las personas de entre 20 y 39 años constituyen el 38,6% de la población mundial. Sin embargo, solo el 17,5% de los diputados tiene menos de 40 años.

El contexto actual de nuestro país y a nivel global muestra que la población joven se ha incrementado con el transcurso de los años, la población en general ha experimentado muchos cambios en los últimos años debido a la cultura y las ideologías que han ido surgiendo, cambiando y actualizándose.

Nos damos cuenta de que los tiempos han cambiado, que las generaciones pasadas y venideras juegan un papel fundamental dentro de la toma de decisiones al tener un intercambio intergeneracional para el desarrollo.

Las generaciones futuras están destinadas a vivir con las decisiones políticas tomadas ahora. Solo por esa razón resulta justo que la juventud tenga un asiento en la mesa de toma de decisiones. Sin embargo, los jóvenes están subrepresentados en los parlamentos.





Un objetivo primordial de la Agenda 2030 es la garantía de que "nadie se quede atrás". Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están destinados a todas las naciones, todos los pueblos de todas las edades y todas las sociedades. La naturaleza universal de la Agenda 2030 implica que los jóvenes deben ser considerados en todos los Objetivos y metas. Los jóvenes se mencionan específicamente en cuatro áreas: empleo juvenil, adolescentes, educación y deportes por la paz. Además, los jóvenes son reconocidos como agentes de cambio, encargados de explotar su propio potencial y asegurar un mundo apropiado para las generaciones futuras. (Fuente: Vínculos entre el desarrollo de la juventud y el desarrollo sostenible)

Los Papeles para la Juventud y los ODS

1. **Pensadores críticos:** Parte de ser joven implica darles sentido a las experiencias personales y hacer preguntas sobre el mundo alrededor. Los jóvenes tienen la capacidad de identificar y desafiar las estructuras de poder existentes y los obstáculos para los cambios, y de exponer las contradicciones y los prejuicios.
2. **Agentes de cambio:** Los jóvenes también tienen el poder de actuar y movilizar a otros. Los jóvenes activistas son cada vez más en el mundo, respaldados por una conectividad cada vez mayor por el acceso a las redes sociales.
3. **Innovadores:** Además de generar nuevas perspectivas, los jóvenes frecuentemente tienen conocimiento directo y entendimiento de los asuntos que no están al acceso de los adultos. Los jóvenes comprenden mejor los problemas que ellos enfrentan, por lo que pueden brindar nuevas ideas y soluciones alternativas.





4. **Comunicadores:** Fuera del sector de desarrollo internacional, poca gente está consciente de que los líderes mundiales han llegado a un acuerdo histórico de largo alcance para mejorar la calidad de vida de la gente y del planeta para 2030. Los jóvenes pueden participar en la comunicación de la agenda de desarrollo a sus compañeros y comunidades a nivel local, así como a través de países y regiones.
5. **Líderes:** Cuando los jóvenes son empoderados con el conocimiento de sus derechos, y equipados con las habilidades de liderazgo, pueden manejar el cambio en sus comunidades y en sus países. Las organizaciones lideradas por jóvenes y sus redes, en particular, deben ser apoyadas y reforzadas, porque contribuyen al desarrollo de capacidades de liderazgo cívico entre la gente joven, especialmente entre las poblaciones marginales.

Dentro del artículo 21 de la convención iberoamericana de derechos de los jóvenes, menciona que los mismos tienen derecho a la participación política y a que nos brinden el impulso y fortalecimiento de los programas.

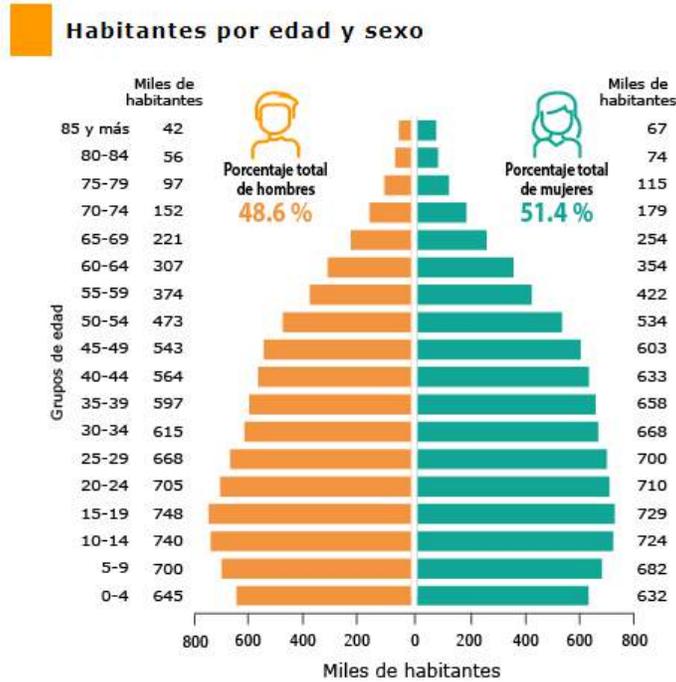
Esto significa que es necesario incrementar y promover la participación de los jóvenes dentro de los espacios para la toma de decisiones, ya que por momentos las personas que se adjudican o generan propuestas para los mismos no se enfocan en las verdaderas necesidades de los jóvenes.

La apatía y la falta de iniciativa de algunos personajes para promover los espacios de participación a aparatado a los jóvenes del interés por ocupar dichos cargos. Sin embargo, existe un grupo considerable de jóvenes que se preparan cognitivamente y se involucran en los espacios públicos de toma de decisiones y que promueven o buscan espacios donde su opinión sea considerada.

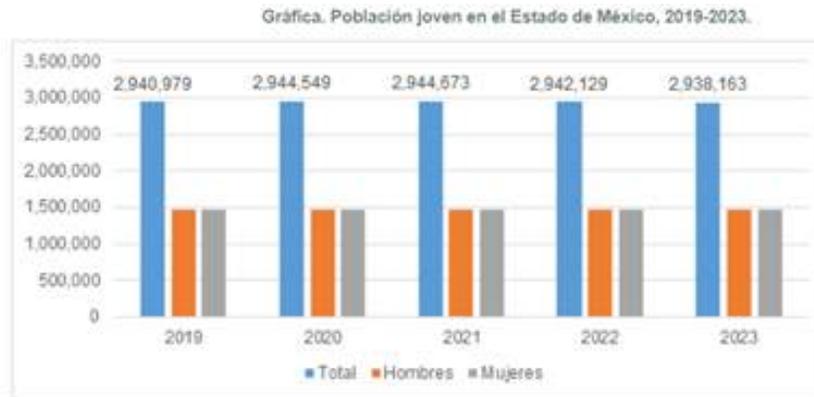




Actualmente en el Estado de México según el *censo de población y vivienda 2021* somos 17.3% de jóvenes equivalente a 2.939.688 entre los 20-29 años y la edad media de los legisladores actualmente está entre los 40-50 años.



FUENTE: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.



Fuente: COESPO con base en Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 del CONAPO.





La Juventud de nuestro Estado se está preparando para las necesidades y retos que nuestra población tiene y tendrá en un futuro, los jóvenes tenemos una vista diferente a la que la población en general tiene, no quiere decir que llevemos la contraria, pero si tenemos un hambre de realizar un cambio para beneficio de todos.

Si bien existen diferentes espacios para la opinión juvenil y algunos parlamentos de base, para que se entienda el funcionamiento de la cámara de diputados, esto no es suficiente, pues sigue sin resolverse la problemática de considerarse el voto y la voz juvenil.

Es momento de que poco a poco los espacios de toma de decisiones sumen la sabiduría de los adultos y la energía junto con la nueva preparación de los jóvenes para el beneficio de nuestro país, la idea es cambiar nuestra realidad para legar un país rico en la diversidad de espacios.

PROPUESTA

Propongo adicionar la fracción V al artículo 39 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de México y adicionar una fracción III al artículo 25 del Código Electoral del Estado de México, dentro de la composición de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO

Artículo 39.- La Legislatura del Estado se integrará con 45 diputaciones electas en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación proporcional.





Derogado

La asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se efectuará conforme a las siguientes bases:

I. Se constituirán hasta tres circunscripciones electorales en el Estado, integradas cada una por los distritos electorales que en los términos de la ley de la materia se determinen.

II. Para tener derecho a la asignación de diputaciones de representación proporcional, el partido político de que se trate deberá acreditar la postulación de candidatas y candidatos propios de mayoría relativa en por lo menos 30 distritos electorales y de haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que haya obtenido;

III. Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional, conforme a la fórmula establecida en la ley, respetando el principio de paridad de género.

IV. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista.

En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura del Estado que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.





Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura del Estado superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Así mismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

V. Las listas de representación proporcional emitidas por los partidos políticos, deberá proponer un 25% de dicha lista y este porcentaje, deberán de proponer jóvenes entre los 21-29 años de edad dentro de los primeros lugares de la lista.

CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO

Artículo 25. Para tener derecho a la asignación de diputaciones de representación proporcional, el partido político de que se trate deberá:

- I. Acreditar, bajo cualquier modalidad, la postulación de candidatas y candidatos de mayoría relativa, en por lo menos, treinta distritos electorales, considerando para ello, un cincuenta por ciento de personas candidatas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restantes con candidaturas del género opuesto, encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.





II. Haber obtenido, al menos, el 3% de la votación válida emitida en el Estado en la elección de diputados correspondiente.

- II. Las listas de representación proporcional emitidas por los partidos políticos, deberá proponer un 25% de dicha lista y este porcentaje, deberán de proponer jóvenes entre los 21-29 años de edad dentro de los primeros lugares de la lista.**

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-juventud/> Objetivos de desarrollo Sostenible ONU

<https://undocs.org/es/A/72/190> Vínculos entre el desarrollo de la juventud y el desarrollo sostenible

<https://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf> Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes

Chicoloapan de Juárez, 29 de Junio de 2021. Rodrigo Jaramillo Cruz



PROPUESTA

APLICACIÓN ESTRICTA DE LOS CONTROLES DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

(Exposición de motivos)

Los razonamientos Jurídicos de los derechos que deben ser equilibrados; el justo medio entre los anhelos y las razones.

El Estado tiene tres oportunidades para encontrar ese balance:

1.-Cuando establece el ideal (legislación), cuando trata de materializarlo (ejecución) y, cuando lo ajusta, corrige o valida (jurisdicción).

A propósito de esta última oportunidad, el título de este escrito pareciera un axioma; hablar de un proceso jurisdiccional y dotarle del calificativo “derechos humanos”, puede escucharse tautológico, sobre todo si se tiene presente que la **tutela jurisdiccional efectiva** supone, entre otras cosas, la posibilidad de acudir ante autoridades jerárquicas más arriba que se dilucide una pretensión y que, en su caso, sean escuchadas y cumplidas, reflejando el contenido mismo de un derecho humano al acudir al proceso y derivado de su culminación, ya que al llegar a esas dependencias los ciudadanos son re victimizados.

Hablar de un proceso “de derechos humanos” no es un necio calificativo, sino una referencia al aspecto práctico y material de que debe dotarse a esos derechos, en tanto principios que deben construirse como el mejor contenido posible a través de la argumentación jurídica. Es decir, **que el propósito de la mención es destacar que los derechos humanos son materia viva en el Derecho**, no postulados esperanzadores; son parámetros normativos que fijan el punto de partida en la toma de decisiones y constituyen, al mismo tiempo, el destino mismo de éstas. Los derechos humanos son, entonces, **elementos jurídicamente vivos y de necesaria materialización** que, construida y reforzada en el plano argumentativo, se convierten en la realidad de las personas. Las personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado de México, se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El Estado quien debe tener la creatividad suficiente para satisfacer los derechos humanos en tanto principios, incluso en colaboración de los sectores privado y social, como lo dispone el **Artículo 25 Constitucional**, pero siempre teniendo presente que, a diferencia de lo que originariamente ocurre con esos sectores, **para el Estado la satisfacción del interés general represente una obligación** en la que se justifica su existencia misma. Siendo importante destacar que, si los derechos humanos son normas de principio, entonces “... son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado y que la medida debida de su

cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas”. De ahí que se trate de prerrogativas con contenido siempre inacabado, totalmente dependientes del contexto que provee cada caso concreto.

Los derechos humanos son también prerrogativas que deben estudiarse desde una perspectiva teórica-conceptual, a efecto de aterrizar las aproximaciones a su contenido y facilitar su satisfacción práctica. La conceptualización básica de los derechos humanos lleva a entender que tienen características, **generan a cargo de las autoridades obligaciones y, una vez vulnerados, producen deberes para el Estado; todo ello, que desde 2011 se menciona expresamente en el Artículo 1o. constitucional. Las características son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; las obligaciones son promover, proteger, respetar y garantizar; los deberes son prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos.** De esta forma, precisamente las características, obligaciones y deberes de los derechos humanos constituyen principios que han de desarrollarse, si se quiere, pero con miras a que puedan en lo específico **ser dotados de contenido con motivo del ejercicio del poder público.**

Lo anterior significa que las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza formal y respecto de todas sus actividades en el punto de vista material, están obligadas a encontrar en cada situación específica el contenido más benéfico de dichos principios, ya que así es como se obtiene un desarrollo suficiente para que los derechos humanos puedan traducirse en la mejor argumentación posible, así, una primera tarea para todas las autoridades es traducir la competencia que tienen normativamente establecida – independientemente de la jerarquía de los ordenamientos de donde derive– al entendimiento del derecho o derechos humanos que le corresponde tutelar, para poder establecer un parámetro básico que refleje cómo es que se actúa acorde con las características de los derechos humanos, **cómo se materializan las obligaciones que se le imponen con motivo de aquéllos y, finalmente, idear las formas necesarias para evitar que se concrete su vulneración, que de no ser posible o de haberse consumado, pueda dar lugar a la medida idónea para el cumplimiento de sus deberes.**

Las administraciones públicas, materialmente hablando, tienen la obligación de satisfacer el interés general y para ello deben contar con herramientas idóneas. **Esa cuestión justifica el uso legítimo del poder público, pero en los Estados que se precien de ser democráticos y que, por ende, se identifiquen como constitucionales y sociales de Derecho, también representa la inconmensurable fuerza que tienen y deben tener los derechos humanos** no sólo desde la abstracción que disponen los ordenamientos generales ni tampoco en valiosos tratados doctrinarios que no abandonen la academia, sino desde la ejecución en la vertiente administrativa y la jurisdicción como mecanismo de garantía.

Por lo cual considero prudente sugerir que se robustezca el contenido del Artículo 5. Dentro de alguno de sus tres primeros párrafos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, un agregado en donde se especifique la obligación de las autoridades jurisdiccionales constituidas en la Entidad, de observar y aplicar en sus resoluciones judiciales

los controles de constitucionalidad y de convencionalidad a que refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Eje temático: Voto electrónico

Tema: implementación del voto electrónico en las casillas de votación

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La organización de las elecciones es una función que se realiza de manera coordinada a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral (IEEM), y en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad serán principios rectores y el Instituto es autoridad en la materia, la cual ante los ayuntamientos se realizan mediante comicios celebrados periódicamente, votaciones en las cuales los ciudadanos eligen libremente a sus representantes populares, a través de votos que son libres y secretos.

Si bien la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, no prevén ni establecen específicamente la posibilidad de llevar a cabo una votación por medios electrónicos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; establece de manera indirecta la posibilidad de hacer uso de materiales que protejan el medio ambiente, es en ese sentido que se considera que el voto electrónico contribuye a la reducción de costos en impresión de papelería electoral y en consecuencia, esto se traduce en un ahorro en los montos presupuestales que se destinan para los procesos electorales.

Cabe resaltar que el Instituto Nacional Electoral ya ha venido implementando mecanismos de votación electrónica en los procesos electorales llevados a cabo en algunas entidades federativas, y es inminente su utilización generalizada en todo el país.

Por lo cual, se estima pertinente el proponer que se incluya dentro del texto de la constitución local un agregado que explicita la legitimidad en el uso de mecanismos de votación electrónica a la par de los medios convencionales, lo cual la convertiría en un texto de avanzada y acorde con la realidad actual del país.

Por un lado, diríamos que las ventajas potenciales de la propuesta son las siguientes:

- Es amigable con el medio ambiente; ya que el uso de mecanismos electrónicos reduce la utilización de materiales impresos a base de celulosa vegetales;

- Se reitera la conveniencia y ahorro en los montos presupuestales que son destinados para los procesos electorales;
- Se contribuiría a reducir los factores de riesgo, contagio y transmisión de cepas virales y agentes patógenos al reducir superficies de contacto entre los votantes y las autoridades presentes en las jornadas electorales, lo cual cobra especial relevancia en el marco de la epidemia por la presencia del Virus denominado COVID 19, la cual no hemos terminado de superar.

Ante lo ya expuesto, se refiere que con fin de implementar tecnología que permita eliminar errores en el escrutinio y cómputo y captura de resultados, así como abonar a la oportunidad y eficiencia en la obtención de resultados, bajo los principios de certeza e integridad en la democracia de la entidad

Por lo cual se sugiere respetuosamente a la Legislatura Local y al Secretario Ejecutivo, que considere la propuesta de implementar dogmáticamente al artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, la posibilidad de utilización en condiciones de equivalencia funcional del voto electrónico en los procesos electorales llevados a cabo en nuestra entidad federativa, con la finalidad de avanzar en la construcción de una democracia más plena y efectiva.

FORMATO 01

ELABORACIÓN DE UNA INICIATIVA

TITULO DE LA INICIATIVA

OBLIGACIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN Y SALUD PARA QUE COORDINADAMENTE IMPLEMENTEN LA OBLIGATORIEDAD DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LOS ALUMNOS DESDE PREESCOLAR HASTA NIVEL MEDIO SUPERIOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es responsabilidad del Gobierno en sus tres niveles, ejercer sus funciones y atribuciones y de garantizar e implementar los Programas educativos cuyo objetivo es el de formar académica, intelectual y profesionalmente a los estudiantes desde preescolar hasta nivel medio superior y trascender y evolucionar a la modernidad de desarrollo de los estudiantes y en futuro a los Ciudadanos de México para alcanzar un pleno desarrollo humano.

Aspiramos contar con gobiernos eficientes y con vocación de desarrollo y allegarse de verdaderos Pedagogos y catedráticos que su empeño sea el de educar y lograr un máximo nivel equiparado a países de primer mundo. Un país bien educado es sinónimo de Progreso y Desarrollo.

Los mexicanos deseamos un país con ciudadanos bien educados y alcanzar mejora social, económica y que redunde en lo político, eligiendo a los mejores ciudadanos que en procesos democráticos contemos con gobernantes profesionalizados y podamos trascender a lograr el binomio perfecto entre Gobierno y Gobernados.

PROPUESTA

PRIMERA: Que se adicione el artículo 3ro constitucional y que aplique a la propia del Estado de México.

ARTÍCULO 3RO.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación a través de la Federación, Estados y Municipios a nivel preescolar, primaria y secundaria; la Primaria y Secundaria será obligatoria.

1.- ADICIONAR. - que sea OBLIGATORIA los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Reafirmar que la educación sea Laica, Científica, Gratuita, Profesional y Científica, así como fortalecer nuestra cultura.

2.- ADICIONAR. – Fortalecer y revisar la fracción VI referente a que los PARTICULARES, podrán impartir educación en todos los niveles hasta la Profesional, sin que se fomente y acepte la creación e institucionalidad de monopolios educativos.

Debemos exigir al Gobierno y sus sectores educativos que ejerzan presupuesto para dotar a todas las instituciones educativas que cuenten con infraestructura de aulas, profesorado y material didáctico para contar con los espacios necesarios que requieren las juventudes del país.

3.- ADICIONAR. - Que se reafirme que Mexico y sus estados confederados, cuenten con la infraestructura necesaria para impartir lo académico y:

Adicionar. - Que los horarios de clases de materias académicas sean de 8:00 a 14:00 hrs.; de 15:00 hrs. a 16:45 hrs. horario destinado para comida y de 17:00 a 20:00 hrs., para enseñanza de actividades con acervo cultural, Como: DEPORTE EN GENERAL (Futbol, Voleybol, Beisbol, Basquetbol, Natación, Atletismo, Box, etc. Otras como: Música, Canto, Baile, Arte Dramático, Dibujo y Pintura, Poesía, Oratoria y Artes y Oficios.

El objetivo último es que en futuro tengamos como país verdaderos profesionistas con un valor agregado en deportistas con medallas olímpicas y mundiales y destacados artistias.

Es responsabilidad del legislador hacerlo, si no, seguiremos en el TERCERMUNDISMO.

Municipio de Hueypoxtla a 28 de septiembre de 2021

Daniel Alejandro Hernández Mendoza

FORMATO 01

ELABORACIÓN DE UNA INICIATIVA

TITULO DE LA INICIATIVA

OBLIGACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO ESTATAL IMPLEMENTANDO LA INCLUSIÓN DE OBLIGATORIEDAD EN NIVEL PREESCOLAR HASTA NIVEL MEDIO SUPERIOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es responsabilidad del Gobierno en sus tres niveles, ejercer sus funciones y atribuciones y de garantizar e implementar los Programas educativos cuyo objetivo es el de formar académica, intelectual y profesionalmente a los estudiantes desde preescolar hasta nivel medio superior y trascender y evolucionar a la modernidad de desarrollo de los estudiantes y en futuro a los Ciudadanos de México para alcanzar un pleno desarrollo humano.

Aspiramos contar con gobiernos eficientes y con vocación de desarrollo y allegarse de verdaderos Pedagogos y catedráticos que su empeño sea el de educar y lograr un máximo nivel equiparado a países de primer mundo. Un país bien educado es sinónimo de Progreso y Desarrollo.

Los mexicanos deseamos un país con ciudadanos bien educados y alcanzar mejora social, económica y que redunde en lo político, eligiendo a los mejores ciudadanos que en procesos democráticos contemos con gobernantes profesionalizados y podamos trascender a lograr el binomio perfecto entre Gobierno y Gobernados.

PROPUESTA

PRIMERA: Que se adicione el artículo 3ro constitucional y que aplique a la propia del Estado de México.

ARTÍCULO 3RO.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación a través de la Federación, Estados y Municipios a nivel preescolar, primaria y secundaria; la Primaria y Secundaria será obligatoria.

1.- ADICIONAR. - que sea OBLGATORIA los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Reafirmar que la educación sea Laica, Científica, Gratuita, Profesional y Científica, así como fortalecer nuestra cultura.

2.- ADICIONAR. – Fortalecer y revisar la fracción VI referente a que los PARTICULARES, podrán impartir educación en todos los niveles hasta la Profesional, sin que se fomente y acepte la creación e institucionalidad de monopolios educativos.

Debemos exigir al Gobierno y sus sectores educativos que ejerzan presupuesto para dotar a todas las instituciones educativas que cuenten con infraestructura de aulas, profesorado y material didáctico para contar con los espacios necesarios que requieren las juventudes del país, para no rechazar y que los aspirantes por necesidad, su última opción sea en escuelas particulares, violentando la filosofía constitucional del derecho de dar y recibir educación eficiente.

Municipio de Hueyoptla a 28 de septiembre de 2021

Ignacio Hernández Martínez

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORREN EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO EN MATERIA DE APOYO ECONOMICO A LOS JOVÉNES QUE CURSAN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS.

Oscar Daniel Trejo Castañeda participante del Parlamento Abierto Regional del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, someto a consideración de esta soberanía la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORREN EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO EN MATERIA DE APOYO ECONOMICO A LOS JOVÉNES QUE CURSAN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS**, al tenor de la siguiente:

I.- Exposición de Motivos:

La educación es sin duda un pilar fundamental que en muchas maneras indica el positivo desarrollo de una nación, hasta hace unas décadas, podíamos seguir considerando el acceso a la educación, como un privilegio, es decir, recordemos a nuestros bisabuelos y bisabuelas, apostando a que sí les preguntan (en su defecto sí saben) sobre su último grado de estudios, en la mayoría de las respuestas que obtendremos, será que muchos, el máximo grado de estudios que lograron fue la “educación primaria”.

Hoy en día ya no podemos simplemente decir que la educación es un privilegio, ¿o lo es realmente?, si bien ahora nuestro país ha caminado hacía una etapa de globalización, donde tenemos un mundo interconectado, y donde el conocimiento, está al alcance de un click, claro, ¿y sí no tenemos un dispositivo para realizar ese click? Pareciera entonces que la educación, que ahora podemos recibir de forma “gratuita”, y sí, digo gratuita, porqué a pesar de que los padres de familia o tutores de los educandos no cubren una cuota directamente para el salario de los docentes, si que cubren cuotas por mantenimiento del centro escolar, por concepto de inscripción y por supuesto de reinscripción, incluso, no es ajeno a nosotros, que hay que dar una “cooperación” para realizar actividades dentro de la escuela y contribuciones al personal de limpieza de las aulas (cuando así se realiza), es decir, en este aspecto, hablamos de la educación básica, pero qué hay respecto a la educación media superior y por supuesto, la educación superior ¿será el mismo caso?.

Hablamos de una reforma que marcó un antes y un después en la forma de concebir las políticas públicas en materia de educación, y es que, desde el 9 de febrero de 2012, debido a una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación¹, a los artículos 3 y 31 de nuestra Carta Magna, se hizo obligatorio para el Estado y para los padres de familia o tutores quienes tienen a su cargo a menores, cursar ya no sólo la educación básica, sino también la educación media superior, esto presentó para el Sistema Educativo Nacional, nuevos retos, que debían ser acompañados de un paquete de políticas públicas y reformas legislativas en las leyes federales y locales, para armonizar e impulsar tan ambiciosa propuesta.

Hoy, a nueve años de la implementación de la reforma, encontramos aún mucho camino por recorrer, y nuevos obstáculos, que en ese momento pudiera ser que estaban contemplados, pero no se les dio una respuesta eficaz ni mucho menos adecuada, podemos hablar “románticamente” de la educación, en su sentido formal, o bien, tal como lo haremos en esta iniciativa, hablaremos de la educación y primordialmente uno de los retos que enfrentan los jóvenes, y que por supuesto, también yo enfrente, y que son las dificultades económicas, que implican continuar nuestros estudios, a nivel medio superior, obligatorio por supuesto, y a nivel superior. Es fácil proponer reformas que impulsen a la educación, y establecerlas desde el “privilegio”, sin acudir a las aulas, y conocer los verdaderos problemas de nuestros jóvenes, especialmente de aquellos que viven en una situación de pobreza, a esto yo realizo las siguientes interrogantes.

La obligación de otorgar la educación media superior a los jóvenes por parte del Estado, ¿realmente consideró las acciones afirmativas para garantizar que los jóvenes puedan acudir a la escuela y preocuparse solamente de estudiar?

Acudir a la escuela, en consideración con un enfoque de derechos, y una perspectiva de interdependencia de los derechos humanos, tendría que haber considerado que los jóvenes, necesitan:

- a) Tener una buena alimentación, o al menos, una alimentación suficiente que les permita desempeñarse correctamente como estudiantes.
- b) Tener un medio ambiente saludable, en el sentido amplio de la palabra, no sólo referido a un espacio libre de contaminación, sino un ambiente que los aleje de preocupaciones y de toda clase de violencia.
- c) Contar en la escuela, con la infraestructura para desarrollar sus actividades y tareas escolares.
- d) **Considerar apoyos económicos para los jóvenes, a fin de apoyarlos, apoyar a la economía familiar y que puedan acudir a sus centros educativos.**

¹ DECRETO por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233070&fecha=09/02/2012

Considerar apoyar a nuestros jóvenes en el ámbito que nos compete, el cual es nuestro Estado de México, **debe ser una prioridad, no una opción.**

El derecho a la educación y las acciones afirmativas, así como la planeación y desarrollo de políticas públicas y programas que permitan apoyar económicamente a los estudiantes de educación media superior y superior, deberían ser un derecho establecido en nuestra legislación local.

I.I.- Planteamiento del Problema:

Tal como ya se adelantó en la exposición de motivos, actualmente en ninguna de las Leyes del Estado de México; la Constitución Local, en la Ley de Educación, ni mucho menos la Ley de Ingresos para nuestro Estado, han considerado generar un derecho de apoyo económico universal para los estudiantes de educación media superior y superior, para que estos, no dejen sus estudios y puedan continuar su desarrollo académico y profesional.

El Estado debería poner la misma energía que pone en la formulación de tipos penales, del aumento desproporcionado de penas para ilícitos (que, en muchas ocasiones al estudiarlos, definitivamente no encontramos una relación de proporcionalidad)² en la formulación de políticas públicas que beneficien a sus jóvenes, considerando que, dentro del rango de edad de 10 a 19 años tenemos el 17.31% de la población, mientras que en el rango de 20 a 29 años, somos el 16.38% de la población total del Estado de México³ donde la condición de asistencia escolar es del 19.13% para los hombres y 18.82% para las mujeres⁴ tenemos también que nuestro contexto también contempla que el 24.96% de la población de 15 años o más no cuenta con educación primaria.

Por ello es urgente fortalecer el derecho a la educación, que no sólo es abrir escuelas, sino garantizar a través de políticas públicas, en el ámbito local, que es el que nos compete, que los alumnos puedan llegar a ellas, y que su ambiente sea idóneo para lograr su mejor desempeño académico.

Prefiero que mi Estado invierta en apoyos para la educación de nuestros jóvenes, porque así, a la larga, dejará de invertir en reclusorios, y en centros de rehabilitación a causa de drogas.

² Véase la Demanda de acción de inconstitucionalidad 136/2021, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de septiembre de 2021, promovida en contra del artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México. <https://www.cndh.org.mx/documento/accion-de-inconstitucionalidad-1362021>

³ Según datos del Consejo Estatal de Población, del Gobierno de México. <https://coespo.edomex.gob.mx/jovenes>

⁴ Ídem.

II.- Argumentos:

El Estado Mexicano tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los Derechos Humanos en lo general y el de la educación en lo específico. En relación con éste, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, para ello, recordemos que el derecho humano de acceso a la educación es transversal, es decir que incide en el desarrollo y evolución de otros derechos, y que bajo el principio de interdependencia, va aparejado y no debe analizarse y aplicarse en solitario, es por eso que en esta iniciativa, haré énfasis, en la importancia de la existencia de programas sociales, que en los distintos niveles de gobierno, apoyen a los jóvenes a través de incentivos económicos que permitan alentarlos y eviten la deserción escolar, la caída en el mundo de las drogas, y que bajo el esquema de visión gubernamental durante esta cuarta transformación de la vida pública del país, siempre velen por ayudar a los que menos tienen.

México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia del Derecho Humano a la Educación, tal como:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Convención sobre los Derechos del Niño.
- La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

Entre otros más, debemos realizar acciones que a pesar de que tengan un impacto presupuestal, beneficien a nuestros jóvenes en el Estado de México, no es nuevo, que diversos organismos internacionales han comentado que México no invierte lo suficiente en educación, tal como lo establece el CONEVAL:

“El gasto nacional en educación (incluyendo público y privado) en 2016 era de 6.8% del producto interno bruto (PIB) y el gasto público representaba sólo el 5.1% del PIB, equivalente a 18.9% del gasto federal programable, cantidades por debajo de las recomendaciones de organismos internacionales”⁵

Debemos atender a la particular realidad de nuestros jóvenes en el Estado de México, porque no es el mismo espectro socioeconómico el del joven que va a escuelas en las Lomas de Chapultepec, a aquel joven, que debe trasladarse de su comunidad rural o semi rural, a su escuela en alguno de nuestros Municipios del Estado de México, donde no es ningún secreto, que el transporte público es

⁵CONEVAL. Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf

caro, es inseguro, y que utilizar transportes limpios como lo es la bicicleta, sólo aumenta los tiempos de traslado, y pone en peligro la vida de los jóvenes.

Debemos observar, que dentro de esta oportunidad que tenemos de reformar las leyes del Estado de México, impregnemos a nuestros textos de la realidad, de los hechos que se materializan día con día, vivimos en un Estado con gran rezago educativo, inseguro, y que sí bien no ocupamos el último lugar en marginación, sí tenemos un alto índice de marginación que debemos atender, por ello yo le pregunto a esta soberanía:

¿Cómo le pides a un alumno de preparatoria o de universidad que se mantenga concentrado en sus estudios cuando en su casa hay sólo dos opciones, que coman ese día en la familia, o utilizar ese dinero para que se transporte a la escuela?

Nuestro país, y en particular, nuestro Estado, como parte del pacto federal, están comprometidos con el cumplimiento de distintos tratados internacionales, cuyas materias van desde la educación, hasta la disminución de la pobreza. No vamos lejos, en 2015 se llevó a cabo la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, en donde los países miembros de la ONU aprobaron la **Agenda 2030**, en donde se delimitaron muy bien 17 Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)⁶, de los cuales, resulta *ad hoc* citar dos de ellos:

Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 1, Poner Fin a la Pobreza en Todas sus Formas en el Mundo:

“1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.

⁶ Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.

1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.”⁷

La implementación de un apoyo económico universal para los jóvenes de educación media superior y superior, por parte del Estado de México y los Gobiernos Municipales, sin duda crearía una disminución en la pobreza de nuestros jóvenes y sus familias, teniendo pertinencia y concordancia con el *ODS número 1 de la Agenda 2030*, esto claro, aunado a una fuerte política de creación y promoción de los empleos en coordinación con el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, teniendo un apoyo que les permita, al menos trasladarse al escuela y cumplir con sus deberes, soy fiel creyente que los jóvenes que tengan un apoyo así, lo van a utilizar correctamente, de ello, también depende la participación, confianza y resiliencia que tengan los Gobiernos Municipales a través de planes y programas que apoyen y se acerquen a los jóvenes, tarea que pareciera difícil, pero que es perfectamente posible.

Respecto al tema central que nos atañe, tenemos en lo establecido por nuestra Agenda 2030, el ODS número 4:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

“4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

⁷ Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU. Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/>

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo”

La implementación de un apoyo económico universal para los jóvenes de educación media superior y superior, por parte del Estado de México y los Gobiernos Municipales, sin duda alguna, contribuiría a mejorar las condiciones

educativas de nuestros jóvenes, cumpliendo el ODS número 4, y disminuiría la deserción escolar, contribuyendo también a que más y más jóvenes pudieran terminar sus estudios universitarios, ya que el apoyo económico, sería perfectamente compatible con las becas o insumos económicos que pudiesen recibir los jóvenes por parte de sus instituciones educativas, es decir, me parece algo completamente coherente, destinar recursos presupuestarios al desarrollo educativo de nuestros jóvenes, me pregunto:

¿sí debemos de aportar de nuestros impuestos para mantener los reclusorios donde criminales y personas que han lesionado a la sociedad, por qué no aportar para el desarrollo integral de nuestros jóvenes?

Es importante mencionarle a esta soberanía que el 24 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, **la reforma constitucional en materia de juventudes**, donde se reformaron diversos preceptos normativos, para garantizar el desarrollo integral de los jóvenes y crear políticas públicas que garanticen su inclusión en la sociedad, en la economía y en la cultura, considerando que al hablar de cultura, indiscutiblemente, estamos hablando de educación, al ser derechos humanos que ejemplifican el concepto de “interdependencia”.

Y que por la relevancia que amerita, transcribo a continuación:

*“**DECRETO** por el que se declara reformados los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.*

***Artículo Único.** - Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:*

Artículo 4o. ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

...

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos.

Artículo 73. ...

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

XXIX-Q. a XXXI. ...”

Retomando la idea de que la jerarquía normativa, atiende a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunto con Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, son la ley suprema de la nación, tenemos claro que las Constituciones Locales, de cada Estado Libre y Soberano, deben contener congruencia normativa con su ordenamiento superior, es por ello, que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debe contemplar dentro de sus preceptos, la esencia de la misma, y garantizar el cumplimiento de los derechos plasmados en nuestra Carta Magna.

La propuesta en comento, también guarda concordancia con los apoyos federales que otorga en favor de la educación, el Estado Mexicano a nosotros los jóvenes.

Concordancia de la Propuesta con los Apoyos Federales a la Educación de los Jóvenes:

Existen diferentes maneras, en las cuales podemos dirigir una partida presupuestal al apoyo de jóvenes y la educación, tenemos actualmente, a nivel federal, el ejemplo de:

1. Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, las cuales, de acuerdo a lo establecido por sus reglas de operación⁸:

“Fomentar que las niñas, niños y adolescentes inscritos/as en Instituciones de Educación Básica del Sistema Educativo Nacional y que son integrantes de familias en condición de pobreza, marginación o que habitan en localidades prioritarias o asisten a planteles educativos en esas localidades, permanezcan y continúen sus estudios, mediante una beca.”

⁸ ACUERDO número 31/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2021. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609169&fecha=29/12/2020

2. Beca Universal de Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, del cual podemos observar de acuerdo a sus reglas de operación⁹ que:

“Fomentar que los/as alumnos inscritos en IPEMS¹⁰ o en IEMS¹¹ pertenecientes al Sistema Educativo Nacional permanezcan y/o concluyan este tipo educativo, mediante el otorgamiento de una beca.”

3. Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, y de acuerdo a lo establecido por sus objetivos en sus reglas de operación¹²

“Fomentar que los/as alumnos/as inscritos en una IPES considerada con cobertura total, cualquier otra IPES¹³ en las que los/as alumnos/as cumplan con los requisitos establecidos o en otras IES¹⁴ que cuenten con convenio vigente de colaboración firmado con la Coordinación Nacional y otorguen una exención del 100% de cuotas de inscripción, colegiatura o cualquier otra aportación al/a la alumno/a solicitante y éste/a cumpla con los requisitos establecidos, permanezcan y concluyan este tipo educativo, mediante una beca.”

Pudiera pensarse, ¿ya hay un programa social federal que “aparentemente” cubre todo el problema, habría algún ejemplo de algún programa Estatal o Municipal parecido que realice la entrega de este tipo de apoyos considerando que ya los hay a nivel federal?

Programas Estatales de Otorgamiento de Becas.

Es necesario mencionarle a esta soberanía, que tengo presentes las distintas becas que ofrece nuestro Estado De México a través de la Secretaría de Educación¹⁵, puntualizando las siguientes:

1. *Programa de Desarrollo Social “Beca Familias Fuertes por la Educación”.*
2. *Programa Becas de Exención Edomex. Becas parapara Escuelas Particulares incorporadas a la Secretaría de Educación. (Subsistema Estatal).*
3. *Programa de Becas “Bécalos Bachillerato Estado de México”.*

⁹ ACUERDO número 33/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2021. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609171&fecha=29/12/2020

¹⁰ Instituciones Públicas de Educación Media Superior del Sistema Educativo Nacional.

¹¹ Instituciones de Educación Media Superior del Sistema Educativo Nacional.

¹² ACUERDO número 29/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2021. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609167&fecha=29/12/2020

¹³ Instituciones Públicas de Educación Superior.

¹⁴ Instituciones de Educación Superior.

¹⁵ Secretaría de Educación Publica del Estado de México. Becas. <https://seduc.edomex.gob.mx/becas>

No obstante, he de advertir que las Reglas de Operación de dichos programas son ambiguas, y al momento de consulta de las páginas de internet, no hay noticia alguna de la periodicidad del otorgamiento de dichas becas, igualmente la información presentada no facilita que cualquier otro alumno pueda solicitar su beca, o al menos saber en qué momento podrá hacerlo.

Son programas que cambian de acuerdo al gobierno entrante, y eso no debería ser así, deberían los estudiantes tener su derecho a una beca, garantizado en la Constitución Local, **recordemos que el párrafo quinceavo del artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya contempla como derecho constitucional un sistema de becas, con lo cual de aprobarse la reforma, estaríamos en armonía legislativa implementando en el ámbito local un enfoque de derechos**, considerando que con un presupuesto anual creciente que, aparejado a políticas públicas correctas, impulsara a los jóvenes a terminar sus estudios.

Implementación a nivel Municipal.

El ejemplo en la implementación de este tipo de programas, es el Municipio en el que radico, mi bello Texcoco, es donde a pesar de existir este tipo de programas federales, se han desarrollado los propios, en este tenor, el H. Ayuntamiento de Texcoco, tiene el programa de “Apoyo a Jóvenes Universitarios” el cual es un programa dirigido a apoyar en el sector educativo, otorgando una beca para apoyar los gastos escolares de los jóvenes universitarios texcocanos, y que cada año va aumentando su matrícula, de tener una partida presupuestal Estatal asignada y en coordinación con los Gobiernos Municipales del Estado de México, podríamos apoyar a que muchos jóvenes que acuden al nivel medio superior y superior, reciban también un apoyo estatal, considerando que muchos jóvenes acuden no sólo a Instituciones Educativas del Estado de México, sino que también son parte de la matrícula de grandes universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana entre otras.

Cómo ha podido leerse en el contenido de la iniciativa, la *ratio legis* de la misma atiende al otorgamiento de un apoyo económico universal a todos los estudiantes de educación media superior y superior, no obstante, podrían preguntarse ¿por qué la propuesta no considera a los estudiantes de nivel básico? La respuesta está en que los índices de deserción escolar, se concentran en jóvenes mayores de 15 años, talo como lo menciona Ciro Corso de la Universidad de Hidalgo:

“El gran problema se centra sobre todo en los jóvenes de 15 años en adelante, los cuales por tener carencias económicas, problemas familiares o de adicciones, abandonan la escuela, sin haber alcanzado un nivel de educación mínimo para

poder desenvolverse con facilidad en un mundo globalizado y conseguir una buena paga por su trabajo”¹⁶

La situación de deserción escolar, se agudizó a raíz de la pandemia por el COVID- 19 tal como lo establece el INEGI¹⁷:

“Para el ciclo escolar 2020-2021 la población inscrita es de 32.9 millones (60.6% del total de 3 a 29 años). De estos, 30.4 millones (92%) son población que también estuvo inscrita en el ciclo escolar pasado (2019-2020) y 2.5 millones (8%) son inscritos que no participaron en el sistema educativo en el ciclo escolar 2019-2020.”

Garantizarles a nuestros jóvenes la posibilidad de obtener su título universitario, gracias a un apoyo económico para que no dejen sus estudios, debería ser una obligación del Estado de México, que le debe mucho, muchísimo a sus jóvenes.

Es por lo anterior, que someto a consideración de esta soberanía, la siguiente:

III.- Propuesta Legislativa:

| CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO | |
|--|--|
| TEXTO VIGENTE | PROPUESTA LEGISLATIVA |
| Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. | Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. |
| ... | ... |

¹⁶ Deserción Escolar. Ciro Corso Salazar. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n8/p1.html>

¹⁷ INEGI PRESENTA RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO COVID-19 EN LA EDUCACIÓN (ECOVID-ED) 2020 DATOS NACIONALES. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf

| | |
|---|---|
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| La educación que | La educación que |
| <p>imparta el Estado será de calidad, gratuita, laica y tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia, garantizando la libertad de creencias, el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, será una educación para la diversidad sin discriminación, también será democrática, nacional, humanista y contribuirá a la mejor convivencia humana.</p> | <p>imparta el Estado será de calidad, gratuita, laica y tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia, garantizando la libertad de creencias, el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, será una educación para la diversidad sin discriminación, también será democrática, nacional, humanista y contribuirá a la mejor convivencia humana.</p> |
| <p>La educación en el Estado de México se ajustará estrictamente a las disposiciones del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones en la materia.</p> | <p>La educación en el Estado de México observará lo establecido por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones en la materia.</p> |
| <p>Sin Correlativo.</p> | <p>En materia de formación y desarrollo educativo de los jóvenes mexiquenses, el Estado en coordinación con los Gobiernos Municipales, desarrollará e implementará políticas públicas que les garanticen su desarrollo integral educativo y cultural, a través del otorgamiento de becas</p> |

| | |
|-----------|--|
| | y/o estímulos económicos que los apoyen a culminar sus estudios y erradicar la deserción escolar. |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| I. ... | I. ... |
| II. ... | II. ... |
| III. ... | III. ... |
| IV. ... | IV. ... |
| V. ... | V. ... |
| VI. ... | VI. ... |
| VII. ... | VII. ... |
| VIII. ... | VIII. ... |
| IX. ... | IX. ... |

| LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO | |
|---|---|
| TEXTO VIGENTE | PROPUESTA LEGISLATIVA |
| Artículo 6.- En el Estado de México toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad y, por lo tanto, las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el Sistema Educativo con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. | Artículo 6.- En el Estado de México toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad y, por lo tanto, las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el Sistema Educativo con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. |
| Sin Correlativo. | El Estado de México en coordinación con los Gobiernos Municipales, desarrollará e implementará planes y programas |

| | |
|-----------------------|--|
| <p>...</p> <p>...</p> | <p>que le garanticen su desarrollo integral educativo y cultural a los jóvenes, a través del otorgamiento de becas y/o estímulos económicos que los apoyen a culminar sus estudios y erradicar la deserción escolar.</p> <p>...</p> <p>...</p> |
|-----------------------|--|

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

IV.- Proyecto de Decreto:

DECRETO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORREN EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO EN MATERIA DE APOYO ECONOMICO A LOS JOVÉNES QUE CURSAN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS.

PRIMERO.- Se **REFORMA** el décimo y el onceavo párrafos del artículo 5; se **ADICIONA** un doceavo párrafo y se recorren en su orden los subsecuentes al artículo 5, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

SEGUNDO.- Se **ADICIONA** un segundo párrafo y se recorren en su orden los subsecuentes al artículo 6 de la Ley de Educación del Estado de México, para quedar como sigue:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.

...

...

...

...

...

...

...

La educación que

imparta el Estado será de calidad, gratuita, laica y tendrá a desarrollar amónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia, garantizando la libertad de creencias, el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, será una educación para la diversidad sin discriminación, también será democrática, nacional, humanista y contribuirá a la mejor convivencia humana.

La educación en el Estado de México **observará lo establecido por el artículo 3º** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones en la materia.

En materia de formación y desarrollo educativo de los jóvenes mexiquenses, el Estado en coordinación con los Gobiernos Municipales, desarrollará e implementará políticas públicas que les garanticen su desarrollo integral educativo y cultural, a través del otorgamiento de becas y/o estímulos económicos que los apoyen a culminar sus estudios y erradicar la deserción escolar.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

Ley de Educación del Estado de México.

Artículo 6.- En el Estado de México toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad y, por lo tanto, las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el Sistema Educativo con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

El Estado de México en coordinación con los Gobiernos Municipales, desarrollará e implementará planes y programas que le garanticen su desarrollo integral educativo y cultural a los jóvenes, a través del

otorgamiento de becas y/o estímulos económicos que los apoyen a culminar sus estudios y erradicar la deserción escolar.

...

...

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Libre y Soberano de México.

Segundo.- La Secretaría de Educación contará con 365 días a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial del Estado, para realizar las adecuaciones normativas, y presentar su propuesta presupuestaria de acuerdo a la Ley de Ingresos del año siguiente al de su publicación, a fin de dotar de recursos económicos suficientes para la implementación de la presente reforma

PARLAMENTARIO

LIC. OSCAR DANIEL TREJO CASTAÑEDA

A 20 de octubre de 2021, dado en Texcoco de Mora, Estado de México.

Iniciativa para la educación integral en educación socioemocional

Yajaira xanat Silvestre Estrada participante del parlamento abierto regional del secretario técnico para el análisis y estudio de la reforma constitucional y el marco legal del Estado de México dónde se propone la reforma del artículo 5 de la constitución política del Estado libre y soberano de México

Exposición de motivos

Hoy es necesario hacer una crítica a las nuevas generaciones vivimos en una era de cristal dónde hay una distorsión de la realidad , las aspiraciones en cuanto a la superación personal han cambiado. anteriormente se aspiraba a ser un gran médico, el mejor abogado o la maestra más entregada, hoy las nuevas generaciones giran en torno a ser el mejor rock Star, el más famoso influencer youtuber o tiktokker, estas nuevas generaciones también tienden a ser más frágiles tienen menos capacidad de resistir la adversidad a frustrarse más rápido y a querer el éxito de una manera inmediata, esta nueva cultura está condenando a las nuevas generaciones hacia el fracaso, la guía de educar con valores se está perdiendo vivimos en una Revolución emocional donde la gente carece de empatía, ver a gente pelear, secuestrar, matar y robar ya es algo normal pero lo peor es que ignoramos esas situaciones hasta que nos toca vivirlas .

El estado de México ocupa el segundo lugar en asesinatos con una cifra de 3,237 casos las principales causas de los homicidios el año pasado fueron agresiones con arma de fuego, en segundo lugar fueron agresiones con objetos cortantes así como ahorcamiento

estrangulamiento y sofocación, estos incidentes corresponden a personas de 1 a 19 años de edad y de 25 a 29 años de edad

Otro tema es el de los suicidios de acuerdo con las cifras de mortalidad divulgadas por el INEGI el estado de México concentra 832 suicidios que lo colocan en uno de los primeros lugares en tener estos atentados. tenemos otro caso y es el bullying la CODHEM (comisión de derechos humanos del Estado de México) ha recibido 729 quejas por acoso escolar violencia y bullying los problemas de salud mental son unas de las problemáticas más invisibilizadas pero más persistentes en la sociedad mexicana.

El tronco común en la educación es importante porque nos brinda las herramientas para obtener conocimientos de una manera general pero hay algo que estamos dejando de lado y es la importancia de la educación socioemocional.

La educación socioemocional tiene la capacidad de regular las emociones , regular la empatía, los comportamientos impulsivos tomar decisiones responsables y tener perspectivas diferentes de los demás. Es el proceso de aprendizaje de habilidades emocionales, es eficaz si se enseña a temprana edad, tiene un impacto esencial para el éxito en la escuela y en la vida ya que nos va a permitir la solución de problemas de una manera pacífica hará la diferencia tendremos menos delincuencia, y frenaremos la marginación, por ello es importante incorporar esta materia al mapa curricular de las escuelas pero no como una materia complementaria sino de una manera principal y obligatoria en todos los niveles educativos para ir formando ciudadanos y ciudadanas responsables empáticas pero sobre todo más humanos, hay que trabajar para que nazcan nuevas generaciones con un chip diferente y cambiar desde cero la mentalidad, tener en cuenta que al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional.

El estado de México necesita reorientar desde la raíz las nuevas generaciones prepararlas para diseñar un mejor futuro y así como ciudadanos y ciudadanas educarnos conscientes y que nazca un nuevo estado, para dar soluciones de calidad, necesitamos educación de calidad.

Propuesta

| CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO | |
|--|--|
| TEXTO VIGENTE | PROPUESTA LEGISLATIVA |
| <p>Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>si correlativo</p> <p>...</p> | <p>5.- En el Estado de México tod Artículo as las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>El Estado implementará políticas públicas en materia de educación socioemocional en todos los niveles educativos para erradicar problemáticas originadas por falta de educación psicológica en la población mexiquense</p> <p>...</p> |

| | |
|-----------|-----------|
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| I. ... | I. ... |
| II. ... | II. ... |
| III. ... | III. ... |
| IV. ... | IV. ... |
| V. ... | V. ... |
| VI. ... | VI. ... |
| VII. ... | VII. ... |
| VIII. ... | VIII. ... |
| IX. ... | IX. ... |

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto.

DECRETO

Proyecto de decreto por el que se adiciona un noveno párrafo y se recorren en su orden los subsecuentes al artículo 5 de la constitución política del estado libre y soberano de México en materia de educación socioemocional.

Único._ se adiciona un noveno párrafo y se recorren en su orden los subsecuentes al artículo artículo 5 de la constitución política del estado libre y soberano de México en materia de educación socioemocional, para quedar como sigue:

Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que

de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. (Reformado mediante decreto número 103 de la “LIX” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 25 de julio del 2016).

(Reformado mediante decreto número 343 de la “LVII” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de septiembre del 2011).

...

...

...

...

...

...

...

El estado implementará políticas públicas en materia de educación socioemocional en todos los niveles educativos para erradicar problemáticas originadas por falta de educación psicológica en la población mexiquense.

Eje temático: Educación, cultura, ciencia y tecnología

Tema: Inclusión de la libertad de elección de modalidad educativa (presencial o virtual)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia originada por la presencia en territorio nacional del Virus SARS COV-2 (COVID 19), nos ha puesto a prueba en muchos sentidos, desafiando los límites de nuestras capacidades y forzándonos a replantearnos paradigmas que en muchos casos, considerábamos como fijos e inamovibles.

Es el caso del ámbito educativo, que al inicio de la pandemia fue uno de los primeros en abatir actividades, y a la presente fecha sigue sin retomarlas totalmente.

Fue necesario que se estableciese de manera forzosa, un sistema de aprendizaje a distancia para que los alumnos de todos niveles pudieran retomar sus clases, y posteriormente se estableció a marchas forzadas un sistema híbrido de regreso a clases, en donde los docentes y alumnos tienen frente a sí el reto de que la calidad de la educación que imparten y reciben sea la misma, a pesar de la modalidad bajo la cual se presenten al aula.

En la vida cotidiana, todos hemos escuchado o vivido un caso, en el que algún familiar o conocido se enfrenta a dilemas con las autoridades de una institución educativa, debido a que a los niños matriculados en modalidad presencial se les aplican condiciones, requisitos o se les imparten contenidos distintos a aquellos que asisten en modalidad virtual o híbrida. Entre ellos, que manejan amplitudes de horario de clases distintas, cobros diferenciados de colegiaturas, o rezagos en la cantidad de contenidos impartidos a los alumnos de alguna de las modalidades.

Bajo éste contexto, y entendiendo que la normalidad a la que estuvimos acostumbrados durante muchos años probablemente no regrese, considero prudente sugerir que se incluya en el texto de la Constitución Local un agregado a su artículo 5, en alguno de sus párrafos octavo al décimo primero, en el cual se explicita que la calidad y cantidad en los contenidos educativos, horarios de labores y en general en la impartición de educación obligatoria deberá ser igual o equivalente para todos los alumnos sin importar la modalidad en la cual se esté impartiendo, y las instituciones educativas públicas y privadas de la entidad deban garantizar la disponibilidad de las modalidades presenciales y a distancia para la impartición de clases, así como la libertad de los alumnos y de sus tutores para elegir libremente bajo cuál de ellas desean matricularse.

Lo anterior, con la finalidad de que los padres de familia, tutores y educandos se encuentren en la más amplia libertad para elegir a conveniencia y juicio propios, el tipo de modalidad escolar por la cual desean optar, con la convicción de que en cualquier caso, tendrán acceso a contenidos y lecciones de calidad.

INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 5º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

Transformación Urbana
Internacional A.C.
Calle Gardenias,
Mz. 7 Lt. 37
C.P. 56512
La Pa, Edo. de Méx.
MEXICO

Oficina: 26359300
info@transformacion.org
www.transformacionurbana.org

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La realidad es que el país se está urbanizando de forma acelerada. Así lo demuestran datos de CONAPO y la reciente encuesta nacional de población y vivienda del INEGI.

Esta urbanización global también está ocurriendo de manera sensible en el Estado de México y necesitamos adaptar nuestra legislación para hacer frente a las nuevas realidades urbanas.

Un problema sentido es que muchas de nuestras zonas urbanas siguen siendo administradas por élites de gobierno incapaces y técnicamente limitadas, por lo que aquí se propone establecer a nivel constitucional que el Derecho a la Ciudad incluya la obligatoriedad de un mayor rigor de perfiles y evaluaciones de desempeño para los servidores públicos relacionados con la administración de zonas urbanas.

Proyectos:

ProSalud
Construyendo
ciudades sanas

ACJI
Agentes de cambio
juvenil e infantil

Fortaleza
Fortalecimiento de la
Sociedad Civil

InKrea
Innovaciones
kreativas

INICIATIVA DE REFORMA

Se propone la modificación del párrafo sexto del artículo 5º de la Constitución del Estado, para quedar como sigue:

| Artículo 5º, párrafo sexto | |
|--|--|
| Actual | Propuesto |
| <p>Artículo 5.-</p> <p>...</p> <p>El derecho a la ciudad se garantizará a través de instrumentos que observen las funciones social, política, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad, determinados por ordenamientos secundarios que prevean las disposiciones para su cumplimiento.</p> | <p>Artículo 5.-</p> <p>...</p> <p>El derecho a la ciudad se garantizará a través de instrumentos que observen las funciones social, política, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad, determinados por ordenamientos secundarios que prevean las disposiciones para su cumplimiento, los cuales deberán contener elementos de especial exigencia de perfil y desempeño para las instituciones y servidores públicos vinculados a ellos.</p> |

Estado de México, 25 de septiembre de 2021.

Presenta: Blanca Verónica Covarrubias Lugo/Transformación Urbana Internacional, A.C.

Cel. 5530411492

1.-Materia educativa: Proporcionar becas de estudio, programas sociales y crear acuerdos y convenios con universidades de otros países para garantizar la doble titulación de los jóvenes universitarios
Equidad de género: Reducir la brecha sociocultural entre hombres y mujeres mediante la enseñanza en las escuelas desde nivel básico y fortalecer el sistema jurídico que garantice la igualdad de derechos de las personas

2.- Igualdad laboral: Expedición de una ley de fomento al primer empleo a los jóvenes estudiantes egresados.

3.- Equidad de género: Reducir la brecha sociocultural entre hombres y mujeres mediante la enseñanza en las escuelas desde nivel básico y fortalecer el sistema jurídico que garantice la igualdad de derechos de las personas

4.-Protección a ecosistemas: creación de leyes y apoyo a sociedades y poblaciones para mejorar la conservación de zonas naturales y protegidas.

Eje temático: Desarrollo Económico

Tema: El desarrollo económico desde la perspectiva del derecho a la ciudad

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, el artículo 139 Bis de la Constitución Estatal prevé el abordaje del desarrollo económico desde la óptica de considerarlo como un elemento a impulsar para la mejora regulatoria, la adopción de medidas de gobierno digital y fundamentalmente, para orientar los esfuerzos en materia de ventanilla única de trámites y servicios.

Sin embargo, pese a que dicha visión se considera muy adecuada, considero que podría complementarse bajo la perspectiva del urbanismo y del derecho a la ciudad.

En este sentido, cabe resaltar que el artículo 5 de la Constitución Local nos define el derecho a la ciudad en los términos siguientes:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

“El Estado de México garantizará el Derecho Humano a la Ciudad, entendiéndose como un derecho de las colectividades, con el cual se busca lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial; buscando que los grupos vulnerables y desfavorecidos logren su derecho.

El derecho a la ciudad se garantizará a través de instrumentos que observen las funciones social, política, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad, determinados por ordenamientos secundarios que prevean las disposiciones para su cumplimiento.”

Si bien dicho artículo contiene diversas disposiciones tendientes a garantizar el derecho de los mexiquenses a la ciudad, también lo es que el desarrollo económico, conceptualizado como el conjunto de políticas públicas encaminadas al crecimiento y desarrollo de todas las actividades y sectores económicos presentes en la Entidad, debería ser una más de las ramificaciones del derecho a la ciudad.

De la misma manera que se necesita el acceso a agua potable, vialidades adecuadas y seguridad pública, por citar algunos, también es necesario que se consideren las condiciones necesarias para el impulso a las actividades económicas, y que éstas sean vistas desde un enfoque integral y transversal, en el que el desarrollo económico sea considerado no solamente como una política para la agilización en la realización de trámites o servicios de las unidades económicas, sino desde el enfoque ciudadano, que sea concebido como parte del diseño de gobierno tanto a nivel estatal, como también por las distintas municipalidades.

De tal suerte que el derecho a la ciudad considere también el derecho de los mexiquenses a que sus autoridades deban incluir, dentro del diseño de sus instrumentos de planeación para el desarrollo estatal y municipal, el que sus políticas públicas contengan un enfoque de impulso a las actividades económicas.

Por tanto, se sugiere respetuosamente a la Legislatura Local y al Secretariado Ejecutivo, que consideren la propuesta de adicionar, si así lo estiman conveniente, el concepto del desarrollo económico como parte integrante del derecho a la ciudad contenido en el artículo 5, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Eje temático: Igualdad sustancial, diversidad y política de género

Tema: Inclusión a rango constitucional del derecho a la protección contra la violencia a grupos vulnerables

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso de los grupos vulnerables a medidas de protección en contra de la violencia de género debe ser parte de un ordenamiento constitucional de avanzada, progresista y acorde a las realidades de nuestra sociedad actual.

En nuestra Constitución del Estado, se aborda de manera somera el tema de la igualdad de género, sin embargo se hace desde un enfoque pasivo de prevención de la discriminación, siendo que a criterio personal, se considera que debería hacerse desde un enfoque activo, en donde se vincule activamente a los distintos órdenes de gobierno para que adopten y ejerciten políticas públicas y medidas que contribuyan a la protección de mujeres, niñas, niños, adultos mayores, sectores de diversidad sexual y de todos los grupos vulnerables en lo general, contra la violencia que por razón de su pertenencia a dicho grupo pudieran sufrir.

Al respecto, debe recordarse el contenido del artículo 3 de la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, --- de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y --- de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los cuales establecen:

Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como

su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.”

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

“ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:

- I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;*
- II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;*
- III. La no discriminación, y*
- IV. La libertad de las mujeres”*

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

“Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos;

II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria;

III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo;

IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;

VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas;

VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios, y

IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables.”

Así las cosas, se estima conveniente reiterar la sugerencia para que en el texto constitucional local, en específico en su artículo 5, se agregue un texto que prevea el derecho de los mexiquenses en lo general y de los grupos o sectores vulnerables en lo particular, a que en su favor se implementen y diseñen mecanismos de salvaguarda y protección en materia de prevención social de la violencia y delincuencia, equidad y acciones afirmativas de género, entre otras.

La necesaria inclusión constitucional de la Violencia Política en razón de Género (VPG) como causal grave de nulidad de elección

- La evolución de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para inhibir conductas por VPG.

La VPG es un fenómeno social que puede ser revisado desde varias facetas normativas. En el caso de la materia electoral, el análisis dentro del procedimiento administrativo (PES) se genera desde un punto estrictamente punitivo, y por otro lado, en el juicio electoral ciudadano, desde la tutela y restitución de los derechos político-electorales. Cabe precisar que en ambos procedimientos se pueden realizar diligencias para mejor proveer, establecer medidas de protección o cautelares, así como ordenar los efectos sancionatorios que correspondan.

Asimismo, en el caso de la revisión constitucional de la validez del acto electivo, la línea jurisprudencial de la Sala Superior ha evolucionado con un parámetro más estricto, pues en un principio la acreditación de la VPG no se consideró determinante por sí misma, sino que la existencia de actos de violencia política de género tenía que demostrarse con elementos de prueba directa para superar el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Así por ejemplo, la Sala Superior consideró en el expediente SUP-REC-1388/2018, (relativo a la elección de la alcaldía de Coyoacán), que el material probatorio aportado no era de la entidad suficiente para demostrar el grado de afectación, ni la determinancia que la irregularidad había producido en el procedimiento electoral.

No obstante, sobre la VPG como causal de nulidad, también resulta conveniente recordar el precedente establecido en el expediente SCM-JRC-194/2018, sobre la actualización del criterio de presunción de la determinancia en el proceso electoral respectivo, aun cuando no se acredite, de manera fehaciente, el vínculo entre los actos de VPG y la cantidad de votos obtenida por la persona afectada ni la responsabilidad de su contrincante o simpatizantes.

Dicho criterio sentado por la Sala Regional de la Ciudad de México ha sido retomado, en esencia, por la Sala Superior en el proceso electoral 2021. En este orden, surge la interrogante sobre ¿cuáles son los elementos probatorios y la especial gravedad de los hechos probados para generar esa presunción? Es decir, en el caso de la VPG, la Sala Superior reconoce un estándar probatorio similar al requerido para actualizar la determinancia constitucional por las conductas graves previstas en el artículo 41 constitucional, sobre la presunción de la determinancia y la parte a la que corresponde la carga de la prueba para desvirtuar la presuncional.

Por tanto, cuando se tiene por acreditada la violación constitucional, y se cumple con la diferencia igual o menor al 5%, lo cierto es que resultaría suficiente la determinancia cualitativa para concluir que se actualiza la nulidad de una elección por violación a los principios constitucionales del sistema democrático. Además de la afectación, que en el caso de la VPG, se ha causado a la dignidad y el derecho a la no discriminación de la persona contendiente.

En ese sentido, la determinancia constitucional es una modalidad específica de este requisito de validez de las elecciones, la cual permite superar el principio de conservación de los actos públicos, cuando se genere de forma cuantitativa y/o cualitativa. Esto es, no es necesaria la conjunción de ambas modalidades para

anular el acto electivo, sino que bastaría con acreditar la cualitativa para decretar la nulidad absoluta de la elección atinente.

Como se advierte, esta interpretación jurisprudencial sobre la VPG, realizada por el TEPJF, resulta factible de incorporarse al catálogo de causales de nulidad previstas por el artículo 41. VI, de la Constitución Federal. Ciertamente, no obstante que en el caso de VPG se revierte la carga de la prueba en beneficio de la denunciante, lo cierto es que tratándose del caso de la determinancia constitucional (acreditada la violación denunciada, así como el 5% o menos de diferencia entre el primero y segundo lugar) entonces estaríamos frente a un escenario en el que la actualización de la nulidad de la elección por VPG, se considera de tal gravedad que impide la subsistencia del acto electoral, y por lo mismo, lo torna intrínsecamente inválido y nulo de pleno derecho.

Con la precisión, de acuerdo con la Sala Superior del TEPJF, que el beneficio de la reversión de la carga para generar una presunción de determinancia constitucional permite que pueda ser derrotable mediante prueba aportada por la contraparte o tercero interesado.

En este orden, la gravedad de una conducta o hecho demostrado de VPG, dentro de alguna de las etapas del proceso electoral, puede resultar sancionable con la nulidad por violación a los principios constitucionales de las elecciones. Pues este tipo de nulidad se actualiza cuando la violación, al ser de difícil cuantificación, autoriza acudir solamente al factor cualitativo, siempre que se cumpla con el porcentaje del 5% o menos de diferencia entre el ganador y el segundo lugar.

Esto es, se mide la gravedad e impacto de la conducta infractora en términos de la afectación a la integridad del proceso electoral correspondiente sin

necesidad de demostrar plenamente la atribuibilidad de la conducta. E incluso, se ha generado una excepción a la nulidad absoluta del acto electivo, mediante la interpretación sustentada por la Sala Superior en la jurisprudencia 2/2018, de rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN" en la cual se admite que la determinancia constitucional pueda ser revertida, por prueba en contrario. Criterio cuya implicación principal es que, en los casos concretos, el juzgador electoral asuma la carga de explicar cómo es que algún medio de prueba le permite superar la consecuencia jurídica de la nulidad absoluta o de pleno derecho.

Dicho de otra forma, en términos de nulidades electorales, la vulneración de un principio constitucional es, por sí misma, invalidante del acto electivo. Sin embargo, la actualización de la determinancia constitucional no necesariamente requiere la acreditación del criterio cuantitativo, sino que puede solo atender al criterio cualitativo cuando la demostración del criterio cuantitativo es de difícil o imposible realización.

En síntesis, la actualización de los vicios previstos de forma casuística por el citado artículo 41 constitucional, implican la consecuencia jurídica insubsanable para concluir la nulidad de pleno derecho de la elección viciada de forma grave. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Superior ha introducido un matiz a la disposición constitucional que permite la oportunidad de recuperar la presunción de validez para la elección respectiva.

- El caso de Iliatenco, Guerrero y la determinancia constitucional en el ámbito local. ¿Es derrotable, mediante interpretación, el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados?

El 29 de septiembre de 2021, la Sala Superior resolvió el expediente SUP-REC-1861/2021, el cual tuvo como estudio de fondo, la actualización de VPG en la elección del ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero. A partir de dicho precedente, el TEPJF estableció que las afirmaciones realizadas por la parte denunciante gozan de la presunción de veracidad. Esto es, a partir del principio de la reversión de la prueba, tendrían que desvirtuarse las afirmaciones realizadas por la candidata afectada por los hechos de violencia.

Cabe resaltar que, por las características de esta causal de nulidad, incluso reforzada por el deber de la autoridad jurisdiccional de ejercer a plenitud la facultad de realizar diligencias para mejor proveer, resulta equiparable a las causales de nulidad que se actualizan a partir de la determinancia constitucional. Misma determinancia que una vez acreditada, supera al principio de conservación de los actos públicos y como consecuencia de derecho, hace inminente la nulidad absoluta del acto electivo. Por lo mismo, se reitera conviene añadirla como causal de nulidad específica a las contempladas por el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Federal, y replicarla a su vez en el ámbito constitucional local.

- La VPG como causal de nulidad de elección en Veracruz.

El 05 de noviembre de 2019, el Congreso del Estado de Veracruz, a iniciativa de la diputada Mónica Robles Barajas, a la sazón, Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, aprobó la inclusión de la nulidad de elección por violencia política de género a nivel de gubernatura, diputación local y ayuntamiento. Para tal fin se modificó el artículo 396. VIII, del Código Electoral local, a fin de que en caso de acreditarse, se decretara la máxima sanción en materia electoral. Esto es, la nulidad del acto electivo, pero también se previó que no solo se dejarán sin efectos los resultados electorales, sino que además,

esta nulidad determinada por el órgano jurisdiccional competente, y las constancias del expediente respectivo, se preconstituyeran como prueba para remitir el expediente correspondiente a la Fiscalía General del Estado a efecto de que ésta procediera conforme con sus atribuciones.

Cabe resaltar que dicha disposición legal resulta plenamente aplicable en este año 2021 para las elecciones locales. Mismas que aún están en etapa de impugnación ante el tribunal local, y lógicamente, en caso de que se decrete la nulidad en primera instancia, se podrá observar la modificación, confirmación o revocación de esa determinación, durante la cadena impugnativa que se desarrolle ante la jurisdicción electoral federal. O bien, también podría actualizarse la declaración de nulidad por el propio órgano terminal.

Así por ejemplo, la factibilidad de anular una elección por VPG, en Veracruz y el desarrollo de la línea jurisprudencial de la Sala Superior se ha retomado por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-473/2021. En concreto, sobre la presunción de veracidad de la prueba aportada por la víctima de VPG para demostrar los hechos de discriminación narrados. Asimismo, para el supuesto de que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento. Caso en el cual, la violencia ejercida debe considerarse grave y determinante, a menos que exista la prueba en contrario entre las constancias del expediente.

A partir de los anteriores elementos desarrollados por los precedentes del TEPJF, se puede advertir la necesidad de que la causal de nulidad por VPG, sea incluida en el catálogo constitucional local y federal de conductas graves, y por sí mismas determinantes para anular la elección correspondiente, siempre que se demuestre la violación y no exista prueba en contrario. Por lo mismo, se requiere la inclusión expresa de dicha causal por VPG, con la precisión de que las pruebas aportadas para su demostración gozan de una presunción de

veracidad, a fin de cumplir con el deber del juzgador de aplicar la perspectiva de género en su valoración.

En conclusión, el estándar diferenciado para los casos de VPG, así como para las demás causales de nulidad por determinancia constitucional, exige un caudal probatorio mínimo, reforzado mediante diligencias para mejor proveer, para la acreditación de la causal de nulidad de la elección por la violación a principios constitucionales, así como su trascendencia o impacto en el proceso electoral correspondiente.

Lo anterior, a efecto de no requerirse una carga probatoria excesiva o imposible de cumplir. Sin embargo, debe resaltarse la necesidad de la incorporación al texto constitucional, a fin de establecer expresamente, que en el caso de VPG, se puede superar la exigencia de tener plenamente acreditados los hechos y vicios alegados para considerarlos determinantes para la elección. Para tal propósito se tendrían que establecer requisitos y límites claros para la aplicación excepcional del criterio cualitativo y sobre la presunción de veracidad de las pruebas aportadas por la víctima, dada la especial gravedad de la VPG.

Dr. José Oliveros Ruiz
Director General de @Electoral_Tech



REFORMAS A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO; REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO, VIVIR EN UN AMBIENTE ADECUADO Y CON UN ENTORNO SALUDABLE Y DE BIENESTAR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es urgente y preciso garantizar el derecho de todos los que vivimos en el Estado de México para lograr un Crecimiento Urbano Ordenado para vivir en un Ambiente Adecuado, con un Entorno Saludable y de Bienestar; esto se puede lograr mediante la procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento a la normatividad ambiental y sobre todo en desarrollo urbano. Nuestro marco normativo debe reinventarse, y no debemos dejar escapar esta oportunidad.

Es muy importante, y más ahora, pensar en cómo cuidar y proteger la -muy poca- superficie de áreas naturales que tenemos en el Estado de México, a fin de construir ciudades más sanas y resilientes; con mejor calidad del aire, dotando de un verdadero espacio público y eficiente a distintas zonas de nuestro Estado de México como respuesta de mediano y largo plazo a la relación entre espacio – salud, que los estragos de la pandemia que vivimos actualmente nos hace repensarla y enfrentarla como un problema de salud pública y, sobre todo frenar el voraz procedimiento de “regularización” con que cuentan los gobiernos municipales desde el año 2000 para inscribir cualquier “propiedad” mediante un simple “Contrato privado de compra-venta, cesión o donación”.



Después de todo este tiempo que hemos estado en “cuarentena”, debemos de preguntarnos ¿cómo serán las ciudades el día de mañana? y sin lugar a equivocarme la apuesta por un nuevo estilo de vida debe detonarse ahora mediante un desarrollo sostenible con un acceso garantizado a los servicios básicos para las familias que es la parte más importante de la sociedad y que hoy, más que nunca, requiere atención y cuidado para crear un mundo mejor; con esto podemos “iniciar” a detener el hacinamiento y la informalidad en que viven muchísimas familias que viven bajo techos autoconstruidos y endebles que se han multiplicado en los suburbios del Estado de México y que nos llevará en muy pocos años a las ya conocidas favelas de São Paulo.

La clave de todo esto, es entender la situación en la que nos encontramos y modificar la política urbana que ha marcado los diferentes gobiernos estatales desde hace más de 20 años – apegados todos ellos a una falsa legalidad-, con el fin de que el próximo gobierno del Estado de México pueda contar con un ordenamiento territorial, en desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente adecuado a la nueva realidad y, principalmente haciendo clara la diferencia entre el derecho de propiedad y el derecho al desarrollo urbano y el derecho al Medio Ambiente adecuado para las familias. La respuesta que debemos adoptar es enfocarnos en la creación de ciudades igualitarias y resilientes; terminar con los asentamientos informales y barrios marginales, que solo crean una preocupación y una gran carga al erario de los gobiernos municipales y las comunidades circunvecinas debido a su alto nivel de vulnerabilidad y gran cantidad de recursos que se deben destinar para proporcionar los elementos básicos de vida a tantas familias que “por necesidad” tienen que -sobrevivir- en estos asentamientos irregulares.

Nuestra oportunidad es ahora, la reforma que presento para modificar los distintos artículos de los cinco ordenamientos vigentes en el Estado de México, es con el fin de no solo lograr el



cambio en estos importantes ordenamientos, sino crear las bases a una verdadera transformación del pensamiento y sobre todo en la concepción de las ciudades que queremos tener en un futuro.

Todo se puede lograr, lo esencial está en radicar la corrupción y evitar que nos terminemos con la poca superficie de áreas naturales con que contamos; y al final es lo único que importa, dejar al mundo mejor de lo que lo encontramos.

PROPUESTA

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 182 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 182.- Para la inscripción o actualización de un inmueble, deberá presentarse el documento con el que se acredite la propiedad o posesión **según corresponda**, que podrá consistir en:

- I. **Escritura o instrumento público otorgado por notario.**
- II. **Derogado.**
- III. Sentencia de la autoridad judicial que haya causado ejecutoria **la cual deberá de constar en escritura o instrumento público otorgado por notario.**
- IV. **Derogado.**
- V. **Derogado.**
- VI. **Derogado.**
- VII. **Título de Propiedad, emitido por el Registro Agrario Nacional y/o la sentencia emitida por cualquier tribunal agrario, en el entendido que cualquiera de estos dos documentos,**



previamente debe estar inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México o registro público respectivo.

VIII. Inmatriculación Administrativa **que cumpla con los requisitos de la Ley Registral la cual deberá de constar en escritura o instrumento público otorgado por notario.**

IX. Resolución de las diligencias de apeo y deslinde judicial o bien, resolución de la rectificación de medidas y superficie emitida por la autoridad judicial que haya causado ejecutoria, cualquiera de las cuales deberán de constar en escritura o instrumento público otorgado por notario.

X. Información de dominio que cumpla con los requisitos del Código Civil del Estado de México la cual deberá de constar en escritura o instrumento público otorgado por notario.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 183 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 183.- La inscripción de un inmueble **que se realice** en el padrón catastral municipal, no genera por sí misma, ningún derecho de propiedad o posesión en favor de la persona a cuyo nombre aparezca inscrito, **ya que la inscripción del inmueble en el padrón catastral es únicamente es para fines recaudatorios municipales.**

Se tiene prohibida la inscripción de cualquier inmueble en el padrón catastral municipal, hasta que se cumplan con lo establecido y se presenten todos y cada uno de los documentos a que se refiere el artículo inmediato anterior.



ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 88 de la Ley Registral para el Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 88.- A la solicitud anterior se deberán agregar los siguientes documentos **en original o copia certificada**:

I. Instrumento que la ley reconozca como válido para transmitir bienes inmuebles y que cumpla con los requisitos formales del Código;

II. Identificación oficial del interesado promovente **y** del apoderado legal, en su caso;

III. Certificado de no inscripción expedido por la oficina registral correspondiente que demuestre que el inmueble no está inscrito a nombre de persona alguna, que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie, que esté inscrito a favor de una persona distinta a la señalada en la solicitud, **debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM**;

IV. Constancia **de la autoridad catastral** municipal que acredite que el inmueble **cuenta con acceso directo a una vía pública reconocida por el municipio; que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie, y que no se encuentra inscrito a favor de una persona distinta a la señalada en la constancia**;

V. Plano descriptivo y de localización del inmueble **con coordenadas UTM expedido por autoridad catastral municipal indicando el nombre de los colindantes, y plano manzanero con la ubicación del inmueble dentro de éste, con coordenadas UTM** expedido por autoridad catastral municipal **en el que se ubique a los colindantes del inmueble y que ubique que el inmueble cuenta con acceso directo a una vía pública reconocida por el municipio**;

VI. Certificación del Secretario del Ayuntamiento **que el domicilio del promovente interesado se encuentra en el municipio, y que el inmueble no se encuentra ubicado y/o** forma parte de los bienes **públicos o privados** del patrimonio municipal;



VII. Constancia expedida por el **Registro Agrario Nacional** de que el inmueble **no está sujeto a ese régimen**, no se encuentra ubicado **y/o forma parte de los bienes propiedad social**, en ejidos o tierras comunales, **debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM**;

VIII. Documento que acredite la personalidad **del apoderado legal del promovente** cuando no se gestione a nombre propio **que cumpla con los requisitos formales del Código**;

IX. Comprobante de pago de derechos expedido por la oficina, institución bancaria o centro comercial autorizado o, en su caso, línea de captura que acredite el pago de los mismos;

X. Avalúo catastral **emitido por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México o la** autoridad estatal **respectiva y/o** de especialista en valuación inmobiliaria con registro vigente **ante el Gobierno del Estado de México**;

XI. **Constancia emitida por la autoridad federal que corresponda**, en la que acredite que el inmueble **no se encuentra ubicado y/o no forma parte de los bienes públicos o privados del patrimonio federal y/o que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie**; **debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM**;

XII. **Constancia emitida por el Gobierno del Estado de México que corresponda**, en la que acredite que el inmueble **no se encuentra ubicado y/o no forma parte de los bienes públicos o privados del patrimonio estatal y/o que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie**; **debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM**;

XIII. **Constancia emitida por la autoridad de desarrollo urbano municipal que confirme que el inmueble cuenta con acceso directo a una vía pública reconocida por el municipio**; **que el inmueble no es resultado de subdivisión y/o, lotificación y/o, fraccionamiento y/o fusión de predios y/o relotificación de subdivisiones**, y que la **superficie de dicho inmueble se encuentra en cabal cumplimiento de la ley**



administrativa en materia de Desarrollo Urbano y sus reglamentos correspondientes, debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM;

XIV. Constancia emitida por el Organismo Operador de Potable y Drenaje y/o de la autoridad municipal correspondiente que confirme que el que el inmueble cuenta con conexión a agua potable y drenaje, o que cuenta con la factibilidad de tener acceso a dichos servicios, previo pago de los derechos correspondientes;

XV. Constancia emitida por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Gobierno del Estado de México y/o autoridad del Gobierno del Estado de México que corresponda, en la que acredite que el inmueble no se encuentra ubicado dentro y/o forma parte de un Área Natural Protegida; debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM;

XVI. Constancia emitida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y/o autoridad Federal que corresponda, en la que acredite que el inmueble no se encuentra ubicado dentro y/o forma parte de un Área Natural Protegida; debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM;

XVII. Constancia emitida por la Dirección de Medio Ambiente del municipio en donde se ubique el inmueble y/o autoridad municipal que corresponda, en la que acredite que el inmueble no se encuentra ubicado dentro y/o forma parte de un Área Natural Protegida; debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM;

XVIII. Cédula de Zonificación del inmueble emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México y/o autoridad municipal que corresponda;

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 115 del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México, para quedar como sigue:



Artículo 115.- La solicitud de certificación de no inscripción, expresará **y contendrá la siguiente información y documentación:**

I. Nombre y firma del solicitante;

II. Ubicación, medidas, colindancias, extensión y superficie del inmueble, así como nombre, en su caso;

III. Nombre de dos personas anteriores que hayan sido poseedores o propietarios, en su caso;

IV. Fecha en que **el solicitante** entró en posesión o adquirió **la posesión** del inmueble;

V. **Original o copia certificada de todos y cada uno de los documentos establecidos en la fracción II y de la fracción IV a la fracción XVIII del artículo 88 de la Ley Registral para el Estado de México;**

VI. **Derogada**

VII. **Derogada**

Si al realizar la búsqueda respectiva resulta que el inmueble objeto de la solicitud, forma o pudiera formar parte de otro inmueble registrado; **se encuentra ubicado dentro y/o forma parte de un Área Natural Protegida; y/o se encuentra ubicado y/o forma parte de los bienes propiedad social, en ejidos o tierras comunales**, el Registrador, **mencionará cualquiera de dichas** circunstancias.

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 7.260 del Código Civil del Estado De México, para quedar como sigue:



Artículo 7.260.- En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se transferirá sino hasta el momento en que el bien se hace cierto y determinado con conocimiento del acreedor.

Por lo que respecta a la enajenación de inmuebles, la propiedad se transferirá en la misma forma que la ley exige para su venta.

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el artículo 8.10 del Código Civil del Estado De México, para quedar como sigue:

Artículo 8.10.- Sólo se registrarán:

- I. Los testimonios de instrumentos notariales, copias certificadas electrónicas, formatos precodificados u otros documentos auténticos;
- II. Las resoluciones y providencias judiciales que así lo determinen, **y la inmatriculación judicial que atribuya o transfiera la propiedad de un bien inmueble;** así como los demás títulos registrables sobre actos jurídicos de inmatriculación administrativa o que atribuyan o transfieran **únicamente la posesión** de un bien inmueble;
- III. Los documentos privados no traslativos de dominio de inmuebles que impliquen actos u operaciones jurídicas reputados válidos bajo esa forma con arreglo a la ley **y/o que únicamente transmitan la posesión** de un bien inmueble, siempre y cuando se hayan ratificado sus firmas ante Notario Público, o judicialmente;
- IV. Los planes de Desarrollo Urbano Regionales, Municipales y de Centros de Población que contemplen las reservas, usos, destinos y provisiones, siempre y cuando graven, limiten o afecten la propiedad individual, materializada en los folios electrónicos y en la base de datos del sistema operativo.



ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 8.59 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.59.- **La inmatriculación judicial es la inscripción de la propiedad de un inmueble que carece de antecedentes registrales.**

Por su parte, la inmatriculación administrativa es la inscripción de solo la posesión de un inmueble que también carezca de antecedentes registrales.

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el artículo 8.60 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.60.- La inmatriculación **judicial** se verifica mediante:

I. Información de dominio;

II. **Derogado**

III. Resolución judicial que la ordene y que se haya dictado como consecuencia de la presentación de título fehaciente que abarque, sin interrupción, un período por lo menos de cinco años **la propiedad de un bien inmueble;**

IV. La inscripción del decreto publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado que convierta en bien de dominio privado un inmueble que no tenga tal carácter, o del título o títulos que se expidan con fundamento en aquel decreto; **y**

V. **Derogado**



VI. La inscripción de los títulos de solares urbanos expedidos por el Registro Agrario Nacional o de los documentos que conviertan un bien ejidal a propiedad privada.

ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo 8.60 bis del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.60 bis.- La inmatriculación administrativa se verifica mediante:

I. Información posesoria.

II. Resolución por parte del Instituto de la Función Registral del Estado de México que incorpore a la vida registral y al tráfico inmobiliario un inmueble que carece de antecedentes registrales como consecuencia de la presentación de la solicitud del interesado; y

III. Inmatriculaciones administrativas por las que se regularice la tenencia de la tierra en programas o campañas promovidas por el Gobierno del Estado o por los ayuntamientos del Estado de México.

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el artículo 8.61 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.61.- El que haya **adquirido y disfrutado un** bien inmueble **en concepto de propietario** por el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos **conforme al presente Código**, y no tenga título de propiedad o teniéndolo no sea inscribible, podrá **solicitar** ante el Juez competente **la usucapión del inmueble**, en los términos que establezca



el presente Código, el Código de Procedimientos Civiles, **la Ley Registral para el Estado de México y el reglamento respectivo.**

ARTÍCULO UNDÉCIMO. Se reforma el artículo 8.62 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.62.- Transcurridos cinco años desde la inscripción de **la inmatriculación administrativa**, sin que en el **Instituto de la Función Registral del Estado de México** aparezca algún asiento que la contradiga, tiene derecho el poseedor, a que el Juez declare que se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y ordene se haga en el **Instituto de la Función Registral del Estado de México** la **anotación de la** inscripción de dominio respectiva.

ARTÍCULO DUODÉCIMO. Se reforma el artículo 8.63 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.63.- No podrán inscribirse mediante **inmatriculación administrativa**, las servidumbres continuas no aparentes, tampoco el derecho hipotecario **y/o cuando como resultado de ésta inmatriculación administrativa se pretenda la subdivisión y/o, lotificación y/o, fraccionamiento y/o fusión de predios y/o relotificación de subdivisiones**, sin que al efecto se hayan cumplido con todos y cada uno de los requisitos que para estos casos prevé la ley administrativa de la materia en Desarrollo Urbano y sus reglamentos correspondientes.



ARTÍCULO DECIMOTERCERO. Se reforma el artículo 8.64 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.64.- El que tenga título fehaciente que abarque cuando menos un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a su promoción, podrá **solicitar la inmatriculación judicial de** su predio, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que señalan en el presente capítulo, la Ley Registral para el Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles.

La inscripción de la inmatriculación judicial no operará cuando como resultado de ésta se pretenda la subdivisión y/o, lotificación y/o, fraccionamiento y/o fusión de predios y/o relotificación de subdivisiones, sin que al efecto se hayan cumplido con todos y cada uno de los requisitos que para estos casos prevé la ley administrativa de la materia en Desarrollo Urbano y sus reglamentos correspondientes.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. Se reforma el artículo 8.65 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.65.- **Para la inmatriculación administrativa de inmuebles que carezcan de antecedentes registrales, los que tengan interés legítimo podrán ocurrir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México a solicitarla, debiendo acompañar a su promoción todos y cada uno de los documentos que se establecen en la Ley Registral para el Estado de México y reglamento respectivo.**

I. Derogada

II. Derogada



ARTÍCULO DECIMOQUINTO. Se reforma el artículo 8.66 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.66.- La **inmatriculación administrativa** de un inmueble, dejará siempre a salvo los derechos de terceros **por un plazo de cinco años contados desde la inscripción de la inmatriculación administrativa en el Instituto de la Función Registral del Estado de México.**

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. Se reforma el artículo 8.67 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.67.- Una vez realizada la **inmatriculación administrativa**, sólo podrá rectificarse por el Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México cuando se hubieren cometido errores mecanográficos, ortográficos o de otra índole que no afecten sus datos esenciales, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de ninguno de los conceptos.

Tratándose de un error de concepto **la inmatriculación administrativa**, sólo podrá rectificarse o cancelarse por determinación judicial

Se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la inmatriculación **administrativa** alguno de los contenidos del título, se altere o varíe su sentido.



ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO. Se reforma el artículo 8.68 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.68.- Dictada la resolución de inmatriculación **administrativa** de un inmueble, se ordenará su inscripción, previo pago de los derechos por este concepto.

ARTÍCULO DECIMOCTAVO. Se reforma el artículo 8.69 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.69.- Cualquier **persona** que se crea con derecho a los bienes materia de inmatriculación administrativa, podrá oponerse reuniendo los requisitos que señala el reglamento **de la Ley Registral para el Estado de México**.

ARTÍCULO DECIMONOVENO. Se reforma el artículo 5.129 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 5.129.- Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de propietario del bien poseído puede producir la usucapión debiendo estar fundada en justo título **y por la totalidad de la superficie del inmueble que se encuentre registrada ante Instituto de la Función Registral del Estado de México**.



ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se reforma el artículo 5.130 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 5.130.- Los bienes inmuebles se adquieren por usucapión:

I. En cinco años **contados desde la fecha de inscripción de la inmatriculación administrativa, sin que en el Instituto de la Función Registral del Estado de México aparezca algún asiento que la contradiga.**

II. **Derogada.**

III. **Derogada.**

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 5.131 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 5.131.- La posesión adquirida por medio de un delito **y/o en contra a lo establecido en la ley administrativa de la materia en Desarrollo Urbano y sus reglamentos correspondientes**, no genera derechos para adquirir la propiedad por usucapión.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 5.133 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 5.133.- **La Federación**, el Estado, los Municipios y las demás entidades de derecho público, se considerarán como particulares para usucapir bienes; pero sus bienes inmuebles propios serán imprescriptibles y no podrán ser objeto de usucapión.



ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 5.137 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 5.137.- La usucapión no opera en los siguientes casos:

- I. Entre ascendientes y descendientes **hasta el tercer grado y, sin grado alguno** durante la patria potestad;
- II. Entre cónyuges;
- III. Contra los incapacitados, mientras no tenga representante legal;
- IV. Entre los incapacitados y sus tutores o curadores mientras dure la tutela;
- V. Entre los copropietarios o coposeedores respecto del bien común;
- VI. Contra los que se ausenten del Estado por comisiones de servicio público;
- VII. Contra los militares en servicio activo que se encuentren fuera del Estado;
- VIII. Contra bienes inmuebles de **la Federación**, el Estado **y/o los** municipios.
- IX. Cuando se promueva únicamente por una cierta parte de la totalidad de la superficie del inmueble que se encuentre registrada ante Instituto de la Función Registral del Estado de México y/o la superficie resultante del inmueble una vez que se descuenten las superficies que hubiesen sido objeto de resoluciones inscritas por usucapión parcial en el inmueble.**

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 5.138 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:



Artículo 5.138.- Tampoco operará la usucapión cuando como resultado de ésta se pretenda la **subdivisión y/o, lotificación y/o, fraccionamiento y/o** fusión de predios **y/o relotificación de subdivisiones**, sin que al efecto se hayan cumplido los requisitos que para estos casos prevé la ley administrativa de la materia **en Desarrollo Urbano** y sus reglamentos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 5.140 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 5.140.- La usucapión de los bienes inmuebles se promoverá contra el que aparezca como propietario **y por la totalidad de la superficie del inmueble que se encuentre registrada ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México.**

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 3.20 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.20.- El que tenga interés en rendir la información de dominio a que se refiere el Código Civil, a su solicitud acompañará **los siguientes documentos en original o copia certificada:**

I. Certificado de no inscripción del inmueble, **expedido por la oficina registral correspondiente que demuestre que el inmueble no está inscrito a nombre de persona alguna, que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie, que esté inscrito a favor de una persona distinta a la señalada en la solicitud, debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM;**



- II. Constancia **de la autoridad catastral municipal que acredite que el inmueble cuenta con acceso directo a una vía pública reconocida por el municipio; que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie, y que no se encuentra inscrito a favor de una persona distinta a la señalada en la constancia;**
- III. Plano descriptivo y de localización del inmueble **con coordenadas UTM expedido por autoridad catastral municipal indicando el nombre de los colindantes, y plano manzanero con la ubicación del inmueble dentro de éste, con coordenadas UTM expedido por autoridad catastral municipal en el que se ubique a los colindantes del inmueble y que ubique que el inmueble cuenta con acceso directo a la vía pública reconocida por el municipio;**
- IV. Constancia **expedida por el Registro Agrario Nacional de que el inmueble no está sujeto a ese régimen, no se encuentra ubicado y/o forma parte de los bienes propiedad social, en ejidos o tierras comunales, debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM;**
- V. **Identificación oficial del interesado promovente y del apoderado legal cuando no se gestione a nombre propio que cumpla con los requisitos formales del Código;**
- VI. **Certificación del Secretario del Ayuntamiento que el domicilio del promovente interesado se encuentra en el municipio, y que el inmueble no se encuentra ubicado y/o forma parte de los bienes públicos o privados del patrimonio municipal;**
- VII. **Documento que acredite la personalidad del apoderado legal del promovente cuando no se gestione a nombre propio que cumpla con los requisitos formales a que se refiere el Código Civil;**
- VIII. **Comprobante de pago de derechos expedido por la oficina, institución bancaria o centro comercial autorizado o, en su caso, línea de captura que acredite el pago de los mismos;**



- IX. Avalúo catastral emitido por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México o la autoridad estatal respectiva y/o de especialista en valuación inmobiliaria con registro vigente ante el Gobierno del Estado de México.**
- X. Constancia emitida por la autoridad federal que corresponda, en la que acredite que el inmueble no se encuentra ubicado y/o no forma parte de los bienes públicos o privados del patrimonio federal y/o que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie; debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM.**
- XI. Constancia emitida por el Gobierno del Estado de México que corresponda, en la que acredite que el inmueble no se encuentra ubicado y/o no forma parte de los bienes públicos o privados del patrimonio estatal y/o que no forma parte de otro inmueble con mayor superficie; debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM.**
- XII. Constancia emitida por la autoridad de desarrollo urbano municipal que confirme que el inmueble cuenta con acceso directo a una vía pública reconocida por el municipio; que el inmueble no es resultado de subdivisión y/o, lotificación y/o, fraccionamiento y/o fusión de predios y/o relotificación de subdivisiones, y que la superficie de dicho inmueble se encuentra en cabal cumplimiento de la ley administrativa en materia de Desarrollo Urbano y sus reglamentos correspondientes, debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM.**
- XIII. Constancia emitida por el Organismo Operador de Potable y Drenaje y/o de la autoridad municipal correspondiente que confirme que el que el inmueble cuenta con conexión a agua potable y drenaje, o que cuenta con la factibilidad de tener acceso a dichos servicios, previo pago de los derechos correspondientes.**
- XIV. Constancia emitida por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Gobierno del Estado de México y/o autoridad del Gobierno del Estado de México que corresponda, en la que acredite que el inmueble no se encuentra ubicado dentro y/o**



forma parte de un Área Natural Protegida; debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM.

XV. Constancia emitida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y/o autoridad Federal que corresponda, en la que acredite que el inmueble no se encuentra ubicado dentro y/o forma parte de un Área Natural Protegida; debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM.

XVI. Constancia emitida por la Dirección de Medio Ambiente del municipio en donde se ubique el inmueble y/o autoridad municipal que corresponda, en la que acredite que el inmueble no se encuentra ubicado dentro y/o forma parte de un Área Natural Protegida; debiendo agregar la localización del inmueble con coordenadas UTM.

XVII. Cédula de Zonificación del inmueble emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México y/o autoridad municipal que corresponda.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 3.21 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.21.- La información se recibirá con citación de la autoridad municipal, de los colindantes **referidos en el plano manzanero expedido por autoridad catastral municipal.**

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 3.22 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:



Artículo 3.22.- La **propiedad de un inmueble que carece de antecedentes registrales** y sus demás requisitos legales, se justificará mediante tres testigos idóneos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.23.- Para recibir la información, previamente se publicarán edictos con los datos necesarios de la solicitud del promovente, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", **los estrados de la oficina correspondiente al Instituto de la Función Registral del Estado de México** y en otro periódico de circulación diaria.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Se reforma el artículo 3.24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.24.- Comprobada debidamente la **propiedad del inmueble que carece de antecedentes registrales**, el Juez declarará que el **interesado** se ha convertido en propietario **de éste**.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 3.25 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.25.-**Derogado**



ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 3.26 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.26.-**Derogado**

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforma el artículo 3.27 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.27.- Quien se sienta afectado con la información de dominio, lo alegará por escrito y se suspenderá el curso del expediente de información **de dominio**, si éste estuviera ya concluido y aprobado, deberá el Juez poner la demanda en conocimiento del Registrador para que suspenda la inscripción y si ya estuviere hecha, para que anote dicha demanda.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 3.28 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.28.- Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el procedimiento de oposición, quedará éste sin efecto, haciéndose, en su caso, la cancelación **de la demanda ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México.**



ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.29.- Las resoluciones ejecutorias que declaren procedentes la información **de dominio** se inscribirán en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, una vez acreditado ante el Juez el pago de las contribuciones correspondientes señaladas en la legislación vigente.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 2.325.1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.325.1.- Se tramitará en este procedimiento especial, el juicio de usucapión o prescripción adquisitiva de buena fe sobre inmuebles **por la totalidad de la superficie del inmueble que se encuentre registrada ante Instituto de la Función Registral del Estado de México y/o** con superficie igual o menor a doscientos metros cuadrados o cuyo valor no exceda lo establecido en el artículo 3 fracción XL inciso B), del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 2.325.4 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.325.4.- La usucapión de los bienes inmuebles se promoverá contra **la persona** que aparezca como propietario **y por la totalidad de la superficie del inmueble registrada ante Instituto de la Función Registral del Estado de México.**



ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 2.325.25 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.325.25.- Concluida la fase de alegatos, el juez dictará sentencia definitiva dentro del plazo de cinco días, **la cual deberá ser registrada ante Instituto de la Función Registral del Estado de México.**

Acolman de Nezahualcóyotl a 30 de junio de 2021, C. Gad Javier Valencia Aguirre.

Eje temático: Desarrollo urbano, rural y medio ambiente

Tema: Inclusión del urbanismo dentro del texto constitucional

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resulta particularmente relevante el hecho que la Constitución Local actual no contiene en ninguno de sus artículos ni una sola mención acerca del desarrollo urbano, la acción urbanística o el urbanismo.

Lo anterior, a pesar que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en materia de planeación que son aplicables, es obligación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales expedir sus planes de desarrollo urbano y sujetar a ellos la administración del territorio que hagan en uso de sus respectivas facultades.

Cabe adicionar que en materia de desarrollo urbano, además de las disposiciones contenidas principalmente en los Libros Quinto, Décimo Segundo y Décimo Sexto del Código Administrativo del Estado de México y sus respectivos reglamentos secundarios, existe una Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual atendiendo a su carácter general, es de observancia y aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y por todos los órdenes de gobierno.

En ese tenor, el artículo 3, fracciones I y XIII de la citada Ley General definen la acción urbanística y el desarrollo urbano en los términos siguientes:

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables,

tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están determinadas en los planes o programas de Desarrollo Urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o Servicios Urbanos;

...

XIII. Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población;”

Asimismo, el artículo 5 de la Ley General establece que toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios previstos en dicha ley, sin importar el orden de gobierno de donde emana.

En consecuencia, se considera de especial relevancia que se considere incluir los conceptos de la acción urbanística y el desarrollo urbano dentro del contenido de la Constitución Política del Estado de México, con lo cual se estaría explicitando la importancia de que sean considerados como ejes rectores del diseño de las políticas públicas por parte del orden de gobierno estatal y de los diversos municipios, puesto que si bien a la fecha otros ordenamientos imponen a los gobiernos la obligación en la materia, lo cierto es que la acción urbanística y el desarrollo urbano deberían ser elementos de presencia imprescindible en el ordenamiento superior mexiquense.

REFORMA AL DELITO DE EXTORSIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Gran parte de la zona conurbada del Estado de México ha surgido y se ha creado a partir de asentamientos irregulares, la sociedad tiene la necesidad de contar con una vivienda digna, esto ha motivado a que las personas adquieran fracciones de terrenos e inmuebles sin que estén debidamente registrados y legalizados, muchos de estos terrenos están bajo el régimen ejidal y, desafortunadamente los ejidatarios, unos motivados por carencias económicas y otros de manera dolosa obtienen un lucro indebido vendiendo o cediendo una parte o fracción de su parcela o ejido sin contar con la debida autorización para tal efecto.

Así mismo, es bien sabido que, la Legislación Agraria, no contempla el hecho de que los ejidatarios o poseedores de parcelas puedan vender una fracción de terreno parcelado o ejidal, sin embargo, muchas personas, poseedores y ejidatarios, obtienen un lucro vendiendo y cediendo fracciones de terreno ejidal, mismas que con el paso del tiempo pretenden ser recuperadas por los mismos ejidatarios o por los sucesores o herederos de éstos y con ello demandan y promueven juicios de restitución de tierras ante el Tribunal Agrario, esto ha permitido que quienes venden las fracciones de terreno realicen esta operación fraudulenta en varias ocasiones.

Más aun, algunos ejidatarios ya son fallecidos, sin embargo, son los sucesores quienes no reconocen las ventas que realizaron los antiguos ejidatarios, ante tal circunstancia y actuando de manera dolosa, por si o por interpósita persona, ven la posibilidad de que se les restituya su parcela o la fracción de terreno que fue cedida

o vendida por el antiguo ejidatario y con tal de no llegar a tal extremo ven la oportunidad de obtener un lucro indebido al solicitar dinero u otros beneficios ilícitos o bien, se sienten con el derecho de estar cobrando dinero de manera constante con tal de no demandar a quien en su momento adquirió la fracción de parcela o ejido ya sea por compraventa o cesión de derechos.

De igual forma, otra modalidad de conducta dolosa es la que ocurre bajo la amenaza que es realizada por parte del ejidatario o de sus representantes legales o de terceras personas designadas por los mismos ejidatarios, con el argumento de quitar el terreno y las viviendas construidas en él si es que no se cumple con el pago de un dinero o alguna contraprestación para dejar las cosas como están y no demandar la restitución de tierras ante el Tribunal Agrario.

Otra modalidad de contraprestaciones exigidas ilegalmente de manera dolosa, es la que contempla connotaciones sexuales, pues he tenido conocimiento que algunos ejidatarios actuando en contubernio con terceras personas exigen tener relaciones sexuales con las hijas, nietas, incluso esposas u otros familiares de los poseedores de las fracciones de terreno que alguna vez les fueron cedidas o vendidas de manera fraudulenta, petición realizada a cambio de no ser demandados por la vía de restitución de tierras ejidales, ante el Tribunal Agrario, y con la finalidad de no ser perturbados en sus casa o viviendas construidas en esas fracciones de terreno.

Aunado a ello, pueden existir múltiples y diversas exigencias realizadas por parte de algunos ejidatarios y/o terceras personas que actúan con la autorización y permisibilidad de éstos para obtener cualquier beneficio ilícito e ilegal, protegiéndose en el hecho de que, si no se cumplen sus exigencias, éstos

demandarán la restitución y devolución de la fracción de terreno que alguna vez les fue vendido o cedido.

Ante tal temor, las personas acceden a cumplir con las exigencias e imposiciones dolosas que les son requeridas, dejándolos en un estado de indefensión, pues no existe un tipo penal que contemple las conductas antes descritas como delito.

Ante tal contexto se propone lo siguiente:

PROPUESTA

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 9 del Código Penal del Estado de México para quedar como sigue:

Artículo 9.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: ... el de extorsión contenido en los párrafos segundo y tercero, así como cuando concurran las circunstancias mencionadas en las fracciones contempladas en el artículo 266 ...

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 266 del Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 266.- ...

X.- Al ejidatario, sucesor de éste, heredero, representante legal, abogado o cualquier persona designada por alguno de los anteriores, que pretenda obtener un lucro indebido por la venta de una parte de terreno ejidal, ya sea que la venta o cesión la haya realizado algún anterior o actual ejidatario de un bien ejidal ya sea parcela o solar, u obtenga algún beneficio por la venta ilegal de una fracción o parte de una parcela de la que tengan los derechos ejidales o bien se pretenda obtener o se ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibicionismo corporal, eróticos o sexuales u otra forma de explotación sexual para si o para otros.

Chiconcuac de Juárez, 30 de Septiembre de 2021, Lic. en D. Sergio Delgado Sánchez.

Seguridad Pública y Justicia

Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública

Exposición de Motivos

La Seguridad Pública, misma que debe ser proporcionada por el Estado Libre y Soberano de México dentro del ámbito de su competencia, representa un mecanismo fundamental de la administración pública estatal, siendo esta es esencial para la ciudadanía, la cual debe ir encaminada al servicio público, de tal manera que los elementos de seguridad pública estén capacitados para proteger y servir a la comunidad.

En este sentido, cabe resaltar que el artículo 5 de la Constitución Local nos define lo siguiente:

“Artículo 86 Bis.- La Seguridad Pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos y las sanciones de las infracciones administrativas, en términos de ley, y deberá regirse bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta Constitución.”

En ese orden de ideas, es imperativo que los cuerpos de seguridad pública cuenten con la capacitación necesaria para poder hacer frente a las circunstancias y/o eventualidades que se llegan a presentar tanto con la ciudadanía, así como ante la comisión de un delito u emergencia, lo anterior para que la atención brindada por los elementos de seguridad pública sea adecuada, oportuna y dentro de las funciones que se les otorgan.

Es por ello que se deben diseñar estrategias para la profesionalización de los elementos de seguridad pública operativos y administrativos precisando los mecanismos que le permitan una adecuada y oportuna intervención ante una eventualidad u emergencia.

Propuesta

Primero.- Del artículo 86 Bis de la Constitución Política el Estado Libre y Soberano de México, se desprende que la seguridad pública es una función propia del estado y al mismo tiempo tiene como finalidad salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Segundo.- Se debe reformar el artículo anteriormente mencionado, con la finalidad de que los elementos de seguridad pública, cuenten con la debida capacitación en materias como lo es prestar primeros auxilios en situaciones de extrema urgencia; operativamente estar capacitados y certificados para el uso de armas de fuego para que en el cumplimiento del deber tengan mejores oportunidades de supervivencia, así como de proteger a la ciudadanía cuando se encuentren ante la comisión de un delito y sobre todo estar capacitados para realizar debida y oportunamente las puestas a disposición de los presuntos responsables de un delito respetando siempre sus garantías individuales.

Tercero.- Por otra parte, es imperativo establecer mecanismos eficientes para la adecuada selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, Toda vez que la Ley Local o Municipal no lo Preve y como se desprende del artículo 7 fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que a la letra dice:

*“**Artículo 7.-** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, **las entidades federativas y los Municipios**, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:*

VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;”

Por lo anteriormente expuesto, considero que es importante proponer la elevación a rango constitucional de un imperativo que reitere y explicita el mandato a los cuerpos de seguridad pública para que sus elementos estén debidamente capacitados y certificados, toda vez que al tener elementos certificados, la calidad de la atención administrativa y operativa para con la ciudadanía mejoraría en gran medida y de esta manera las Unidades de Asuntos Internos, así como las Comisiones de Honor y Justicia, verían disminuidas en gran medida las denuncias de la ciudadanía y por ende se tendrían menos elementos sancionados.

Por tanto, se sugiere respetuosamente a la Legislatura Local y al Secretariado Ejecutivo, que consideren la propuesta de adicionar, si así lo estiman conveniente.

TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado del decreto publicado el 27 de mayo de 2015, a través del cual se reformó el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción y toda vez que prevé que las Legislaturas de los Estados debían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas necesarias conforme a la entrada en vigor de las Leyes Generales relacionadas con dicho Sistema Nacional, nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece un Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tiene por objeto la Coordinación entre las autoridades del Estado de México y sus Municipios en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas.

Lo anterior, recae en una instancia de coordinación entre las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; por lo tanto, el objetivo es lograr una función pública más eficiente, mejorando el acceso a la transparencia, pero sobre todo la legalidad de sus actos a través de la actualización del marco normativo, para que se propongan e impulsen las reformas normativas al marco institucional de manera que se puedan enfrentar los distintos retos de la realidad actual, para estar en todo momento en un Estado de Derecho, el cual debe prevalecer en nuestra Entidad y Municipios.

Tomando en consideración que la corrupción es un daño insidioso que tiene diversas consecuencias agresivas para la sociedad porque quebranta la democracia y el Estado de Derecho, dando pie a violaciones de los derechos humanos y permitiendo el incremento de la delincuencia y amenaza a la seguridad humana; el Estado de México, en cumplimiento al orden constitucional, a través del decreto contenido en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", publicó el 24 de abril de 2017 la reformó nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en cuanto a la adecuación del orden legislativo de la Entidad al aludido Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo como finalidad prever un modelo institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, con procedimientos de investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de los órganos facultados para llevarlas a cabo, muy aparte de las funciones propias del control interno y la fiscalización.

PROPUESTA

Conforme a lo anterior, cabe destacar que el artículo 130, párrafo primero y fracción I de la Constitución Local, prevé lo referente a la responsabilidad de las y los servidores públicos del estado, señalando quienes cuentan con dicha calidad, así como los procedimientos y sanciones a que estarán sujetos cuando incurran en responsabilidad frente al Estado, en los siguientes términos:

“Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, organismos autónomos, en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a las y los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las y los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses ante las autoridades competentes y constancia de presentación de la declaración fiscal y en los términos que determine la ley.

La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la materia. Las y los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se aplicarán sanciones administrativas a las y los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley de la materia establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Las demás faltas y sanciones administrativas que no sean calificadas como graves, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control, quienes substanciarán los procedimientos y en su caso aplicarán las sanciones correspondientes.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se regirá por lo previsto en el artículo 106 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley de la materia establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

Las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, los órganos constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales y municipales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

*Las instituciones de seguridad pública tendrán su sistema de separación del servicio, de investigación y sanción disciplinaria, de conformidad con lo previsto en las leyes respectivas en congruencia con la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
...”*

No obstante lo anterior, si bien dicho precepto prevé la calidad de servidor público y cuáles son los procedimientos que se llevarán a cabo dependiendo de la gravedad de la falta administrativa, lo cierto es que, por el simple hecho de cometer una falta administrativa sin importar la gravedad, se debería tomar en cuenta que los servidores públicos en ningún caso gozan de fuero ni inmunidad, pudiendo actuar en su contra mediante el procedimiento y la autoridad que corresponda, tomando en cuenta que el servidor público es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, sin importar tipo y nivel al que pertenezcan.

Por tanto, se sugiere respetuosamente a la Legislatura Local al Secretario Ejecutivo, que consideren la propuesta antes expuesta, si así lo estiman conveniente.



"2021. AÑO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA GRANDEZA DE MEXICO"

PROPUESTA DE INICIATIVA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

Está sería la iniciativa que tiene que ver con organización política del Estado de México las carreteras de cuota en el Estado de México son las más caras del mundo las autoridades actuales han sido insensibles a las necesidades de los usuarios por lo que se deberán revisar concesiones y encontrar las formas para que las empresas que prestan este importante servicio público bajen los peajes reconocemos este asunto como una demanda muy sentida de la ciudadanía construir con inversión privada las autopistas que urgentemente demanda el desarrollo del estado

Iniciativa de adición del inciso c) al numeral II del artículo 9 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a los tratados internacionales que México ha firmado como lo es el Convenio 169 de la OIT donde, para fines de consulta señala en su artículo 7 párrafo 1 que “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”

Y considerando que el artículo 9 de la constitución del Estado Libre y Soberano de México alude de manera general los términos de la consulta, es fundamental que se consideren las prioridades de cada pueblo, en virtud de su estilo de vida, creencias, instituciones, bienestar espiritual, el territorio que se ocupa, carácter cultural, social y económico, para de esta manera evitar que la consulta sea cual fuere, sea generalizada a toda la población nacional sin que esta ocupe el espacio a consultar.

Con la finalidad de que la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de México, ejecute de manera correcta el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas del Edomex.

PROPUESTA

Se adiciona el inciso c), del párrafo 2, del artículo 9 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:

- a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;*
- b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les conciernan.*
- c) Los pueblos directamente implicados en un proceso de desarrollo, legislativo o administrativo, tienen el derecho a decidir sus prioridades a partir de sus creencias, instituciones, bienestar espiritual y velando por las tierras y territorio que ocupan, como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, utilizan de alguna manera, dichos pueblos deberán participar directamente en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo municipal y regional susceptibles de afectarles directamente; donde la correcta ejecución e instrumentación de la consulta, incluya el reconocimiento de las prioridades de los pueblos originarios y comunidades indígenas del Estado Libre y Soberano de México.*

Texcoco de Mora a 30 de septiembre de 2021, C. José Ángel Ramírez Ayala

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 2 que somos una nación con una composición pluricultural y otorga a las entidades federativas la atribución de reconocer en sus constituciones locales a los pueblos y comunidades indígenas que lo integran. Así que en la Constitución Local se reconocen únicamente a 5 pueblos indígenas originarios de nuestra entidad; mazahuas, otomíes, tlahuicas, matlazincas y nahuas, sin embargo ha dejado en el olvido a los pueblos acolhuas, tepanecas y chalcas que han reclamado su reconocimiento desde hace 500 años, ya que su origen está documentado en el código Xolotl que es uno de los manuscritos pictográficos Mexicanos conservado por la Biblioteca Nacional de París . Este abarca casi cuatro siglos de la cuenca del valle de México; el cual sustenta historiográficamente el origen Tolteca Chichimeca de los pueblos antes mencionados.

Por otra parte, la actual Constitución Estatal no contempla procedimiento alguno para el reconocimiento de los pueblos indígenas antes mencionados, en consecuencia la presente iniciativa para reformar el artículo 17 pretende subsanar lo ya manifestado.

Es por ello que se propone reformar el artículo 17 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA del Estado Libre y Soberano de México, al cual se le adiciona el reconocimiento de los pueblos originarios ancestrales, Acolhua, Chalca y Tepaneca; también se adiciona el reconocimiento a las comunidades indígenas residentes y Afromexicanas en cualquier territorio del Estado de México; para quedar como sigue:

Artículo 17.- El Estado de México tiene una composición pluricultural, pluriétnica y plurilingüe, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta constitución reconoce como pueblos originarios dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Nahuatl, Matlazinca, Tlahuica, Acolhua, Chalca, Tepaneca y aquellos que se identifiquen con algún otro pueblo indígena o afromexicano.

Las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas serán reconocidas por la Legislatura Local mediante decreto, a propuesta del consejo de pueblos indígenas, Residentes y Afromexicanos del Estado de México, conforme al protocolo señalado en la Ley que crea dicho Consejo.

Por otra parte en la actualidad, una de las demandas centrales de los pueblos indígenas es el reconocimiento de su derecho a la autonomía. El reclamo tiene sentido en la medida en que se corrobora que desde hace cinco siglos los pueblos indígenas han sido sometidos a relaciones coloniales. Antes de que los españoles llegaran al Anáhuac y Aridoamérica, allí habitaban grandes sociedades con culturas diferentes y un alto grado de desarrollo, que los invasores Europeos conceptualizaron en indígenas. El indígena fue inventado con el propósito de someter y explotar a los pueblos originarios. La guerra de independencia no cambió la situación colonial de los pueblos indígenas. Los Estados que surgieron de los escombros de las antiguas colonias se fundaron bajo la idea de un solo poder soberano y una sociedad homogénea, compuesta de individuos con derechos iguales.

El discurso de la igualdad jurídica sirvió a los criollos una vez consumada la independencia de México para legitimar la negación y violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos la propiedad y posesión colectiva de sus tierras y el mantenimiento de sus sistemas ancestrales de autogobierno .

En el año de 1992, en el contexto de las protestas por los quinientos años de la invasión europea, los movimientos indígenas transformaron sustancialmente sus formas de manifestación política y sus demandas. En el primer caso se convirtieron en sujetos políticos; en el segundo, exhibieron al indigenismo como una política para encubrir su situación colonial y reclamaron su derecho a la libre determinación.

Desde entonces, los movimientos indígenas son de resistencia y emancipación: resistencia para no dejar de ser pueblos, emancipación para no seguir siendo colonias. El Estado mexicano procesó esta demanda restringiéndola hasta volverla nula. Comenzó modificando el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir en ella a los pueblos como parte sustantiva de la multiculturalidad de la Nación, aunque sólo de manera indirecta se les podía considerar como sujetos de derecho.

Ante tal problemática, esta iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 1° al 16 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en razón de reconocer el origen de los pueblos indígenas, residentes y Afromexicanos para dotarlos de mecanismos eficientes para el reconocimiento de sus derechos de autonomía y libre autodeterminación.

Reforma al artículo 1 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, y se adicionen los párrafos a), b) y c) para la Instrumentación de los protocolos para el reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas y afroamericanas del Estado Libre y Soberano de México, en función de sus propios sistemas normativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el fin de salvaguardar la identidad, visibilizar la cultura, rescatar su historia y proporcionar la autonomía en función de los usos y costumbres de cada comunidad indígena, barrio y/o pueblo originario, residentes y afroamericanos en el Estado de México.

Con la intención de buscar soluciones en las necesidades básicas a los municipios donde conviven pueblos originarios que no pertenecen al catálogo de pueblos originarios por desconocimiento de su origen.

Considerando que, desde la Reforma Constitucional de 1992 hubo un reconocimiento a nivel nacional de las comunidades indígenas como: Sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Que, en la Reforma Constitucional de 2001 con el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quezada, cambió el concepto de 'sujeto' a 'identidades de interés público'. Es decir, las comunidades indígenas dejan de ser propietarios definitivos y pasaron a ser propietarios preferentes.¹ “[...] *al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades*”.

Que el Estado, está obligado a consultar a los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT que en su artículo 6 refiere² *“al aplicar las presentes*

¹ Art. 2 Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo VI

² Convenio 169 de la OIT, art. 6, fracción a.

disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas, cada que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”

Lo anterior, en razón de que en el artículo 1 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, no contempla específicamente, los mecanismos de auto suscripción y auto determinación como indígena; de acuerdo al artículo 2 constitucional respecto de la libre autodeterminación. Así como tampoco refiere la instrumentación de los protocolos para el reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas, residentes y afromexicanos, del Estado Libre y Soberano de México. Lo que deriva en la discriminación y exclusión, respecto al acceso al presupuesto designado a pueblos originarios y comunidades indígenas otorgado por el gobierno del Estado de México, así como el acceso a los programas y asistencia social que corresponde a cada uno.

Se plantea la siguiente:

PROPUESTA

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 1 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México; para quedar como sigue:

Artículo 1. *La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y tiene por objeto, reconocer y regular los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas, residentes y afromexicanas asentadas de manera continua en localidades y, en su caso, municipios de la entidad; normas que se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.*

Los derechos de los pueblos indígenas que reconoce la presente Ley serán ejercidos a través de sus respectivas comunidades.

Es obligación de las autoridades estatales y municipales la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento.

- A. El titular del gobierno estatal instrumentará a los organismos públicos con personalidad jurídica, autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones, los protocolos para el reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado Libre y Soberano de México, en función de sus propios sistemas normativos.*

- B. Elevar a rango constitucional, el reconocimiento de las funciones de los organismos públicos y autónomos, para ejecutar los lineamientos en el reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado Libre y Soberano de México, que aún no aparecen dentro del catálogo de pueblos originarios.*

- C. El Estado deberá dotar de instrumentos teóricos y prácticos; políticos, económicos y sociales concretos en la instrumentación de las políticas públicas que se aplicarán en el Estado Libre y Soberano de México, tales como la actualización del Padrón de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.*

Texcoco de Mora a 30 de septiembre de 2021 C. Rocío Alejandra Ayala Pimentel



CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO

EXPOSICION DE MOTIVOS

El territorio entendido como *propiedad social indígena*, es el espacio geográfico y de garantía de la reproducción de las culturas originarias, regulado colectivamente a través de sus instituciones y normas internas, y que hoy en día son reconocidas por el Estado mexicano en el marco de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, como parte de sus sistemas normativos, conocidos como “usos y costumbres”.

El conocimiento y la memoria territorial de los pueblos, a través de documentos antiguos probatorios o títulos primordiales, debiera ser razón suficiente para ejercer su derecho a conservar sus tierras territorios y proteger el medio ambiente. sin embargo, los actos e irregularidades administrativos, ha hecho que poco a poco se pierda la capacidad de decisión y protección sobre estos.

Posterior a la Revolución mexicana, se reconoció y tituló a los pueblos sus tierras comunales, mediante Resoluciones Presidenciales expedidas por el Titular del Poder Ejecutivo; no obstante, hoy día estos documentos de propiedad han mostrado limitaciones pues en los últimos años se han otorgado concesiones y permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales y minerales sin tomar en cuenta a los pueblos y las comunidades indígenas, estableciendo prácticamente un proceso de despojo de sus tierras y recursos y bienes naturales, generando conflictos que, en muchos casos, han derivado en violaciones graves a los derechos humanos de defensores comunitarios.

En el marco Jurídico:

Artículo 26. De la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas



1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

El Estado, como parte de una nación multiétnica y pluricultural, ha establecido en la propuesta de reforma a la constitución federal, que las comunidades indígenas y afroamericanas, tienen derecho a decidir sobre sus territorios. Para ello, es fundamental el reconocimiento de sus derechos territoriales, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales. El derecho al territorio debe ser respetado, aunque no se encuentre titulado el territorio por el derecho estatal.

La propiedad colectiva titulada a pueblos indígenas y comunidades afroamericanas, no puede venderse, ser sometida a gravámenes y a limitaciones de dominio, como tampoco es expropiable, es decir, los territorios colectivos de comunidades son considerados inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, el reconocimiento al derecho de propiedad colectiva de las comunidades se otorga previo cumplimiento de la función social de la propiedad, la cual implica obligaciones y a la que como tal le es inherente una función ecológica. En relación con el territorio, es deber del Estado respetar la importante relación existente entre las culturas y sus valores espirituales con las tierras o territorios, en especial los aspectos colectivos que en dicha relación representa la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera. Es así como el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan estos pueblos implica además el deber de tomar medidas para salvaguardar el derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente



ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido ancestralmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia; adicionalmente, respetar las modalidades de transmisión de los derechos de propiedad sobre la tierra que han sido establecidas por dichos pueblos. En este sentido, el Estado de México, debe tomar las medidas necesarias para determinar las tierras ocupadas y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Además, deben establecerse procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por estos pueblos. Al mismo tiempo, mediante los programas agrarios deben garantizarse las condiciones para la asignación de tierras tradicionales, cuando las que dispongan sean insuficientes para garantizar los elementos de su existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico.

El Convenio 169 de la OIT, consagra que a pesar de estar establecido que los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan, cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. En todo caso, estos pueblos tienen el derecho de regresar a sus tierras tradicionales cuando dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Si esto no fuere posible, tienen derecho a recibir indemnización por cualquier pérdida o daño sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 10. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 29. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas



1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

De acuerdo a lo anterior...

Se modifica y adiciona el párrafo cuatro, y se adicionan los párrafos 5 y 6 del artículo 17,

...para quedar como sigue:

**CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MEXICO**

TITULO PRIMERO

Del Estado de México como Entidad Política

Artículo 17.- ...

...

...

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho ***a la libre determinación.***
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen



libremente su desarrollo económico, social y cultural. Este derecho se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica.

Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y la autonomía.

Se presenta la presente iniciativa de Ley al Parlamento Abierto, a los 30 días del mes de junio de 2021, para su consideración y en su caso aprobación

GRAN CONSEJO ACOLHUA NACIÓN CHICHIMECA-TOLTECA

(Hablantes de nuestra lengua madre náhuatl)

ATENTAMENTE

**“UNIDOS POR NUESTROS ANCESTROS EN UN SOLO ROSTRO Y UN SOLO
CORAZÓN PARA FORJAR TU DESTINO”**

NANCY MENDOZA RAMÍREZ

Representante del Gran Consejo Acolhua Chichimeca-Tolteca y

Primera Portadora de la Palabra del
Consejo de Ancianos y Aprendices de
Papalotla y sus Barrios

MIGUEL ÁNGEL VELAZQUEZ ZENÓN

Representante del Gran Consejo Acolhua Chichimeca-Tolteca y



Coordinador de la Mesa de Portadores de la Palabra
Indígena de La Purificación Tepetítla, Texcoco

JUAN NEZAHUALCÓYOTL CANO TÉLLES

Representante del Gran Consejo Acolhua Chichimeca-Tolteca y

Segundo Portador de la Palabra del Consejo de Ancianos y
Aprendices de San Jerónimo Amanalco, Texcoco

ALEJANDRO VENADO CALDERÓN

Representante del Gran Consejo Acolhua Chichimeca-Tolteca y

Primer Portador de la Palabra del Consejo
de Ancianos y Aprendices de Santa María
Tlailitlacan, Chiconcuac



Propuesta en donde se deroga la...

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.

Propuesta en donde se crea la...

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO, DEL ESTADO DE MEXICO

EXPOSICION DE MOTIVOS

A lo largo de la historia colonial y republicana, las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas fueron menospreciadas y estigmatizadas como carentes de "civilización". La legislación buscaba su desaparición y promovía la asimilación, un texto de Teresa Rojas Rabiela, dice:

«Cuando México se inventó a sí mismo, buscando dotarse de un rostro propio como nación, optó por rescatar su pasado indígena librándolo del oprobio en que, a juicio de historiadores criollos y liberales, lo sumergieron los tres siglos de dominación hispana. Paradójicamente, al mismo tiempo que se exhumaba lo "indio", se luchaba por hacer desaparecer a los indios, pretendiendo escollo para acceder al progreso».

Esta frase plasma la cruda realidad que, desde el porfiriato, incluso antes y hasta estos tiempos ha prevalecido entre el Estado y los pueblos indígenas de México.

La discriminación hacia los pueblos indígenas, desde siempre ha impedido que éstos puedan ejercer sus derechos humanos fundamentales tanto individual como colectivamente, ha contribuido a la pérdida del patrimonio cultural y los territorios ancestrales. Sin embargo, el amor, la determinación y el deseo de conservar y transmitir la cultura, la cosmovisión, incluso los territorios, a las generaciones siguientes es lo que los ha hecho resistir y prevalecer durante siglos.



La mayoría de las Constituciones actuales de los países latinoamericanos reconocen el carácter multiétnico y pluricultural de sus respectivas sociedades como también lo hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el derecho internacional se ha superado el enfoque integracionista y asimilacionista de las normas anteriores referidas a "poblaciones" indígenas y se ha llegado a reconocer y valorar "la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad", como queda expresado en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo.

Basado en el reconocimiento de la diversidad cultural, el Convenio 169 obliga a las partes a garantizar el respeto a la integridad de los pueblos indígenas.

Con la presente propuesta de reforma, se reconoce la diversidad cultural, lingüística y jurídica del Estado Libre y Soberano de México y pone fin a ese colonialismo que puso a los pueblos originarios en una condición de subordinación política, explotación económica y subvaloración cultural, con ésta ideología se legitima la capacidad de los pueblos y comunidades indígenas para hacerse cargo de sus propios asuntos, dejando atrás la política "tutelar" con que se les trató durante mucho tiempo.

Bajo éstos principios, se busca desarrollar y garantizar a través de esta reforma, todos los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los tratados, pactos, acuerdos y convenios internacionales válidamente suscritos por el Presidente de la República.

No puede haber igualdad y goce pleno de los derechos humanos si un sector de la población está completamente excluido de la toma de decisiones sobre los asuntos que le conciernen. Las leyes y las políticas "indigenistas" tradicionales se caracterizan por la exclusión de los indígenas y se formularon e implementaron sin la participación de los interesados; a diferencia de lo anterior, el presente proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, da especial importancia a la participación de los pueblos y comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones; considerando tanto las normas constitucionales como aquellas del Convenio 169 de la OIT cuyo eje central es la participación indígena.



Para la elaboración de esta propuesta de reforma, se contó con la participación directa de algunos representantes de los pueblos y comunidades indígenas del Acolhuacan, quienes, a través de la convocatoria emitida por la legislatura local, nos dimos a la tarea de hacer el comparativo con la legislación local de otros estados, así como la propuesta de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, elaborada por el INPI y la Presidencia de la República que fue el resultado del proceso de diálogo y consulta llevado a cabo en el año 2019, así como también las leyes y decretos de los que nuestro país forma parte.

La presente propuesta de Reforma, al desarrollar las normas, se basa en el principio del respeto a la integridad cultural de los pueblos indígenas, entendida esta de manera amplia y cubriendo todos los aspectos que abarca, pretendiendo también servir como marco normativo de la materia indígena del Estado, establece los lineamientos y criterios que servirán de guía para la elaboración de todas aquellas leyes o disposiciones legales que traten temas específicos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas o que de alguna manera conciernen a los derechos de los pueblos indígenas.



Por lo anteriormente expuesto, es que se emite la...

Propuesta en donde se deroga la...

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.

Propuesta en donde se crea la...

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO, DEL ESTADO DE MEXICO

TITULO I.

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Capítulo I. Del Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas,

Artículo 1. Del reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos originarios

Artículo 2. De las normas aplicables

Artículo 3. De los conceptos

Artículo 4. Del objeto de la ley

Artículo 5. Autogestión de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 6. De la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de las políticas públicas.

Artículo 7. De la personalidad jurídica

Artículo 8. De Los indígenas en zona urbana

Artículo 9. De la formación y capacitación de los funcionarios públicos

Capítulo II. De la Consulta Previa e Informada

Artículo 10. De la consulta

Artículo 11. De las prohibiciones

Artículo 12. De la aprobación en asamblea

Artículo 13. De la presentación



- Artículo 14. De las reuniones previas
- Artículo 15. De las asambleas
- Artículo 16. De los acuerdos
- Artículo 17. Del respecto a las autoridades indígenas
- Artículo 18. De la acción de amparo

TITULO II.

DE LAS TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Capítulo I. Disposiciones Generales

- Artículo 19. Del derecho de las tierras
- Artículo 20. De la seguridad y defensa en tierras indígenas

Capítulo II. De las Tierras Indígenas en Espacios Geográficos delimitados con otros Estados.

- Artículo 21. De la protección ante los conflictos en espacios geográficos delimitados con otros Estados.
- Artículo 22. De la protección de los pueblos indígenas en los espacios geográficos delimitados con otros Estados.
- Artículo 23. Del intercambio entre pueblos indígenas de otros Estados colindantes con el Estado de México y los acuerdos nacionales.

Capítulo III. De la Demarcación de las Tierras Indígenas

- Artículo 24. De la demarcación de tierras indígenas
- Artículo 25. De los desplazados
- Artículo 26. De la inafectabilidad de las tierras indígenas
- Artículo 27. De los títulos anteriores
- Artículo 28. De la prohibición de uso de tierras indígenas por terceros
- Artículo 29. De los títulos de propiedad colectiva



Artículo 30. Del registro de los títulos de propiedad

Artículo 31. La improcedencia de ejidos en tierras indígenas

Capítulo IV. Del Ambiente y Recursos Naturales

Artículo 32. Del derecho a un ambiente sano

Artículo 33. De la prohibición de sustancias tóxicas y peligrosas

Artículo 34. De la corresponsabilidad del gobierno del estado y los pueblos indígenas

Artículo 35. De los atractivos turísticos

Artículo 36. De la educación ambiental

Capítulo V. Del Aprovechamiento de los Recursos Naturales y de los Proyectos de Desarrollo en Tierras Indígenas

Artículo 37. De los recursos naturales existentes en las tierras indígenas

Artículo 38. Explotación minera o de yacimientos en tierras indígenas

Artículo 39. Del estudio de impacto ambiental y sociocultural

Artículo 40. Del saneamiento de las tierras indígenas

Artículo 41. De los beneficios y de las indemnizaciones

Artículo 42. Del incumplimiento de las condiciones de explotación y aprovechamiento.

Capítulo VI. De las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial

Artículo 44. De la permanencia de los pueblos y comunidades indígenas en las áreas bajo régimen de administración especial

Artículo 45. De las áreas bajo régimen de administración especial en tierras indígenas

Artículo 46. De los planes de ordenamiento y reglamento de uso de las áreas bajo régimen de administración especial

Artículo 47. De la participación en la administración de las áreas bajo régimen de administración especial

Artículo 48. De la creación de áreas bajo régimen de administración especial

Capítulo VII. De los Desplazados

Artículo 49. De los desplazamientos o traslados de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 50. De la invasión de tierras indígenas



TÍTULO III. DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Capítulo I. De los Derechos Civiles

Artículo 51. Del servicio militar

Artículo 52. De la identificación de los indígenas

Capítulo II. De los Derechos Políticos

Artículo 53. De la participación política y el protagonismo

Artículo 54. De los representantes a Congreso de la Unión

Artículo 55. De los representantes indígenas ante los concejos legislativos y concejos municipales

Artículo 56. De las normas sobre participación política indígena

Artículo 57. De la defensoría del pueblo y la defensa de los derechos indígenas

Artículo 58. De la formación del ejercicio de los derechos y su participación

Capítulo III. De las Organizaciones de los Pueblos y Comunidades indígenas

Artículo 59. Del reconocimiento de la organización propia

Artículo 60. De las organizaciones indígenas

Artículo 61. De las instancias de concertación

Artículo 62. De la exención de impuestos en los registros

Capítulo IV. De los Municipios Indígenas

Artículo 63. De los municipios indígenas

Artículo 64. De las autoridades municipales



TITULO IV DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA

Capítulo I. De la Educación Propia y el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe

Artículo 65. Del derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 66. Educación propia de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 67. Del régimen de educación intercultural bilingüe

Artículo 68. De las obligaciones del Estado

Artículo 69. Principio de gratuidad de la educación

Artículo 70. Enseñanza de idioma indígena y del castellano

Artículo 71. De las instituciones educativas en comunidades indígenas

Artículo 72. De los docentes de educación intercultural bilingüe

Artículo 73. De la población indígena con asentamiento disperso

Artículo 74. De la alfabetización intercultural bilingüe

Artículo 75. Programas de estudio

Artículo 76. Convenios con instituciones de educación superior

Artículo 77. Arte, juegos y deportes indígenas

Capítulo II. De la Cultura

Artículo 78. Del derecho a la cultura propia

Artículo 79. Las culturas indígenas como culturas originarias

Artículo 80. De la preservación, fortalecimiento y difusión de las culturas

Artículo 81. De la alteración o movilización de bienes materiales del patrimoniocultural indígena

Artículo 82. Del derecho al uso de vestidos, atuendos y adornos tradicionales

Artículo 83. De los desarrollos habitacionales

Artículo 84. De la identidad cultural y libre desarrollo de la personalidad

Artículo 85. De los patrimonio arqueológico e histórico de los pueblos indígenas



Capítulo III. De los Idiomas Indígenas

Artículo 86. Los idiomas indígenas como idiomas oficiales

Artículo 87. Ámbito de aplicación de los idiomas indígenas

Artículo 88. De los medios de comunicación social indígenas

Capítulo IV. De la Espiritualidad

Artículo 89. De la libertad del culto

Artículo 90. De la consulta y aprobación

Artículo 91. De la protección de los sagrados y de culto

Artículo 92. De la formación religiosa y espiritual de los niños, niñas y adolescentes

Capítulo V. De los Conocimientos Tradicionales y la Propiedad Intelectual Colectiva de los Pueblos Indígenas

Artículo 93. Del derecho a la propiedad intelectual colectiva

Artículo 94. Del uso de los recursos genéticos

Artículo 95. Del carácter colectivo de la propiedad intelectual indígena

Artículo 96. De los mecanismos de protección y defensa

Artículo 97. De las acciones legales

TITULO V.

DE LOS DERECHOS SOCIALES

Capítulo I. De la Familia en los Pueblos Indígenas

Artículo 98. Del derecho a la familia acorde a la cultura

Artículo 99. De protección a la familia indígena

Artículo 100. De la protección integral al indígena

Artículo 101. De los ancianos y ancianas indígenas

Artículo 102. De las mujeres indígenas

Artículo 103. De los programas para niños, niñas y adolescentes indígenas



Capítulo II. De la Salud y la Medicina Indígena

Artículo 104. Del derecho a la medicina indígena

Artículo 105. De la incorporación de la medicina tradicional indígena al sistema nacional de salud

Artículo 106. De la participación indígena en los programas y servicios de salud

Artículo 107. Los idiomas indígenas en la atención en salud

Artículo 108. De la capacitación del personal de salud

Artículo 109. De la definición y coordinación de las políticas de salud

Artículo 110. Del nombramiento de funcionarios regionales

Capítulo III. Del Empleo y los Derechos Laborales

Artículo 111. Del ejercicio pleno de los derechos laborales

Artículo 112. Del derecho al trabajo de los indígenas

Artículo 113. De la información

Artículo 114. De las condiciones prohibidas

Artículo 115. Del contrato de trabajo

TITULO VI.

DE LA ECONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 116. Del modelo económico propio

Artículo 117. De las prácticas económicas tradicionales

Capítulo II. Del Desarrollo Económico en las Tierras Indígenas

Artículo 118. De los planes de desarrollo en tierras indígenas

Artículo 119. Del funcionamiento y ejecución de programas de desarrollo en tierras indígenas.

Artículo 120. Del fomento de la economía de los pueblos indígenas

Artículo 121. De la capacitación y asistencia y financiera

Artículo 121. De los sistemas crediticios

Artículo 122. De la actividad turística



TITULO VII DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo I. De la Jurisdicción Indígena

Artículo 123. Del derecho propio

Artículo 124. Del derecho indígena

Artículo 125. De la jurisdicción especial indígena

Artículo 126. De la competencia de la jurisdicción especial indígena

Artículo 127. De la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria

Artículo 128. De los procedimientos para resolver conflictos de derechos humanos

Artículo 129. Del fortalecimiento del derecho indígena y la jurisdicción especial indígenas

Capítulo II. De los Derechos de los Indígenas ante la Jurisdicción Ordinaria

Artículo 130. De los derechos de los indígenas en procedimientos ordinarios

Artículo 131. Del derecho a la defensa

Artículo 132. Del derecho al uso del idioma indígena

Artículo 133. Del derecho a la propia cultura

Artículo 134. De los informes parciales

Artículo 135. Del juzgamiento penal

TITULO VIII. DEL ENTE RECTOR DE LA POLÍTICA INDÍGENA

Artículo 136. De la Creación del Organismo Autónomo



LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO, DEL ESTADO DE MEXICO

Se propone aprobar sin modificaciones la propuesta al Proyecto de Ley, el cual queda redactado de la siguiente manera:

TITULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Capítulo I

Del Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Del reconocimiento de los pueblos indígenas, sujetos de derecho público

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se basa en el principio del respeto a la integridad cultural de los pueblos indígenas, entendida esta de manera amplia y cubriendo todos los aspectos que abarca, pretende servir como marco normativo de la materia indígena del Estado, establece los lineamientos y criterios que servirán de guía para la elaboración de todas aquellas leyes o disposiciones legales que traten temas específicos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas o que de alguna manera conciernan a los derechos de los pueblos indígenas y tiene por objeto reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, asentadas de manera continua en localidades y, en su caso, municipios de la entidad; normas que se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Los derechos de los pueblos indígenas que reconoce la presente Ley serán ejercidos



a través de sus respectivas comunidades.

Es obligación de las autoridades estatales y municipales la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento.

El Estado de México tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en una región geográfica de lo que hoy corresponde a las actuales fronteras estatales al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, jurídicas y políticas, o parte de ellas, que se reconocen a sí mismos como tales, por tener uno o algunos de los siguientes elementos: identidades étnicas; tierras; instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y; sistemas de justicia propios, que los distinguen de otros sectores de la sociedad nacional y que están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras.

El Estado Libre y Soberano de México, reconoce y protege:

1. La existencia de los pueblos indígenas, como sujetos de derecho público, garantizándoles los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados, pactos y convenios internacionales, la presente ley otras normas y reglamentos legales, para asegurar su participación activa en la vida del Estado de México, la preservación de sus culturas, el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen posible,
2. Con relación al pueblo afroamericano, se tiene en cuenta que la Declaración y Plan de Acción de Durban, reconoce que los afrodescendientes "... han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos, y afirmamos que deben ser tratados con equidad y respeto de su dignidad, y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, se deben reconocer sus derechos a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y



costumbres; a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización, su modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas; a mantener y usar sus propios idiomas; a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico; al uso, disfrute y conservación de los recursos naturales renovables de su hábitat y a participar activamente en el diseño, la aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación, incluidos los de carácter específico y propio; y, cuando proceda, a las tierras que han habitado desde tiempos ancestrales;" y

3. A los pueblos indígenas **residentes**, provenientes de otro espacio territorial de la República Mexicana, que radiquen de forma provisional o por tiempo indefinido dentro de la demarcación territorial del Estado Libre y Soberano de México.

De las normas aplicables

Artículo 2. Lo relacionado con los pueblos y comunidades indígenas se rige por lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados, pactos y convenciones internacionales válidamente firmados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, así como por lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la presente Ley, cuya aplicación no limitará otros derechos garantizados a estos pueblos y comunidades, en normas diferentes a éstas. Serán de aplicación preferente aquellas normas que sean más favorables a los pueblos y comunidades indígenas.

De los conceptos

Artículo 3. Para los efectos legales correspondientes se entiende por:

1. Pueblos Indígenas: son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, jurídicas y políticas, o parte de ellas. Que se reconocen a sí mismos como tales, por tener uno o algunos de los siguientes elementos: identidades étnicas; tierras; instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y; sistemas de justicia propios, que los distinguen de otros sectores de la sociedad nacional y que están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras.



El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará **tomando** en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios **de autoadscripción**, etnolingüísticos, **históricos** y de asentamiento físico.

2. Comunidades Indígenas: Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica, **política** y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus **sistemas normativos**

3. Indígena: es aquella persona perteneciente a un pueblo indígena y que en virtud de su identidad cultural y social se reconoce a sí misma como tal y es reconocida por su pueblo o comunidad, aunque adopte elementos de otras culturas.

4. Tierras Indígenas: son aquellas en las cuales los pueblos y comunidades indígenas de manera individual o compartida ejercen sus derechos originarios y han desarrollado tradicional y ancestralmente su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política. Comprenden los espacios terrestres, las áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, asentamientos, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos y otras áreas a las que hayan tenido acceso tradicional y que son necesarias para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida.

5. Hábitat indígena: es el conjunto de elementos, físicos, químicos, biológicos y socioculturales, que constituyen el entorno en el cual los pueblos y comunidades indígenas se desenvuelven y permiten el desarrollo de sus formas tradicionales de vida. Comprende el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna y en general todos aquellos recursos materiales e inmateriales necesarios para garantizar la vida y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

6. Organización propia: consiste en la forma de organización y estructura político-social que cada pueblo o comunidad indígena se da a sí misma, de acuerdo a sus necesidades y expectativas y según sus tradiciones y costumbres.

7. Instituciones Propias: son aquellas instancias que forman parte de la organización propia de los pueblos y comunidades indígenas, las cuales, por su carácter tradicional dentro



de estos pueblos y comunidades, son representativas del colectivo como por ejemplo la familia, la forma tradicional de gobierno y el consejo de ancianos o consejos comunitarios.

8. Autoridades legítimas: se consideran autoridades legítimas a las personas o instancias colectivas que uno o varios pueblos o comunidades indígenas designen o establezcan de acuerdo a su organización social y política y para las funciones que dichos pueblos o comunidades definan de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

Del objeto de la Ley.

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases para:

1. Promover, los principios de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, multicultural y multilingüe, en un Estado de justicia.
2. Desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanos y residentes, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los convenios, pactos y tratados válidamente firmados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, reconocidos también dentro de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
3. Proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, con fundamento en sus culturas e idiomas.
4. Establecer los mecanismos de relación entre los pueblos y comunidades indígenas con los órganos del Poder Público y con otros sectores de la colectividad Estatal.
5. Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, comunidades indígenas, afromexicano y de sus miembros.



Autogestión de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 5. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas; su identidad, cultura, Derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión; protección de sus conocimientos tradicionales; uso, protección y defensa de sus tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la administración, conservación y utilización del ambiente y de los recursos naturales existentes en sus tierras.

De la Participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de las políticas públicas

Artículo 6. El Estado Libre y Soberano de México promoverá y desarrollará acciones coordinadas y sistemáticas que garanticen la participación efectiva de los pueblos indígenas en los asuntos Estatales, regionales y locales. En este sentido, los pueblos y comunidades indígenas participarán directamente o a través de sus organizaciones de representación, en la formulación de las políticas públicas dirigidas a estos pueblos y comunidades o de cualquier otra política pública que pueda afectarles directa o indirectamente. En todo caso, deberá tomarse en cuenta la organización propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante, como expresión de sus usos y costumbres.

De la personalidad Jurídica.

Artículo 7. El Estado Libre y Soberano de México, reconoce la existencia legal y personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas dentro del marco de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales, la presente Ley y demás cuerpos normativos, les otorgan. Para el ejercicio efectivo de este reconocimiento en los procedimientos judiciales, administrativos y legales en los cuales los pueblos y comunidades indígenas sean parte, será suficiente la presentación del documento que pruebe la validez de la representatividad de quienes realizan acciones en su nombre.



Los indígenas en zonas urbanas.

Artículo 8. Los ciudadanos indígenas que habitan en zonas urbanas tienen los mismos derechos que los indígenas que habitan en sus tierras, en tanto corresponda, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales y en esta Ley. En este sentido, podrán solicitar ante las autoridades competentes atención para recibir educación intercultural bilingüe, servicios de salud adecuados, créditos para la constitución de cooperativas y empresas y, el acceso a actividades de promoción cultural, debiendo el Estado Libre y Soberano de México, brindar el apoyo necesario y suficiente para garantizar estos derechos.

De la formación y capacitación de los funcionarios públicos

Artículo 9. Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en esta Ley, el Estado Libre y Soberano de México, implementará programas de formación y capacitación de los funcionarios públicos, que laboren en tierras indígenas, en actividades o instituciones relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, para el conocimiento y respeto de sus culturas, costumbres y derechos. De igual manera, estarán sujetas a la obligación de formación y capacitación de sus trabajadores prevista en el presente Artículo, toda persona física o moral de carácter privado que desarrolle o pretenda desarrollar su actividad en tierras indígenas.

CAPÍTULO II

De la consulta previa libre e informada

De la consulta

Artículo 10. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente la vida de los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas, y los criterios de



comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados y, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

Así mismo, toda actividad de aprovechamiento de recursos naturales y cualquier tipo de proyectos de desarrollo a ejecutarse en tierras indígenas, estará sujeta a los procedimientos de información y consulta previa, previstos en la presente Ley.

De las prohibiciones

Artículo 11. Se prohíbe la ejecución de actividades en las tierras de los pueblos y comunidades indígenas que lesionen grave o irreparablemente, la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pueblos o comunidades.

De la aprobación en asamblea

Artículo 12. Toda actividad o proyecto que se pretenda desarrollar o ejecutar dentro de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas deberá presentarse mediante un proyecto a los pueblos o comunidades indígenas involucrados, para que, reunidos en asamblea, decidan sobre su aprobación o desaprobación. La decisión se tomará conforme a sus usos y costumbres. En los casos que se pretenda iniciar una nueva fase del proyecto o extender el ámbito del mismo a nuevas áreas, la propuesta deberá ser sometida a los pueblos y comunidades involucrados cumpliendo nuevamente con el procedimiento establecido en el presente capítulo.

De la presentación.

Artículo 13. Los proyectos serán presentados con anticipación a su consideración por parte de la comunidad respectiva reunida en asamblea, de acuerdo a la Ley de la materia. Estos proyectos deberán contener toda la información necesaria sobre la naturaleza, objetivos y alcance de los mismos, así como los beneficios que percibirán los pueblos y comunidades indígenas involucrados y los posibles daños ambientales, sociales, culturales o de cualquier índole y sus condiciones de reparación, a los fines de que puedan ser evaluados y analizados previamente por el pueblo o la comunidad respectiva. Así mismo, los pueblos y comunidades indígenas involucrados contarán con el apoyo técnico del **Órgano Autónomo**, y demás



órganos del Estado Libre y Soberano de México, facultados y capacitados, al igual que de las organizaciones indígenas locales y regionales.

De las reuniones previas

Artículo 14. Los pueblos y comunidades indígenas involucrados deberán fijar reuniones con los proponentes del proyecto a fin de aclarar dudas sobre el contenido o alcance del mismo o de las actividades propuestas, así como para presentar las observaciones y modificaciones correspondientes. Estas reuniones deberán ser anteriores a la asamblea a la que se refiere el Artículo 12 de esta Ley, y podrán ser asistidos técnica y jurídicamente por representantes del **Órgano Autónomo**, u otro órgano del Estado, de igual manera que por las organizaciones indígenas locales, regionales o nacionales. En las reuniones previas podrán participar libremente los miembros del pueblo o comunidad indígena involucrado.

De las asambleas

Artículo 15. Las asambleas a que se refiere el Artículo 12 de esta Ley, deberán efectuarse conforme a los usos y costumbres de cada uno de los pueblos o comunidades indígenas involucrados. En aquellos casos en que el proyecto deba ser aprobado por dos o más comunidades indígenas, éstas podrán tomar la decisión conjunta o separadamente, no pudiéndose en ningún caso obligar a los pueblos o comunidades indígenas a implementar mecanismos de toma de decisiones distintos a los propios.

Los representantes del **Organismo Autónomo** así como de las organizaciones indígenas locales o regionales, a solicitud de la comunidad indígena involucrada, podrán apoyar logísticamente la realización de estas asambleas, pero en ningún caso podrán tener injerencia en la toma de decisiones.

Los proponentes del proyecto sólo podrán estar presentes en las asambleas si así lo acordare previamente la comunidad indígena respectiva.



De los acuerdos

Artículo 16. De los proyectos que resulten aprobados por los pueblos y comunidades indígenas, se establecerán por escrito las condiciones de su ejecución según el proyecto presentado. Esta autorización podrá ser revocada por el pueblo o comunidad indígena en caso de incumplimiento de los acuerdos por parte de los proponentes en la ejecución del proyecto.

En caso de que las comunidades o pueblos indígenas involucrados expresen su oposición al proyecto referido, los proponentes podrán presentar las alternativas que consideren necesarias al pueblo o comunidad correspondiente, continuando así el proceso de discusión para lograr acuerdos justos que satisfagan a las partes.

Queda prohibida la ejecución de cualquier tipo de proyecto en las tierras indígenas por entes públicos o privados que no hayan sido previamente aprobados por los pueblos o comunidades indígenas involucrados.

Del respeto a las autoridades indígenas

Artículo 17. Los organismos del Estado, las instituciones privadas ni los particulares, podrán ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, el rango y la función de las autoridades propias de los pueblos y comunidades indígenas.

De la acción de amparo.

Artículo 18. Los pueblos y comunidades indígenas podrán intentar la acción de Amparo Constitucional contra la actuación de cualquier institución pública, privada o de particulares, que inicien o ejecuten cualquier proyecto dentro de las tierras indígenas sin cumplir con el procedimiento establecido en el presente Capítulo. Asimismo, podrán solicitar la nulidad de las concesiones o autorizaciones otorgadas por el Estado Libre y Soberano de México cuando los proponentes o encargados de la ejecución del proyecto, violen lo acordado con los pueblos y comunidades indígenas involucrados.



TITULO II

DE LAS TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Del derecho a las Tierras

Artículo 19. El Estado Libre y Soberano de México, reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, los derechos originarios y la propiedad colectiva sobre las tierras que ocupan, a las que han tenido acceso ancestral y tradicionalmente y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la seguridad y defensa en tierras indígenas

Artículo 20. La ejecución de actividades u operaciones concernientes a la seguridad y defensa del Estado Libre y Soberano de México en tierras indígenas, se regirá por las normas que regulan la materia y conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preservando en todo momento el patrimonio cultural, respetando las formas de vida, usos y costumbres de estos pueblos y comunidades, así como la diversidad biológica, los recursos genéticos y otros recursos naturales existentes en sus tierras. Las bases o campamentos de carácter temporal o permanente de estas operaciones se establecerán en los sitios convenidos con los pueblos y comunidades involucrados, siempre fuera de sus centros poblados y previa información y consulta con éstos.



Capítulo II

De las Tierras Indígenas en Espacios Geográficos delimitados con otros Estados.

De la protección ante los conflictos en zonas delimitadas con otros Estados Artículo

21. El Estado Libre y Soberano de México, garantizará a los pueblos y comunidades indígenas ubicados en los límites con otros Estados, la protección y seguridad debidas, en casos de conflictos.

De la protección de las tierras indígenas en zonas delimitadas con otros Estados

Artículo 22. El Estado garantizará con la participación de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, la defensa de las tierras indígenas ubicadas en las zonas delimitadas con otros Estados, contra cualquier intrusión, invasión o cualquier otra alteración del orden público, protegiendo especialmente la integridad física de los habitantes de estos pueblos o comunidades.

Capítulo III

De la Demarcación de las Tierras Indígenas.

De la demarcación de tierras indígenas.

Artículo 23. El Estado Libre y Soberano de México, garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la demarcación y titulación de sus tierras, cuando así se requiera, esto se hará conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a los principios establecidos en esta Ley y conforme al procedimiento establecido en la ley especial que rige la materia. En el proceso de demarcación, deberá tomarse en cuenta las realidades etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponimia indígena, las cuales deberán estar reflejadas en los expedientes de demarcación.



De los desplazados.

Artículo 24. Los pueblos y comunidades indígenas que hayan sido desplazados de sus tierras y se hayan visto obligados a ocupar otras, tienen derecho a la demarcación y titulación de las tierras que actualmente ocupan.

De los títulos anteriores.

Artículo 25. Los pueblos y comunidades indígenas que cuenten con documentos definitivos o provisionales, que acrediten su propiedad o posesión colectiva sobre sus tierras, otorgados sobre la base de diferentes dispositivos de la legislación agraria o según el derecho común, serán incluidas en el proceso de demarcación y titulación de conformidad con la Ley que rige la materia y con la presente Ley.

También deben incluirse como parte de las tierras indígenas, aquellas a las que los pueblos indígenas han tenido acceso tradicionalmente, aunque no tuviesen títulos sobre ellas, y las que necesiten para desarrollar y garantizar sus formas de vida.

De la inafectabilidad de las tierras indígenas.

Artículo 26. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas en ningún caso pueden ser calificadas como tierras baldías, ociosas o incultas para los efectos de su afectación y adjudicación a terceros en el marco de la legislación agraria nacional. Tampoco pueden ser afectadas las aguas utilizadas por los pueblos y comunidades indígenas.

Del uso y la sucesión de tierras indígenas

Artículo 27. Los pueblos y comunidades indígenas determinarán de común acuerdo según sus usos y costumbres, los derechos de uso y sucesión de sus tierras. Las controversias que puedan surgir al respecto serán resueltas en base a su propio derecho y a través de sus instancias de justicia.



De la prohibición de uso de tierras indígenas por terceros

Artículo 28. El uso, goce y administración de las tierras indígenas corresponde exclusivamente a los pueblos y comunidades indígenas. Las tierras indígenas solo podrán ser arrendadas, dadas en comodato, cedidas en uso, goce o administración de terceros al Estado, mediante documento público y cuando así lo decidan dichos pueblos y comunidades por tratarse de casos de interés social o utilidad pública.

De los títulos de propiedad colectiva.

Artículo 29. La propiedad colectiva de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas podrá ser de carácter comunitario o intercomunitario, multiétnico o no, según las condiciones, características y exigencias de cada pueblo o comunidad indígena.

Del registro de los títulos de propiedad

Artículo 30. Los títulos de propiedad colectiva de las tierras otorgados a los pueblos y comunidades indígenas conforme a la ley especial, deberán ser registrados ante la oficina municipal de catastro y ante la oficina de registro respectivo. En todo caso, el registro de estos títulos estará exento del pago de impuestos o tasas de cualquier índole.

La improcedencia de ejidos en tierras indígenas.

Artículo 31. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas no podrán constituirse en ejidos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos y comunidades indígenas ubicadas en un determinado municipio que hayan sido afectadas como ejidos, deberán ser desafectadas y excluidas de los respectivos planes de desarrollo urbano local.



Capítulo IV

Del Ambiente y Recursos Naturales

Del derecho a un ambiente sano

Artículo 32. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, según lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

De la prohibición de sustancias tóxicas y peligrosas.

Artículo 33. Las tierras indígenas no podrán ser utilizadas para la disposición de desechos o para el almacenamiento o destrucción de sustancias tóxicas y peligrosas provenientes de procesos industriales y no industriales, así como de ninguna otra índole.

De la corresponsabilidad entre el Estado y los Pueblos Indígenas.

Artículo 34. El Estado Libre y Soberano de México, en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, garantizará y velará por la conservación e integridad de las tierras indígenas, la riqueza de la biodiversidad, el manejo adecuado de los recursos genéticos, la preservación de las cuencas y la armonía del paisaje, para lo cual adoptará las medidas necesarias de protección integral y manejo sostenible de las mismas, tomando en cuenta los criterios y conocimientos tradicionales de manejo ambiental de los pueblos y comunidades indígenas.

De los atractivos turísticos.

Artículo 35. El Estado Libre y Soberano de México, garantizará a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a participar en el control y aprovechamiento de los atractivos turísticos ubicados en sus tierras.



De la educación ambiental

Artículo 36. El Estado libre y Soberano de México, en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, promoverá y desarrollará programas de educación ambiental, cuyo fin sea el diseño e implementación de estrategias de manejo sustentable de los recursos naturales, según los criterios técnicos adecuados y en concordancia con los conocimientos indígenas de manejo y conservación ambiental.

CAPÍTULO V

Del Aprovechamiento de los Recursos Naturales y de los

Proyectos de Desarrollo en Tierras Indígenas.

De los recursos naturales existentes en las tierras indígenas.

Artículo 37. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a la utilización sostenible y a la co-administración y conservación de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras.

Los recursos naturales como las aguas, recursos forestales, flora y fauna y en general, todos los recursos con excepción de aquellos cuya propiedad se reserva el Estado, serán aprovechados por los propios pueblos o comunidades indígenas, siempre preservando el medio ambiente y la biodiversidad.

Explotación Minera o de Yacimientos en Tierras Indígenas

Artículo 38. La exploración y explotación de los yacimientos mineros y de hidrocarburos dentro de tierras indígenas, deberá contar con el consentimiento previo, informado y libremente expresado por los pueblos y comunidades indígenas, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley. En la ejecución de estas actividades deberán establecerse las



medidas necesarias para minimizar su impacto sociocultural y ambiental sobre los pueblos y comunidades indígenas y sustierras.

Del Estudio de impacto ambiental y sociocultural

Artículo 39. Todo proyecto de desarrollo público o privado en tierras indígenas, deberá contar, previo a su ejecución, con un estudio de impacto ambiental y sociocultural.

Los pueblos y comunidades indígenas serán consultados en la etapa de elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, previo a su aprobación, pudiendo objetarlos. Las observaciones serán incorporadas en la reformulación del estudio, previo al análisis respectivo. Para garantizar este derecho, los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar asistencia técnica y jurídica al **Órgano Autónomo**, a las organizaciones indígenas o a cualquier órgano del Estado o privado con competencia en la materia.

Del saneamiento de las tierras indígenas

Artículo 40. Los pasivos ambientales que generen las actividades de aprovechamiento de recursos naturales y los proyectos de desarrollo en tierras indígenas, serán responsabilidad de los promotores de la actividad y tendrán la obligación de implementar las medidas de saneamiento ambiental.

De los beneficios y las indemnizaciones

Artículo 41. Los pueblos y comunidades indígenas afectados por las actividades de aprovechamiento de recursos naturales y proyectos de desarrollo de carácter público o privados en sus tierras, tendrán derecho a percibir un beneficio de por lo menos el **5%** del valor de las ganancias obtenidas por la actividad, para atender las necesidades y prioridades de desarrollo de la comunidad o comunidades indígenas afectadas. Asimismo, deberán establecerse beneficios en las áreas de salud, educación, vivienda, entre otras y las indemnizaciones correspondientes a las personas, pueblos o comunidades indígenas directa o indirectamente afectados.



Del incumplimiento de las condiciones de explotación y aprovechamiento.

Artículo 42. En caso de incumplimiento de las condiciones de consulta y participación en la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales y en la ejecución de los proyectos de desarrollo, o de ocurrir cambios no previstos en el diseño del proyecto original conocido, los pueblos indígenas, sus comunidades u organizaciones, podrán ejercer las acciones judiciales y administrativas que correspondan para garantizar el respeto de este derecho, y el Estado Libre y Soberano de México, estará en la obligación de revocar las respectivas concesiones y de suspender la ejecución de los proyectos, quedando a salvo la responsabilidad del Estado.

Capítulo VI

De las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial

Régimen de Administración Especial.

Artículo 43. El Estado Libre y Soberano de México, respetará las formas tradicionales de vida y economía de los pueblos indígenas desarrolladas tradicionalmente en los parques nacionales y otras Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, y les garantizará plenamente el derecho a utilizar y manejar en forma sostenible los recursos naturales allí existentes.

Será obligación de los pueblos y comunidades indígenas ubicados dentro de los parques nacionales y otras Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, la conservación de la diversidad biológica, del medio ambiente y de los recursos naturales allí existentes.

De las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial en tierras indígenas.

Artículo 44. Las tierras indígenas sobre las cuales se hayan establecido Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, serán incluidas en el proceso de demarcación y titulación de las tierras conforme a la presente Ley y la ley que rige la materia.



De los planes de ordenamiento y reglamento de uso de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial

Artículo 45. Los pueblos y comunidades indígenas participarán en la elaboración de los planes de ordenamiento y reglamentos de uso de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial que se encuentren en tierras indígenas, en los cuales se respetará la unidad territorial y las actividades tradicionales de estos últimos. El Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos que garanticen la participación efectiva prevista en esta disposición.

De la participación en la administración de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial

Artículo 46. El Estado garantizará la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la administración de las Áreas Bajo Régimen de Administración especial que se encuentren en sus tierras. En particular, los pueblos y comunidades indígenas participarán directamente en la planificación y ejecución de los programas de conservación y uso de los recursos naturales existentes en dichas áreas.

De la creación de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial

Artículo 47. La creación de nuevas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial en tierras indígenas se podrá realizar previa consulta y aprobación de los pueblos y comunidades indígenas que allí habitan, conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.

CAPÍTULO VII

De los Desplazados

De los desplazamientos o traslados de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 48. Los pueblos y comunidades indígenas no podrán ser desplazados de sus tierras. Cuando por razones de utilidad pública o interés social deban ser trasladados de sus tierras



a otras, se requerirá el consentimiento del pueblo o comunidad indígena respectivo según el procedimiento establecido en la presente Ley, salvo que se trate de catástrofes naturales o emergencia de salud, casos en los cuales procede el traslado y reubicación a lugares seguros. En todo caso, los pueblos y comunidades indígenas afectados serán reubicados preferentemente en áreas cercanas a sus tierras y, cuando esto no fuere posible, serán reubicados en otras áreas de similares condiciones a las de origen, que atiendan a las condiciones, necesidades y expectativas y siempre mediante procedimientos que garanticen el respeto de los derechos colectivos e individuales de los afectados. El Estado garantizará los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus nuevas tierras. Queda a salvo el derecho de los pueblos y comunidades indígenas afectados de regresar a sus tierras de origen una vez que hayan cesado las causas que dieron origen a su traslado.

De las invasiones de tierras indígenas

Artículo 49. En casos de invasión de tierras indígenas, los pueblos y comunidades indígenas afectados tienen derecho a la restitución inmediata de sus tierras, mediante un procedimiento expedito ante del **Órgano Autónomo**, sin menoscabo de otras acciones administrativas y judiciales a que hubiere lugar.

TITULO II

DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Capítulo I

De los Derechos Civiles

Del servicio militar.

Artículo 50. Los indígenas que presten el servicio militar serán protegidos en sus derechos políticos, económicos, culturales y sociales, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales y la presente Ley.



El Estado concederá a los indígenas en edad de cumplir el servicio militar, la posibilidad de ejercer ese deber preferiblemente en áreas cercanas a sus tierras. Así mismo, preverá programas de capacitación y estudio que permitan la superación personal y profesional al indígena, durante y después de cumplido su servicio militar.

De la identificación de los indígenas

Artículo 51. Todo indígena tiene derecho a la identificación a través del otorgamiento de los medios o documentos de identificación idóneos, desde el momento de su nacimiento, los cuales serán expedidos por el órgano competente en la materia, mediante un procedimiento adecuado la organización social, política y económica, culturas, usos y costumbres, idiomas y ubicación geográfica de los pueblos y comunidades indígenas. En todo caso, dicho procedimiento se regirá por los principios de gratuidad, transparencia, igualdad, celeridad, no discriminación y eficacia. La Ley que regule la materia de identificación establecerá el procedimiento a que se contrae el presente Artículo. Se garantiza a los indígenas el pleno derecho a inscribir en el registro civil sus nombres y apellidos de origen indígena.

Capítulo II

De los Derechos Políticos

De la participación política y el protagonismo.

Artículo 52. El Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la participación y el protagonismo político en ejercicio de la soberanía como parte del pueblo mexicano, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como parte del ejercicio de este derecho, el Estado garantizará la representación indígena en los cargos de elección popular, en Congreso de la Unión, en los cuerpos legislativos de los Estados y Municipios con presencia ancestral y tradicional de comunidades indígenas.



De igual manera se garantiza la participación de los pueblos y comunidades indígenas en los organismos de planificación de políticas públicas o en cualquier otra instancia de participación, tanto a nivel municipal como estatal, de conformidad con las leyes respectivas.

De los representantes en el Congreso de la Unión.

Artículo 53. En el Congreso de la Unión, los pueblos indígenas serán representados por **los** diputados conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales serán elegidos de acuerdo a la ley electoral.

De los Representantes indígenas ante los Órganos Legislativos Estatales y los Municipales.

Artículo 54. En el Estado de México y municipios con población indígena, también se elegirán representantes indígenas para los Órganos Legislativos y Órganos Municipales de la entidad, conforme **al procedimiento establecido en la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y la ley electoral.** A los efectos de determinar los Estados y municipios con presencia ancestral y tradicional de pueblos y comunidades indígenas se tomarán como referencia los datos del último censo oficial de población indígena de México, las fuentes etno-históricas y demás datos estadísticos que otras fuentes de información puedan proporcionar. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas podrán postular y solicitar el registro de candidaturas independientes de personas pertenecientes a dichos pueblos;

De las normas sobre participación política indígena.

Artículo 55. Las normas, procedimientos y en general todo lo relacionado con el ejercicio del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la participación política, serán desarrolladas en las leyes que regulen la materia, tomando en cuenta sus usos y costumbres y conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Defensoría del Pueblo y la defensa de los derechos indígenas.

Artículo 56. Corresponde al **Órgano Autónomo**, velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución Política



de los Estados Unidos Mexicanos y promover su defensa integral y ejercer las acciones administrativas y judiciales necesarias para lograr su garantía y efectiva protección.

De la promoción del ejercicio de los derechos y su participación.

Artículo 57. En el ejercicio de sus funciones, el **Órgano Autónomo**, realizará actividades de promoción de los derechos indígenas e incentivará la participación de los pueblos y comunidades indígenas.

CAPÍTULO III

De las Organizaciones de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo 58. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de conservar, desarrollar y actualizar su organización social y política propia, sea esta comunal, local o regional, basada en sus tradiciones ancestrales, la cual será reconocida por el Gobierno del Estado y el resto de la sociedad.

No se exigirá a los pueblos y comunidades indígenas la adopción de formas organizativas ajenas a sus tradiciones como requisito para el ejercicio de sus derechos.

De las organizaciones indígenas

Artículo 59. Los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, tienen el derecho de asociarse libremente en organizaciones de representación y defensa de sus derechos e intereses, para promover el ejercicio pleno de estos derechos y las relaciones justas, equitativas y eficientes entre los pueblos y comunidades indígenas y el resto de la sociedad. Las organizaciones indígenas legítimas serán reconocidas y podrán actuar como instancia de intermediación en las relaciones de dichos pueblos y comunidades con los órganos del Poder Público del Estado. El Gobierno del Estado facilitará el ejercicio de este derecho.



Las organizaciones indígenas podrán representar a uno o varios pueblos o comunidades indígenas y corresponderá a estos pueblos y comunidades determinar la representatividad de estas organizaciones.

De las instancias de concertación.

Artículo 60. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo anterior, los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones tendrán derecho a establecer un **Órgano Autónomo**, con representación Estatal, que actuará como una instancia de concertación, con carácter permanente, orientada a establecer el diálogo con los órganos del poder público y garantizar la participación en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, planes y programas y en general, de todos aquellos asuntos comunes a todos los pueblos y comunidades indígenas.

El Gobierno del Estado garantizará el funcionamiento de estas instancias y reconocerá y aceptará las decisiones que de allí emanen como expresión de la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas.

El funcionamiento y conformación se determinará en el reglamento correspondiente, de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas involucrados.

De la exención de impuestos en los Registros.

Artículo 61. Los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones estarán exentos del pago impuesto, tasa o arancel relativo a derechos de registro o de notaría de sus documentos, así como de las certificaciones de los documentos otorgados por los mismos. Quedan también exentas de los pagos antes señalados, las micro empresas y las pequeñas empresas de carácter comunitario pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas.



CAPÍTULO IV

De los Municipios Indígenas

De los municipios indígenas.

Artículo 62. Las leyes que se dicten para desarrollar los principios constitucionales relativos al poder público municipal, deberán establecer los diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de los municipios indígenas, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos, las cuales deberán considerar como condiciones de creación de estos municipios, la organización social, política y económica, culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como sus tierras y en general, las formas de vida de estos pueblos y comunidades indígenas. En todo caso, la forma de gobierno y de administración de estos municipios responderá a las características socioculturales, políticas, económicas y al derecho y costumbres propias de estos pueblos y comunidades. De igual manera, en los municipios con población indígena, se garantizará la participación política de los pueblos y comunidades indígenas allí existentes.

De las autoridades municipales.

Artículo 63. Los requisitos de postulación, así como el procedimiento de elección de las autoridades municipales indígenas **se regirá por la ley especial que a tal efecto se dicte y por las normas reglamentarias que dicte el Instituto Electoral del Estado de México,** basadas en los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.



TITULO IV

DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

CAPÍTULO I

De la Educación Propia y el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe

Del derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 64. Los pueblos y comunidades indígenas asentadas en territorios regionales, municipales o por localidades en el Estado de México, **tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social, cultural y educación propia, como proceso de socialización y a un régimen educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus prácticas socioculturales, valores, tradiciones, necesidades y aspiraciones** y gozan del derecho social a vivir dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas distintas y se garantiza su propio desarrollo contra toda forma de discriminación.

El Estado de México garantizará a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a su educación propia, como proceso de socialización y a un régimen educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus prácticas socioculturales, valores, tradiciones, necesidades y aspiraciones.

Educación propia de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 65. La educación propia de los pueblos y comunidades indígenas está basada en los sistemas de socialización de cada pueblo o comunidad, mediante los cuales se transmiten y recrean los elementos constitutivos de su cultura.

Del Régimen de Educación Intercultural Bilingüe.

Artículo 66. La educación intercultural bilingüe es un régimen educativo específico que se implementará en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para los pueblos indígenas. Está fundamentado en la cultura, valores, normas, idiomas, tradiciones, realidad



propia de cada pueblo y comunidad y en la enseñanza del español, los aportes científicos, tecnológicos y humanísticos procedentes del acervo cultural de la nación mexicana y de la humanidad.

Los planes de estudio deberán considerar un régimen de equivalencias con todos los niveles y modalidades del sistema educativo estatal.

De las obligaciones del Gobierno del Estado de México.

Artículo 67. A los efectos de la implementación del régimen de educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas, los órganos competentes del Estado y **el Órgano Autónomo**, con participación de los pueblos y comunidades indígenas, desarrollarán:

1. Los planes y programas educativos para cada pueblo o comunidad indígena basados en sus patrones socioculturales.
2. La producción y distribución de materiales didácticos y de lectura elaborados en los idiomas indígenas.
3. La estandarización de la escritura de la lengua de cada pueblo indígena.
4. El ajuste del calendario escolar a los ritmos de vida y tiempos propios de cada pueblo o comunidad indígena, sin perjuicio del cumplimiento de los programas respectivos.
5. La formación integral de docentes indígenas expertos en educación intercultural bilingüe.
6. Revitalización sistemática de las lenguas indígenas que se creían extinguidas o que están en riesgo de extinción mediante la creación de nichos lingüísticos u otros mecanismos idóneos.
7. La adecuación de la infraestructura de los planteles educativos a las condiciones ecológicas, las exigencias pedagógicas y los diseños arquitectónicos de los pueblos y comunidades indígenas.
8. La creación de bibliotecas escolares y de aulas que incluyan materiales relacionados con los pueblos indígenas de la región y del país.



9. Las demás actividades que se consideren convenientes para la educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas.

Principio de gratuidad de la educación

Artículo 68. La educación intercultural bilingüe es gratuita en todos sus niveles y modalidades y es obligación del Gobierno del Estado la creación y sostenimiento de instituciones y servicios que garanticen este deber. Para este efecto el Estado de México, garantizará este principio.

Enseñanza del idioma indígena y del español

Artículo 69. En el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe el idioma indígena se enseña y emplea a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los pueblos o comunidades indígenas en donde solo se hable la lengua indígena, la enseñanza del idioma español será paulatina y teniendo en cuenta criterios pedagógicos adecuados. Las dependencias con competencia en educación establecerán alternativas para la enseñanza de las lenguas indígenas en el sistema de educación nacional, incluyendo a las universidades públicas y privadas del Estado.

De las instituciones educativas en comunidades indígenas.

Artículo 70. Las instituciones educativas presentes en las comunidades indígenas o cuya matrícula esté compuesta en un 40% o más de estudiantes indígenas, deben adoptar el régimen de educación intercultural bilingüe, además de cumplir con las normas legales vigentes que regulen la materia educativa y la presente Ley.

De los docentes de Educación Intercultural Bilingüe

Artículo 71. En el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe, los docentes deben ser hablantes de la lengua o lenguas indígenas de los educandos, conocedores de su cultura y formados como educadores interculturales bilingües. La designación de estos docentes será previa postulación de los pueblos y comunidades indígenas interesados, y estos docentes preferiblemente deberán ser pertenecientes al mismo pueblo o comunidad de los educandos.



El Gobierno del Estado proveerá los medios y facilidades para la formación de los docentes en educación intercultural bilingüe, quienes tendrán el mismo nivel que el de los demás docentes del sistema educativo nacional.

De la población indígena con asentamiento disperso.

Artículo 72. Para el funcionamiento del régimen de Educación Intercultural Bilingüe no se obligará, ni se inducirá a la población indígena con patrón de asentamiento disperso a concentrarse alrededor de los centros educativos. El Gobierno del Estado está obligado a proveer de los medios adecuados para el transporte de los educandos desde y hasta los centros educativos respectivos. En los casos de comunidades indígenas apartadas, la matrícula de estudiantes atenderá a la población de estas comunidades, y el Gobierno del Estado deberá establecer los medios adecuados para garantizarle el acceso a la educación.

De la Alfabetización intercultural bilingüe.

Artículo 73. El Estado de México, a través de la dependencia respectiva, en coordinación con instituciones federales y estatales y con la participación del **Corresponde al Órgano Autónomo**,, diseñará y ejecutará programas de alfabetización intercultural bilingüe para indígenas y deberá proveer los recursos necesarios para tal fin.

Programas de estudio.

Artículo 74. En el régimen de Educación Intercultural Bilingüe los programas de estudio incluirán todos los elementos propios o constitutivos de la cultura, la historia y la realidad de los pueblos y comunidades indígenas. También se hará énfasis en el estudio, la comprensión y la práctica de los derechos indígenas. Estas áreas se desarrollarán sin perjuicio del estudio de las materias que sean de obligatorio conocimiento de acuerdo con la ley.

Convenios con instituciones de educación superior.

Artículo 75. El Gobierno del Estado en coordinación con el **Órgano Autónomo**, promoverá, con los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, la celebración de convenios con las universidades, institutos tecnológicos y demás instituciones educativas nacionales y



estatales para lograr beneficios que le permitan a los indígenas el acceso a la educación superior.

Artes, Juegos y deporte indígena.

Artículo 76. En los planes y programas de estudio de todos los niveles y modalidades de la educación intercultural bilingüe se fomentarán, incentivarán y revalorizarán las expresiones artísticas, artesanales, lúdicas y deportivas propias de los pueblos y comunidades indígenas, así como otras disciplinas afines.

CAPITULO II

De la Cultura

Del Derecho a la Cultura Propia

Artículo 77. El Gobierno del Estado reconoce y garantiza el derecho que cada pueblo indígena tiene al ejercicio de su cultura propia, expresando, practicando y desarrollando libremente sus modos de vida y manifestaciones culturales, fortaleciendo su identidad propia, promoviendo la vitalidad lingüística de su lengua, preservando su propia visión del mundo “cosmovisión”, profesando su propia religión, creencias y cultos ancestrales, así como conservando y protegiendo sus lugares sagrados y de culto.

Las culturas indígenas como culturas originarias.

Artículo 78. Las culturas tradicionales indígenas son raíces de la identidad mexicana. El Gobierno del Estado protegerá y promoverá las diferentes expresiones culturales de los pueblos indígenas, incluyendo sus artes, literatura, música, danzas, arte culinaria, armas tradicionales y todos los demás usos y costumbres que les son propios.

De la preservación, fortalecimiento y difusión de las culturas.

Artículo 79. A fin de preservar, fortalecer y promover en el ámbito estatal, nacional e internacional las culturas de los pueblos indígenas, el Gobierno del Estado creará los espacios para el desarrollo artístico, fomentará la investigación y el intercambio entre los creadores o



artistas indígenas y el resto de la sociedad mexicana e impulsará la difusión y promoción de estas culturas a nivel estatal, nacional e internacional.

De la alteración o movilización de bienes materiales del patrimonio cultural indígena.

Artículo 80. Los bienes materiales pertenecientes al patrimonio cultural indígena sólo podrán ser alterados o movilizadas fuera de sus tierras, previo consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Cuando estos bienes materiales sean alterados o trasladados fuera de tierras indígenas en violación de la ley, el Gobierno del Estado velará por la restitución del bien y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El Estado cooperará con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación, restauración y protección de los bienes materiales del patrimonio cultural indígena, de conformidad con la ley que rija la materia.

Del derecho al uso de vestidos, atuendos y adornos tradicionales.

Artículo 81. Los indígenas mexiquenses tienen derecho de usar sus vestidos, atuendos y adornos tradicionales en todos los ámbitos de la vida estatal, en cualquier circunstancia y en todo el territorio del Estado y de la República Mexicana.

De los desarrollos habitacionales.

Artículo 82. El Gobierno del Estado conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, elaborará y ejecutará los planes de desarrollo habitacional indígena en sus tierras, a fin de preservar los elementos de diseño, distribución del espacio y materiales de construcción de la vivienda indígena, considerándola como parte de su patrimonio cultural.

De la identidad cultural y el libre desarrollo de la personalidad.

Artículo 83. Los indígenas tienen derecho al fortalecimiento de su identidad cultural, desarrollo de su autoestima y libre desenvolvimiento de su personalidad en el marco de sus propios patrones culturales. El Gobierno del Estado apoyará los procesos de revitalización de su memoria histórica y cultural como pueblo.



Del patrimonio arqueológico e histórico de los pueblos indígenas.

Artículo 84. El Gobierno del Estado, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, protegerá y conservará los sitios arqueológicos ubicados en sus tierras y fomentará su conocimiento como patrimonio cultural de los pueblos indígenas y de la Nación.

CAPÍTULO III

De las lenguas Indígenas

Las lenguas indígenas como lenguas oficiales

Artículo 85. Las Lenguas indígenas son de uso oficial para los pueblos indígenas y constituyen patrimonio cultural inmaterial de la Nación y de la humanidad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.

Ámbito de aplicación de las lenguas indígenas

Artículo 86. El Gobierno del Estado garantizará el uso de las lenguas indígenas en:

- 1.** La traducción de los principales textos legislativos y cualquier otro documento oficial que afecten a los pueblos indígenas, especialmente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y la presente Ley.
- 2.** La presencia de intérpretes bilingües en los procesos judiciales y administrativos en los cuales sean parte ciudadanos indígenas.
- 3.** El uso en actos públicos y oficiales de los estados con población indígena.
- 4.** La utilización y el registro de la toponimia usada por los pueblos y comunidades indígenas en la cartografía y los documentos del Estado de México.



5. La publicación de textos escolares y otros materiales didácticos para fortalecer los diferentes niveles del régimen de educación intercultural bilingüe.
6. La edición y publicación de materiales bibliográficos y audiovisuales en cada una de las lenguas indígenas dirigidos al conocimiento, esparcimiento y disfrute de los indígenas.
7. En los procedimientos de información y consulta a los pueblos y comunidades indígenas, incluida la traducción y reproducción de textos y otros documentos que ahí se empleen.
8. En los servicios y programas del sistema estatal de salud dirigidos a los pueblos indígenas.
9. Todos los casos en los que se considere necesario.

De los medios de comunicación social indígena.

Artículo 87. El Gobierno del Estado, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, tomará las medidas efectivas necesarias para propiciar las transmisiones y publicaciones en idiomas indígenas, por los diferentes medios de comunicación social en las regiones con presencia indígena, y apoyará la creación de medios de comunicación social indígenas, los cuales podrán estar exentos del pago de los impuestos municipales correspondientes.

De la Espiritualidad

Artículo 88. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libertad de religión y de culto que incluye el derecho a practicar sus ritos y cultos ancestrales. La espiritualidad, las creencias de los pueblos y comunidades indígenas, como componentes fundamentales de su cosmovisión y reguladores de sus prácticas ancestrales, serán reconocidas por el Gobierno del Estado y respetadas en todo su territorio.

De la consulta y aprobación.

Artículo 89. Las instituciones religiosas, que actúen o pretendan actuar en los pueblos y comunidades indígenas, deberán cumplir con el proceso de información y consulta establecido en la presente Ley y en la ley de General de Consulta, en ningún caso podrán



imponer sus cultos o disciplinas religiosas a estos pueblos o comunidades, ni negar sus prácticas y creencias religiosas.

De la protección de los lugares sagrados y de culto.

Artículo 90. El Estado reconoce la importancia y protege los lugares sagrados y deculto de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas determinarán aquellos lugares que, por su significado cultural, espiritual e histórico, no pueden ser objeto de prácticas de ninguna índole que alteren negativamente los referidos lugares.

De la formación religiosa y espiritual de los niños, niñas y adolescentes indígenas

Artículo 91. La decisión sobre la formación religiosa y espiritual de los niños, niñas y adolescentes indígenas es responsabilidad de sus padres, familiares y otros miembros de sus respectivos pueblos o comunidades, de conformidad con sus tradiciones, usos y costumbres.

CAPITULO IV

De los Conocimientos y la Propiedad Intelectual Colectiva de los Pueblos Indígenas

Del derecho a la propiedad colectiva

Artículo 92. El Gobierno del Estado reconoce el valor y garantiza el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos, tecnologías, innovaciones y prácticas propias de los pueblos y comunidades indígenas detentados por individuos, gruposo comunidades de uno o más pueblos indígenas. Este derecho será imprescriptible, inembargable y transgeneracional. El derecho existe y se reconoce por la simple práctica cultural. No se requiere de declaración previa, reconocimiento explícito, ni registro oficial, por lo tanto, puede incluir aquellas prácticas que en el futuro adquieran tal estatus.



Del uso de los recursos genéticos

Artículo 93. Los pueblos y comunidades indígenas podrán, de acuerdo a sus usos y costumbres y en el marco de las normas y leyes de la República Mexicana y del Gobierno del Estado, proteger, desarrollar y usar sosteniblemente los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos, los cuales serán utilizados en beneficio colectivo de un pueblo o de varios pueblos según sea el caso.

Del carácter colectivo de la propiedad intelectual indígena

Artículo 94. El Gobierno del Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a controlar y proteger su patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico y científico incluyendo sus recursos genéticos, semillas, medicina, conocimientos sobre la vida animal y vegetal, los diseños, procedimientos originales, y en general a todos los conocimientos, de acuerdo a sus usos y costumbres.

De los mecanismos de Protección y Defensa

Artículo 95. Corresponderá al Gobierno del Estado conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, establecer los mecanismos para la protección y defensa de los conocimientos, tecnologías, innovaciones y prácticas, de acuerdo a sus usos y costumbres. A tales fines, garantizará la creación y fortalecimiento de capacidades institucionales para identificar la apropiación de los conocimientos, tecnologías, innovaciones y prácticas indígenas.

De las acciones legales

Artículo 96. Los pueblos y comunidades indígenas podrán ejercer directamente o por intermedio de las organizaciones indígenas las acciones civiles, penales y administrativas necesarias, a fin de obtener las reparaciones a que haya lugar por el aprovechamiento ilícito de sus conocimientos, tecnologías, innovaciones y prácticas en violación de sus derechos de propiedad colectiva.



El Gobierno del Estado, a través de los órganos competentes y a solicitud de los pueblos y comunidades indígenas, apoyará jurídica y técnicamente a estos pueblos y comunidades en el ejercicio de dichas acciones, en el ámbito Estatal y Nacional e Internacional en caso necesario

TITULO V

De los Derechos Sociales

CAPÍTULO I

De la Familia en los Pueblos Indígenas

Del derecho a la familia acorde a la cultura.

Artículo 97. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de constituir sus familias atendiendo a los diferentes sistemas de parentesco y matrimonio correspondiente a su cultura. La familia y el hogar indígena, y sus diversas modalidades socio-culturales están protegidos por esta Ley.

De la protección a la familia indígena

Artículo 98. Las familias indígenas tienen derecho al respeto de su vida privada, honor e intimidad, conforme a sus usos y costumbres.

De la protección integral al indígena.

Artículo 99. El Gobierno del Estado velará por la protección integral del indígena, especialmente de los niños, niñas y adolescentes contra el fanatismo político y religioso, la explotación económica, la violencia física o moral, el abuso sexual, la mala praxis médica y paramédica, la experimentación humana con pretexto científico, la discriminación de cualquier índole y contra cualquier actividad que viole lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes.

De los ancianos y ancianas indígenas.



Artículo 100. El Gobierno del Estado en coordinación con los pueblos indígenas protegerá a los ancianos y ancianas indígenas, por constituir el eje fundamental de la sociedad y cultura indígena e instrumentará todo lo necesario para garantizarles condiciones de vida digna, conforme a sus usos y costumbres. En tal sentido, aquellos indígenas mayores de **52** años gozaran de una pensión de vejez, a cargo del instituto encargado de la seguridad social del Estado.

De las mujeres indígenas.

Artículo 101. Las mujeres indígenas son portadoras de los valores esenciales de la cultura de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el Gobierno del Estado a través de sus órganos constituidos conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, garantizará las condiciones requeridas para su desarrollo integral propiciando la participación plena de las mujeres indígenas en la vida política, económica, social y cultural Estatal.

De los programas para niños, niñas y adolescentes indígenas

Artículo 102. El Gobierno del Estado en coordinación con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, promoverá, desarrollará y ejecutará programas que eleven su calidad de vida, especialmente en cuanto a su salud, educación, alimentación y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas, así como campañas informativas, educativas y de prevención en estas áreas.

CAPÍTULO II

De la Salud y la Medicina Indígena

derecho a la medicina indígena.

Artículo 103. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso de su medicina tradicional y de sus prácticas terapéuticas para la protección, el fomento, la prevención y la restitución de su salud integral. Este reconocimiento no limita el derecho de acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los demás servicios y programas del Sistema Estatal de



Salud, los cuales deberán prestarse en un plano de igualdad de oportunidades, equidad y calidad de servicio respecto al resto de la población estatal.

La medicina tradicional indígena comprende el conjunto de ideas, creencias, mitos y procedimientos, relativo a las enfermedades físicas, mentales o desequilibrios sociales en un pueblo determinado. Este conjunto de conocimientos explica la causa y los procedimientos de diagnóstico, pronóstico, curación, prevención de las enfermedades y promoción de la salud. Estos se transmiten por tradición y oralmente de generación en generación dentro de los pueblos indígenas.

De la incorporación de la medicina tradicional indígena al Sistema Estatal de Salud.

Artículo 104. El Gobierno del Estado, a través de los organismos competentes y en coordinación con los pueblos indígenas, creará las condiciones necesarias para la incorporación de la medicina tradicional y las prácticas terapéuticas de los pueblos indígenas, a los servicios del Sistema Estatal de Salud dirigidos a los pueblos indígenas. En este sentido, los indígenas especialistas en su medicina tradicional podrán utilizar sus conocimientos y procedimientos con fines preventivos y curativos, siempre que cuenten con el consentimiento de los pacientes, indígenas o no indígenas, y se realicen en los lugares apropiados. Estas prácticas serán respetadas por todas las instituciones sanitarias del Estado.

De la participación indígena en los programas y servicios de salud.

Artículo 105. Los programas y servicios se organizarán y planificarán con la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas y la atención integral en salud se adecuará a las condiciones geográficas, económicas, sociales y culturales y a los usos y costumbres de los mismos.

Las lenguas indígenas en la atención en salud.

Artículo 106. Los servicios del Sistema Nacional de Salud dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas incorporarán las lenguas indígenas en la atención en salud, mediante la presencia de personal e intérpretes que faciliten la comunicación con las personas, las familias y las comunidades indígenas.



De la capacitación del personal de salud.

Artículo 107. El Gobierno del Estado velará por la adecuada capacitación del personal de salud para la atención de los pueblos y comunidades indígenas y la valoración de su cosmovisión, conocimientos y prácticas tradicionales. Además, promoverá que en los programas de los institutos de formación de profesionales de la salud se incorporen programas relacionados con la medicina tradicional indígena y la situación de la salud en los pueblos y comunidades indígenas.

De la definición y coordinación de las políticas de salud.

Artículo 108. El organismo a cargo del Sistema Estatal de Salud conjuntamente con el **Órgano Autónomo**, y los pueblos y comunidades indígenas, definirá las políticas de salud destinadas a estos pueblos y comunidades y, coordinará la ejecución de los planes y programas de salud Estatal con los gobiernos municipales con población indígena. En todo caso, se favorecerá la transferencia de la administración de los servicios de salud a los propios pueblos y comunidades indígenas, mediante convenios o cualquier otro acto administrativo que se dicte a tales fines.

Del nombramiento de funcionarios regionales.

Artículo 109. Las Direcciones de Asuntos Indígenas y de Salud, de los municipios con población indígena designarán en coordinación con el **Órgano Autónomo**, y las organizaciones indígenas municipales, un funcionario o grupo de funcionarios para que aseguren y garanticen la ejecución de las políticas generales para la prestación de servicios de salud en las comunidades indígenas así como su coordinación.



CAPÍTULO III

Del Empleo y los Derechos Laborales

Del ejercicio pleno de los derechos laborales.

Artículo 110. El Gobierno del Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras indígenas, el goce pleno de todos los derechos establecidos en la legislación laboral nacional y en el derecho laboral internacional, evitando en todo caso cualquier tipo de discriminación.

Del derecho al trabajo de los indígenas

Artículo 111. Los indígenas tienen derecho al trabajo y gozan en materia laboral, de los mismos beneficios reconocidos en la legislación estatal, nacional e internacional aplicables al resto de los trabajadores.

De la información.

Artículo 112. El Gobierno del Estado establecerá mecanismos idóneos a fin de informar a los trabajadores y trabajadoras indígenas sobre sus derechos laborales.

De las condiciones prohibidas.

Artículo 113. Los trabajadores y trabajadoras indígenas no podrán ser sometidos a condiciones de trabajo peligrosas a su salud, tales como exposiciones a sustancias tóxicas o peligrosas cuando no se cumpla con la legislación y las normas técnicas específicas que existen sobre la materia. De igual manera no laborarán en condiciones denigrantes a su dignidad humana y a su identidad cultural, sujetos a sistemas de contratación coercitiva o cualquier forma de servidumbre incluida la servidumbre por deudas. Se prohíbe cualquier forma de hostigamiento sexual en contra de los trabajadores y trabajadoras indígenas. Se prohíbe la explotación de niños y niñas indígenas en el servicio doméstico, así como en empresas industriales, comerciales o como peones, sin perjuicio de las regulaciones establecidas en las leyes que rigen la materia.



Del contrato de trabajo.

Artículo 114. Los contratos de trabajo entre el trabajador o trabajadora indígena y el patron, deberá hacerse por escrito, de forma privada o autentica, pero en ambos casos constará en idioma castellano y en caso de ser requerido por el trabajador o trabajadora, en el idioma del pueblo indígena al cual pertenezca.

TITULO VI

DE LA ECONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales Del

modelo económico propio.

Artículo 115. El Gobierno del Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir libremente el desarrollo de sus prácticas económicas propias, a ejercer sus actividades productivas tradicionales, a participar en la economía estatal y nacional y a definir su modelo económico en el marco del desarrollo local sustentable.

De las prácticas económicas tradicionales

Artículo 116. Se consideran prácticas económicas tradicionales aquellas realizadas por los pueblos y comunidades indígenas dentro de sus tierras, de acuerdo a sus necesidades y a sus patrones culturales propios, que comprenden sus técnicas y procedimientos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Específicamente, sus formas de cultivo, cría, caza, pesca, elaboración de productos, aprovechamiento de productos forestales con fines alimentarios, farmacológicos y como materia prima para la fabricación de viviendas, embarcaciones, implementos, enseres utilitarios, ornamentales y rituales; así como sus formas tradicionales de intercambio intra e Inter comunitario de bienes y servicios.

Las autoridades del Estado de México respetarán el libre ejercicio de estas prácticas en las tierras de las comunidades indígenas y apoyarán su desarrollo conforme a las necesidades



actuales de los pueblos y comunidades indígenas. La innovación en las prácticas económicas de los pueblos y comunidades indígenas no afecta el carácter tradicional de las mismas.

CAPÍTULO II

Del Desarrollo Económico en las tierras indígenas

De los planes de desarrollo en tierras indígenas.

Artículo 117. Los planes nacionales y regionales de desarrollo y ordenamiento territorial que afecten de cualquier forma las tierras de los pueblos o comunidades indígenas serán elaborados con la participación directa y efectiva de los pueblos y comunidades afectados.

Del financiamiento y ejecución de programas de desarrollo en tierras indígenas

Artículo 118. Los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar ante los organismos competentes del Gobierno del Estado, programas y proyectos de desarrollo para sus tierras, los cuales, una vez aprobados, serán apoyados y financiados por dichas instituciones quienes, a los fines de su ejecución, favorecerán la transferencia de recursos a los pueblos y comunidades indígenas interesados de conformidad con las leyes que rigen la materia.

Del fomento de la economía de los pueblos indígenas

Artículo 119. El Gobierno del Estado, en garantía del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en la economía estatal, fomentará:

1. La creación de Fondos de Desarrollo Socioeconómico para el financiamiento de actividades productivas.
2. La colocación de los productos indígenas en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
3. El establecimiento de mercados y centros de acopios promovidos por los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, a fin de acercar productores y consumidores.
4. El intercambio comercial entre pueblos y comunidades indígenas de otros estados vecinos.



5. Mecanismos y facilidades para el procesamiento, transporte y almacenamiento de productos.
6. Facilidades para la constitución de empresas comunitarias y familiares.
7. La creación de programas crediticios especiales dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, a cargo de las instituciones crediticias del sistema de microfinanciamiento estatal.
8. La capacitación y asistencia técnica para la formulación, ejecución, control y evaluación de sus estrategias y proyectos.
9. La reciprocidad y otras formas de intercambio tradicional.
10. Cualquier otra actividad que permita la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la economía estatal.

De la capacitación y Asistencia Técnica y Financiera.

Artículo 120. El Gobierno del Estado, mediante los órganos competentes, garantizará a los pueblos y comunidades indígenas el acceso a programas especiales de capacitación y asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de sus actividades económicas, tomando en cuenta sus costumbres y tecnologías propias.

De los Sistemas Crediticios.

Artículo 121. El Gobierno del Estado garantizará a las comunidades indígenas el acceso a los sistemas de financiamiento crediticio en condiciones favorables en cuanto a garantías, requisitos, trámites, plazos e intereses y simplificará los requisitos y trámites relativos a la aprobación de los mismos.

De la Actividad Turística.

Artículo 123. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de administrar y desarrollar la actividad turística en todas sus fases dentro de sus tierras, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.



TITULO VII

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO I

De la Jurisdicción Indígena

Del Derecho propio

Artículo 123. El Gobierno del Estado reconoce el Derecho propio de los pueblos indígenas, en virtud de lo cual tienen la potestad de aplicar instancias de justicia dentro de sus tierras por sus autoridades legítimas y que solo afecten a sus integrantes, de acuerdo a su cultura y necesidades sociales, siempre que no sea incompatible con los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados, interculturalmente interpretados.

Del Derecho indígena.

Artículo 124. El Derecho Indígena está conformado por los sistemas de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio y que les permite regular la vida social y política, autogobernarse, organizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno.

De la jurisdicción especial indígena.

Artículo 125. La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo a su propio derecho para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de sus tierras.

La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y, la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de terminación de conflictos. Dichas decisiones



constituyen cosa juzgada en el ámbito estatal, en consecuencia, las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetar y acatar las mismas, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, pactos y convenciones internacionales firmados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.

A los efectos de este Capítulo, se entenderá por integrantes toda persona indígena, que forme parte de una comunidad indígena. También se considerará como integrante, toda persona no indígena integrada por vínculos familiares o por residencia.

De la competencia de la jurisdicción especial indígena.

Artículo 126. La competencia de la jurisdicción especial indígena, estará determinada por los siguientes criterios:

1. Competencia Territorial: las autoridades legítimas tienen competencia para conocer de cualquier incidencia o conflicto surgido dentro de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas respectivos.

De igual manera, estas autoridades tendrán competencia extra-territorial respecto de controversias surgidas fuera de las tierras indígenas, cuando las mismas sean entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros no-indígenas. En estos casos, la autoridad legítima decidirá según los usos y costumbres del pueblo o comunidad indígena y en lo dispuesto en el presente Artículo, si conoce o no de la controversia, y en caso negativo, informará a los solicitantes o remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria según sea el caso.

2. Competencia Material: las autoridades legítimas tienen competencia para conocer y decidir sobre cualquier conflicto o solicitud, independientemente de la materia de que se trate. Se exceptúan de esta competencia material, los delitos contra la seguridad e integridad estatal y federal, según sea el caso, delitos de corrupción o contra el patrimonio público, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico ilícito de armas de fuego.



3. Competencia Personal: La jurisdicción indígena tiene competencia para conocer de solicitudes o conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo o comunidad indígena o no integrantes que residan dentro de las tierras indígenas. Las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero que encontrándose dentro de las tierras indígenas cometan algún delito previsto en la legislación ordinaria, y hayan sido capturados in fraganti, podrán ser detenidos preventivamente por las autoridades legítimas, las cuales deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

De la Coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Ordinaria.

Artículo 127. Las relaciones entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria se rigen por las siguientes reglas:

1. Reserva de la jurisdicción especial indígena: las decisiones tomadas por las autoridades indígenas legítimas podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria cuando sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados, pactos y convenciones internacionales firmados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.

2. Relaciones de coordinación: La jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria estatal, establecerán relaciones de coordinación y colaboración a los fines de prestarse el apoyo requerido para la investigación, juzgamiento o ejecución de sus decisiones.

3. Conflicto de jurisdicción: De los conflictos de conocimiento entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria, conocerá el Tribunal Superior de Justicia del Estado o federal, según sea el caso.

4. Protección del derecho a la jurisdicción especial indígena: Cuando la jurisdicción ordinaria conozca de casos que correspondan a la jurisdicción especial indígena, deberá remitir las actuaciones a esta última, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar por el incumplimiento de esta disposición.

De los procedimientos para resolver conflictos de derechos humanos.



Artículo 128. En caso de que mediante decisión emanada de la jurisdicción indígena se produzca una violación de derechos, quien se considere afectado podrá interponer ante la jurisdicción ordinaria, la acción de amparo constitucional.

En caso de considerarse admisible se constituirá un tribunal mixto conformado por el juez ordinario de la causa, y dos jueces, uno de los cuales deberá ser una autoridad indígena o persona con conocimiento en materia indígena nombrada por la jurisdicción especial indígena, a fin de que se garantice una interpretación intercultural de los hechos y el derecho. El procedimiento estará orientado a la solución consensuada del conflicto, mediante reglas de equidad, atendiendo los derechos, intereses y perspectivas culturales de las partes. En caso de no llegarse a una solución consensuada, el tribunal mixto resolverá por mayoría.

Cualquiera de las partes podrá recurrir en segunda instancia a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual deberá incorporar dos miembros supernumerarios que conozcan los derechos indígenas y el mismo deberá resolver la controversia interpretando interculturalmente los hechos y el derecho.

Del Fortalecimiento del Derecho Indígena y Jurisdicción Especial Indígena.

Artículo 129. El Gobierno del Estado garantizará, entre otros, los siguientes mecanismos para facilitar la aplicación del Derecho Indígena y el desarrollo de la jurisdicción especial indígena:

1. Promoción y difusión: el **Órgano Autónomo**, convocará una instancia mixta interinstitucional con participación de representantes de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas para el diseño y ejecución de políticas públicas que promuevan la difusión y el respeto del Derecho Indígena y la jurisdicción especial indígena.

2. Programas: **Órgano Autónomo**, o los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, podrán diseñar y ejecutar, conjunta o separadamente, programas o proyectos de capacitación y formación en el pluralismo legal, dirigidos a las autoridades indígenas y a los operadores de justicia, para facilitar la aplicación del Derecho Indígena en la jurisdicción especial indígena.



3. De la enseñanza del Derecho indígena: En la enseñanza del Derecho y carreras afines se incorporarán, de modo obligatorio, el pluralismo legal y el Derecho Indígena. Los operadores de justicia, abogados y funcionarios encargados de aplicar la ley en zonas con predominancia indígena deberán conocer la cultura, el Derecho Indígena y los derechos especiales de los pueblos y comunidades indígenas. Las instituciones de formación judicial deben incorporar obligatoriamente materias referidas a la multiculturalidad, pluralismo legal y Derecho Indígena.

De los derechos de los indígenas en procedimientos ordinarios.

Artículo 130. Los indígenas que participen en procedimientos ordinarios tendrán el derecho de conocer el contenido y efecto de tales procedimientos. Igualmente, tendrán derecho a contar con defensa profesional idónea, el uso de su propio idioma y el respeto de su cultura.

El Gobierno del Estado establecerá los mecanismos que permitan superar las dificultades inherentes a las diferencias culturales y lingüísticas para facilitar a los indígenas la plena comprensión de estos procedimientos.

Lo dispuesto en este Artículo se aplicará a los indígenas que estén sometidos o participen en procedimientos administrativos o especiales, en tanto sea aplicable.

Del derecho a la defensa.

Artículo 131. Los indígenas tienen el derecho irrenunciable de contar con defensa profesional idónea. Para tal efecto, se creará un Área de Defensa Pública Indígena, dentro del servicio de defensa pública del Tribunal Supremo de Justicia. Para el nombramiento de defensores públicos de indígenas se tendrá en cuenta que los mismos conozcan la cultura y derechos de los indígenas. Los defensores públicos de indígenas son competentes para actuar en defensa de los indígenas en toda materia y ante toda instancia administrativa y judicial, nacional e internacional.

Del derecho al uso de la lengua indígena.

Artículo 132. Los indígenas tienen el derecho de utilizar sus idiomas propios ante todo procedimiento legal, administrativo o judicial.



Del derecho a la propia cultura.

Artículo 133. En los procedimientos judiciales ordinarios en los que sea parte uno o más indígenas, los órganos respectivos deberán tomar en consideración el Derecho y las culturas indígenas, durante todas las etapas procesales y al momento de dictar la resolución correspondiente. Cuando se trate de delitos graves se formará un tribunal mixto incorporando a ciudadanos indígenas como jueces, para garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.

De los informes periciales.

Artículo 134. En los procedimientos judiciales en los que participen pueblos indígenas o sus miembros, el órgano judicial respectivo, para mejor decidir, deberá contar con un informe pericial socio-antropológico y un informe de la autoridad indígena o la organización representativa correspondiente, que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El informe pericial socio-antropológico estará a cargo del Órgano Autónomo, o profesional idóneo.

Del juzgamiento penal.

Artículo 135. En los procedimientos penales que involucren indígenas se respetarán las siguientes reglas:

- 1.** No se perseguirá penalmente a indígenas por hechos tipificados como delitos, cuando en su cultura y Derecho estos actos sean permitidos, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, pactos y convenciones internacionales firmados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.
- 2.** Los jueces al momento de dictar sentencia definitiva o cualquier medida preventiva, deberán considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas y, decidir conforme a los principios de justicia y equidad. En todo caso, éstos procurarán establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural.



3. Las penas privativas de libertad solo se impondrán cuando no exista otra alternativa para el cumplimiento de la sentencia. El Gobierno del Estado dispondrá en los establecimientos penales de los municipios con población indígena, de espacios especiales de reclusión para los indígenas, así como de personal con conocimientos en materia indígena para su atención.

TITULO VIII

DEL ÓRGANO AUTÓNOMO,

Artículo 136. Se creará mediante ley especial que se dicte al efecto, el **Órgano Autónomo**, con personalidad jurídica y autonomía financiera, el cual tendrá como finalidad; controlar y decidir sus propias prioridades de desarrollo económico, social y cultural, así como coadyuvar con los pueblos y comunidades que lo soliciten, la defensoría, asesoramiento y seguimiento para que puedan ejercer efectivamente los derechos plasmados en la presente ley, participar en la formulación de políticas públicas, planes y programas de desarrollo estatal y municipal susceptibles de afectar a los pueblos y comunidades indígenas. El **Órgano Autónomo**, es el órgano responsable de la elaboración concertada, coordinación y seguimiento de las políticas públicas en materia indígena, garantizando la participación de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en la elaboración y ejecución de dichas políticas.

TITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Se propone una disposición transitoria y mientras se dicte la Ley orgánica que rija la materia, la elección de los representantes indígenas al Congreso local y a los Congresos municipales se regirá por las siguientes Disposiciones:

Primera. Mientras se dicta la ley especial, la elección de los representantes indígenas los órganos legislativos y congresos municipales se regirán por lo dispuesto en el presente título, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normas que rigen la materia.

Segunda. Los indígenas que aspiren a cualquier cargo de elección popular por parte de los pueblos indígenas del país, deberán cumplir con los requisitos siguientes:



1. Pertenecer a un pueblo indígena de México.
2. Hablar el idioma indígena del pueblo de pertenencia preferentemente.
3. Saber leer y escribir en idioma español y en lengua indígena preferentemente, si fuere el caso.
4. Haber sido autoridad tradicional indígena o tener una trayectoria de lucha social indígena en México.
5. Ser postulado por una organización indígena o por un pueblo o comunidad indígena y contar con el respaldo de firmas del uno por ciento (01 %) de los electores indígenas inscritos en la circunscripción respectiva.
6. Tener su domicilio en la entidad federal o localidad para la cual fue postulado.

Tercera. En los procesos electorales a que se contrae el presente Capítulo, podrán participar como electores todos aquellos indígenas inscritos en la respectiva circunscripción electoral. A tales efectos, el Instituto Electoral del Estado de México creará el Registro Electoral Permanente Indígena, el cual deberá levantarse en un lapso de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Para el ejercicio del derecho al sufragio, solo se requerirá la presentación de documento que pruebe la identidad del elector.

Cuarta. La votación en los procesos electorales a los que hace referencia el presente Capítulo se efectuará de manera secreta, directa y universal, sin perjuicio de votaciones o acuerdos previos que según sus usos y costumbres puedan efectuar los pueblos y comunidades indígenas.

Aquellas personas que por no saber leer ni escribir o que presenten algún impedimento físico para efectuar el voto por su propia cuenta, podrán hacerse acompañar de alguien para que los asista en el acto de votación.



Quinta. Si dos candidatos postulados a cargos de elección indígena obtuvieran en los escrutinios igual número de votos, el Instituto Electoral del Estado de México convocará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la elección a una nueva elección, donde solo participaran los candidatos involucrados a fin de determinar el ganador definitivo.

Sexta. Lo no dispuesto en el presente Capítulo se regirá por lo establecido en el reglamento para la elección de representantes indígenas que a tal efecto dicte el Instituto Electoral del Estado de México.

Séptima. Las entidades de carácter público o privado que realicen cualquier clase de actividades, obras o ejecuten proyectos de investigación, exploración o explotación de recursos naturales en tierras de pueblos o comunidades indígenas, deberán adecuar su actividad a las disposiciones de la presente Ley, en un lapso mayor de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la misma.

De igual manera, las entidades mencionadas en la presente Disposición, deberán someterse al procedimiento de información y consulta previsto en el Capítulo II del Título I de la presente Ley, en un lapso no mayor de un año a partir de su entrada en vigencia.



Se presenta la presente iniciativa de Ley al Parlamento Abierto, a los 30 días del mes de junio de 2021, para su consideración y en su caso aprobación

GRAN CONSEJO ACOLHUA NACIÓN CHICHIMECA-TOLTECA

(Hablantes de nuestra lengua madre náhuatl)

ATENTAMENTE

**“UNIDOS POR NUESTROS ANCESTROS EN UN SOLO ROSTRO Y UN SOLO
CORAZÓN PARA FORJAR TU DESTINO”**

NANCY MENDOZA RAMÍREZ

Representante del Gran Consejo Acolhua Chichimeca-Tolteca y

Primera Portadora de la Palabra del Consejo
de Ancianos y Aprendices de Papalotla y sus
Barrios

MIGUEL ÁNGEL VELAZQUEZ ZENÓN

Representante del Gran Consejo Acolhua Chichimeca-Tolteca y

Coordinador de la Mesa de Portadores de la Palabra Indígena
de La Purificación Tepetítla, Texcoco

JUAN NEZAHUALCÓYOTL CANO TÉLLES

Representante del Gran Consejo Acolhua Chichimeca-Tolteca y

Segundo Portador de la Palabra del Consejo de Ancianos y
Aprendices de San Jerónimo Amanalco, Texcoco

ALEJANDRO VENADO CALDERÓN

Representante del Gran Consejo Acolhua Chichimeca-Tolteca y

Primer Portador de la Palabra del Consejo de
Ancianos y Aprendices de Santa María
Tlailitlacan, Chiconcuac



INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INDÍGENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 6, establece:

Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Con medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

Resulta necesario consolidar la democracia en nuestro país a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación, que permitan a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos indígenas influir en la adopción de decisiones de las esferas de competencia de los poderes estatales y en el ámbito municipal; reconocer otros mecanismos de participación que son inherentes a estos pueblos, puesto que los han practicado de manera ancestral o porque con ellos se implementan algunos de sus derechos reconocidos en los ámbitos estatal, nacional e internacional; así como generar espacios de representación política, que permitan a estos pueblos hacer escuchar sus aspiraciones y concretar sus propuestas en los órganos de decisión estatal, a los que hasta ahora no han tenido acceso como entidades colectivas.

Debe considerarse que el artículo 5 de la dndupi, establece que el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, debe entenderse sin perjuicio del derecho de participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. A su vez el artículo 18 de dicho instrumento dispone que tienen derecho de participar



en la toma de decisiones por conducto de representantes elegidos por los pueblos de conformidad con sus propios procedimientos.

El ejercicio del derecho de participación y representación en el Estado de México sigue siendo un tema pendiente porque no se han establecido los mecanismos suficientes para que los pueblos accedan a los espacios de participación y representación en las distintas esferas de la vida pública. Es el caso de la representación en los ayuntamientos, que está contemplada en los ordenamientos federal y estatal y no logra hacer efectivo este derecho que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se limita al posicionarse solo como figura espectadora, sin incidencia en la toma de decisiones porque no lo ubica como parte de los ayuntamientos y por ende le cancela el derecho a votar en los asuntos que competen a las comunidades que representa.

En los últimos 4 años, la figura de representación indígena en el Estado de México, ha dejado experiencias no gratas en los mecanismos de elección y sobre todo en los espacios de participación, como es el cabildo; ya que no se le informa sobre los temas a tratar, no se le convoca, por lo que no tiene voz para exponer ni escuchar los asuntos que atañen a las comunidades que representa. En este sentido, el representante indígena se ha convertido en una figura prácticamente decorativa, que en poco o nada contribuye a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, derivado del poco interés de los ayuntamientos a darles las condiciones mínimas de participación, es decir, respetar su voz y proporcionarles las condiciones materiales necesarias para el desempeño de su encargo.

Ante ello, se han suscitado JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que logrado posicionar a las y los representantes, pero son 3 o 4 casos aislados, los demás representantes siguen padeciendo la discriminación y la exclusión por parte de los ayuntamientos



El respeto al derecho a la libre determinación conlleva que los pueblos y comunidades indígenas fortalezcan sus instituciones propias, sus ordenamientos jurídicos, sus asambleas como máxima autoridad, sus sistemas de cargos, entre otros; además de posibilitar la protección de su territorio, medio ambiente, recursos naturales, sitios sagrados, y todos los demás elementos que conforman su espacio territorial.

El derecho a la libre determinación y autonomía implica:

- El derecho de los pueblos y comunidades indígenas de poder vivir bajo sus formas de organización social, económica, política y cultural.
- Nombrar a sus autoridades según sus propias normas y procedimientos electorales
- Aplicar sus sistemas normativos para la resolución de sus conflictos y el nombramiento de autoridades, preservar y enriquecer su cultura e identidad
- Elegir representantes en los ayuntamientos en los municipios con población indígena
- A ser consultados antes que se promulgue cualquier ley o se tome cualquier medida que les pueda afectar.

Se considera necesario hacer expreso el derecho de participación y representación política de los pueblos indígenas, a través de representantes electos de acuerdo a sus sistemas normativos y sentar las bases del reconocimiento de los mecanismos para lograrlo tanto a nivel federal como en las entidades federativas y en el ámbito municipal. Es necesario que dichos pueblos tengan una representación, fruto de sus propias formas colectivas de organización política y de gobierno.

Es preciso mencionar que la propuesta que se presenta esta armonizada con la Propuesta de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano que está en proceso de análisis y validación por en los pueblos y comunidades indígenas, por lo que tiene todo un sustento jurídico.



Considerando lo anterior, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 10 Constitucional, para reconocer los principios, normas, instituciones y mecanismos democráticos de los pueblos, municipios y comunidades indígenas y afromexicanas para la elección de sus autoridades y representantes, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.

Asimismo, se propone adicionar un párrafo catorce al artículo 11, para establecer que el Instituto Nacional Electoral y el el Instituto Electoral del Estado de México garantizarán el respeto de los sistemas normativos políticos electorales de los pueblos y las comunidades indígenas, así como la promoción e implementación de sus derechos político electorales.

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 12 para establecer que las autoridades electorales y jurisdiccionales competentes, tratándose de dichos pueblos y comunidades, observarán los principios de pluriculturalidad, pluralismo jurídico y libre determinación.

De igual manera, se propone adicionar un tercer párrafo cuarto del artículo 13 Constitucional para establecer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá garantizar los derechos político electorales de los pueblos indígenas, así como el respeto a sus sistemas normativos para la elección de sus autoridades y representantes, en el marco del pluralismo jurídico.

Se propone modificar el párrafo cuarto del artículo 17 Constitucional, para eliminar los términos **y comunidades**, evitando que se interprete que las comunidades tendrán la representación individual y no por pueblo indígena, como debe ser, para que sea funcional la representación; en este mismo párrafo se agrega el reconocimiento de los pueblos residentes y afromexicanos. Se sustituye la palabra ante el Ayuntamiento, por *en el Ayuntamiento*, que fue el impedimento para que los representantes pudieran ejercer su encargo en el espacio de toma de decisiones;



con ello se busca posicionar a los representantes en los Cabildos e igualar su participación en el mismo nivel que los regidores.

En este mismo sentido, se propone modificar el párrafo quinto con lo cual esta reforma se plantea establecer el derecho de los pueblos indígenas a elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, de acuerdo con sus normas y procedimientos, también incluya a los principios e instituciones de dichos pueblos y comunidades.

De igual manera, se propone adicionar un sexto párrafo en el artículo 17, para establecer el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a participar en la vida política, económica, social y cultural; así como tener representación política, de conformidad con sus sistemas normativos y especificidades culturales, garantizando la participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad. En este mismo párrafo se propone sustituir el concepto de “tradiciones y normas internas” por el de “sistemas normativos” y así establecer que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán los derechos de los municipios referidos en dicha fracción, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus sistemas normativos.

Para fundamentar las reformas constitucionales se adiciona un séptimo párrafo al artículo 17 para referido al derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social, jurídico y cultural.

Se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 38 Constitucional, para establecer el deber de garantizar la representación política de los pueblos indígenas, residentes y afromexicano en el Congreso estatal, de conformidad con la composición multiétnica y pluricultural de la Nación y atendiendo a sus propios principios y procedimientos. Asimismo, se dispone que la ley reglamentaria correspondiente establecerá los mecanismos para hacer efectivo este derecho.



Así también se propone adicionar un tercer párrafo 38 constitucional en el que se establece el derecho a ser representados los pueblos indígenas en el Congreso del Estado de México en función del porcentaje de población autoadscrita.

Esta forma de representación política, es acorde con el espíritu del Artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena del año 2001, que dio lugar a la redistribución electoral federal y debe entenderse como una acción afirmativa que permitirá la participación política de los pueblos en cuestión.

Se realiza esta afirmación ya que, en el marco de un Estado democrático, caracterizado por el pluralismo jurídico, es indispensable generar un modelo de representación que efectivamente asegure el ingreso de representantes indígenas, residentes y afromexicanos a la Cámara del Congreso, por lo que es necesario contar con un mecanismo compensatorio que lo permita.

Por otra parte, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 114 Constitucional, para establecer que los municipios con presencia de comunidades indígenas integrarán sus ayuntamientos con representantes de éstas, quienes serán electos de conformidad con sus sistemas normativos y formas propias de elección.

PROPUESTA

Artículo 10.-..

.....

Se reconocen los principios, normas, instituciones y mecanismos democráticos de los pueblos, municipios y comunidades indígenas y afromexicanas para la elección de sus autoridades y representantes en los municipios y la legislatura, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.



Artículo 11.-

.....

Tratándose de pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, garantizará el ejercicio de sus sistemas normativos en materia político electoral, así como de los derechos político electorales de sus integrantes, en el marco del pluralismo jurídico.

Artículo 12.-

....

En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y tratándose de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además se observarán los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico y libre determinación.

Artículo 13.-

....

El Tribunal Electoral garantizará los derechos político electorales de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos, así como el respeto a sus sistemas normativos para la elección de sus autoridades y representantes, en el marco del pluralismo jurídico.

Artículo 17.-

....

Los pueblos indígenas, ~~y comunidades indígenas~~ **residentes y afromexicanos** tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes **en los ayuntamientos, quienes tendrán las mismas atribuciones y obligaciones que los regidores ante los Ayuntamientos**, observando el principio de paridad de género, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus ~~tradiciones y normas internas~~



sistemas normativos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

Los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, principios, instituciones, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía estatal. En ningún caso las practicas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos tienen derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural; así como tener representación política, de conformidad con sus sistemas normativos y especificidades culturales, garantizando la participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad.

Los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social, jurídico y cultural.

Artículo 38.-

...

Se garantizará la representación política de los pueblos indígenas, residentes y afromexicano en la Cámara del Congreso estatal, de conformidad con la composición multiétnica y pluricultural del Estado y atendiendo a sus propios principios y procedimientos. La ley establecerá los mecanismos para hacer efectivo este derecho.



Los pueblos originarios, residentes y afromexicanos radicados en el territorio del Estado de México tienen derecho a elegir, a través de su representación en Consejo de Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos del Estado de México, a quienes desempeñen la responsabilidad de Diputados en la Legislatura Local. La cantidad de diputaciones serán determinadas en la proporción de representación óptima en función de la población autoadsrita oficialmente reconocida. La ley establecerá los mecanismos para hacer efectivo este derecho.

Artículo 114.-

....

Los municipios con presencia de pueblos indígenas, residentes y afromexicano integrarán sus ayuntamientos con representantes de éstas, quienes serán electos de conformidad con sus sistemas normativos y formas propias de elección.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno.

TERCERO.- A partir de su vigencia del presente decreto se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a este decreto.

Lo tendrá por entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los.....

Toluca de Lerdo, 30 de junio de 2021



Proponentes

Aucencio Valencia Largo

Enrique Soteno Reyes

Luis Ángel Ortiz Montoya

Claudio Contreras González

Laura Campana Ortega

Claudio Andrés Bartolo

Silvia Verónica Villela Cima

Santiago Aparicio Ángeles

Rocío Silverio Romero

Miguel Ángel Reyna Castillo

José Germán Garibay Gallardo

Dolores Torres García

Eugenia Hernández Bonilla

Violeta Villegas Díaz

María Juana Peña Rubio

Marivel Sánchez Nava



DERECHO A LA CULTURA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “todas las personas gozarán de los derechos humanos”¹, las cuales se encuentran descritas en los artículos del 1 al 29 de dicho texto. Entre ellos se encuentra el **Derecho a la Cultura** manifestado en el artículo 4º párrafo noveno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclama en su Preámbulo;

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.²

La cultura no sólo se considera un derecho humano fundamental, además es el mecanismo principal que hace posible su existencia y validez. La responsabilidad de los tres niveles de gobierno garantizan la protección a este derecho, así como la creación de políticas públicas y estrategias que lleven a cabo el cumplimiento eficaz y expedito de cada una de las leyes, normas y reglamentos que involucren a los **pueblos indígenas, residentes y afrodescendientes** en el desarrollo del derecho a la cultura. El artículo 27 de la citada declaración enuncia lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

¹ Artículo 1o, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de aquí en adelante **C.P.E.U.M. o Constitucional**)

² Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, p 3.



2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.³

Con base en este artículo, se entiende que el derecho a la cultura:

- a) Protege el acceso a los bienes y servicios culturales;
- b) Protege el disfrute de los mismos, y
- c) Protege la producción intelectual.

De manera que para interconectar el derecho a la cultura armónicamente entre los distintos tratados internacionales y las normas constitucionales relacionadas entre sí, se debe de contar con elementos jurídicos que permitan esta conexión. En el caso de Las leyes concernientes con la cultura dentro de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México **no encontramos artículo que prevea alguna de las observaciones señaladas** con anterioridad, pues son sugeridas de manera tan general que no alcanzan siquiera una resolución efectiva para su cumplimiento.

La C.P.E.U.M regula de manera firme y con la creencia de que es verdad y que tendrá cumplimiento el acto legislado, en este caso el derecho a la cultura, de tal manera que solo es un elemento tácito. El artículo 6º hace referencia a que;

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.⁴

El artículo 7º procura que;

³ O.N.U., Declaración Universal, p 56.

⁴ Artículo 6o, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.⁵

Por último el artículo 28 enuncia que;

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de qué se trata.⁶

⁵ Artículo 7o, párrafos 1 y 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁶ Artículo 28, párrafo 9o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Estos citados artículos tienen efecto en lo referente a la producción intelectual, material e industrial así como; su transmisión y comunicación. Aunque estas disposiciones tienen su regulación en la legislación estatal secundaria, en la Ley de Imprenta y en la Ley Federal del Derecho de Autor, así como en la Ley de Propiedad Industrial, no se retoman en la ley primaria es decir la Constitución Estatal pues se asume que los pueblos tienen derecho a proteger la cultura con la seguridad que el Estado otorga.

Como lo señala la C.P.E.U.M;

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.⁷

Esta sección constitucional da la pauta perfecta para asegurar de manera concreta el derecho que tienen los pueblos indígenas, residentes y afrodescendientes a proteger y administrar la cultura que formaron sus ancestros desde tiempos inmemoriales.

En el apartado internacional, del Convenio 169 de la OIT señala;

que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.⁸

⁷ Artículo 2, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁸ Artículo 2° fracción II inciso b, del Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.



Las funcionalidades de los tratados internacionales promueven e impulsan a las leyes de cada nación a corregir o mejorar las propias. Para el estado de derecho que actualmente rige el Estado de México, el derecho a la cultura puede tomar visibilidad en el estatus quo de la sociedad, cosa que permitiría a los pueblos indígenas a expresarse de manera libre al prejuicio social.

En cuanto al disfrute y protección de los bienes culturales, la C.P.E.U.M. emite;

De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.⁹

⁹ Artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Esta disposición constitucional tiene su regulación específica mediante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. En cuanto al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, la constitución del Estado de México carece de especificaciones que retomen estos aspectos los cuales darían contexto a las leyes secundarias, además de nutrirlas jurídicamente.

En cuanto a la comunicación y difusión del entorno cultural la C.P.E.U.M., emite que:

Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura¹⁰

Esta parte de la C.P.E.U.M., garantiza el apoyo del Estado para el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, a través de la investigación. Esta disposición jurídica es deficiente en su carácter ya que no permite que los pueblos indígenas puedan acceder y disfrutar de los bienes y servicios culturales como: casas de cultura, zonas arqueológicas, museos comunitarios, áreas naturales o protegidas y centro ceremoniales principalmente, pues los particulares llevan a cabo otro tipo de inflexiones en vez de actividades culturales que la comunidad produce, de ahí se presentó la necesidad de incorporar al párrafo noveno al artículo 4o constitucional, por tanto se requiere que exista en la legislación federal y local leyes, normas y reglamentos que regulen el acceso de los pueblos originarios a los bienes y servicios culturales.

¹⁰ Artículo 3o, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Cuando se hace referencia a un derecho cultural, significa la expresión de los pueblos a alguno de los derechos mencionados. En concreto, el artículo 4º constitucional no sólo establece el derecho a la cultura sino también es un derecho el acceso a los bienes y servicios culturales.

Por medio de este derecho se debe garantizar que las y los mexicanos, independientemente de su posición económica o situación geográfica, tengan acceso a los bienes y servicios culturales. Esto implica que haya libertad artística y fomento del arte con el objetivo de que el poder público no se convierta en juez de éste.

Educación y cultura son conceptos que se vinculan el uno con el otro, como señala el artículo 3o.

- e) En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.
- g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social¹¹

México es un país de enorme riqueza cultural. Nuestra gran cantidad de pueblos indígenas nos lo demuestra. Con todo lo anterior los esfuerzos no han sido los suficientes para preservar las lenguas, costumbres, arte y música. El derecho que ellos tienen al acceso a los bienes y servicios culturales debe tomar en cuenta estas circunstancias. Pero antes, una vez más, se debe respetar su dignidad humana. El límite de cualquier derecho y de cualquier política pública es cuando el Estado impone un determinado tipo de cultura, porque esto afectaría a la libertad de los pueblos.

¹¹ Artículo 3, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

PROPUESTA

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO.

SE PROPONE LA REFORMA AL PARRAFO 6, FRACCIÓN IX, ARTÍCULO 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO;

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo



a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

EL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS CEREMONIALES ADEMÁS DE BIENES (TANGIBLES E INTANGIBLES) Y TODO AQUELLO QUE EMANE DE LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES SON PROPIEDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTÍCULO 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO;

Artículo 6.- Los habitantes del Estado gozan del derecho a que les sea respetado su honor, su crédito y su prestigio.

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al párrafo DOF 12-04-2000

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 6. Los habitantes del Estado ***PUEBLOS INDÍGENAS, RESIDENTES Y AFROMEXICANOS*** gozan del derecho a que les sea respetado su honor, su crédito y su prestigio.



SE PROPONE LA REFORMA AL ARTÍCULO 17, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÈXICO;

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena. El Estado favorecerá la educación básica bilingüe.

La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás habitantes. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.



Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía estatal. En ningún caso las practicas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO PARA QUEDAR COMO SIGUE:

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena. El Estado favorecerá la educación básica bilingüe.

TODA PERSONA TIENE DERECHO AL ACCESO A LA CULTURA Y AL DISFRUTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CULTURALES. EL ESTADO PROMOVERÁ LOS MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES CON PLENO RESPETO A LA LIBERTAD CREATIVA. LA LEY ESTABLECERÁ LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN A CUALQUIER MANIFESTACIÓN CULTURAL

SE REFORMA PARRAFO TERCERO PARA QUEDAR COMO SIGUE:



La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social así **COMO A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LAS COMUNIDADES** y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás habitantes. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que



respete el pacto federal y la soberanía estatal. En ningún caso las practicas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE MÈXICO

CAPÍTULO II CULTURA Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 2

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas; hablan una lengua propia; han ocupado sus territorios en forma continua y permanente; han construido sus culturas específicas. Son sus formas e instituciones sociales, económicas y culturales las que los identifican y distinguen del resto de la población del Estado.



Dichos pueblos y comunidades existen desde antes de la formación del Estado de México y contribuyeron a la conformación política y territorial del mismo.

Estos pueblos indígenas descienden de poblaciones que habitaban en una región geográfica al iniciarse la colonización dentro de lo que hoy corresponde a las actuales fronteras estatales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Los indígenas de origen nacional procedentes de otro estado de la república y vecindados en el Estado de México, podrán acogerse en lo conducente a los beneficios que esta Ley, el orden jurídico mexicano y los Tratados Internacionales les reconocen, respetando las tradiciones de las comunidades donde residan, pudiendo tener acceso a dichos beneficios en forma colectiva o individual.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas; hablan una lengua propia, **TIENEN SUS SISTEMAS NORMATIVOS TRADICIONALES** han ocupado sus territorios en forma continua y permanente; han construido sus culturas específicas. Son sus formas e instituciones sociales, económicas y culturales las que los identifican y distinguen del resto de la población del Estado.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 3

La conciencia de la identidad indígena es el criterio fundamental para determinar los pueblos y comunidades a los que se aplican las disposiciones del presente ordenamiento, así como para identificar las localidades y, en su caso, municipios con presencia indígena.



PARA QUEDAR COMO SIGUE:

La conciencia de la identidad indígena es el criterio fundamental para determinar los pueblos y comunidades a los que se aplican las disposiciones del presente ordenamiento, **ASÍ COMO PARA IDENTIFICAR LAS LOCALIDADES QUE SE RIGEN POR SUS SISTEMAS NORMATIVOS PARA** identificar los municipios con presencia indígena.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 5

Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. El Estado: Estado de México, parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Pueblos Indígenas: Colectividades humanas, descendientes de poblaciones que, al inicio de la colonización, habitaban en el territorio de la entidad, las que han dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros antes de la conformación del Estado de México, que afirman libre y voluntariamente su pertenencia a cualquiera de los pueblos señalados en el artículo 6 de esta ley;

III. Comunidad Indígena: Unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres;

IV. Autonomía: Expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de México, para asegurar la unidad estatal en el marco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, adoptar por sí mismos decisiones y desarrollar sus propias prácticas relacionadas, entre otras, con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización socio-política, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura;

V. Territorio Indígena: Región del territorio estatal constituida por espacios continuos ocupados y poseídos por las comunidades indígenas, en cuyo ámbito se manifiesta su vida comunitaria y confirman su cosmovisión, sin detrimento alguno de la Soberanía del Estado de México, ni de la autonomía de sus municipios;



VI. Derechos Individuales: Garantías que el orden jurídico mexicano otorga a todo hombre o mujer, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo o comunidad indígena, por el sólo hecho de ser persona;

VII. Derechos Sociales: Facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden jurídico mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, para garantizar su existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a los pueblos indígenas;

VIII. Sistemas Normativos Internos: Conjunto de normas de regulación, orales y de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican la resolución de sus conflictos;

IX. Usos y Costumbres: Base fundamental de los sistemas normativos internos y que constituye el rasgo característico que los individualiza;

X. Autoridades Municipales: Aquellas que están expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley Orgánica Municipal del Estado;

XI. Autoridades Tradicionales: Aquellas que los pueblos y comunidades indígenas reconocen de conformidad con sus sistemas normativos internos, derivados de sus usos y costumbres

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. El Estado: Estado de México, parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Pueblos Indígenas: Colectividades humanas, descendientes de poblaciones que, al inicio de la colonización, habitaban en el territorio de la entidad, las que han dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros antes de la conformación del Estado de México, que



afirman libre y voluntariamente su pertenencia a cualquiera de los pueblos señalados en el artículo 6 de esta ley;

III. COMUNIDAD INDÍGENA: UNIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL, ASENTADA EN UN TERRITORIO Y QUE RECONOCE AUTORIDADES PROPIAS DE ACUERDO CON SUS USOS Y COSTUMBRES;

IV. Autonomía: Expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de México, para asegurar la unidad estatal en el marco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, adoptar por sí mismos decisiones y desarrollar sus propias prácticas relacionadas, entre otras, con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización socio-política, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura;

V. Territorio Indígena: Región del territorio estatal constituida por espacios continuos ocupados y poseídos por las comunidades indígenas, en cuyo ámbito se manifiesta su vida comunitaria y confirman su cosmovisión, sin detrimento alguno de la Soberanía del Estado de México, ni de la autonomía de sus municipios;

VI. Derechos Individuales: Garantías que el orden jurídico mexicano otorga a todo hombre o mujer, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo o comunidad indígena, por el sólo hecho de ser persona;

VII. Derechos Sociales: Facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden jurídico mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, para garantizar su existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a los pueblos indígenas;

VIII. Sistemas Normativos Internos: Conjunto de normas de regulación, orales y de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican la resolución de sus conflictos;



SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 8

Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de sus dependencias y organismos auxiliares:

- I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a favor de los pueblos y comunidades indígenas;
- II. Asegurar que los integrantes de las comunidades indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de la entidad;
- III. Promover que las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social, operen de manera conjunta y concertada con las comunidades indígenas;
- IV. Promover el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades indígenas, impulsando el respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y autoridades tradicionales;
- V. Promover estudios sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas;
- VI. Las demás que señalé la presente ley y otros ordenamientos aplicables.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de sus dependencias y organismos auxiliares:

- I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a favor de los pueblos y comunidades indígenas;
- II. Asegurar que los integrantes de las comunidades indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de la entidad;



III. Promover que las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social, operen de manera conjunta y concertada con las comunidades indígenas;

IV. Promover el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades indígenas, impulsando el **RESPECTO A SU CULTURA SU HONOR, SU CRÉDITO Y SU PRESTIGIO**, usos, costumbres, tradiciones y autoridades, tradicionales;

V. Promover estudios sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas;

VI. Las demás que señale la presente ley y otros ordenamientos aplicables.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 9

Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas:

I. Los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Ayuntamientos deberán:

a) Reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá considerarse la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo;

c) Reconocer los sistemas normativos internos en el marco jurídico general en correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las garantías individuales y a los derechos sociales.

II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;



b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les conciernan.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas:

I. Los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Ayuntamientos deberán:

a) Reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá considerarse la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo;

c) Reconocer los sistemas normativos internos en el marco jurídico general en correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las garantías individuales y a los derechos sociales. **LAS AUTORIDADES, INSTITUCIONES, SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO EN LOS INCISOS ANTERIORES SERÁN SUJETOS DE RESPONSABILIDAD**

II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;



b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular **A TRAVÉS SU CONSEJO DE ANCIANOS COMO REPRESENTANTES TRADICIONALES**, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les conciernan.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 10

En el ámbito de la Ley que regula sus atribuciones, corresponderá al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México:

- I. Participar en coordinación con el Registro Civil en las campañas registrales que organice en los municipios y localidades con presencia indígena;
- II. Establecer programas de capacitación y formación de intérpretes y traductores para apoyar a los pueblos y las comunidades indígenas en los distintos ámbitos que éstos requieran;
- III. Establecer un sistema de información sobre la situación económica y social de los pueblos y las comunidades indígenas y de los municipios y localidades donde se encuentran asentadas;
- IV. Proporcionar información a la Legislatura para actualizar el catálogo de las localidades con presencia indígena.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

En el ámbito de la Ley que regula sus atribuciones, corresponderá al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México:

- I. Participar en coordinación con el Registro Civil en las campañas registrales que organice en los municipios y localidades con presencia indígena;
- II. Establecer programas de capacitación y formación de intérpretes y traductores para apoyar a los pueblos y las comunidades indígenas en los distintos ámbitos que estos requieran;
- III. Establecer un sistema de información sobre la situación económica y social de los pueblos y las comunidades indígenas y de los municipios y localidades donde se encuentran asentadas;
- IV. Proporcionar información a la Legislatura para actualizar el catálogo de las localidades con presencia indígena **EN DONDE SEAN INCLUIDAS TAMBIÉN POR SUS SISTEMAS NORMATIVOS.**



SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 40

Los pueblos y comunidades indígenas asentadas en territorios regionales, municipales o por localidades en el Estado de México, gozan del derecho social a vivir dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas distintas y se garantiza su propio desarrollo contra toda forma de discriminación.

Tienen derecho social a conservar, proteger, mantener y desarrollar sus propias identidades; así como todas sus manifestaciones culturales; por tanto, las autoridades tienen el deber de proteger y conservar los sitios arqueológicos y sagrados, centros ceremoniales y monumentos históricos, además de sus artesanías, vestidos regionales y expresiones musicales, con arreglo a las leyes de la materia.

CAPITULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 14

Esta ley reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, nombradas por sus integrantes de acuerdo a sus propias costumbres, garantizando la participación efectiva y equitativa de las mujeres y de los jóvenes mayores de dieciocho años, en un marco que respete la soberanía del Estado y la autonomía de sus municipios.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:



Esta ley reconoce y protege **A LOS CONSEJOS DE ANCIANOS DE LAS** comunidades indígenas, nombradas por sus integrantes de acuerdo a sus propias costumbres, garantizando la participación efectiva y equitativa de las mujeres y de los jóvenes mayores de dieciocho años, en un marco que respete la soberanía del Estado y la autonomía de sus municipios.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 15

Las comunidades indígenas y sus integrantes tienen el derecho de promover por sí mismos o a través de sus autoridades tradicionales de manera directa y sin intermediarios cualquier gestión ante las autoridades. Sin menoscabo de los derechos individuales, políticos y sociales.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Las comunidades indígenas y sus integrantes tienen el derecho de promover por sí mismos o a través de **SU CONSEJO DE ANCIANOS** autoridades tradicionales de manera directa y sin intermediarios cualquier gestión ante las autoridades. Sin menoscabo de los derechos individuales, políticos y sociales.

TITULO SEGUNDO. DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA EN EL ESTADO DE MÉXICO CAPITULO I. DE LA AUTONOMÍA

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 20

Las comunidades indígenas podrán formar asociaciones para los fines que consideren convenientes, en el marco de la Constitución General de la República y la Particular del Estado de México.

Tienen derecho de conservar libremente su toponimia, cultura, lengua y formas de organización, del pueblo indígena al que pertenezcan. Por cuanto a sus relaciones



con pueblos indígenas fuera del territorio del Estado se estará a lo dispuesto por la Constitución General de la República y la Particular del Estado de México.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Las comunidades indígenas podrán formar asociaciones para **FORTALECER LA CULTURA EN SU LENGUA EN SU PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE, ASÍ COMO EL EJERCICIO DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y AL DISFRUTE DE LOS BIENES QUE TODO ELLO REPRESENTA**, los fines que consideren convenientes, en el marco de la Constitución General de la Republica y la Particular del Estado de México.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 21

Los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural en el contexto del Plan de Desarrollo del Estado de México.

En la entidad, las comunidades indígenas tienen derecho a participar en la formación de los planes y programas de desarrollo estatal y regional y sectorizados, que tengan aplicación en el territorio de la comunidad.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o



utilizan de alguna manera, **PARA PODER TENER ACCESO LIBRE A LOS CENTROS CEREMONIALES, SITIOS SAGRADOS Y CENTROS ARQUEOLÓGICOS.** Y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural en el contexto del Plan de Desarrollo del Estado de México.

En la entidad, las comunidades indígenas tienen derecho a participar en la formación de los planes y programas de desarrollo estatal y regional y sectorizados, que tengan aplicación en el territorio de la comunidad.

SE ADICIONA UN RENGLON EN EL PARRAFO SEGUNDO ARTÍCULO 40 PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 40. Los pueblos y comunidades indígenas asentadas en territorios regionales, municipales o por localidades en el Estado de México, gozan del derecho social a vivir dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas distintas y se garantiza su propio desarrollo contra toda forma de discriminación.

Tienen derecho social a conservar, proteger, mantener y desarrollar sus propias identidades; así como todas sus manifestaciones culturales; por tanto las autoridades **CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, TIENEN EL DEBER DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO** de las funciones **DENTRO DE LOS centros ceremoniales y monumentos históricos, sitios arqueológicos, sagrados, TERRITORIO O YACIMIENTO NATURALES** y de sepultura además de **CUIDAR LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE** sus artesanías, vestidos regionales y expresiones musicales, con arreglo a las leyes de la materia. **PARA TAL FIN, TENDRÁN EN SU PODER EL ACCESO LIBRE Y USO DE LOS MISMOS, EN EL MOMENTO QUE ELLOS DISPONGAN.**



SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTICULO 41

Corresponde a la Secretaría de Educación:

I. En el ámbito de sus atribuciones y presupuestos, apoyar a los pueblos y comunidades indígenas en el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales actuales y en el cuidado de las de sus ancestros que aún se conservan, promoviendo la instalación, conservación y desarrollo de museos comunitarios, tecnologías, artes, expresiones musicales, literatura oral y escrita;

II. Promover ante las autoridades competentes para que éstas provean lo necesario a fin de restituir los bienes culturales e intelectuales que les hayan sido privados a los pueblos y comunidades indígenas sin su consentimiento o aprovechándose de su desconocimiento de las leyes;

III. Dictar las medidas idóneas para la eficaz protección de las ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna, la flora y minerales; tradiciones orales, literaturas, diseños y artes visuales y dramáticas de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando su derecho al respeto pleno de la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural e intelectual;

IV. Promover que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan su derecho a establecer, de acuerdo a la normatividad vigente, sus propios medios de comunicación social en sus propias lenguas;

V. Impulsar la difusión e información de la cultura indígena, a través de los medios de comunicación a su alcance;

VI. Adoptar con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, medidas eficaces para promover la eliminación, dentro del sistema educativo y en la legislación, los prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los indígenas;

VII. Promover entre las universidades, institutos tecnológicos y demás instituciones educativas en la entidad, la prestación del servicio social en las localidades indígenas que por sus características lo requieran.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:



Corresponde a la Secretaría de Educación:

I. En el ámbito de sus atribuciones y presupuestos, apoyar a los pueblos y comunidades indígenas en el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales actuales y en el cuidado de las de sus ancestros que aún se conservan, promoviendo la instalación, conservación y desarrollo de museos comunitarios, tecnologías, artes, expresiones musicales, literatura oral y escrita;

II. Promover ante las autoridades competentes para que estas provean lo necesario a fin de restituir los bienes culturales e intelectuales que les hayan sido privados y usurpados a los pueblos y comunidades indígenas sin su consentimiento o aprovechándose de su desconocimiento, **DE NO PATENTAR SU ARTE Y ESCRITURA ANTE LAS LEYES**;

III. Dictar las medidas idóneas para la eficaz protección de las ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna, la flora y minerales; tradiciones orales, literaturas, diseños y artes visuales y dramáticas de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando su derecho **AL RESPETO PLENO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LO TANGIBLE E INTANGIBLE PARA CONTROLAR** la protección de su patrimonio cultural e intelectual;

IV. Promover que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan su derecho a establecer, de acuerdo a la normatividad vigente, sus propios medios de comunicación social en sus propias lenguas;

V. Impulsar la difusión e información de la cultura indígena, a través de los medios de comunicación a su alcance;

VI. Adoptar con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, medidas eficaces para promover la eliminación, dentro del sistema educativo y en la legislación, los prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los indígenas;

VII. Promover entre las universidades, institutos tecnológicos y demás instituciones educativas en la entidad, la prestación del servicio social en las localidades indígenas que por sus características lo requieran.



SE PROPONE REFORMAR EL ARTICULO 44

Los pueblos y comunidades indígenas, así como las madres y padres de familia indígenas, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación del Estado de México y del Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, tendrán derecho a participar socialmente en el fomento de la instrucción y enseñanza en sus propias lenguas.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Los pueblos y comunidades indígenas, **ASÍ COMO LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS**, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación del Estado de México y del Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, **TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR** socialmente en el fomento de la instrucción y enseñanza en sus propias lenguas.

SE PROPONE REFORMAR EL ARTICULO 44

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a practicar sus propias ceremonias religiosas, tanto en las áreas indígenas como en las que no tienen predominio indígena, respetando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los derechos de terceros.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:



Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a practicar sus propias ceremonias religiosas, **EN LOS CENTROS CEREMONIALES, LUGARES DE CULTO**, tanto en las áreas indígenas como en las que no tienen predominio indígena, **SIN TENER QUE PAGAR POR EL ACCESO A ELLOS**, respetando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los derechos de terceros.

CAPITULO VI. DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PUEBLOS, LAS LOCALIDADES Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 64

Las artesanías, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas, se reconocen como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. La Secretaría del Campo y el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, ejercerán las atribuciones que la ley les encomienda, con arreglo a las prescripciones del presente ordenamiento.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Ayudaran a las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas, se reconocen como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, **AYUDARÁN A REGISTRAR SUS ARTESANÍAS, SU ARTE TANGIBLE E INTANGIBLE CON EL DERECHO DE AUTOR POR COMUNIDAD QUE LO GENERE, PARA EVITAR EL PLAGIO**, ejercerán las atribuciones que la ley les encomienda, con arreglo a las prescripciones del presente ordenamiento.



Lugar de elaboración: Toluca, Estado de México a 05 de julio de 2021.

Proponentes

- **Gloria Hernández Velázquez**

Guía de turistas, cronista, promotora cultural en gestión y metodología para el reconocimiento de pueblos originarios. Zohuatecuhtli del Colectivo Tlanechikol Acolhua de Texcoco

- **Eufrasia Gómez Pérez**

Directora de Asuntos Indígenas del Municipio de Joquicingo de León Guzmán.

- **Martha Isabel Velázquez Gómez**

Colectivo Tlanechikol Acolhua de Texcoco

- **Dulce María Eusevia Peña Reyes**

Direc. Atención a Pueblos Indígenas, Municipio de Xalatlaco

- **Noé Valentín Sánchez**

Responsable de Pastoral de Pueblos Indígenas, Jefe de Danza Mazahua

- **Miroslava Borbollon Cortez**

Directora de Asuntos Indígenas del Municipio de Xonacatlán

- **Claudia Rocío Mercado Estrada**

Lic. Profa. Terapeuta y Promotora de Cultura. Primera Palabra Kalpulli Acolhua Ehekatekpatl de Texcoco. Tlapitztekatl del Colectivo Tlanechikol Acolhua de Texcoco



Anexos

SUSTENTACIÓN AL ARTÍCULO PRIMERO

Art. 4 Constitucional

(Párrafo 9) Toda persona tiene derecho al acceso a la Cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la Cultura atendiendo a la diversidad Cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Art. 2 del Convenio 169 de la OIT

Inciso b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

Art. 6 de la Ley Gral. De los Derechos Lingüísticos de la Cultura Indígena

(párrafo único) El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Art. 13 de la Ley Gral. De los Derechos Lingüísticos de la Cultura Indígena párrafo 1



Fracción I

Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes:

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

Art. 25 de la Ley Gral. De los Derechos Lingüísticos de la Cultura Indígena

(párrafo único) Las autoridades, instituciones, servidores y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en la presente ley serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la responsabilidad de los servidores públicos y sus leyes reglamentarias.

Art. 73 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fracción XXV.

(párrafo único) De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés



nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

Art. 3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fracción V.

(párrafo único) Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

SUSTENTACIÓN AL ARTÍCULO TERCERO

Art. 6 Constitucional - Artículo reformado DOF 17-11-1942, 31-12-1974

(Párrafo 1) La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

(Párrafo 2) reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013



Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Art. 7o. Constitucional

(Párrafo 1) Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

(Párrafo 2) Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Art. 4 de la Ley general de archivos

Fracción XVIII

Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos digitales a largo plazo.

Art. 5 de la Ley general de archivos

Fracción I

Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, para la adecuada preservación de los documentos de archivo;



Art. 5 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas

(párrafo 1) Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

Art. 11 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Art. 6 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Art. 9 de los Derechos de los Hablantes de Lenguas Indígenas



Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.

Art. 12 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

La sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los pueblos y las comunidades indígenas serán corresponsables en la realización de los objetivos de esta Ley, y participantes activos en el uso y la enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la rehabilitación lingüística.

Art. 13 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes:

- IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución de las lenguas indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional;
- V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y su literatura;
- VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate;
- VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias, así como, promover su enseñanza;
- VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones depositarias que conserven los materiales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales



- XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español
- XII. Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga conocimientos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios;
- XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero;
- XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación, y

Art. 44 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Los pueblos y comunidades indígenas, así como las madres y padres de familia indígenas, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación del Estado de México y del Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, tendrán derecho a participar socialmente en el fomento de la instrucción y enseñanza en sus propias lenguas

- e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo.
- f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de

Art. 2 de la Lectoescritura en Lenguas Indígenas Nacionales.

El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades.

- XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso en el territorio.



IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la información y documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas nacionales.

a) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como comunidades indígenas, y de las instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Art. 21 la Lectoescritura en Lenguas Indígenas Nacionales.

El patrimonio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará con los bienes que enseguida se enumeran:

La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal, a través del Presupuesto de Egresos.

II. Con los productos que adquiera por las obras que realice y por la venta de sus publicaciones, y los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones públicas o privadas.

Art. 22 la Lectoescritura en Lenguas Indígenas Nacionales.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Apartado B, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos.



REFORMA AL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO EN MATERIA DE DERECHOS INDIGENAS Y AFROMEXICANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia de hacer mención respecto a la reforma del Código Electoral del Estado de México se deriva de los grandes acontecimientos en los cuales se encuentra actualmente nuestro país en materia de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, como bien se sabe desde hace más de 50 años se vive bien marcada una lucha social en cuanto al reconocimiento de los derechos de dichas comunidades, buscando alcanzar la igualdad en la toma de decisiones, derivado a que hemos sido marginados y alejados en la participación política del país renegando nuestros sistemas normativos.

A pesar de lo anterior, quiero destacar que derivado de varios acontecimientos históricos, se ha avanzado en este estrecho camino, hora bien con la participación directa y las aportaciones que pudiéramos agregar para hacer realidad estos sueños es una situación inédita y para ello es importante participar directamente en estas reformas, reconozco la estrategia de trabajo que nos brinda este “Parlamento Abierto”.

Quiero hacer mención que la comunidad indígena hemos logrado hacernos visibles en las leyes actuales encontrando nuestro respaldo a nivel internacional en el convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como a nivel nacional establecido en la art. 2º de nuestra carta magna, constitución local y leyes y reglamentos. Para tal efecto, las constituciones y leyes de las entidades federativas deben reconocer y regular tales derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.



PROPUESTA

Se propone modificar el artículo 23

Artículo 23. Los municipios constituyen la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, y su gobierno corresponde a un cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento, integrado por una jefa o un jefe de asamblea llamada presidenta o presidente municipal y por las regidurías y sindicaturas electas según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, **así como Representantes de los pueblos indígenas**, residentes y afroamericano, **en el ayuntamiento, de los municipios reconocidos en la Ley de Derechos Indígenas, atendiendo la paridad de género y observando los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico y libre determinación**, conforme a las normas establecidas en este Código.

Se propone modificar el párrafo cuarto.

Los pueblos ~~y comunidades~~ indígenas **residentes y afroamericanos** tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante **en los** Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas **sistemas normativos**, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres, y garantizando el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. de la Constitución Federal, de manera gradual.

Rocío Silverio Romero, Representante indígena de Temoaya

Temoaya, México a 30 de junio del 2021.

TITULO DE LA INICIATIVA

“PROCURADURÍA DE LA DEFENSA INDÍGENA”

Tema “Acceso a la justicia”

1ª. INICIATIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“El acceso a la justicia del Estado de México, ha sido un problema histórico para los habitantes de los pueblos y las comunidades indígenas del país, sobre todo en el Estado de México por su diversidad y pluriculturalidad, cuando el actual marco jurídico establece el derecho de acceso a la justicia de dichos pueblos y comunidades. Existen importantes vacíos legales que impiden una adecuada garantía del mismo, en particular los problemas se centran en que el sistema de justicia tiende a criminalizar la pobreza, lo que implica que, cuando una persona indígena se encuentra involucrada en un proceso legal, tiene enormes dificultades para probar su inocencia

Otro problema es que no hay recursos adecuados para hacer que los derechos colectivos que son centrales para la vida de los pueblos es que se haga justicia rápida y expedita.

Por último, en muchos ámbitos del sistema de justicia, prevalece una falta de conocimiento en los niveles municipales y estatales, por lo que los pueblos indígenas enfrentan estructuras que están lejos de comprender y aceptar la existencia de una pluralidad de sistemas jurídicos, conflictos que sólo con una perspectiva de pluralismo jurídico se podrían resolver.

En términos generales, es posible afirmar que nuestro marco constitucional y las instituciones públicas no están diseñadas para atender la pluralidad cultural y jurídica de la Nación. No hay suficientes intérpretes y traductores, ni consideraciones a las distancias y la desigualdad persistente entre amplios sectores de la población indígena y afroamericana; asimismo, se debe destacar la baja presencia de funcionarios indígenas o de personas con capacidad de entendimiento de las culturas indígenas,. De sus usos y costumbres, que se reconozcan como tales, en las fiscalías, los juzgados y los tribunales del país.

Esta falta de pertinencia cultural del sistema de justicia, se refleja desde la falta de identificación de la población indígena en los procesos legales, lo que desencadena una serie de dificultades para ejercer sus derechos respectivos, tanto en los juicios civiles y penales, como agrarios, administrativos y laborales y de las mismas autoridades de seguridad pública, municipales, estatales y federales y en ciertos casos por integrantes del la

Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y otras corporaciones con respecto a los Derechos Humanos Internacionales con los países que México es participante desde hace muchos años.

Por una parte, hay una mala capacitación para las personas que prestan el servicio, y por otra, el presupuesto para garantizar este derecho es prácticamente inexistente. También es notoria la ausencia de una coordinación interinstitucional adecuada para ofrecer intérpretes y traductores a las instancias que los requieren.

De acuerdo con el Padrón elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), existen solamente 1 649 intérpretes acreditados en todo el país, y de acuerdo con el último Informe de la entonces Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, el cuerpo de defensores públicos bilingües a nivel federal se integra solamente por 25 integrantes. Cabe destacar que el derecho al uso, la revitalización y la preservación de las lenguas indígenas abarca una amplia gama de derechos colectivos, como ha sido señalado en la “Declaración de Los Pinos (Chapoltepek)”, de cara al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2019. Con relación al tema de acceso a la justicia, el caso de las mujeres indígenas requiere una mención especial. De acuerdo con un grupo de organizaciones, uno de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas es el desconocimiento de sus derechos, además de que no saben a qué instancias pueden acudir para hacerlos valer. De acuerdo con el Informe Sombra elaborado por ese grupo de organizaciones, para el cual se entrevistaron a 160 mujeres, una de cada cinco mujeres indígenas no acuden a las instituciones por falta de recursos para trasladarse a ellas, dado que les resultan distantes e inaccesibles; asimismo, afirman que las instituciones no cuentan con los recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes para actuar.

En contraste con el precario acceso de los pueblos indígenas a la justicia oficial, desde mediados del siglo pasado diversos estudios sociales han analizado las formas de organización jurídica y política de las comunidades indígenas, mostrando su enorme capacidad para establecer estructuras de autoridad propia, así como mecanismos de justicia, orden y distribución en sus diferentes ámbitos de competencia. Estos estudios, aunados a la información empírica que cualquier persona que visite las regiones indígenas puede constatar, dan la pauta para afirmar que la mayoría de las comunidades indígenas tienen normas, instituciones y procedimientos para elegir a sus autoridades, resolver conflictos y definir parámetros de convivencia organizada.

En la mayoría de los casos, las asambleas generales comunitarias constituyen su autoridad máxima, en ellas se actualizan los valores y principios colectivos que vienen de tradiciones de larga data, y de ellas emanan normas, autoridades y se legitiman sus procedimientos. Es así como estos pueblos, con una organización

que nace desde abajo, han conservado los principios y valores que rigen la vida comunitaria, entre los que destacan el trabajo colectivo y gratuito (que en algunas regiones se llama tequio, faena, fajina o mano vuelta), la solidaridad, la ayuda mutua o reciprocidad, las fiestas y el servicio gratuito en el ejercicio de los cargos públicos.

Sin embargo, por lo general, estas formas de organización social y política no cuentan con suficiente reconocimiento por parte de las instituciones gubernamentales, lo que genera contraposición jurídica y descoordinación institucional entre los pueblos indígenas y el Estado, siendo éste uno de los factores que han venido debilitando el tejido social en las regiones indígenas y afromexicanas.

I. PLANTEAMIENTO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

Párrafo adicionado DOF 15-09-2017

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Párrafo reformado DOF 29-01-2016

Nadie puede ser apisionado por deudas de carácter puramente civil.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece

TITULO SEGUNDO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS

(Se Reforma la Denominación mediante decreto número 437 de la “LVII” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 3 de mayo 2012).

Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.

(Reformado mediante decreto número 103 de la “LIX” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 25 de julio del 2016). (Reformado mediante decreto número 343 de la “LVII” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de septiembre del 2011).

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia y esta Constitución para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Adicionado mediante decreto número 437 de la “LVII” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 3 de mayo 2012).

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y respetar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(Adicionado mediante decreto número 437 de la “LVII” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 3 de mayo 2012).

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado garantizará la vigencia del principio de igualdad, combatiendo toda clase de discriminación.

(Reformado mediante decreto número 103 de la “LIX” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 25 de julio del 2016).

(Adicionado mediante decreto número 163 de la “LV” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de septiembre del 2005; Reformado mediante decreto número 75 de la “LVII” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 13 de abril del 2010.)

El hombre y la mujer son iguales ante la ley, ésta garantizará el desarrollo pleno y la protección de la familia y sus miembros por ser base fundamental de la sociedad. Bajo el principio de igualdad consagrado en este precepto, debe considerarse la equidad entre hombre y mujer, en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son el educativo, laboral, político, económico, social y en general, todos aquellos que dignifiquen a la persona, por consiguiente las autoridades deben velar porque en los ordenamientos secundarios se prevean disposiciones que la garanticen. (Adicionado mediante decreto número 163 de la “LV” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de septiembre del 2005; Reformado mediante decreto número 152 de la “LVII” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de septiembre del 2010).

El Estado de México garantizará el Derecho Humano a la Ciudad, entendiéndose como un derecho de las colectividades, con el cual se busca lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial; buscando que los grupos vulnerables y desfavorecidos logren su derecho.

(Adicionado mediante decreto número 67 de la “LX” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 03 de julio del 2019;

El derecho a la ciudad se garantizará a través de instrumentos que observen las funciones social, política, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad, determinados por ordenamientos secundarios que prevean las disposiciones para su cumplimiento.

(Adicionado mediante decreto número 67 de la “LX” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 03 de julio del 2019;

Los anteriores ordenamientos incluyendo las declaratorias, acuerdos, convenios internacionales, con respecto a los Derechos de los Pueblos o poblaciones Indígenas, Derechos Humanos, por parte de la ONU, OEA, OIT, de los cuales México forma parte, establecen el “Acceso a la Justicia” como un concepto jurídico para ser aplicado en forma universal.

ADICION:

Con base en los párrafos anteriores, se propone la creación de un Órgano Autónomo adscrito al poder judicial como “Procuraduría de la Defensa Indígena” con todos los poderes que en derecho procedan, con toda su infraestructura Administrativa, Técnica y Operativa para establecer el primer contacto en defensa de los habitantes de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas y afroamericanas o migrantes.

Teniendo entre sus funciones el Sensibilizar a los encargados de impartición de justicia en ministerios públicos y fiscalías desde una perspectiva de género, derechos humanos y perspectiva intercultural.

Este Órgano Autónomo tendrá entre sus prioridades la aplicación de la Ley de acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes y adultos indígenas del Estado de México, a una vida libre de violencia, con el personal calificado que brinde atención calificada, debiendo la legislatura destinar el presupuesto necesario para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de violencia, estableciendo objetivos y estrategias eficaces que den seguimiento a los casos, que van desde la denuncia, otorgamiento de medidas cautelares, hasta la reparación del daño. Instalando instituciones de este nivel en los municipios.

Así mismo se propone establecer acciones específicas para servidores que incurran a la violencia institucional.

2ª. INICIATIVA

INICIATIVA EN MESA DE ACCESO A LA JUSTICIA

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades originarias a la libre determinación y a la autonomía para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, teniendo

el derecho a procedimientos apegados a los principios de la justicia, democracia, respeto de los derechos humanos, igualdad, no discriminación, buena gobernanza y la buena fe, respetando los preceptos de esta Constitución.

Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, desde el momento de la privación de libertad, para ello el Instituto de la Defensoría Pública instrumentará programas para capacitar a defensores de oficio bilingües y con conocimientos suficientes sobre la cultura, usos y costumbres de los pueblos indígenas, a fin de mejorar el servicio de defensa jurídica que proporcione la autoridad.

Los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos, debiendo dar preferencia a tipos de sanción distintos de la privación de libertad.

Las autoridades de los pueblos originarios para el arreglo de conflictos y controversias tienen derecho a determinar las responsabilidades para con sus comunidades, para su pronta solución, así como a la reparación efectiva de la vulneración de sus derechos.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, las legislaturas de los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas presupuestales destinadas al cumplimiento de estas obligaciones.

Fuentes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2º, apartado A, fracción VIII.

Convenio de la OIT 169 artículos 9º, 10º, 11º, y 12º

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México en el capítulo III, Procuración y Administración de Justicia del artículo 32º al 46º.

Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 35º, 40º, 46º.

Formulada por la mesa de Acceso a la Justicia, del parlamentario abierto. Coordinador de la Mesa: Santos Ismael Alvarado de Jesús, integrantes, Marivel Sánchez Nava, Efrén González Maíz.

Texcoco, Estado de México a 4 de julio de 2021

Ismaelalvarado_14@hotmail.com



DERECHO A LA SALUD (FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPUESTA DE MODIFICACION, REFORMAS Y ADICIONES AL ART, 17 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO EN MATERIA DE SALUD TRADICIONAL.

Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, REFORMAS Y ADICIONES AL ART 17, ART 20 Y ART 39 DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA

Son bastantes las necesidades de nuestra Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas, residentes y afromexicanos del Estado de México , ya que, con frecuencia no ha sido valorada en los servicios de salud. Asimismo, el “derecho a la salud” según está reconocido jurídicamente, no obstante, la Medicina Tradicional Mexiquense en la realidad está desvinculada de las necesidades de atención de los pueblos originarios; quienes exigimos que el ejercicio de este derecho sea aplicado bajo nuestra organización y pertenencia cultural

Declaro que la medicina tradicional ancestral de acuerdo a nuestros usos y costumbres, es la primera forma de aproximarse para obtener la salud y el bienestar; Los pueblos indígenas sustentamos el conocimiento sobre la salud y enfermedad en fundamentos y raíces de origen prehispánico que hemos acumulado a través de la historia , basados en la interpretación del mundo (cosmovisión) y en la observación, aplicación de las practicas médico-



espirituales que nos han sido transmitidas de generación en generación (tradición oral)

Los Derechos de los Pueblos Indígenas , residentes y afroamericanos del Estado de México , Considerando los convenios, acuerdos, declaraciones, planes municipales, estatales, nacionales e internacionales, la ley general de salud, entre otros; están dirigidos específicamente al campo de la salud y la medicina tradicional, dónde mujeres y hombres defienden sus usos y practicas ceremoniales medico--mágico- espiritual , con la intención de ser valorados , respetados y defendidos por la ley de nuestro Estado Libre y Soberano de México.

los Pueblos Indígenas, Residentes y Afroamericanos tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico tradicional.

El Estado garantizará el derecho de los pueblos Originarios, Residentes y afroamericanos del Estado de México a acceder a su jurisdicción para proteger sus conocimientos Ancestrales; de la misma manera reconocerá y respetará el desarrollo de la medicina tradicional Ancestral y sus programas de prestación de salud, de atención primaria.

Reconoce que la Medicina tradicional Ancestral constituye una parte sustancial del patrimonio cultural y es recurso fundamental para la salud de la población originaria y de la población en general.



Reconoce que los conocimientos de la Medicina tradicional son propiedad colectiva de los pueblos y no apropiable por particulares. Deberá promover medidas para proteger, registrar, conservar y desarrollar los conocimientos tradicionales.

Reconoce que los hombres, mujeres medicina y parteras, son médicos tradicionales en trato igualitario, donde se garantizará la inclusión sin discriminación alguna.

Promoverá el desarrollo de la medicina tradicional de los pueblos originarios y su práctica en condiciones adecuadas y dignas, respetando sus formas y metodología de los mismos y el manejo sustentable de plantas medicinales endémicas, y la autosuficiencia productiva de las comunidades originarias.

PROPUESTA

PROPUESTA DE MODIFICACION, REFORMAS Y ADICIONES AL ART, 17 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO EN MATERIA DE SALUD TRADICIONAL.

ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO(modificación y Adición al párrafo 3ro)

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los



Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena. El Estado favorecerá la educación básica bilingüe.

La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud Donde El Estado garantizará el derecho de los pueblos Originarios, Residentes y afromexicanos del Estado de México a acceder a su jurisdicción para proteger sus conocimientos Ancestrales; de la misma manera reconocerá y respetará el desarrollo de la medicina tradicional Ancestral y sus programas de prestación de salud, de atención primaria; educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás habitantes.



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, REFORMAS Y ADICIONES AL ART 17, ART 20 Y ART 39 DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA

TITULO SEGUNDO. DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA EN EL ESTADO DE MÉXICO. CAPITULO I. DE LA AUTONOMÍA

Artículo 17.- Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanos del Estado de México el derecho a la libre determinación de su existencia, tienen derecho a la salud aprovechando debidamente la medicina tradicional y convenir en lo conducente con cualquier otro sector que promueva acciones en esta materia,

Se reconoce que la Medicina tradicional Ancestral, constituye una parte sustancial del patrimonio cultural y es recurso fundamental para la salud de la población Indígena,redidente y afromexicano.

Así mismo tienen derecho social a determinar, conforme a la tradición de cada uno, su forma de realizar un tratamiento alternando las recomendaciones de su curandero o sabio de su comunidad y el médico tratante, para así poder ejercer con autonomía todos los derechos que esta ley reconoce a dichos pueblos y comunidades.

Reconoce que los hombres y mujeres medicina y parteras, son médicos tradicionales, y que en trato igualitario se garantizará la inclusión, sin discriminación alguna, garantizando el respeto al uso de los conocimientos y practicas tradicionales ancestrales



Artículo 20.- Las comunidades indígenas, residentes y afromexicanos podrán formar asociaciones para fortalecer la cultura en su lengua en su patrimonio tangible e intangible , así como el ejercicio de la medicina tradicional en espacios adecuados o acordados por los mismos pueblos y al disfrute de los bienes que todo ello represente, los fines que consideren convenientes, en el marco de la Constitución General de la República y la Particular del Estado de México.

TITULO TERCERO. DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

CAPITULO I. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Artículo 38.- Los miembros de los pueblos y de las comunidades indígenas establecidas en territorios regionales, municipales o por localidad en el Estado de México, tienen derecho a la salud, por lo que se promoverá su acceso efectivo a los servicios de salud y asistencia social; de igual modo, el Estado promoverá el desarrollo de la medicina tradicional de los pueblos originarios y su práctica en condiciones adecuadas y dignas, respetando sus formas y metodología de los mismos y el manejo sustentable de plantas medicinales endémicas, y la autosuficiencia productiva de las comunidades Indígenas, residentes y afromexicanos.

Artículo 39.- La Secretaría de Salud, en el ámbito de su competencia, garantizará el acceso efectivo de los pueblos y comunidades indígenas a los servicios de salud pública que otorga el Estado, aprovechando debidamente la medicina tradicional sosteniendo el derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas animales y minerales de interés vital desde el punto de vista



médico tradicional, y convenir en lo conducente con cualquier otro sector que promueva acciones en esta materia.

Reconoce que los conocimientos de la Medicina tradicional son propiedad colectiva de los pueblos y no apropiable por particulares. Deberá promover medidas para proteger, registrar, conservar y desarrollar los conocimientos tradicionales

Para efectos del párrafo anterior la Secretaria de Salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional y convenir en lo conducente con cualquier otro sector que promueva acciones en esta materia. promoverá, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las autoridades correspondientes, programas para la construcción y mejoramiento de clínicas de salud regionales en donde sea incluyente la medicina tradicional de cada comunidad, promoviendo y diseñando un modelo de consulta integral primaria para poder dar atención a la población cimentando su cosmovisión, usos y costumbres logrando la integración de las

prácticas médico-mágico ceremoniales en la sociedad contemporánea, así como para el funcionamiento de unidades móviles de salud en las comunidades indígenas más apartadas, donde se deben incluir trípticos, folletos e información en la lengua materna de cada lugar. Además la secretaria en alianza de los pueblos Indígenas, residentes y afroamericanos desarrollará cruzadas de medicina intercultural (Ciencia y tradición).

Asimismo, dispondrá de las medidas necesarias para que el personal que preste sus servicios en los pueblos y comunidades indígenas, cuente con los conocimientos básicos sobre la cultura, costumbres y lenguas propias de estas comunidades; apoyándose, en su caso, de traductores e intérpretes en



lenguas indígenas, mediante la celebración de convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de este fin. Fomentando servicios mixtos de salud donde se proporcione el desarrollo de ambos modelos de atención: Medicina Alópata y Medicina Tradicional

Marco legal.

- 1. Artículo 4° y 2° Constitucionales.**
- 2. Ley General de Salud. Art. 6, VI bis**
- 3. Norma Oficial Mexicana NOM-007: Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.**
- 4. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas art. 12, 21 y 24, 24.1 y 31**
- 5. Convenio 169 de la OIT Art 24 y 25**
- 5. El derecho a la salud de los pueblos indígenas CNDH**
- 6. Plan Nacional de Desarrollo.**
- 7. Programa de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas**
- 8. Convenio INPI – COFEPRIS.**

TOLUCA MÉXICO A 29 DE JUNIO DEL 2021

PROPONENTES :

Mesa 11 derecho a la Salud (fortalecimiento de la medicina tradicional)

Miguel Angel Pavón Avila

Marcelino Estrada Tomas

Eufrasia Gómez Pérez



INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA CONSTITUCION POLITICAN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2019 el Gobierno Federal llevó a cabo 52 Foros Regionales para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, en el que se recogieron y sistematizaron opiniones, ideas y propuestas de los pueblos indígenas y afromexicano. En estos foros se plantearon temas que históricamente ha demandado el movimiento indígena, por lo que los resultados que se obtuvieron son optimistas y más aún, se han validado en asambleas regionales, mismas que actualmente se están llevando a cabo hasta las comunidades.

La Propuesta Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano presentada a nivel nacional se ha recibido de manera positiva y se tiene plena confianza en que con ello se resarcirán algunos de los pendientes que se tienen en el ejercicio pleno de los derechos indígenas. Las iniciativas se fundamentan en la necesidad de reconocer lo siguiente:

La armonización de nuestro marco constitucional, legal e institucional con relación a los importantes avances que se han dado en el derecho internacional, es necesaria e indispensable, y representa uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país. Lo anterior se afirma, principalmente, por que tanto el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADIN) reconocen a los pueblos indígenas como sujetos titulares de derechos.



La ausencia de esta armonización ha traído como lamentable consecuencia que los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el derecho internacional no se implementen de manera efectiva, como lo demandan las circunstancias y realidades cotidianas que viven dichos pueblos.

No basta con tener el reconocimiento formal de derechos, sino que es indispensable que se establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y justiciabilidad a fin de que se perciba al Estado como una entidad legítima e incluyente, situación que sólo se alcanzará mediante mecanismos de mayor participación ciudadana, con mayor razón tratándose de sectores que, como los pueblos indígenas y afroamericano, han estado marginados y excluidos en la toma de decisiones.

Bajo esta consideración, en la presente Iniciativa, se plantean un conjunto de modificaciones institucionales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos colectivos. Por una parte, mediante el reconocimiento de instituciones que los propios pueblos han desarrollado como formas propias de organización; y por otra, con la creación de instituciones que atiendan de manera específica y especializada las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas y afroamericano.

Las nuevas normas y los mecanismos que se proponen se cimientan en la naturaleza multiétnica y pluricultural de nuestra sociedad, de invaluable valor en un mundo cada vez más global y homogéneo, y tienen como finalidad modificar las actuales estructuras jurídicas, políticas y económicas del Estado, a fin de que todos los pueblos de esta tierra tengan un lugar justo y digno. En este sentido, constituyen una importante contribución al proceso de transformación de la vida pública nacional, para que México realmente sea la casa de todas y todos.

Por ello es importante adicionar en el primer párrafo del artículo 3 de la Constitución, que el Estado de México adopta la forma de gobierno, además de las señaladas la **pluricultural**, como principio mediante el cual se reconocen los diversos pueblos



que coexisten en el territorio mexiquense y que estos pueblos tienen formas propias de organizarse y regirse en su interior.

En este sentido, también se propone modificar el párrafo tercero del artículo 5 Constitucional para establecer que, en relación con la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, deberá realizarse de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como los **principios de pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico**.

Se deberá garantizar que la migración sea por libre decisión y no por necesidad. Para ello, el Estado de México impulsará políticas, programas y proyectos que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales, lingüísticos y laborales que reduzcan la migración de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, así como velar por el respeto de los derechos de las comunidades indígenas residentes.

Por ello, se propone adicionar al párrafo cuarto del artículo 5, para establecer el deber estatal de garantizar que la migración sea por libre decisión y no por necesidad. Para ello, el Estado impulsará políticas, programas y proyectos que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales, lingüísticos y laborales que reduzcan la migración de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, así como velar por el respeto de los derechos de las comunidades indígenas residentes.

Se propone establecer que los pueblos y las comunidades afromexicanas tienen el carácter de sujetos de derecho público. Sobre esta base, la presente Iniciativa constituye un avance sustancial en el enfoque y tratamiento de este importante tema, en virtud de que se conceptualiza y reconoce una serie de derechos colectivos a los pueblos y las comunidades afromexicanas, que complementan los derechos



individuales que hoy día tienen sus habitantes. De esta manera, como ha sucedido con los pueblos indígenas, se llena una laguna en el ordenamiento jurídico y se sienta un importante precedente normativo que contribuye a superar la perspectiva individualista o, en el mejor de los casos, de minoría étnica, bajo el cual ha sido tratada la cuestión de los afrodescendientes.

En función de lo anterior, se propone adicionar un párrafo quinto al artículo 5. Constitucional, para establecer que los pueblos y personas indígenas y afroamericanas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a ser protegidos contra el racismo y todo tipo de discriminación.

D E C R E T O POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO.

Artículo 3.- El Estado de México adopta la forma de gobierno republicana, representativa, democrática, **pluricultural**, laica y popular.

Artículo 5.-

.....

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, **pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico**. En



consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social **y migratoria**, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado garantizará la vigencia del principio de igualdad, combatiendo toda clase de discriminación.

Los pueblos y personas indígenas y afromexicanas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a ser protegidos contra el racismo y todo tipo de discriminación.

Toluca de Lerdo, 14 de julio de 2021

Proponentes

Aucencio Valencia Largo

Eugenia Hernández Bonilla, ponente



INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO PARA LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INDÍGENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 6, establece:

Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Con medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

Resulta necesario consolidar la democracia en nuestro país a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación, que permitan a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos indígenas influir en la adopción de decisiones de las esferas de competencia de los poderes estatales y en el ámbito municipal; reconocer otros mecanismos de participación que son inherentes a estos pueblos, puesto que los han practicado de manera ancestral o porque con ellos se implementan algunos de sus derechos reconocidos en los ámbitos estatal, nacional e internacional; así como generar espacios de representación política, que permitan a estos pueblos hacer escuchar sus aspiraciones y concretar sus propuestas en los órganos de decisión estatal, a los que hasta ahora no han tenido acceso como entidades colectivas.

Debe considerarse que el artículo 5 de la dnudpi, establece que el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, debe entenderse sin perjuicio del derecho de participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. A



su vez el artículo 18 de dicho instrumento dispone que tienen derecho de participar en la toma de decisiones por conducto de representantes elegidos por los pueblos de conformidad con sus propios procedimientos.

El ejercicio del derecho de participación y representación en el Estado de México sigue siendo un tema pendiente porque no se han establecido los mecanismos suficientes para que los pueblos accedan a los espacios de participación y representación en las distintas esferas de la vida pública. Es el caso de la representación en los ayuntamientos, que está contemplada en los ordenamientos federal y estatal y no logra hacer efectivo este derecho que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se limita al posicionarse solo como figura espectadora, sin incidencia en la toma de decisiones porque no lo ubica como parte de los ayuntamientos y por ende le cancela el derecho a votar en los asuntos que competen a las comunidades que representa.

En los últimos 4 años, la figura de representación indígena en el Estado de México, ha dejado experiencias no gratas en los mecanismos de elección y sobre todo en los espacios de participación, como es el cabildo; ya que no se le informa sobre los temas a tratar, no se le convoca, por lo que no tiene voz para exponer ni escuchar los asuntos que atañen a las comunidades que representa. En este sentido, el representante indígena se ha convertido en una figura prácticamente decorativa, que en poco o nada contribuye a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, derivado del poco interés de los ayuntamientos a darles las condiciones mínimas de participación, es decir, respetar su voz y proporcionarles las condiciones materiales necesarias para el desempeño de su encargo.

Ante ello, se han suscitado JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que logrado posicionar a las y los representantes, pero son 3 o 4 casos aislados, los demás representantes siguen padeciendo la discriminación y la exclusión por parte de los ayuntamientos



El respeto al derecho a la libre determinación conlleva que los pueblos y comunidades indígenas fortalezcan sus instituciones propias, sus ordenamientos jurídicos, sus asambleas como máxima autoridad, sus sistemas de cargos, entre otros; además de posibilitar la protección de su territorio, medio ambiente, recursos naturales, sitios sagrados, y todos los demás elementos que conforman su espacio territorial.

El derecho a la libre determinación y autonomía implica:

- El derecho de los pueblos y comunidades indígenas de poder vivir bajo sus formas de organización social, económica, política y cultural.
- Nombrar a sus autoridades según sus propias normas y procedimientos electorales
- Aplicar sus sistemas normativos para la resolución de sus conflictos y el nombramiento de autoridades, preservar y enriquecer su cultura e identidad
- Elegir representantes en los ayuntamientos en los municipios con población indígena
- A ser consultados antes que se promulgue cualquier ley o se tome cualquier medida que les pueda afectar.

Se considera necesario hacer expreso el derecho de participación y representación política de los pueblos indígenas, a través de representantes electos de acuerdo a sus sistemas normativos y sentar las bases del reconocimiento de los mecanismos para lograrlo tanto a nivel federal como en las entidades federativas y en el ámbito municipal. Es necesario que dichos pueblos tengan una representación, fruto de sus propias formas colectivas de organización política y de gobierno.

Es preciso mencionar que la propuesta que se presenta esta armonizada con la Propuesta de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano que está en proceso de análisis y validación por en los pueblos y comunidades indígenas, por lo que tiene todo un sustento jurídico.



PROPUESTA

Se adiciona un párrafo tercero y cuarto al artículo 15

Artículo 15.-

....

Los municipios con presencia de comunidades indígenas integrarán sus ayuntamientos con representantes de éstas, quienes serán electos de conformidad con sus sistemas normativos y formas propias de elección.

En el caso de las y los representantes de los pueblos indígenas, además de los señalados en el párrafo anterior, deberán haber tenido cargos comunitarios, ser apartidista, laico.

Se adiciona la fracción V al artículo 16

Artículo 16.-

...

V. Dos Representantes de los pueblos indígenas, atendiendo la paridad de género en los municipios reconocidos en el catálogo autorizado por la legislatura local. Los municipios pluriculturales, podrán tener dos representantes por cada pueblo indígena, residente o afromexicano en él establecido. Contará con voz y voto en el cabildo.

Se propone adicionar un quinto párrafo al artículo 28

Artículo 28.-



Los ayuntamientos deberán notificar de los todos los asuntos a tratar en cabildo al representante de los pueblos indígenas, residentes y afomexicano, con 96 horas de anticipación, proporcionando la información relacionada, con la finalidad de maximizar y garantizar el derecho que asiste a las comunidades para tomar parte en la toma de decisiones relacionadas con su comunidad, propiciar la mayor deliberación para la vida municipal en su integridad y de las comunidades en su particularidad. Se anularán los acuerdos cuando se omita notificar al representante o cuando no se garantice su participación.

Se propone modificar la fracción III del artículo 44

Artículo 44.-

III. Dejar de integrar los consejos de participación ciudadana municipal o de convocar a la elección de las Autoridades Auxiliares **y de representantes de los pueblos indígenas, residentes y afromexicano en el ayuntamiento** previstos en esta Ley;

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 59

Artículo 59.-

...

Tratándose de demarcaciones territoriales en los que se encuentren asentados pueblos o comunidades indígenas, las autoridades auxiliares serán electas de acuerdo a sus sistemas normativos interno, acorde con sus derechos a la libre determinación y por ningún motivo el ayuntamiento podrá designar al delegado o subdelegado municipal.

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 62

Artículo 62.-



Las autoridades auxiliares a que se refiere el Artículo 59, párrafo 2, durarán en su cargo el periodo de la administración municipal y solo podrán ser removidos, según los sistemas normativos de las comunidades.

Se propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 62

Artículo 65.-

La Comisión de Pueblos indígenas, residentes y afroamericano deberá ser presidida por las (los) Representantes del pueblo indígena y en el caso de que sea más de un representante, se acordará colectivamente entre los representantes indígenas electos y reconocidos, quién de la comisión.

Se propone adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 78

Artículo 78.-

....

En los municipios con población indígena, residente y afroamericano, reconocidos en el catálogo autorizado por la legislatura local, la autoridad competente emitirá una convocatoria con la finalidad de invitar a las comunidades a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la Representación Indígena en el ayuntamiento, dicha voluntad será plasmada en un acta que será sellada por la autoridad competente, quien atestiguará y dará fe.

La convocatoria debe ser expedida por la autoridad competente, a más tardar el primer domingo de octubre de la administración que concluye, con su



respectiva traducción a la lengua indígena y publicarse en los lugares más visibles y concurridos en las comunidades indígenas del municipio. La elección se llevará a cabo el segundo domingo del mes de noviembre del año de la administración municipal que concluye. Los representantes electos recibirán su constancia en el tiempo que la autoridad competente lo estipule, tomando protesta el mismo día que las autoridades municipales electas.

Las funciones de los Representantes de los pueblos indígenas en el ayuntamiento son:

- Presidir la Comisión de Pueblos Indígenas**
- Participar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia del Plan Municipal de Desarrollo**
- Participar en la Consulta previa, libre e informada a los Pueblos y Comunidades Indígenas de su demarcación**
- Promover la integración de los Consejos Comunitarios Tradicionales en todas las comunidades indígenas de su municipio**
- Promover el rescate de todas las manifestaciones lingüísticas, culturales y artísticas de los pueblos indígenas desde su propia cosmovisión**
- Dar seguimiento a todos los programas federales, estatales y municipales etiquetados para los indígenas**
- Participar en las diferentes Comisiones de los Consejos municipales, estatales y federales para tomar decisiones con perspectiva intercultural.**
- Las demás que le señalen las disposiciones aplicables**

- Promover la participación de los representantes de las comunidades los diversos cargos**



TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno.

TERCERO.- A partir de su vigencia del presente decreto se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a este decreto.

Lo tendrá por entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los.....

Toluca de Lerdo, 30 de junio de 2021

Proponentes

Proponentes

Aucencio Valencia Largo

Enrique Soteno Reyes

Luis Ángel Ortiz Montoya

Claudio Contreras González

Laura Campana Ortega

Claudio Andrés Bartolo

Silvia Verónica Villela Cima

Santiago Aparicio Ángeles

Rocío Silverio Romero

Miguel Ángel Reyna Castillo



José Germán Garibay Gallardo

Dolores Torres García

Eugenia Hernández Bonilla

Violeta Villegas Díaz

María Juana Peña Rubio

Marivel Sánchez Nava



PROPUESTA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Estado de México, las mujeres indígenas enfrentamos diversas problemáticas en torno al cumplimiento de nuestros derechos humanos, lo anterior como una consecuencia de la desigualdad histórica y estructural que han enfrentado nuestros pueblos, producto de la existencia del machismo, racismo y los estereotipos de género que persisten dentro de la sociedad.

De acuerdo con información de CONEVAL, para el 2018 el porcentaje de mujeres indígenas en condiciones de pobreza fue de 79.7%, cifras similares al año 2008, lo que indica que las acciones y políticas públicas implementadas por el Estado mexicano no sólo han sido insuficientes, sino además indiferentes a este grupo poblacional, y aunque el porcentaje en pobreza extrema se redujo de 47.5% a 39.8%, la tasa sigue siendo alta.

En relación al analfabetismo, en 2018 el 22% de las mujeres indígenas de 15 años o más presentaron todavía esta condición, en contraste con el 5.1% de las mujeres no indígenas. En ese mismo año, sólo el 11.3% de las mujeres indígenas tuvieron la titularidad personal o compartida en la vivienda que habitan, mientras que las mujeres no indígenas el porcentaje fue de 15.6%. En relación la titularidad o tenencia de la tierra, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), en 2020, en los núcleos agrarios certificados, el 26% de las personas ejidatarias o comuneras son mujeres, asimismo, en los 11,732 ejidos y comunidades con órganos de representación vigentes, el 21.3% de las personas integrantes eran mujeres y sólo el 7.5% fueron presididos por una mujer. A estas problemáticas se suman las amenazas a sus territorios por parte de empresas extractivas nacionales o internacionales, megaproyectos de infraestructura y el crimen



organizado, situaciones que han ocasionado migración forzada y pérdida de identidad para los pueblos indígenas.

En el ámbito rural los estereotipos y roles de género persisten. De acuerdo con la ENDIREH 2016, en el ámbito rural, el 24.8% de las personas están de acuerdo con que “los hombres deben ganar más salario que las mujeres”, en el ámbito urbano este porcentaje es de 11.4%. A nivel nacional, el 47.6% considera que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos y el 37.3% está de acuerdo con que “las mujeres deben ser las responsables del cuidado de los hijos, las personas enfermas y los ancianos”.

De acuerdo con datos de la CEPAL, el tiempo promedio de horas semanales que destinan las mujeres mexicanas mayores de 15 años al trabajo no remunerado es de 42.6 horas, mientras los hombres destinan 16.6 horas. La situación se vuelve más compleja para las mujeres indígenas y rurales, quienes además de los quehaceres domésticos y tareas de cuidado, realizan actividades productivas como acarreo de leña y agua para el hogar, triplicándose en muchas ocasiones su jornada de trabajo. Además, estas actividades suelen considerarse una extensión del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, por lo cual se invisibilizan.

Las múltiples formas de violencia que viven las mujeres indígenas representan una problemática muy recurrente en nuestro país y estado, manifestándose en crecientes índices de pobreza, desigualdad y falta de acceso a la salud y oportunidades, sin que hasta la fecha los gobiernos ni instituciones logren establecer mecanismos que garanticen el disfrute pleno de nuestros derechos humanos fundamentales, tanta es la desatención que no existen hasta el momento datos estadísticos desagregados por condición étnica y de género que nos muestren información precisa sobre los tipos de violencias que afectan de manera diferenciada a las mujeres Indígenas. La situación se agrava ya que la mayoría de nosotras nos encontramos en marcada desventaja social: exclusión, racismo y desigualdad, lo que nos deja en un estado vulnerable y de gran riesgo, sin que exista atención especializada integral con enfoque intercultural y de género.



En el contexto actual estamos ante la oportunidad histórica de que el Estado de México a través de su Reforma Constitucional pueda integrar de manera armónica una legislación que favorezcan a los grupos en desventaja social, como son los Pueblos y Comunidades Indígenas que se encuentran asentados dentro de este territorio y en específico a las mujeres indígenas, garantizando ser el marco protector para hacer efectiva la aplicación de los derechos individuales, requisito indispensable para que puedan disfrutarse de los derechos colectivos, es por ello que consideramos necesario que se incorpore de forma transversal la perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, con el objetivo de que se consideren las particularidades que viven las mujeres indígenas.

Al respecto proponemos se tome de referencia y se apliquen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas para armonizar la Reforma Constitucional, enfatizando que se dará especial atención a los derechos de las mujeres indígenas y la infancia en el Estado de México, así mismo se integren las recomendaciones de la CEDAW, La Convención de Belém Do Pará, el Convenio Núm. 169 de la OIT y los instrumentos del que México sea parte, esta precisión permitirá hacerlas visibles, reconocer sus aportes, pero sobre todo focalizar la atención para hacer cumplir, proteger y tutelar los derechos de las mujeres indígenas, creando condiciones de igualdad y respeto a la dignidad humana, cerrando con ello las brechas de desigualdad históricas.

Es así que quienes nos suscribimos mujeres indígenas del Estado de México pertenecientes a los pueblos Mazahua, Otomí, Tlahuica, Nahuatl, Matlazinca, Afromexicanas y población residente de otros estados de la República, siendo miembros del Parlamento Abierto, nos dirigimos al Secretariado Técnico para que se consideren las propuestas que en marco de derecho Constitucional hacemos, así como de los Tratados Internacionales de los que México es parte y que es necesario incorporar para su aplicación en nuestro estado, a fin de lograr tener una Constitución Local con leyes de avanzada en el que todas las personas podamos sentirnos incluidos.



Al respecto se propone la modificación del artículo 5, así como la armonización de la Constitución Local con las reformas actuales que nuestra Constitución Federal establece, específicamente el Art. 2, para que todo su contenido se incluya en el Art. 17 adicionando a la Reforma Constitucional del Estado de México, el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como Sujetos de derecho público con personalidad jurídica Art. 2o., apartado A, último.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ARTÍCULO 5 PARRÁFOS 3, 29, 30 Y 33

Artículo 5.-

...

PÁRRAFO 3

....

Se propone la **Adición** del siguiente párrafo:

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida de forma digna en sus diferentes etapas. Para ello, las autoridades establecerán un sistema integral de cuidados, con pertinencia cultural y de género, que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema deberá atender de forma prioritaria a la población de mayor vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, en situación de codependencia por enfermedad, personas indígenas y adultas mayores.

...

Se propone la modificación del párrafo 29 en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada.



En el Estado de México se fomentará a sus habitantes el cuidado de su salud, procurando que las autoridades atiendan la nutrición adecuada **con pertinencia cultural**, la promoción de la activación física y deportiva de las familias, la alimentación segura, así como los medios para obtenerla, con primordial atención en la calidad de la alimentación que consumen los niños y jóvenes, en esta tarea participarán las dependencias y organismos competentes de la administración pública del Gobierno del Estado de México, así como los correspondientes de los Municipios de la Entidad.

Se propone la adición de los siguientes párrafos:

Se reconoce el derecho a las personas indígenas de mantener, fortalecer y ejercer su medicina tradicional y la partería. El Estado deberá garantizar el establecimiento de un sistema de atención médica intercultural, que incluya la formación de profesionales de la salud y servicios de interpretación y traducción a las personas indígenas.

PÁRRAFO 30

....

ADICION

El Estado deberá garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes indígenas. Para ese efecto deberán implementarse todas las medidas pertinentes desde una perspectiva intercultural y de género, asignando y asegurando los recursos suficientes para prevenir los embarazos y matrimonios a temprana edad así como para atender y sancionar la violencia sexual y de género.

PÁRRAFO 33



El Estado garantizará a toda persona el derecho a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad, sustentabilidad y progresividad.

Se propone la adición del siguiente párrafo:

Es obligación del Estado garantizar que la migración sea por libre decisión y no por necesidad. Por ello, impulsará políticas, programas y proyectos que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, su seguridad e inclusión en los lugares de destino, apoyo para su reconstitución como comunidades indígenas y, en su caso, retorno a sus lugares de origen.

Se establecerán políticas públicas para proteger a las comunidades y personas indígenas migrantes, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, en especial, mediante acciones destinadas a garantizar los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas y de las trabajadoras del hogar.

PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 17

Art. 17

Se propone la modificación en los siguientes términos:

Artículo 17.- El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como **sujetos de derecho público con personalidad jurídica a los** pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena. El Estado favorecerá **e implementará** la educación bilingüe, **intercultural y con perspectiva de género**.

La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos naturales, sus formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. **Las personas indígenas**



tienen derecho a ser asistidas por intérpretes, traductores, defensores y peritos, que tengan conocimiento sobre derechos indígenas, perspectiva de género, diversidad cultural y lingüística.

Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones necesarias, convocando **a las instituciones** incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, educación, **desarrollo comunitario, titularidad y aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales**, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás habitantes.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes **en los Ayuntamientos**, observando el principio de paridad de género, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

Se propone la adición del siguiente párrafo:

Para asegurar la protección integral y el acceso a la justicia para las mujeres indígenas, las autoridades y representantes de los pueblos indígenas deberán realizar acciones coordinadas con los diferentes niveles de gobierno destinadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de toda forma de violencia y discriminación, así como para la reducción de la pobreza.

Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal



y la soberanía estatal. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Se propone la adición del siguiente párrafo:

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas a la participación política y a ser electas en cargos de representación comunitaria y popular en todos los ámbitos y niveles de gobierno; a su participación plena en los procesos de desarrollo comunitario y regional, a la protección integral de su salud; al acceso a la educación intercultural y plurilingüe en los distintos ámbitos y niveles, a la posesión, propiedad, titularidad y aprovechamiento de la tierra, los recursos y bienes naturales; a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación; a las garantías de acceso a la justicia y al respeto pleno de todos sus derechos humanos, desde una perspectiva de género e interculturalidad. Para el cumplimiento de lo anterior, la legislatura y ayuntamientos deberán destinar partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben y se apliquen para el fortalecimiento humano, profesional, económico, cultural y político de las mujeres.

Ponentes: Marilyn Ramón Medellín, María Juana Peña Rubio, Carolina Santos Segundo, Dolores Torres García, Erika De la Cruz Mariano, Ainara Gregorio Francisco.

San Felipe del Progreso, México, 5 de julio de 2021.



LEY QUE CREA EL ORGANISMO AUTÓNOMO DENOMINADO CONCEJO DE PUEBLOS INDÍGENAS, RESIDENTES Y AFROMEXICANOS DEL ESTADO DE MEXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa está fundamentada en los artículos 3,13,14,18,19, 20, 23, 24, 33 y 34, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los artículos 6, fracción 1, incisos a), b) y c), 7, fracciones 1,2 y 3, art. 25 fracciones 1 y 2, art. 27 fracciones 1,2 y 3, art. 33 fracciones 1 y 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 2 párrafo cuarto, apartado “A” fracciones III Y IV, apartado “B” integro, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Gobierno del Estado para atender las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas ha creado instituciones gubernamentales especializadas como el CEDIPIEM o Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, generadora de políticas públicas erráticas desde la definición misma de su población objetivo, 419 647 personas, toda vez que considera indígenas sólo a los hablantes de alguna lengua, violentando con ello el principio de autoadscripción y el Derecho Humano a la propia Identidad, reconocidos por el Derecho Internacional y que de acuerdo a la encuesta intercensal del 2015 son 2’751,672 personas autoadsritas en el Estado de Mexico.

Además, se ha discriminado a los pueblos indígenas que a través del tiempo se han asentado en el territorio estatal provenientes de otras latitudes ya que no aparecen en el catálogo oficial (decreto 157 del 2013), a pesar de ser reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.



Y si fuera poco, la población afromexicana que asciende en nuestra entidad a **304 274** personas, según datos proporcionados por el INPI, ha permanecido invisible para las políticas públicas a pesar de que somos el Estado con mayor cantidad de esta población asentada en su territorio.

Por otra parte, la relación entre el Gobierno y la ciudadanía indígena ha sido desde siempre paternalista, visualizando a nuestros pueblos y comunidades como un resabio de algo en extinción, casi como un desahuciado al que hay que proporcionarle paliativos en lo que le resta de vida, pero del que hay que rescatar la parte folklórica

Sabemos que lo anteriormente expresado no obedece a una acción premeditada ni malintencionada, sino a una cosmovisión totalmente ajena a nuestros pueblos indígenas.

Por ello es que con el propósito de garantizar el ejercicio de la libre determinación, en donde los pueblos indígenas tienen el derecho de crear sus instituciones, que obedezcan a sus propios intereses y aspiraciones en lo político, económico, social y cultural, bajo el amparo de su propia cosmovisión, proponemos crear un órgano autónomo con las características que enseguida se enuncian

LEY QUE CREA EL ORGANISMO AUTÓNOMO DENOMINADO CONCEJO DE PUEBLOS INDÍGENAS, RESIDENTES Y AFROMEXICANOS DEL ESTADO DE MEXICO



CAPÍTULO PRIMERO NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Se crea el Concejo de Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos del Estado de México, como un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones.

Para efectos de esta Ley, cuando se haga referencia al CPIRAEM o Concejo, se entenderá que se trata del Concejo de Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos del Estado de México.

Artículo 2.- El CPIRAEM tiene como objeto garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la normatividad internacional, nacional y local a los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos en el Estado de México.

Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto el CPIRAEM tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Defender a los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos en el Estado de México, así como a sus comunidades en lo colectivo y a sus miembros en lo individual, ante violaciones a los derechos reconocidos en la Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos del Estado de México
- II. Actuar como interlocutor de las instancias del Gobierno Estatal y los pueblos y comunidades originarias, migrantes y afromexicanas y ser enlace con los organismos que tengan el mismo objetivo, procurando que en su actuación se reconozcan, protejan y respeten sus sistemas normativos tradicionales, valores culturales, religiosos



y/o espirituales

- III. Intervenir en casos de controversias entre las autoridades municipales y las comunidades indígenas, para propiciar acuerdos conciliatorios;
- IV. Promover y difundir el respeto a los Derechos Humanos y en particular los reconocidos a los Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos desde una perspectiva intercultural.
- V. Promover, realizar y participar en foros, congresos, seminarios y demás eventos relacionados con su objeto.
- VI. Actuar como Órgano Técnico de Consulta en los términos que señala la Ley de Consulta Indígena y Afromexicana del Estado de México.
- VII. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de las acciones que realicen las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, en materia de apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Residentes y Afromexicanas sin que esto sustituya las consultas que refiere el La Ley de Consulta Indígena y Afromexicana del Estado de México.
- VIII. Fortalecer las formas de organización propias de las comunidades indígenas, que propicien la elevación y evaluación de los índices de bienestar social y coadyuven a la reconstitución, al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, respetando su organización originaria;



IX. Impulsar la capacitación y organización participativa al interior de las comunidades indígenas, respetando sus formas internas de organización;

X. Elegir de entre sus miembros a aquellos que desempeñaran el cargo de Diputados en la Legislatura Local, tomando en cuenta los principios de actitud de servicio, aptitud para el cargo, rectitud y meritocracia.

XI. Estos cargos podrán ser revocados por el CPIRAEM en cualquier momento, previa audiencia, dictamen de la comisión de justicia y ratificación de la Asamblea General.

XII. Coadyuvar con las comunidades que lo soliciten para integrar el expediente de reconocimiento como comunidad indígenas que será turnado a la Legislatura en funciones y que contendrá:

a) Acta de Asamblea de Autoadscripción; debidamente motivada y fundamentada, con la firma autógrafa de los asistentes y fotocopia anexa de la credencial de elector por ambos lados para certificar la asistencia, así como la firma y sello de las autoridades tradicionales de la comunidad.

b) Estudio monográfico de la comunidad solicitante, donde se resaltan las propias instituciones sociales, económicas, culturales, jurídicas y políticas, o parte de ellas que aún conservan y le dan identidad con algún pueblo indígena o afroamericano

XIII. Coadyuvar con las comunidades que lo soliciten para integrar el expediente de reconocimiento como Comunidad Autónoma que será turnado a la Legislatura en funciones y que contendrá:



- a) Acta de Asamblea para solicitar Autonomía; debidamente motivada y fundamentada, con la firma autógrafa de los asistentes y fotocopia anexa de la credencial de elector por ambos lados para certificar la asistencia, así como la firma y sello de las autoridades tradicionales de la comunidad.
- b) Plan de Desarrollo Comunitario Integral sobre el que se va a trabajar
- c) Estructura Administrativa y procedimiento de elección, respetando la PARIDAD DE GENERO
- d) Sistema Normativo Tradicional sobre el que se regirá, siempre respetando los derechos humanos y la EQUIDAD DE GENERO

XIV. Coadyuvar con las comunidades de un mismo municipio que lo soliciten para integrar el expediente de reconocimiento como Municipio Autónomo que será turnado a la Legislatura en funciones y que contendrá:

- a) Actas de Asamblea de cada una de las comunidades que se integrarán para solicitar Autonomía Municipal; debidamente motivada y fundamentada, con la firma autógrafa de los asistentes y fotocopia anexa de la credencial de elector por ambos lados para certificar la asistencia, así como la firma y sello de las autoridades tradicionales de la comunidad.
- b) Plan de Desarrollo Municipal Integral sobre el que se va a trabajar
- c) Estructura Administrativa y procedimiento de elección, respetando la PARIDAD DE GENERO, y la participación equitativa de las comunidades.
- d) Sistema Normativo Tradicional sobre el que se regirá, siempre respetando



los derechos humanos y la EQUIDAD DE GENERO

- XV. Realizar por sí o a través de terceros, estudios e investigaciones orientadas a promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos.
- XVI. Establecer las políticas, estrategias, programas y acciones para el desarrollo integral, sostenible y sustentable de los pueblos originarios, migrantes y afromexicanos del Estado de México;
- XVII. Promover, coordinar, operar y evaluar las políticas y programas de apoyo a los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos en coordinación con los gobiernos municipales y de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal; para cuyo caso se crearán comisiones de enlace y seguimiento
- XVIII. Coadyuvar con el Poder Ejecutivo del Estado de México en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo, así como en los Planes Regionales y Sectoriales con una perspectiva intercultural
- XIX. Concertar con los sectores público, social y privado, nacional e internacional para la ejecución de acciones conjuntas en beneficio de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos;
- XX. Proponer los mecanismos necesarios para la obtención de los recursos, para la implementación de programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos;
- XXI. Celebrar convenios, contratos y acuerdos de colaboración con



instituciones, entidades federales, estatales y municipales, organismos del sector público, social y privado y organismos nacionales, extranjeros y multinacionales para el logro de su objeto y el fortalecimiento de sus atribuciones;

XXII. Propiciar el fortalecimiento, difusión, revaloración y reposicionamiento de la cultura, valores sociales y cosmovisión de los pueblos originarios, migrantes y afromexicanos, así como preservar el uso de sus lenguas y contribuir al enriquecimiento, preservación de su acervo histórico y cultural;

XXIII. Establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan su lengua, historia, cosmovisión, valores, y sus artes como danza, música, y demás manifestaciones culturales, en el nivel preescolar y de educación básica en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, bajo los principios de opcionalidad, gratuidad y laicidad.

XXIV. Administrar el registro de practicantes de las diversas especialidades de medicina ancestral, impulsando su profesionalización y certificación en correspondencia con sus propios usos y costumbres.

XXV. Impulsar el ejercicio de la medicina ancestral en las comunidades originarias, migrantes y afromexicanas con el objeto de que disfruten del nivel más alto posible de salud física y mental.

XXVI. Administrar los Centros Ceremoniales de los pueblos originarios, migrantes y afromexicanos en el Estado de México

XXVII. Expedir en el ámbito de su competencia, los Reglamentos y las



disposiciones necesarias, a fin de hacer efectivas las atribuciones que se le confieren para el cumplimiento de su objeto;

XXVIII. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales y las que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO

Artículo 4.- La dirección y administración del CPIRAEM corresponde:

I. A la Asamblea;

II. Al Secretario Técnico.

El Consejo contará con las unidades administrativas, órganos técnicos, servidores públicos y demás personal necesario para la prestación del servicio de conformidad con las disposiciones legales, administrativas y el presupuesto autorizado.

CAPÍTULO TERCERO DE LA ASAMBLEA

Artículo 5.- El funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en el Reglamento respectivo.



Artículo 6.- La Asamblea es la máxima autoridad del CPIRAEM y estará integrada por:

- I. Un Secretario Técnico,
- II. 6 Concejeros por cada Pueblo Indígena Reconocido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México quienes serán nombrados mediante sus propios sistemas normativos tradicionales, respetando la paridad de género, por las Organizaciones Indígenas de Tipo Tradicional con cobertura estatal o que abarque más de 2 municipios, debidamente comprobada. Tendrán voz y voto y durarán en su encargo la temporalidad que determine la Organización de procedencia.
- III. 2 Concejeros por cada municipio con población indígena reconocidos por la Legislatura del Estado de México, respetándose la paridad de género y electos mediante sus sistemas normativos tradicionales. Tendrán voz y voto y durarán en su cargo el tiempo que duren las autoridades constitucionalmente electas en su municipio de procedencia.
- IV. Un asesor del Poder Ejecutivo, con voz y sin voto, designado por el Titular del Ejecutivo Estatal, podrá ser sustituido en cualquier momento a discreción del Gobernador del Estado.
- v. Un asesor del Poder Legislativo, con voz y sin voto, será ocupado por el (la) Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura Local
- VI. Un asesor del Poder Judicial del Estado de México, con voz y sin voto, designado



por el Titular del Poder Judicial Estatal, podrá ser sustituido en cualquier momento a discreción del (la) Presidente del mismo.

VII. Un asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con voz y sin voto, , designado y sustituido en cualquier momento a discreción del (la) Titular de la institución.

VIII. Un asesor del Gobierno Federal, con voz y sin voto, designado y sustituido en cualquier momento a discreción del (la) titular del Instituto Nacional de Pueblos indígenas en el Estado de México.

IX. Los asesores invitados necesarios, por decisión del Consejo para tratar asuntos especializados.

Artículo 7.- Los Concejeros tendrán voz y voto, el Secretario Técnico y los asesores sólo tendrán voz.

El cargo de Concejero dentro de la Asamblea será honorífico y recibirán una dieta para cubrir los viáticos que genere su desplazamiento a las sesiones que sean convocados.

Artículo 8.- La Asamblea sesionará en forma ordinaria una vez al mes, y en forma extraordinaria cuando el Secretario Técnico lo estime necesario a petición de la tercera parte de los concejeros. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate se repondrá la votación hasta lograr un consenso.

Artículo 9.- Las sesiones de la Asamblea serán válidas con la asistencia de cuando menos la mitad más uno de los concejeros, siempre que se



encuentre el Secretario Técnico. El Secretario Técnico expedirá la convocatoria por acuerdo del Presidente.

Artículo 10.- Son atribuciones de la Asamblea:

- I. Establecer las políticas y lineamientos generales del Concejo;
- II. Aprobar la estructura orgánica del Concejo, así como sus modificaciones;
- III. Autorizar la creación y extinción de comisiones, comités y grupos de trabajo interno;
- IV. Aprobar los proyectos de reglamentos, manuales y demás disposiciones que rijan el funcionamiento del Concejo;
- V. Aprobar los nombramientos, renunciaciones y remociones de los servidores públicos del Concejo;
- VI. Aprobar los convenios, contratos y acuerdos que celebre el Concejo con las dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal o con los sectores social y privado;
- VII. Aceptar las donaciones, legados y demás bienes que otorguen a favor del Concejo;
- VIII. Conocer y aprobar el programa anual de inversión destinado al Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, que será administrado por el Fondo Estatal;



- IX. Aprobar los proyectos del programa operativo anual, de los presupuestos de ingresos y egresos del programa de inversiones;
- X. Aprobar los proyectos de adquisición y contratación de bienes y servicios;
- XI. Aprobar y evaluar los programas y proyectos del Concejo y sus modificaciones;
- XII. Conocer y aprobar, en su caso, los estados financieros que presente el Secretario Técnico, previo dictamen del auditor externo;
- XIII. Aprobar la cuenta anual de ingresos y egresos del Concejo;
- XIV. Aprobar los informes de actividades que rinda el Concejo;
- XV. Solicitar en cualquier tiempo al Secretario Técnico del Concejo, informes del estado que guardan los programas y presupuestos a cargo del Concejo;
- XVI. Vigilar la prestación y conservación del patrimonio del Concejo, así como conocer y resolver sobre los actos que asignen o dispongan de sus bienes;
- XVII. Las demás que le confiera esta Ley y las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO



CUARTO DEL SECRETARIO TÉCNICO

Artículo 11.- El Secretario Técnico del CPIRAEM, será nombrado y removido por la Asamblea.

En los casos de ausencia temporal será sustituido por el titular del área jurídica y en las definitivas por quien designe la Asamblea.

Artículo 12.- El Secretario Técnico del CPIRAEM, tendrá las siguientes atribuciones:

I.Administrar y representar legalmente al Consejo con las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas; actos de administración y para actos de dominio, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a las disposiciones en la materia y sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente. Para realizar actos de dominio, requerirá la autorización expresa de la Asamblea de acuerdo con la legislación y reglamentación administrativa vigente;

II.Dar cumplimiento a los acuerdos que emita la Asamblea;

III.Proponer a la Asamblea las políticas generales del Concejo y aplicarlas;

IV.Proponer a la Asamblea para su aprobación, las modificaciones a



la organización administrativa, para el eficaz cumplimiento del objeto del Concejo;

V. Presentar a la Asamblea para su discusión y aprobación, los proyectos de reglamentos internos, manuales administrativos y demás disposiciones que rijan el funcionamiento del Concejo, así como la adquisición y contratación de bienes y servicios;

VI. Coordinar las acciones que la Asamblea encomiende a las comisiones, así como proponer la creación de comités y grupos de trabajo interno;

VII. Proponer a la Asamblea los nombramientos, renunciaciones y remociones de los servidores públicos del Concejo;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento del Concejo;

IX. Proponer a la Asamblea el diseño e instrumentación de acuerdos y convenios para el bienestar de los pueblos indígenas, con la participación del sector público, social y privado;

X. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, organismos del sector público, privado y social, nacionales y extranjeros, previa aprobación de la Asamblea;

XI. Promover la realización de estudios e investigaciones orientadas a analizar la problemática de los pueblos y comunidades indígenas,



residentes y afromexicanas y proponer acciones para su atención;

XII. Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea, el Programa para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México;

XIII. Elaborar el programa anual de inversión, destinado al Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, que será administrado por el Fondo Estatal;

XIV. Elaborar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Concejo;

XV. Presentar a la Asamblea, para su autorización, los proyectos del programa operativo anual, presupuesto anual de ingresos y egresos y el programa de inversión del Concejo, con base a los lineamientos establecidos por el Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, del Plan de Desarrollo del Estado, de los programas que de éste se deriven y de las estrategias y prioridades estatales;

XVI. Presentar a la Asamblea los proyectos de inversión, que serán remitidos al Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, para su financiamiento;

XVII. Vigilar el cumplimiento del objeto, planes y programas del Concejo;

XVIII. Asumir la defensa de los derechos de los indígenas y afromexicanos establecidos en los tratados internacionales de la materia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la



Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos del Estado de México, ante las autoridades federales, estatales y municipales;

XIX. Programar y coordinar las acciones para la atención a las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas que se realicen en la Entidad;

XX. Enviar al Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, los proyectos de inversión aprobados por la Asamblea, para su financiamiento;

XXI. Proponer a la Asamblea, alternativas de financiamiento para proyectos específicos de apoyo a comunidades indígenas, residentes y afromexicanos;

XXII. Elaborar y promover proyectos de capacitación y adiestramiento dirigidos a las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas.

XXIII. Ejecutar con las comunidades, los proyectos productivos, sociales y culturales que hayan sido aprobados por la Asamblea;

XXIV. Elaborar planes, y programas para la enseñanza indígena que comprendan educación intercultural que refleje las cosmovisiones, historias, lenguas, conocimientos, valores, culturas, prácticas y formas de vida de pueblos indígenas, residentes y afromexicanos, conforme a sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje,

XXV. Elaborar planes, y programas que garanticen el fortalecimiento, difusión, revaloración y reposicionamiento de la cultura, valores sociales y



cosmovisión de los pueblos originarios, migrantes y afromexicanos, así como preservar el uso de sus lenguas y contribuir al enriquecimiento, preservación de su acervo histórico y cultural;

XXVI. Administrar los Centros Ceremoniales de los pueblos originarios, migrantes y afromexicanos en el Estado de México

XXVII. Elaborar planes, y programas que garanticen el ejercicio de la medicina ancestral en las comunidades originarias, migrantes y afromexicanas con el objeto de que disfruten del nivel más alto posible de salud física y mental.

XXVIII. Evaluar el impacto social de las acciones emprendidas en los municipios con población indígena, residente y afromexicana;

XXIX. Informar cada mes a la Asamblea sobre los estados financieros y los avances de los programas de inversión, así como de las actividades realizadas por el Consejo;

XXX. Rendir un informe anual de actividades del Consejo;

XXXI. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales aplicables o le encomiende la Asamblea.

CAPÍTULO QUINTO DEL PATRIMONIO DEL CONSEJO

Artículo 13.- El patrimonio del Consejo estará constituido por:



- I. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;
- II. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos de los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario;
- III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto;
- IV. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

Artículo 14.- La administración del patrimonio del Consejo se llevará a cabo conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, y lo destinará al cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO SEXTO DEL FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS ÍNDIGENAS

Artículo 15.- Se crea el Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, con la aportación de los gobiernos federal, estatal y municipales, cuya administración estará a cargo de un Comité que será el órgano responsable, de aplicar las inversiones aprobadas por la Asamblea.



Artículo 16.- El Comité a que se refiere el artículo anterior estará integrado por:

I. El Secretario Técnico;

II. El titular del área administrativa del Concejo

III. El titular de la Contraloría Interna del Concejo

IV. Dos concejeros por Pueblo Indígena Reconocido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, designados por la Asamblea del Concejo anualmente para el ejercicio fiscal que corresponda. Se garantizará la paridad de género

El Comité informará periódicamente de la aplicación de los recursos del Fondo a cada uno de los gobiernos que aporten recursos para su integración.

CAPÍTULO SÉPTIMO DEL PERSONAL

Artículo 17.- Para el cumplimiento de su objeto, el Concejo contará con personal general y de confianza, en términos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Artículo 18.- El personal del Concejo gozará de las prestaciones y servicios que establece la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del



Estado y Municipios.

T R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta del Gobierno.

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno.

ARTICULO TERCERO.- Publicado en la Gaceta del Gobierno el presente Decreto, será traducido a las cinco lenguas más usuales en el territorio estatal, procurando su amplia difusión.

ARTICULO CUARTO.- La Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura del Estado de México elegirá al Primer Secretario Técnico con carácter de Interino para realizar la Convocatoria a los Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos y sus comunidades a participar en la primera Conformación del Consejo dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley. En el caso de los consejeros por municipio tendrán prioridad los Representantes Indígenas en funciones reconocidos legalmente ante los ayuntamientos.

ARTICULO QUINTO.- El Consejo de Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos del Estado de México expedirá su reglamento interno en un plazo no mayor de 90 días a partir de la fecha en que tenga lugar su primera sesión.



ARTICULO SEXTO.- El Secretario Técnico del Consejo deberá presentar el Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México al Consejo, dentro de los 45 días siguientes a la primera sesión ordinaria.

ARTICULO SEPTIMO.- Se abroga la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México

ARTICULO OCTAVO.- El Ejecutivo del Estado transferirá al Consejo los recursos humanos, materiales y financieros que tenga asignados el CEDIPIEM a la fecha.

ARTICULO NOVENO.- El Ejecutivo del Estado transferirá la posesión y administración de los Centros Ceremoniales Otomí y Mazahua al Consejo, con sus recursos humanos, materiales y financieros que tengan asignados a la fecha.

ARTICULO DECIMO.- El Ejecutivo del Estado transferirá el Departamento de Educación Indígena al Consejo con sus recursos humanos, materiales y financieros asignados a la fecha.

Toluca, Estado de México a 29 de junio de 2021

PROPONENTES

ENRIQUE SOTENO REYES
NANCY MENDOZA RAMIREZ
EUGENIA HERNANDEZ BONILLA



MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ IXTLILXOCHITL
JUAN NEZAHUALCOYOTL CANO TELLES
CAROLINA SANTOS SEGUNDO
BLANCA ARACELI GONZALEZ VALLE
MARLEN TORRES GARCIA
GLORIA HERNANDEZ VELAZQUEZ
ROSA MARIA VALENCIA JIMENEZ



PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA DEL ESTADO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La materia de esta ley está fundamentada en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 29 párrafo 4 de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 2, apartado “B”, inciso IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La presente iniciativa obedece a la necesidad de armonizar la “LEY GENERAL DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS”, aprobada por la Cámara de Diputados Federal en fecha 20 de abril último y actualmente para su discusión en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de donde seguramente saldrá aprobada también sin modificaciones.

Como es del conocimiento público, el Convenio 169 de la OIT es el primer instrumento internacional que establece el derecho de estos pueblos a la consulta, “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, mismas que “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”, (artículo 6 numerales 1 inciso a) y 2); asimismo, regula otras disposiciones particulares al respecto, en los artículos 7 numerales 1 y 3; 15 numeral 2; 16 numeral 2; 17 numerales 2 y 3; 22 numeral 3 y 28 numeral 1.



Por su parte, la DNUDPI en su artículo 19 establece que “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

En base a lo anterior el Estado Mexicano implementó un Protocolo de Consulta a través de la extinta CDI, mismo que sin ser una ley como tal fue utilizada de manera generalizada por años, adoleciendo de vinculatoriedad en sus resultados.

Ahora, el actual Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, llevó a cabo un proceso de consulta, con foros a lo largo y ancho del territorio nacional a fin de consensar con los pueblos indígenas el contenido de la iniciativa de ley para la creación de la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue aprobado, como ya se señaló, el día 20 de abril de este año, cuyo transitorio segundo da la instrucción a las legislaturas locales de armonizar la normatividad correspondiente en un plazo no mayor a un año

Es en este contexto que se presenta la propuesta de “LEY DE CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA DEL ESTADO DE MÉXICO”, en la cual se introduce la definición de “Comunidades Residentes”, que visibiliza la presencia de pueblos indígenas provenientes de otra Entidad y que por los movimientos migratorios se han asentado en el Territorio Estatal, manteniendo las características culturales particulares que les dan identidad propia, y ubicados mayormente en los municipios del Valle de México, según datos estimados pudieran alcanzar casi la mitad de los indígenas autoadscritos en el Estado.



Asimismo es importante el considerar la población afromexicana que asciende a 304 274 personas que se autoadscriben como tales, según datos recientes del INPI.

Es así que se presenta como:

PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CONSULTA INDÍGENA Y
AFROMEXICANA DEL ESTADO DE MÉXICO

Artículo único. Se expide la Ley de Consulta Indígena y Afromexicana del Estado de México.

LEY DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y
AFROMEXICANAS

TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo único

Artículo 1. La presente Ley regula el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales



en Países Independientes; la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y otros instrumentos internacionales en la materia.

Artículo 2. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de México; tiene por objeto establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afroamericanas.

Artículo 3. La interpretación y aplicación de la presente Ley se hará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los instrumentos internacionales en la materia, procurando la protección más amplia a los pueblos y comunidades indígenas y residentes y afroamericanas.

En todos los casos, se deberá realizar un análisis contextual, con perspectiva intercultural, respeto pleno a la libre determinación y maximización de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y residentes y afroamericanas. Garantizará los principios de derechos humanos, entre ellos, progresividad, pro persona, de igualdad y no discriminación, considerando las normas e instituciones de dichos pueblos y comunidades en un plano de igualdad con el orden jurídico mexicano, en el marco del pluralismo jurídico.



A falta de disposición expresa no podrá ser invocada la superioridad jerárquica del derecho positivo sobre el derecho de los pueblos originarios, residentes y afromexicanos.

Artículo 4. Para la eficaz implementación del derecho de consulta y consentimiento, libre, previo e informado, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, con capacidad de emitir actos de autoridad y tomar decisiones plenamente válidas, con base en sus sistemas normativos, y de establecer un diálogo con el Estado y la sociedad en su conjunto.

Artículo 5. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

- I. Acuerdo: Es la expresión libre y común de la voluntad de las partes respecto de la medida consultada, debe ser válido y su cumplimiento posible. Los acuerdos pueden implicar la aceptación o el rechazo de la medida consultada.

- II. Autoridades indígenas tradicionales o comunitarias: Aquellas que los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas reconocen como tales, y que son nombradas con base en sus sistemas normativos, las cuales pueden o no coincidir con las autoridades municipales, auxiliares o agrarias.



- III.. Consentimiento: Es la manifestación de la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, con relación a la materia de la consulta y que debe ser previo, libre e informado. Los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas tienen en todo momento el derecho a otorgar o no su consentimiento, de conformidad con sus sistemas normativos.
- IV. Consulta indígena : Es el derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas a participar en la toma de decisiones respecto de actos y medidas legislativas y administrativas, que los afecten o sean susceptibles de afectarles, y que debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Correlativamente, constituye un deber ineludible del Estado mexicano.
- V. Pueblos indígenas: Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, jurídicas y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad, será el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones de la presente Ley.
- VI. Comunidades indígenas: Son aquellas que integran un pueblo indígena y forman una unidad social, política, económica y cultural, asentadas en un territorio y reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos.



- VII. Comunidades Residentes: Son aquellas que integran un pueblo indígena y forman una unidad social, política, económica y cultural, asentadas de manera dispersa en el territorio estatal y reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos.
- VIII. Pueblos y comunidades afromexicanas: Son aquellas que descienden de poblaciones africanas, que fueron trasladadas por la fuerza o se asentaron en el territorio nacional desde la época colonial y que tienen formas propias de organización, social, económica, política y cultural; tienen aspiraciones comunes y afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas
- IX. Susceptibilidad de afectación: La posibilidad de que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, su vida, forma de organización, cultura, tierras, territorios, recursos naturales y en general su supervivencia, puedan sufrir afectaciones derivadas de una medida legislativa o administrativa implementada por el Estado o por terceras personas. Para la procedencia de la consulta indígena no se requiere que se actualicen las afectaciones.
- X. Sistemas normativos indígenas: Conjunto de principios, instituciones, normas orales o escritas, prácticas, acuerdos y decisiones que los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas reconocen como válidos y vigentes para su organización social, económica, política, jurídica y cultural, así



como para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, impartición de justicia y la solución de conflictos.

TÍTULO II DEL DERECHO A LA CONSULTA

Capítulo I

De los principios, características, finalidades y resultados de los procesos de consulta

Artículo 6. Los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas tienen derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, como una expresión de su libre determinación y un instrumento de participación democrática en la toma de decisiones en todas las cuestiones que les atañen, particularmente, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

Las consultas se realizarán de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias, mediante un diálogo intercultural, procedimientos culturalmente pertinentes, a través de sus instituciones representativas y de decisión; garantizando la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo, será nula e inválida, respectivamente.



Artículo 7. La consulta indígena deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes principios:

- I. Comunalidad: Implica el deber de garantizar que el proceso y los resultados de la consulta reconozcan y respeten la naturaleza colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, la cual da sustento al conjunto de instituciones sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas que organizan y estructuran la vida comunitaria, como entidades culturalmente diferenciadas.
- II. Deber de acomodo: Es deber de la Autoridad Responsable respetar los resultados de la consulta, en consecuencia la medida deberá ajustarse, adecuarse o incluso cancelarse, tomando en consideración los distintos derechos e intereses de las partes.
- III. Deber de adoptar decisiones razonadas: La Autoridad Responsable deberá adoptar decisiones razonadas y fundamentadas que aseguren la existencia y continuidad de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, garantizando sus derechos fundamentales.
- IV. Igualdad de derechos: En los procesos de consulta se deberán crear las condiciones para que la participación de mujeres y hombres se realice en condiciones de igualdad, a efecto de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.



- V. Interculturalidad: Las partes, en el proceso de consulta, interactúan y dialogan tomando en consideración sus diversas manifestaciones culturales y sociales en un marco de respeto, igualdad y complementariedad, a fin de que los acuerdos sean justos.
- VI. Libre determinación: Es el principio fundamental en virtud del cual, los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, ejercen su derecho a decidir libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural.
- VII. Participación: Sustenta el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a participar democráticamente en la toma de decisiones en todos los asuntos que les atañen, atendiendo sus propias formas de organización, así como sus instituciones representativas y de decisión.
- VIII. Transparencia: Debe entenderse como la exigencia de hacer pública y accesible la información del proceso de consulta y sus resultados.

Artículo 8. Las características esenciales del proceso de consulta son:

- I. Previo: La consulta debe realizarse antes de implementarse cualquier medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, incluyendo cualquier permiso, autorización o estudios relacionados con las medidas que correspondan, garantizando debidamente las exigencias cronológicas del proceso.
- II. Libre: Los sujetos consultados deben expresar su voluntad en libertad, sin ningún tipo de coerción, presión, intimidación o manipulación.



- III. Informado: Los sujetos de la consulta deberán tener toda la información sobre la naturaleza de la medida o acto, de manera oportuna, necesaria y suficiente, para que puedan comprender sus implicaciones y tomar una decisión fundada.

La información básica deberá contener: los objetivos, alcances y responsables de la medida y su ejecución; los procedimientos para llevarla a cabo; tiempo de duración; lugares susceptibles de afectar; los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales; la posible existencia de otras alternativas al proyecto, entre otros aspectos necesarios, La información será presentada en un lenguaje accesible y traducida a las lenguas indígenas que correspondan,

- IV. Buena fe: Implica que todas las partes deben actuar con veracidad y honestidad, estableciendo un proceso de diálogo genuino, basado en el respeto mutuo y la confianza recíproca.
- V. Culturalmente adecuada: La consulta deberá efectuarse a través de mecanismos y procedimientos apropiados a las culturas, lenguas y formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas. Deberá garantizarse a dichos pueblos la plena libertad para decidir a través de sus formas propias de gobierno e instancias de decisión.

Artículo 9. Atendiendo a su naturaleza o modalidad, la consulta tendrá las siguientes finalidades:



- I. Llegar a un acuerdo;
- II. Obtener el consentimiento libre, previo e informado, o

- VI. Emitir opiniones, propuestas y recomendaciones.

Artículo 10. Los casos en que la consulta tendrá como finalidad obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas son:

- I. Cualquier proyecto o programa que impacte a sus tierras, territorios o recursos naturales, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos, eólicos, genéticos o de otro tipo;
- II. Cuando la medida implique el traslado o la reubicación de comunidades indígenas, residentes y afromexicanas;
- III. La posible privación o afectación de cualquier tipo de bien cultural, intelectual, religioso y espiritual necesarios para la subsistencia física y cultural de los pueblos y comunidades;
- IV. Cualquier tipo de confiscación, toma, ocupación, utilización o daño efectuado en tierras y territorios que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma los pueblos y comunidades indígenas, residentes o afromexicanas;
- V. El almacenamiento o desecho de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y



afromexicanas, y

- VI. Cualquier otro que implique un impacto significativo para la existencia y supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas.

Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta:

- I. La restricción de los derechos humanos y fundamentales reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales;
- II. Las acciones emergentes de combate a epidemias;
- III. Las acciones emergentes de auxilio en desastres;
- IV. Las facultades y obligaciones del Presidente de la República establecidas en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
- V. La Seguridad Nacional.

Artículo 12. Los resultados de la consulta indígena pueden ser:

- I. Aceptación o rechazo liso y llano.
- II. Aceptación con condiciones. En este caso, el Sujeto Consultado establece las condiciones y salvaguardas en las que tal medida se llevaría a cabo para garantizar sus derechos, incluyendo medidas de



reparación, indemnización, mitigación y una distribución justa y equitativa de los beneficios.

- III. No aceptación con posibilidad de presentar otra opción o modificaciones a la medida. En este caso, no obstante la no aceptación, el Sujeto Consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar, misma que sería nuevamente sometida a consulta.
- IV. Opiniones, propuestas y recomendaciones sobre el objeto de consulta.

Artículo 13. Los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes. Los acuerdos y otros arreglos constructivos suscritos entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, deberán ser reconocidos, observados y aplicados plenamente por todas las partes.

Dichos acuerdos no podrán menoscabar ni suprimir los derechos de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos reconocidos en la legislación nacional e internacional.

Cuando la medida incida en más de uno de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanos la consulta tendrá efectos suspensivos cuando así lo determine la mayoría absoluta de las asambleas. La oposición de la minoría no tendrá efectos suspensivos, pero deberán considerarse las razones de su oposición en la implementación de la medida consultada.



Capítulo II

De la materia, tipos, instancias y modalidades de la consulta

Artículo 14. Son materia de consulta todas las medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afroamericanas, en particular, las relacionadas con sus formas de vida y organización social, política, económica y cultural, así como con la integridad de sus tierras, territorios y recursos naturales.

Artículo 15. Para efectos de esta Ley, se entiende por medida administrativa, todo acto o determinación que emitan las entidades y dependencias de la administración pública, los organismos autónomos y otros poderes, de todos los órdenes de gobierno, en ejercicio de su potestad administrativa y reglamentaria, que sean susceptibles de afectar a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afroamericanas.

Artículo 16. Se entiende por medidas legislativas, las leyes y decretos que emita el Poder Legislativo de la federación y de las entidades federativas, que sean susceptible de afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afroamericanas.

Artículo 17. Cuando para la implementación de un programa o proyecto, sean necesarias varias medidas administrativas, se deberá realizar un proceso de consulta integral con la coordinación de todas las autoridades responsables que, por razón de su competencia, tengan que intervenir.



Artículo 18. La consulta indígena sobre medidas legislativas podrá realizarse en cualquier etapa del proceso de creación normativa, desde la fase de elaboración de la iniciativa hasta antes de su dictaminación por la instancia legislativa que corresponda. El objeto de la misma será obtener las opiniones y propuestas de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas sobre dichas medidas. Si la consulta se realizara en la fase de la elaboración de la iniciativa, en los términos de esta Ley, no será necesaria otra consulta en las fases subsecuentes.

Artículo 19. Cuando alguna de la Legislatura adviertan que el dictamen sometido a su conocimiento fue aprobado en comisiones sin que se haya realizado la consulta indígena o se haya realizado sin cumplir con lo estipulado en esta Ley, la instancia legislativa correspondiente ordenará la reposición del procedimiento a fin de que se respete este derecho.

Por consiguiente no se podrá aprobar ninguna Ley, Decreto o norma que prevea disposiciones en materia indígena, residente o afromexicana, sin que se haya cumplido el deber de la consulta correspondiente.

Artículo 20. Antes de la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo, así como de los planes municipales, la legislatura local y los ayuntamientos, deberán garantizar que en dichos instrumentos estén incorporadas las recomendaciones y propuestas obtenidas en las consultas a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas.



Los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas podrán elaborar sus propios planes de desarrollo comunitario o regional, los cuales deberán ser reconocidos como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Artículo 21. Las instancias y modalidades de consulta podrán ser los siguientes:

- I. Asamblea general comunitaria indígena: Es la institución de máxima autoridad de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas para la toma de decisiones relativas a las cuestiones políticas, jurídicas, económicas, territoriales, sociales y culturales, entre otras, sus acuerdos serán plenamente válidos y deberán ser respetados por el Estado y por terceros, de conformidad con esta Ley. Se integra por ciudadanos y ciudadanas de una comunidad, conforme a sus sistemas normativos;
- II. Asamblea general municipal indígena: Es la institución que reúne a la ciudadanía y las autoridades representativas de las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas que se ubican dentro de la demarcación de un municipio, para la toma de decisiones relacionadas con el proceso de consulta, Cuando la comunidad indígena coincide con la demarcación municipal, se entenderá como Asamblea General Comunitaria;
- III. Asambleas regionales indígenas: Es la instancia de decisión regional de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos, integrada por sus autoridades



e instituciones representativas comunitarias y municipales. Estas Asambleas son idóneas cuando la medida tenga un impacto regional;

- IV. Consejos o instancias consultivas indígenas: Son órganos colegiados de ciudadanas y ciudadanos indígenas, reconocidos por su experiencia, conocimientos, legitimidad, prestigio social y servicios, los cuales aportan orientaciones, recomendaciones e ideas para la toma de decisiones en un proceso de consulta, y
- V. Foros estatales y municipales: Son las instancias de análisis y deliberación, conformadas por autoridades, representantes y ciudadanía perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, así como por expertos en la materia, para la toma de decisiones relativas a la consulta Indígena, en el contexto estatal o nacional.

Dichas modalidades deberán ser culturalmente pertinentes y adecuarse al tipo, materia y amplitud de la medida consultada.

TÍTULO III

DE LAS PARTES E INSTANCIAS DE APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 22. Serán partes del proceso de consulta:

- I. Los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas;
- II. La Autoridad u órgano Responsable;



- III. El órgano Técnico;
- IV. El órgano Garante, Y
- V. La Comisión de Seguimiento y Verificación.

Artículo 23. Serán instancias de apoyo en el proceso de consulta, las siguientes:

- I. El Comité Técnico Interinstitucional;
- II. El Comité Técnico Asesor;
- III. Intérpretes y Traductores, y
- IV. Observadores.

Capítulo I

De los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas

Artículo 24. Los pueblos y comunidades Indígenas, residentes y afromexicanas son sujetos titulares del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. El carácter de comunidad indígena, migrante o afromexicana se determinará de acuerdo a los criterios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia. Corresponde al órgano Técnico verificar que éstos se cumplan.



Artículo 25. Los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, participarán en los procesos de consulta a través de sus instancias de decisión o por conducto de sus autoridades e instituciones representativas, de conformidad con sus sistemas normativos.

Las autoridades indígenas, tradicionales o comunitarias, acreditarán su personalidad jurídica de conformidad con sus sistemas normativos.

En caso de duda o ante el cuestionamiento de su legitimidad, el órgano Técnico podrá conducir procesos de mediación y resolución de conflictos, respetando en todo momento los principios que rigen sus sistemas normativos y la unidad del pueblo o comunidad de que se trate. No se podrán exigir formalismos que no existan en dichos sistemas normativos.

Artículo 26. Cuando se trate de medidas administrativas con impacto territorial determinado, la Autoridad Responsable, en conjunto con el órgano Técnico, conformarán una lista inicial de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas susceptibles de afectación. La lista inicial se hará pública antes del inicio del proceso, para que aquellas manifiesten lo que a su derecho corresponda.

Capítulo II De las Autoridades u Órganos Responsables



Artículo 27. Será Autoridad u órgano Responsable para llevar a cabo el proceso de consulta, cualquier institución del Estado mexicano de los diferentes órdenes de gobierno, incluyendo los organismos públicos autónomos, que de conformidad con sus atribuciones sea responsable de emitir un acto administrativo o legislativo susceptible de afectar a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas.

Artículo 28. Cuando la medida a consultar requiera la intervención de varias autoridades, todas ellas tendrán el carácter de responsables y desahogarán la consulta en un solo proceso. El Estado no podrá delegar la realización de la consulta a terceros, en particular, a las empresas interesadas en la implementación de la medida.

Artículo 29. Para la realización del proceso de consulta indígena, las autoridades u órganos responsables deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

- I. Elaborar la propuesta de Protocolo de consulta, en coordinación con el órgano Técnico;
- II. Proporcionar la información relacionada con la medida sometida a consulta;
- III. Conducirse de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y el Protocolo de consulta;
- IV. Generar las condiciones para el adecuado desarrollo del proceso de consulta,



- en coordinación con el Organismo Técnico y órgano Garante;
- V. Disponer de los recursos presupuestales necesarios para su realización;
 - VI. Garantizar la presencia de las autoridades representativas y la participación de las mujeres indígenas en el lugar de la consulta;
 - VII. Garantizar los derechos lingüísticos, en particular los servicios de interpretación o traducción;
 - VIII. Evaluar y decidir, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas consultadas, el cierre del proceso de consulta;
 - IX. Cumplir o vigilar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados en el proceso de consulta, y
 - X. Otras que, de conformidad con su carácter, sean necesarias desplegar para el ejercicio pleno del derecho de consulta

Capítulo III Del órgano Técnico

Artículo 30. El órgano Técnico de la consulta, es la institución de la administración pública estatal o municipal, que tiene a su cargo la atención de los asuntos relativos a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, Definirá el diseño metodológico para la implementación del proceso de consulta, asimismo apoyará técnicamente con información jurídica, estadística y especializada sobre los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas a las partes que lo soliciten,



El órgano Técnico definirá, en coordinación con la Autoridad Responsable, los casos en que deba implementarse la consulta con base en la información que le proporcionen las autoridades responsables y las comunidades susceptibles de ser afectadas.

La decisión del órgano Técnico, por la que se determine la procedencia de la consulta indígena, será obligatoria para las autoridades responsables.

Artículo 31. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas fungirá como órgano Técnico en los procesos de consulta en el ámbito federal.

Las instituciones o dependencias encargadas de atender la política pública sobre pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas en el Estado de México y los municipios, fungirán como órgano Técnico en los procesos de consulta de sus respectivos ámbitos de competencia.

En todos los casos, las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, tendrán el derecho de proponer a instituciones especializadas en el estudio y atención de los derechos de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos o, en su caso, crear instancias específicas, para que coadyuven en el desempeño de las funciones del órgano Técnico.

Artículo 32. Para el desahogo de los procesos de consulta indígena, el órgano Técnico



tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Definir, conjuntamente con la Autoridad Responsable y los sujetos de consulta, el objeto y finalidades; los derechos que pudieran ser afectados con la ejecución de la medida; tipos, modalidades y procedimientos; el ámbito territorial de la consulta; la metodología culturalmente adecuada para llevarla a cabo, entre otras;
- II. Vigilar que la información que se genere en el proceso de consulta sea culturalmente adecuada, libre de tecnicismos y en lenguaje comprensible, a fin de que los sujetos de consulta puedan tomar las decisiones que correspondan;
- III. Acompañar el proceso para que se cumpla lo establecido en la etapa de acuerdos previos a lo largo de todas las etapas de la consulta o sugerir ajustes en caso de estimarlo necesario;
- IV. Acreditar, previa autorización de las partes, a las observadoras o los Observadores, y
- V. Todas aquellas que de acuerdo a su naturaleza sean pertinentes.

Capítulo IV Del órgano Garante

Artículo 33. El órgano Garante, será la instancia responsable de vigilar que los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, ejerzan plenamente su



derecho de consulta y de consentimiento libre, previo e informado; proporcionará a las partes información y asesoría respecto de este derecho fundamental, y coadyuvará para solucionar las incidencias y obstáculos que surjan durante el proceso.

Artículo 34. Los organismos encargados de la protección de los derechos humanos del Estado de México, serán los órganos garantes de los procesos de consulta en sus respectivas Entidades, así como en los que se lleven a cabo en el ámbito municipal.

En todo tiempo, los sujetos de consulta podrán proponer una instancia comunitaria que acompañe al órgano Garante, la cual preferentemente, deberá tener experiencia en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas.

En ningún caso, las intervenciones y decisiones de los organismos de protección de los derechos humanos en el Estado de México, interferirán con sus atribuciones.

Artículo 35. Para el desahogo de los procesos de consulta indígena, el órgano Garante tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Recibir e investigar quejas sobre posibles violaciones de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, durante el proceso de consulta;
- II. Promover la solución de los conflictos que se susciten en el desarrollo de la consulta;
- III. Vigilar que los sujetos consultados tengan acceso permanente a la información que se genere en el proceso de consulta y cuenten con intérpretes o traductores en lenguas indígenas.



En caso de incumplimiento de lo anterior, propondrá la suspensión de la etapa correspondiente del proceso de consulta hasta que se subsane la omisión;

- IV. Participar con derecho a voz durante el desarrollo de la consulta, y
- V. Otras de acuerdo a la naturaleza de su función o que le encomienden de común acuerdo las partes.

Capítulo VI

De la Comisión de Seguimiento y Verificación

Artículo 36. La Comisión de Seguimiento y Verificación es la instancia colegiada constituida para vigilar que los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta, sean cumplidos de manera plena, efectiva y oportuna. Tendrá acceso permanente a la información, en lenguaje claro, accesible y culturalmente adecuado.

Artículo 37. La Comisión de Seguimiento y Verificación será nombrada en la sesión en la que culmine la Etapa Consultiva y deberá estar conformada por el Sujeto Consultado y las otras partes del proceso de consulta. Su conformación y el número de sus integrantes serán definidos de común acuerdo.

Para la integración de dicha Comisión, se deberá tomar en consideración a las mujeres, procurando una integración paritaria.

Las personas interesadas podrán acudir a las sesiones de trabajo que celebre la Comisión por sí o a invitación de las autoridades responsables.

Artículo 38. La Comisión de Seguimiento y Verificación tendrá las siguientes



atribuciones:

- I. Mantener un diálogo permanente con las autoridades responsables, órgano Técnico, órgano Garante y con las instancias que estime pertinentes para conocer el estado del cumplimiento de los acuerdos;
- II. Solicitar a la Autoridad Responsable toda la información que requiera, relacionada con las actividades y decisiones adoptadas para el cumplimiento de los acuerdos;
- III. Mantener informada a la asamblea o instancia comunitaria de toma de decisión, sobre el estado en que se encuentra el cumplimiento de los acuerdos, de conformidad con sus sistemas normativos;
- IV. Interponer las acciones legales que estime pertinentes para lograr el cumplimiento de los acuerdos, una vez agotados los mecanismos de diálogo que sean procedentes, y
- V. Cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones

Capítulo VII

Del Comité Técnico Interinstitucional

Artículo 39. Las partes podrán proponer la conformación de un Comité Técnico Interinstitucional, integrado por las instituciones con atribuciones relacionadas con la medida consultada o bien que por su naturaleza posea conocimientos especializados sobre la materia.

El Comité Técnico Interinstitucional se conformará cuando se trate de medidas que requieran la concurrencia de varias autoridades responsables o su impacto abarque



diversas materias.

Artículo 40. El Comité Técnico Interinstitucional coadyuvará con la Autoridad Responsable proporcionando información relacionada con la naturaleza o implicaciones de la medida sujeta a consulta. Asimismo, brindará asesoría a las partes y participará en la implementación de los acuerdos que correspondan, conforme a sus atribuciones.

Artículo 41. Las instituciones que participen en la consulta podrán celebrar convenios de colaboración interinstitucionales, en los que se establecerán los objetivos de aquellas y los compromisos que asumen los participantes para sumar y coordinar esfuerzos con el fin de hacer posible su eficiente realización.

Capítulo VIII

Del Comité Técnico Asesor

Artículo 42. La Autoridad Responsable, de común acuerdo con el Sujeto Consultado, podrá constituir un Comité Técnico Asesor. Esta instancia proporcionará asesoría, consejo, información y análisis especializado con relación al proceso de consulta. Asimismo, podrá coadyuvar en la sistematización, redacción e incorporación de los resultados de la consulta.

Artículo 43. El Comité Técnico Asesor se podrá integrar por personas expertas de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas, la sociedad civil, las instituciones académicas y de investigación, cuya participación será honorífica.

Capítulo IX

De los Intérpretes y Traductores

Artículo 44. Desde el inicio del proceso de consulta, la Autoridad Responsable, con la coadyuvancia del órgano Técnico y las instituciones competentes, deberán proveer de



intérpretes y traductores a fin de que los sujetos consultados puedan comunicarse y hacerse comprender en sus lenguas y culturas. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de invalidez del proceso de consulta.

Artículo 45. Para efectos de esta Ley, serán intérpretes las personas que realizan la transferencia oral de una lengua a otra, en tiempo real o consecutivo, y por cualquier medio, con pertinencia cultural.

Serán traductoras las personas que comprenden el significado de un texto en una lengua, para producir un texto con significado equivalente en otra lengua.

Artículo 46. Las personas intérpretes y traductoras deberán ser certificadas por instancia competente y dominar la variante lingüística del Sujeto Consultado; en caso de no contar con ellas, podrán ser intérpretes o traductores prácticos. En este último caso, se deberá verificar que conoce la variante lingüística que corresponda y se designará de común acuerdo con el Sujeto Consultado.

Artículo 47. En todos los casos, las personas intérpretes y traductoras deberán conducirse bajo los principios de honestidad, probidad, objetividad, integridad, imparcialidad, identidad y profesionalismo.

Capítulo X

De los Observadores

Artículo 48. Las personas e instituciones que por la naturaleza de sus actividades tengan interés en acompañar el proceso de consulta, podrán inscribirse como observadoras. Para ello, deberán solicitar su acreditación ante el órgano Técnico, cuando no exista objeción de las partes.

Podrán participar como Observadores, organismos internacionales siempre que lo



hagan con el consentimiento de las partes y dentro del marco de las normas que correspondan.

Artículo 49. Las personas o instituciones que se acrediten como observadoras, podrán presenciar el desarrollo de las diferentes etapas de la consulta. Para que puedan estar presentes en la etapa deliberativa, deberá mediar el consentimiento del Sujeto Consultado.

Una vez concluido el proceso de consulta, los Observadores podrán presentar un informe ante las partes para los efectos que correspondan.

Capítulo XI

De la participación de la mujer en la Consulta

Artículo 50. Esta Ley reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas, residentes y afromexicanas a la participación efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de consulta. Por lo tanto, las partes involucradas deberán garantizar e implementar las medidas afirmativas necesarias, adecuadas y proporcionales que satisfagan su participación en la toma de decisiones y seguimiento del proceso.

Artículo 51. Para los efectos del artículo anterior, los sujetos consultados deberán armonizar los derechos específicos de las mujeres indígenas, residentes y afromexicanas con las normas e instituciones comunitarias, bajo un criterio de máxima participación. En todos los casos, se deberá verificar la pertenencia de las mujeres a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas consultadas.

Artículo 52. Cuando las mujeres indígenas, residentes y afromexicanas formulen planteamientos a las partes, se deberá dar respuesta atendiendo a la condición de desigualdad histórica que han padecido con el objeto de garantizarles una igualdad



sustancial dentro del contexto del proceso y seguimiento

TÍTULO IV DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 53. El proceso de consulta se desarrollará conforme a las siguientes etapas:

- I. Preparatoria;
- II. Acuerdos previos;
- III. Informativa;
- IV. Deliberativa;
- V. Consultiva, y
- VI. Seguimiento de acuerdos.

Los tiempos para cada una de las etapas deberán ser razonables y acordados por las partes. Las instancias y modalidades de cada una de las etapas se definirán en el Protocolo respectivo, de conformidad con las reglas previstas en el presente Título.

Capítulo I De la Etapa Preparatoria

Artículo 54. Todo proceso de consulta deberá iniciar:

- I. A petición del pueblo o comunidad interesada, mediante escrito dirigido a la Autoridad Responsable o al órgano Técnico;



- I. Por acuerdo de la Autoridad Responsable;
- II. Por determinación del órgano Técnico, y
- III. Por mandato de autoridad competente.

Artículo 55. Para determinar la procedencia de la consulta, la Autoridad Responsable y las instancias que correspondan, recopilarán y sistematizarán toda la información relacionada con la medida; la relativa a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas susceptibles de ser afectadas, así como la necesaria para crear las condiciones básicas que permitan llevar a cabo la consulta.

Artículo 56. Para identificar a los pueblos y comunidades susceptibles de ser afectadas, las autoridades responsables, en coordinación con el órgano Técnico, tomarán en cuenta el Sistema Nacional de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas, Residentes y Afromexicanas, así como los catálogos, padrones o registros aprobados por las Entidades Federativas.

Artículo 57. Cuando la consulta sea a petición del pueblo o comunidad, la Autoridad Responsable y el órgano Técnico, analizarán la información recabada y determinarán la procedencia o improcedencia de la solicitud en un plazo razonable. La decisión que niega la procedencia de la consulta puede ser impugnada por medio del recurso correspondiente.

Artículo 58. Una vez que se ha determinado la procedencia de la consulta, la Autoridad Responsable, de manera conjunta con el Organismo Técnico, elaborarán una propuesta de protocolo de consulta que contendrá los siguientes elementos:

- I. Identificación de las instancias, autoridades e instituciones representativas que deben participar en el proceso;



- II. Delimitación de la materia de consulta, precisando la medida administrativa o legislativa que la Autoridad Responsable pretende adoptar;
- III. Identificación territorial, social, cultural, política e histórica de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas susceptibles de ser afectadas;
- IV. Determinación del objeto o finalidad de la consulta;
- V. Tipo de consulta y la propuesta de procedimiento;
- VI. Programa de trabajo y calendario;
- VII. Presupuesto y financiamiento;
- VIII. Las lenguas indígenas y/o afromexicanas a utilizarse en el proceso, así como la intervención de personas intérpretes y traductoras, y
- IX. Otros que sean necesarios para el diseño e implementación del proceso de consulta

Capítulo II

De la Etapa de Acuerdos Previos

Artículo 59. En esta etapa, la Autoridad u órgano Responsable, el órgano Técnico, los sujetos consultados y el órgano Garante, revisarán y suscribirán, de común acuerdo, un Protocolo que contenga los elementos establecidos en el artículo anterior, así como las reglas y procedimientos con los que se desarrollarán las etapas.

Cuando por la amplitud de la medida a consultarse, no fuera posible consensar el Protocolo con todos los sujetos consultados, éstos tendrán en cualquier



momento la posibilidad de solicitar modificaciones y adecuaciones.

Artículo 60. El Protocolo al que se hace referencia en el artículo anterior, deberá ser interpretado de forma oral y traducido a la lengua indígena y/o afromexicana que corresponda, así mismo se difundirá por los medios pertinentes.

Capítulo 111

De la Etapa Informativa

Artículo 61. Consiste en proporcionar la información a los sujetos consultados en los términos de la presente Ley, quienes en todo momento podrán solicitar a la Autoridad Responsable información específica respecto de la medida sometida a su consideración. En caso de que la información solicitada no exista, será obligación de la Autoridad Responsable generarla y proporcionarla. Los particulares tendrán la obligación de entregar toda la información respecto de los proyectos materia de la consulta.

Artículo 62. En caso de que la medida contenga información técnica de difícil comprensión, el Estado estará obligado a buscar mecanismos para explicarla de manera didáctica y comprensible. De así requerirlo, los sujetos consultados podrán solicitar ampliación de los términos para comprender dicha información.

Artículo 63. La etapa informativa podrá comprender recorridos a los lugares susceptibles de afectación, visitas a sitios donde se hayan implementado medidas similares o intercambio de experiencias, que permitan que la información pueda conocerse de manera clara y precisa.

Artículo 64. El Estado tiene el deber de recibir, analizar y tomar en cuenta la información que los sujetos consultados le hagan llegar, a fin de determinar los alcances y afectaciones que pudiera tener la medida materia de la consulta.



Artículo 65. Esta etapa se agota cuando los sujetos consultados tienen la suficiente claridad sobre la medida y sus implicaciones en todos sus ámbitos.

Capítulo IV De la Etapa Deliberativa

Artículo 66. Es el momento en el que los sujetos consultados reflexionan y analizan la información presentada en la etapa informativa, que les permite tomar decisiones colectivas en relación a la medida consultada y plantear su postura al respecto. Esta etapa se regirá conforme a sus sistemas normativos.

Artículo 67. Si durante la etapa deliberativa fuera necesario obtener nueva información o ampliar la ya existente, los sujetos consultados podrán solicitarla a la Autoridad Responsable o, en su caso, a las instancias que correspondan.

Artículo 68. Durante la fase deliberativa queda estrictamente prohibida toda acción de injerencia en el proceso de discusión comunitaria. Cualquier comunicación entre las instituciones participantes en el proceso, con autoridades o representantes indígenas, residentes y afromexicanos, deberá hacerse por escrito y estar debidamente fundada y motivada.

No se permitirán entregas extraordinarias de apoyos sociales, ni visitas extraoficiales a las comunidades de las partes u otros actores interesados en la consulta, si no es a invitación expresa del Sujeto Consultado. Ningún apoyo social entregado por el gobierno deberá estar condicionado a los resultados de la consulta.



Artículo 69. Los acuerdos de las autoridades comunitarias con terceros, tomados al margen de la consulta y que no cuenten con autorización de sus instancias de toma de decisión, deberán notificarse a éstas para que resuelvan conforme a sus sistemas normativos. Toda prestación otorgada por terceros interesados en la consulta a representantes comunitarios, deberá hacerse del conocimiento de las partes a fin de analizar sus consecuencias.

Capítulo V

De la Etapa Consultiva

Artículo 70. Es la etapa en la que los sujetos consultados expresan libremente su decisión con relación a la medida consultada y se construyen los acuerdos o, en su caso, se otorga el consentimiento.

Artículo 71. En esta etapa las autoridades o instituciones representativas de los sujetos consultados, podrán solicitar recesos, en caso de requerir más tiempo para realizar nuevas consultas a la comunidad o deliberaciones adicionales.

Artículo 72. Las decisiones tomadas por los sujetos consultados serán respetadas plenamente. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán presiones o coacciones para modificarlas, ni acción alguna que vulnere su derecho a la libre determinación y autonomía.

Artículo 73. Los cambios, adecuaciones o modificaciones a la medida consultada, que sean solicitados por los sujetos consultados, deberán ser sometidas a revisión y, en su caso, incorporadas a la misma, previo acuerdo de las partes.

Artículo 74. Como parte de los acuerdos definitivos, se nombrará la Comisión de Seguimiento y Verificación que se encargará de vigilar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.



Artículo 75. Los acuerdos definitivos no podrán ser modificados de manera unilateral por ninguna de las partes y darán certeza jurídica a todas las acciones realizadas para su cumplimiento.

Capítulo VI

De la Etapa de Seguimiento de Acuerdos y Verificación

Artículo 76. En esta etapa tendrán lugar todas las actividades relacionadas con el cumplimiento pleno y efectivo de los acuerdos alcanzados por las partes en el proceso de consulta.

Artículo 77. La Comisión de Seguimiento y Verificación establecerá un programa de trabajo para observar la realización de todas las acciones contenidas en los acuerdos definitivos, así como parámetros e indicadores para dar seguimiento a los avances y porcentaje de cumplimiento de los acuerdos. Todo retraso en el cumplimiento de éstos, deberá ser justificado y notificado a las partes a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, realizar las adecuaciones procedentes,

Artículo 78. En caso de incumplimiento de los acuerdos se dará vista a las partes y, en su caso, a las autoridades competentes, a efecto de determinar lo procedente conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Capítulo VII

De las actas, documentación y archivo

Artículo 79. La Autoridad Responsable, en coordinación con las partes, tendrán la obligación de generar y resguardar todas las actas, documentación y registros



generados en el proceso de consulta, los cuales deberán contar con formalidades mínimas y ser integrados en un expediente que distinga cada una de las etapas, de conformidad con la legislación aplicable. Las partes contarán con una copia de este expediente.

Artículo 80. Los acuerdos definitivos constarán en actas y, dependiendo de la medida, reunirán las siguientes formalidades: constancia clara de aceptación o rechazo de la medida o proyecto; términos, condiciones y salvaguardas; acciones de reparación y mitigación; distribución justa y equitativa de beneficios; montos, acciones y mecanismos para la ejecución de programas y planes de gestión social, ambiental y cultural que correspondan; calendario de cumplimiento de los acuerdos, firma autógrafa y sellos de las todas Eas instancias participantes, entre otras.

TÍTULO V DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Capítulo Único

Artículo 81. La legislatura del Estado de México, incluirá, en su caso, en los presupuestos que apruebe, las partidas necesarias para el ejercicio del derecho a la consulta en cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 82. Las autoridades responsables deberán asignar los recursos financieros que garanticen la realización de cada una de las etapas de la consulta, mismos que incluirán los requerimientos de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas correspondientes, a fin de asegurar su participación efectiva.

TÍTULO VI DE LAS RESPONSABILIDADES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN



Capítulo I

De las responsabilidades y sanciones

Artículo 83. En los procesos de consulta indígena queda prohibido:

- I. Inducir las respuestas de los consultados, con preguntas, acciones coactivas, o mensajes propagandísticos;
- II. Introducir elementos técnicos o académicos que conduzcan a favorecer determinada tendencia o posición relacionada al tema objeto de la consulta indígena, y
- III. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la consulta indígena.

Artículo 84. Las autoridades, servidores y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en la presente Ley, serán sujetos de responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con lo previsto en las leyes de la materia.

Capítulo II

De la suspensión y medios de impugnación

Artículo 85. Cuando se emita una medida administrativa sin respetar el derecho a la consulta tendrá como consecuencia su nulidad absoluta.

La Autoridad Responsable tendrá la posibilidad de volver a emitir la medida administrativa previo cumplimiento de la obligación de llevar a cabo la consulta indígena.

Si el caso requiera el consentimiento, el titular del derecho de consulta, podrá solicitar a la Autoridad Responsable o al órgano Técnico la suspensión de la medida



administrativa que debió haber sido consultada, quien la concederá de inmediato, sin demérito de las medidas que adopte la autoridad jurisdiccional que corresponda. Lo mismo procederá cuando, habiéndose llevado el proceso de consulta indígena, no se obtuvo el consentimiento del Sujeto Consultado.

Artículo 86. El proceso de consulta se podrá suspender temporalmente en los siguientes casos:

- I. Cuando las partes así lo determinen de común acuerdo;
- II. Por falta de requisitos de validez, entre ellos, la falta de información y los servicios de interpretación y traducción, y
- III. Cuando así se ordene por la autoridad competente.

Artículo 87. Las determinaciones que por cualquier motivo nieguen la realización de un proceso de consulta, serán impugnables a través del recurso de reconsideración ante el órgano Técnico; las decisiones de éste, se impugnarán a través del juicio de amparo.

Artículo 88. El recurso de reconsideración será expedito, sencillo y eficaz. Se hará valer mediante escrito que presente el Sujeto de Consulta o cualquiera de sus integrantes, en el que exprese su inconformidad y las razones en que se sustente, así como los medios probatorios que tenga a su alcance.

El órgano Técnico solicitará un informe a la Autoridad Responsable de emitir la negativa, se allegará de las pruebas que estime necesarias y resolverá en un plazo no mayor a 15 días.

Artículo 89. Una vez iniciado el proceso de consulta indígena, las determinaciones que



generen inconformidad o controversia, serán resueltas mediante un proceso de diálogo y conciliación entre las partes, de conformidad con las siguientes reglas y principios:

- I. El órgano Técnico del proceso de consulta, fungirá como instancia de mediación.
- II. En todos los casos se deberá procurar resolver atendiendo a lo más favorable para los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas.
- III. Se exhortará a las partes a mostrar su voluntad de alcanzar una composición amigable. La instancia de mediación estará facultada para proponer a las partes vías de solución.
- IV. Los acuerdos alcanzados serán obligatorios para todas las partes.
- V. Todas las instituciones correspondientes proveerán de información necesaria que contribuya a la solución del diferendo.

Cuando desahogado el proceso de mediación, no se alcancen los acuerdos pertinentes y persista la inconformidad, ésta se hará valer ante la autoridad jurisdiccional correspondiente al finalizar la consulta.

Artículo 90. Es procedente el Juicio de Amparo, cuando:



- I. Se emita la medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas sin respetar su derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado, a que se refiere la presente Ley.

- II. Contra las resoluciones que el órgano Técnico emita al resolver el recurso de reconsideración.

Cuando el quejoso sea una comunidad indígena, residente o afromexicana se privilegiará el acceso a la justicia y se deberá suplir de manera amplia la deficiencia de la queja.

Cuando la medida sometida a consulta no sea de las que requiera del consentimiento o cuando se hayan alcanzado acuerdos u obtenido el consentimiento, no procederá la suspensión.

En los casos en los que proceda la suspensión, no se exigirá al Sujeto de Consulta que otorgue garantía alguna.

Artículo 91. Las Entidades Federativas podrán establecer medios de impugnación en el ámbito de sus competencias, siguiendo en lo que corresponda, las disposiciones establecidas en el presente Capítulo.

Transitorios

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta de Gobierno del Estado de México.

Artículo Segundo.- La Legislatura del Estado de México armonizarán las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, en un



plazo no mayor a un año.

Artículo Tercero.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal dispondrá que el texto íntegro de la presente Ley se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos con presencia en la Entidad y ordenará su difusión en sus comunidades.

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Artículo Quinto.- Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto no darán lugar a un incremento en el presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto responsables, para el presente ejercicio fiscal.

Toluca, Estado de México a 29 de junio de 2021

Proponentes:

Rosa Maria Valencia Jiménez

Eustacio Silverio Mondragón

Regino Héctor Velázquez Jiménez

Enrique Soteno Reyes

Aucencio Valencia Largo



DERECHO A LA CULTURA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “todas las personas gozarán de los derechos humanos”¹, las cuales se encuentran descritas en los artículos del 1 al 29 de dicho texto. Entre ellos se encuentra el **Derecho a la Cultura** manifestado en el artículo 4º párrafo noveno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclama en su Preámbulo;

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.²

La cultura no sólo se considera un derecho humano fundamental, además es el mecanismo principal que hace posible su existencia y validez. La responsabilidad de los tres niveles de gobierno garantizan la protección a este derecho, así como la creación de políticas públicas y estrategias que lleven a cabo el cumplimiento eficaz y expedito de cada una de las leyes, normas y reglamentos que involucren a los **pueblos indígenas, residentes y afrodescendientes** en el desarrollo del derecho a la cultura. El artículo 27 de la citada declaración enuncia lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

¹ Artículo 1o, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de aquí en adelante **C.P.E.U.M. o Constitucional**)

² Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, p 3.



2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.³

Con base en este artículo, se entiende que el derecho a la cultura:

- a) Protege el acceso a los bienes y servicios culturales;
- b) Protege el disfrute de los mismos, y
- c) Protege la producción intelectual.

De manera que para interconectar el derecho a la cultura armónicamente entre los distintos tratados internacionales y las normas constitucionales relacionadas entre sí, se debe de contar con elementos jurídicos que permitan esta conexión. En el caso de Las leyes concernientes con la cultura dentro de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México **no encontramos artículo que prevea alguna de las observaciones señaladas** con anterioridad, pues son sugeridas de manera tan general que no alcanzan siquiera una resolución efectiva para su cumplimiento.

La C.P.E.U.M regula de manera firme y con la creencia de que es verdad y que tendrá cumplimiento el acto legislado, en este caso el derecho a la cultura, de tal manera que solo es un elemento tácito. El artículo 6º hace referencia a que;

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.⁴

El artículo 7º procura que;

³ O.N.U., Declaración Universal, p 56.

⁴ Artículo 6o, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.⁵

Por último el artículo 28 enuncia que;

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de qué se trata.⁶

⁵ Artículo 7o, párrafos 1 y 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁶ Artículo 28, párrafo 9o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Estos citados artículos tienen efecto en lo referente a la producción intelectual, material e industrial así como; su transmisión y comunicación. Aunque estas disposiciones tienen su regulación en la legislación estatal secundaria, en la Ley de Imprenta y en la Ley Federal del Derecho de Autor, así como en la Ley de Propiedad Industrial, no se retoman en la ley primaria es decir la Constitución Estatal pues se asume que los pueblos tienen derecho a proteger la cultura con la seguridad que el Estado otorga.

Como lo señala la C.P.E.U.M;

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.⁷

Esta sección constitucional da la pauta perfecta para asegurar de manera concreta el derecho que tienen los pueblos indígenas, residentes y afrodescendientes a proteger y administrar la cultura que formaron sus ancestros desde tiempos inmemoriales.

En el apartado internacional, del Convenio 169 de la OIT señala;

que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.⁸

⁷ Artículo 2, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁸ Artículo 2° fracción II inciso b, del Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.



Las funcionalidades de los tratados internacionales promueven e impulsan a las leyes de cada nación a corregir o mejorar las propias. Para el estado de derecho que actualmente rige el Estado de México, el derecho a la cultura puede tomar visibilidad en el estatus quo de la sociedad, cosa que permitiría a los pueblos indígenas a expresarse de manera libre al prejuicio social.

En cuanto al disfrute y protección de los bienes culturales, la C.P.E.U.M. emite;

De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.⁹

⁹ Artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Esta disposición constitucional tiene su regulación específica mediante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. En cuanto al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, la constitución del Estado de México carece de especificaciones que retomen estos aspectos los cuales darían contexto a las leyes secundarias, además de nutrirlas jurídicamente.

En cuanto a la comunicación y difusión del entorno cultural la C.P.E.U.M., emite que:

Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura¹⁰

Esta parte de la C.P.E.U.M., garantiza el apoyo del Estado para el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, a través de la investigación. Esta disposición jurídica es deficiente en su carácter ya que no permite que los pueblos indígenas puedan acceder y disfrutar de los bienes y servicios culturales como: casas de cultura, zonas arqueológicas, museos comunitarios, áreas naturales o protegidas y centro ceremoniales principalmente, pues los particulares llevan a cabo otro tipo de inflexiones en vez de actividades culturales que la comunidad produce, de ahí se presentó la necesidad de incorporar al párrafo noveno al artículo 4o constitucional, por tanto se requiere que exista en la legislación federal y local leyes, normas y reglamentos que regulen el acceso de los pueblos originarios a los bienes y servicios culturales.

¹⁰ Artículo 3o, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Cuando se hace referencia a un derecho cultural, significa la expresión de los pueblos a alguno de los derechos mencionados. En concreto, el artículo 4º constitucional no sólo establece el derecho a la cultura sino también es un derecho el acceso a los bienes y servicios culturales.

Por medio de este derecho se debe garantizar que las y los mexicanos, independientemente de su posición económica o situación geográfica, tengan acceso a los bienes y servicios culturales. Esto implica que haya libertad artística y fomento del arte con el objetivo de que el poder público no se convierta en juez de éste.

Educación y cultura son conceptos que se vinculan el uno con el otro, como señala el artículo 3o.

- e) En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.
- g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social¹¹

México es un país de enorme riqueza cultural. Nuestra gran cantidad de pueblos indígenas nos lo demuestra. Con todo lo anterior los esfuerzos no han sido los suficientes para preservar las lenguas, costumbres, arte y música. El derecho que ellos tienen al acceso a los bienes y servicios culturales debe tomar en cuenta estas circunstancias. Pero antes, una vez más, se debe respetar su dignidad humana. El límite de cualquier derecho y de cualquier política pública es cuando el Estado impone un determinado tipo de cultura, porque esto afectaría a la libertad de los pueblos.

¹¹ Artículo 3, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

PROPUESTA

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO.

SE PROPONE LA REFORMA AL PARRAFO 6, FRACCIÓN IX, ARTÍCULO 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO;

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo



a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

EL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS CEREMONIALES ADEMÁS DE BIENES (TANGIBLES E INTANGIBLES) Y TODO AQUELLO QUE EMANE DE LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES SON PROPIEDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTÍCULO 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO;

Artículo 6.- Los habitantes del Estado gozan del derecho a que les sea respetado su honor, su crédito y su prestigio.

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al párrafo DOF 12-04-2000

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 6. Los habitantes del Estado ***PUEBLOS INDÍGENAS, RESIDENTES Y AFROMEXICANOS*** gozan del derecho a que les sea respetado su honor, su crédito y su prestigio.



SE PROPONE LA REFORMA AL ARTÍCULO 17, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÈXICO;

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena. El Estado favorecerá la educación básica bilingüe.

La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás habitantes. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.



Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía estatal. En ningún caso las practicas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO PARA QUEDAR COMO SIGUE:

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena. El Estado favorecerá la educación básica bilingüe.

TODA PERSONA TIENE DERECHO AL ACCESO A LA CULTURA Y AL DISFRUTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CULTURALES. EL ESTADO PROMOVERÁ LOS MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES CON PLENO RESPETO A LA LIBERTAD CREATIVA. LA LEY ESTABLECERÁ LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN A CUALQUIER MANIFESTACIÓN CULTURAL

SE REFORMA PARRAFO TERCERO PARA QUEDAR COMO SIGUE:



La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social así **COMO A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LAS COMUNIDADES** y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás habitantes. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que



respete el pacto federal y la soberanía estatal. En ningún caso las practicas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE MÈXICO

CAPÍTULO II CULTURA Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 2

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas; hablan una lengua propia; han ocupado sus territorios en forma continua y permanente; han construido sus culturas específicas. Son sus formas e instituciones sociales, económicas y culturales las que los identifican y distinguen del resto de la población del Estado.



Dichos pueblos y comunidades existen desde antes de la formación del Estado de México y contribuyeron a la conformación política y territorial del mismo.

Estos pueblos indígenas descienden de poblaciones que habitaban en una región geográfica al iniciarse la colonización dentro de lo que hoy corresponde a las actuales fronteras estatales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Los indígenas de origen nacional procedentes de otro estado de la república y vecindados en el Estado de México, podrán acogerse en lo conducente a los beneficios que esta Ley, el orden jurídico mexicano y los Tratados Internacionales les reconocen, respetando las tradiciones de las comunidades donde residan, pudiendo tener acceso a dichos beneficios en forma colectiva o individual.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas; hablan una lengua propia, **TIENEN SUS SISTEMAS NORMATIVOS TRADICIONALES** han ocupado sus territorios en forma continua y permanente; han construido sus culturas específicas. Son sus formas e instituciones sociales, económicas y culturales las que los identifican y distinguen del resto de la población del Estado.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 3

La conciencia de la identidad indígena es el criterio fundamental para determinar los pueblos y comunidades a los que se aplican las disposiciones del presente ordenamiento, así como para identificar las localidades y, en su caso, municipios con presencia indígena.



PARA QUEDAR COMO SIGUE:

La conciencia de la identidad indígena es el criterio fundamental para determinar los pueblos y comunidades a los que se aplican las disposiciones del presente ordenamiento, **ASÍ COMO PARA IDENTIFICAR LAS LOCALIDADES QUE SE RIGEN POR SUS SISTEMAS NORMATIVOS PARA** identificar los municipios con presencia indígena.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 5

Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. El Estado: Estado de México, parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Pueblos Indígenas: Colectividades humanas, descendientes de poblaciones que, al inicio de la colonización, habitaban en el territorio de la entidad, las que han dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros antes de la conformación del Estado de México, que afirman libre y voluntariamente su pertenencia a cualquiera de los pueblos señalados en el artículo 6 de esta ley;

III. Comunidad Indígena: Unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres;

IV. Autonomía: Expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de México, para asegurar la unidad estatal en el marco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, adoptar por sí mismos decisiones y desarrollar sus propias prácticas relacionadas, entre otras, con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización socio-política, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura;

V. Territorio Indígena: Región del territorio estatal constituida por espacios continuos ocupados y poseídos por las comunidades indígenas, en cuyo ámbito se manifiesta su vida comunitaria y confirman su cosmovisión, sin detrimento alguno de la Soberanía del Estado de México, ni de la autonomía de sus municipios;



VI. Derechos Individuales: Garantías que el orden jurídico mexicano otorga a todo hombre o mujer, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo o comunidad indígena, por el sólo hecho de ser persona;

VII. Derechos Sociales: Facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden jurídico mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, para garantizar su existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a los pueblos indígenas;

VIII. Sistemas Normativos Internos: Conjunto de normas de regulación, orales y de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican la resolución de sus conflictos;

IX. Usos y Costumbres: Base fundamental de los sistemas normativos internos y que constituye el rasgo característico que los individualiza;

X. Autoridades Municipales: Aquellas que están expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley Orgánica Municipal del Estado;

XI. Autoridades Tradicionales: Aquellas que los pueblos y comunidades indígenas reconocen de conformidad con sus sistemas normativos internos, derivados de sus usos y costumbres

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. El Estado: Estado de México, parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Pueblos Indígenas: Colectividades humanas, descendientes de poblaciones que, al inicio de la colonización, habitaban en el territorio de la entidad, las que han dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros antes de la conformación del Estado de México, que



afirman libre y voluntariamente su pertenencia a cualquiera de los pueblos señalados en el artículo 6 de esta ley;

III. COMUNIDAD INDÍGENA: UNIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL, ASENTADA EN UN TERRITORIO Y QUE RECONOCE AUTORIDADES PROPIAS DE ACUERDO CON SUS USOS Y COSTUMBRES;

IV. Autonomía: Expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de México, para asegurar la unidad estatal en el marco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, adoptar por sí mismos decisiones y desarrollar sus propias prácticas relacionadas, entre otras, con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización socio-política, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura;

V. Territorio Indígena: Región del territorio estatal constituida por espacios continuos ocupados y poseídos por las comunidades indígenas, en cuyo ámbito se manifiesta su vida comunitaria y confirman su cosmovisión, sin detrimento alguno de la Soberanía del Estado de México, ni de la autonomía de sus municipios;

VI. Derechos Individuales: Garantías que el orden jurídico mexicano otorga a todo hombre o mujer, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo o comunidad indígena, por el sólo hecho de ser persona;

VII. Derechos Sociales: Facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden jurídico mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, para garantizar su existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a los pueblos indígenas;

VIII. Sistemas Normativos Internos: Conjunto de normas de regulación, orales y de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican la resolución de sus conflictos;



SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 8

Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de sus dependencias y organismos auxiliares:

- I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a favor de los pueblos y comunidades indígenas;
- II. Asegurar que los integrantes de las comunidades indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de la entidad;
- III. Promover que las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social, operen de manera conjunta y concertada con las comunidades indígenas;
- IV. Promover el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades indígenas, impulsando el respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y autoridades tradicionales;
- V. Promover estudios sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas;
- VI. Las demás que señalé la presente ley y otros ordenamientos aplicables.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de sus dependencias y organismos auxiliares:

- I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a favor de los pueblos y comunidades indígenas;
- II. Asegurar que los integrantes de las comunidades indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de la entidad;



III. Promover que las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social, operen de manera conjunta y concertada con las comunidades indígenas;

IV. Promover el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades indígenas, impulsando el **RESPECTO A SU CULTURA SU HONOR, SU CRÉDITO Y SU PRESTIGIO**, usos, costumbres, tradiciones y autoridades, tradicionales;

V. Promover estudios sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas;

VI. Las demás que señale la presente ley y otros ordenamientos aplicables.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 9

Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas:

I. Los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Ayuntamientos deberán:

a) Reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá considerarse la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo;

c) Reconocer los sistemas normativos internos en el marco jurídico general en correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las garantías individuales y a los derechos sociales.

II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;



b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les conciernan.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas:

I. Los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Ayuntamientos deberán:

a) Reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá considerarse la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo;

c) Reconocer los sistemas normativos internos en el marco jurídico general en correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las garantías individuales y a los derechos sociales. **LAS AUTORIDADES, INSTITUCIONES, SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO EN LOS INCISOS ANTERIORES SERÁN SUJETOS DE RESPONSABILIDAD**

II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;



b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular **A TRAVÉS SU CONSEJO DE ANCIANOS COMO REPRESENTANTES TRADICIONALES**, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les conciernan.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 10

En el ámbito de la Ley que regula sus atribuciones, corresponderá al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México:

- I. Participar en coordinación con el Registro Civil en las campañas registrales que organice en los municipios y localidades con presencia indígena;
- II. Establecer programas de capacitación y formación de intérpretes y traductores para apoyar a los pueblos y las comunidades indígenas en los distintos ámbitos que éstos requieran;
- III. Establecer un sistema de información sobre la situación económica y social de los pueblos y las comunidades indígenas y de los municipios y localidades donde se encuentran asentadas;
- IV. Proporcionar información a la Legislatura para actualizar el catálogo de las localidades con presencia indígena.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

En el ámbito de la Ley que regula sus atribuciones, corresponderá al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México:

- I. Participar en coordinación con el Registro Civil en las campañas registrales que organice en los municipios y localidades con presencia indígena;
- II. Establecer programas de capacitación y formación de intérpretes y traductores para apoyar a los pueblos y las comunidades indígenas en los distintos ámbitos que estos requieran;
- III. Establecer un sistema de información sobre la situación económica y social de los pueblos y las comunidades indígenas y de los municipios y localidades donde se encuentran asentadas;
- IV. Proporcionar información a la Legislatura para actualizar el catálogo de las localidades con presencia indígena **EN DONDE SEAN INCLUIDAS TAMBIÉN POR SUS SISTEMAS NORMATIVOS.**



SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 40

Los pueblos y comunidades indígenas asentadas en territorios regionales, municipales o por localidades en el Estado de México, gozan del derecho social a vivir dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas distintas y se garantiza su propio desarrollo contra toda forma de discriminación.

Tienen derecho social a conservar, proteger, mantener y desarrollar sus propias identidades; así como todas sus manifestaciones culturales; por tanto, las autoridades tienen el deber de proteger y conservar los sitios arqueológicos y sagrados, centros ceremoniales y monumentos históricos, además de sus artesanías, vestidos regionales y expresiones musicales, con arreglo a las leyes de la materia.

CAPITULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 14

Esta ley reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, nombradas por sus integrantes de acuerdo a sus propias costumbres, garantizando la participación efectiva y equitativa de las mujeres y de los jóvenes mayores de dieciocho años, en un marco que respete la soberanía del Estado y la autonomía de sus municipios.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:



Esta ley reconoce y protege **A LOS CONSEJOS DE ANCIANOS DE LAS** comunidades indígenas, nombradas por sus integrantes de acuerdo a sus propias costumbres, garantizando la participación efectiva y equitativa de las mujeres y de los jóvenes mayores de dieciocho años, en un marco que respete la soberanía del Estado y la autonomía de sus municipios.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 15

Las comunidades indígenas y sus integrantes tienen el derecho de promover por sí mismos o a través de sus autoridades tradicionales de manera directa y sin intermediarios cualquier gestión ante las autoridades. Sin menoscabo de los derechos individuales, políticos y sociales.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Las comunidades indígenas y sus integrantes tienen el derecho de promover por sí mismos o a través de **SU CONSEJO DE ANCIANOS** autoridades tradicionales de manera directa y sin intermediarios cualquier gestión ante las autoridades. Sin menoscabo de los derechos individuales, políticos y sociales.

TITULO SEGUNDO. DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA EN EL ESTADO DE MÉXICO CAPITULO I. DE LA AUTONOMÍA

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 20

Las comunidades indígenas podrán formar asociaciones para los fines que consideren convenientes, en el marco de la Constitución General de la República y la Particular del Estado de México.

Tienen derecho de conservar libremente su toponimia, cultura, lengua y formas de organización, del pueblo indígena al que pertenezcan. Por cuanto a sus relaciones



con pueblos indígenas fuera del territorio del Estado se estará a lo dispuesto por la Constitución General de la República y la Particular del Estado de México.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Las comunidades indígenas podrán formar asociaciones para **FORTALECER LA CULTURA EN SU LENGUA EN SU PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE, ASÍ COMO EL EJERCICIO DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y AL DISFRUTE DE LOS BIENES QUE TODO ELLO REPRESENTA**, los fines que consideren convenientes, en el marco de la Constitución General de la Republica y la Particular del Estado de México.

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 21

Los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural en el contexto del Plan de Desarrollo del Estado de México.

En la entidad, las comunidades indígenas tienen derecho a participar en la formación de los planes y programas de desarrollo estatal y regional y sectorizados, que tengan aplicación en el territorio de la comunidad.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o



utilizan de alguna manera, **PARA PODER TENER ACCESO LIBRE A LOS CENTROS CEREMONIALES, SITIOS SAGRADOS Y CENTROS ARQUEOLÓGICOS.** Y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural en el contexto del Plan de Desarrollo del Estado de México.

En la entidad, las comunidades indígenas tienen derecho a participar en la formación de los planes y programas de desarrollo estatal y regional y sectorizados, que tengan aplicación en el territorio de la comunidad.

SE ADICIONA UN RENGLON EN EL PARRAFO SEGUNDO ARTÍCULO 40 PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 40. Los pueblos y comunidades indígenas asentadas en territorios regionales, municipales o por localidades en el Estado de México, gozan del derecho social a vivir dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas distintas y se garantiza su propio desarrollo contra toda forma de discriminación.

Tienen derecho social a conservar, proteger, mantener y desarrollar sus propias identidades; así como todas sus manifestaciones culturales; por tanto las autoridades **CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, TIENEN EL DEBER DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO** de las funciones **DENTRO DE LOS centros ceremoniales y monumentos históricos, sitios arqueológicos, sagrados, TERRITORIO O YACIMIENTO NATURALES** y de sepultura además de **CUIDAR LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE** sus artesanías, vestidos regionales y expresiones musicales, con arreglo a las leyes de la materia. **PARA TAL FIN, TENDRÁN EN SU PODER EL ACCESO LIBRE Y USO DE LOS MISMOS, EN EL MOMENTO QUE ELLOS DISPONGAN.**



SE PROPONE LA REFORMA DEL ARTICULO 41

Corresponde a la Secretaría de Educación:

I. En el ámbito de sus atribuciones y presupuestos, apoyar a los pueblos y comunidades indígenas en el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales actuales y en el cuidado de las de sus ancestros que aún se conservan, promoviendo la instalación, conservación y desarrollo de museos comunitarios, tecnologías, artes, expresiones musicales, literatura oral y escrita;

II. Promover ante las autoridades competentes para que éstas provean lo necesario a fin de restituir los bienes culturales e intelectuales que les hayan sido privados a los pueblos y comunidades indígenas sin su consentimiento o aprovechándose de su desconocimiento de las leyes;

III. Dictar las medidas idóneas para la eficaz protección de las ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna, la flora y minerales; tradiciones orales, literaturas, diseños y artes visuales y dramáticas de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando su derecho al respeto pleno de la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural e intelectual;

IV. Promover que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan su derecho a establecer, de acuerdo a la normatividad vigente, sus propios medios de comunicación social en sus propias lenguas;

V. Impulsar la difusión e información de la cultura indígena, a través de los medios de comunicación a su alcance;

VI. Adoptar con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, medidas eficaces para promover la eliminación, dentro del sistema educativo y en la legislación, los prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los indígenas;

VII. Promover entre las universidades, institutos tecnológicos y demás instituciones educativas en la entidad, la prestación del servicio social en las localidades indígenas que por sus características lo requieran.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:



Corresponde a la Secretaría de Educación:

I. En el ámbito de sus atribuciones y presupuestos, apoyar a los pueblos y comunidades indígenas en el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales actuales y en el cuidado de las de sus ancestros que aún se conservan, promoviendo la instalación, conservación y desarrollo de museos comunitarios, tecnologías, artes, expresiones musicales, literatura oral y escrita;

II. Promover ante las autoridades competentes para que estas provean lo necesario a fin de restituir los bienes culturales e intelectuales que les hayan sido privados y usurpados a los pueblos y comunidades indígenas sin su consentimiento o aprovechándose de su desconocimiento, **DE NO PATENTAR SU ARTE Y ESCRITURA ANTE LAS LEYES;**

III. Dictar las medidas idóneas para la eficaz protección de las ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna, la flora y minerales; tradiciones orales, literaturas, diseños y artes visuales y dramáticas de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando su derecho **AL RESPETO PLENO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LO TANGIBLE E INTANGIBLE PARA CONTROLAR** la protección de su patrimonio cultural e intelectual;

IV. Promover que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan su derecho a establecer, de acuerdo a la normatividad vigente, sus propios medios de comunicación social en sus propias lenguas;

V. Impulsar la difusión e información de la cultura indígena, a través de los medios de comunicación a su alcance;

VI. Adoptar con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, medidas eficaces para promover la eliminación, dentro del sistema educativo y en la legislación, los prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los indígenas;

VII. Promover entre las universidades, institutos tecnológicos y demás instituciones educativas en la entidad, la prestación del servicio social en las localidades indígenas que por sus características lo requieran.



SE PROPONE REFORMAR EL ARTICULO 44

Los pueblos y comunidades indígenas, así como las madres y padres de familia indígenas, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación del Estado de México y del Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, tendrán derecho a participar socialmente en el fomento de la instrucción y enseñanza en sus propias lenguas.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Los pueblos y comunidades indígenas, **ASÍ COMO LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS**, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación del Estado de México y del Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, **TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR** socialmente en el fomento de la instrucción y enseñanza en sus propias lenguas.

SE PROPONE REFORMAR EL ARTICULO 44

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a practicar sus propias ceremonias religiosas, tanto en las áreas indígenas como en las que no tienen predominio indígena, respetando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los derechos de terceros.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:



Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a practicar sus propias ceremonias religiosas, **EN LOS CENTROS CEREMONIALES, LUGARES DE CULTO**, tanto en las áreas indígenas como en las que no tienen predominio indígena, **SIN TENER QUE PAGAR POR EL ACCESO A ELLOS**, respetando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los derechos de terceros.

CAPITULO VI. DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PUEBLOS, LAS LOCALIDADES Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

SE PROPONE LA REFORMA AL ARTICULO 64

Las artesanías, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas, se reconocen como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. La Secretaría del Campo y el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, ejercerán las atribuciones que la ley les encomienda, con arreglo a las prescripciones del presente ordenamiento.

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Ayudaran a las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas, se reconocen como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, **AYUDARÁN A REGISTRAR SUS ARTESANÍAS, SU ARTE TANGIBLE E INTANGIBLE CON EL DERECHO DE AUTOR POR COMUNIDAD QUE LO GENERE, PARA EVITAR EL PLAGIO**, ejercerán las atribuciones que la ley les encomienda, con arreglo a las prescripciones del presente ordenamiento.



Anexos

SUSTENTACIÓN AL ARTÍCULO PRIMERO

Art. 4 Constitucional

(Párrafo 9) Toda persona tiene derecho al acceso a la Cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la Cultura atendiendo a la diversidad Cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Art. 2 del Convenio 169 de la OIT

Inciso b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

Art. 6 de la Ley Gral. De los Derechos Lingüísticos de la Cultura Indígena

(párrafo único) El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Art. 13 de la Ley Gral. De los Derechos Lingüísticos de la Cultura Indígena párrafo 1



Fracción I

Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes:

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

Art. 25 de la Ley Gral. De los Derechos Lingüísticos de la Cultura Indígena

(párrafo único) Las autoridades, instituciones, servidores y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en la presente ley serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la responsabilidad de los servidores públicos y sus leyes reglamentarias.

Art. 73 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fracción XXV.

(párrafo único) De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés



nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

Art. 3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fracción V.

(párrafo único) Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

SUSTENTACIÓN AL ARTÍCULO TERCERO

Art. 6 Constitucional - Artículo reformado DOF 17-11-1942, 31-12-1974

(Párrafo 1) La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

(Párrafo 2) reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013



Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Art. 7o. Constitucional

(Párrafo 1) Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

(Párrafo 2) Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Art. 4 de la Ley general de archivos

Fracción XVIII

Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos digitales a largo plazo.

Art. 5 de la Ley general de archivos

Fracción I

Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, para la adecuada preservación de los documentos de archivo;



Art. 5 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas

(párrafo 1) Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

Art. 11 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Art. 6 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Art. 9 de los Derechos de los Hablantes de Lenguas Indígenas



Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.

Art. 12 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

La sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los pueblos y las comunidades indígenas serán corresponsables en la realización de los objetivos de esta Ley, y participantes activos en el uso y la enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la rehabilitación lingüística.

Art. 13 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes:

- IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución de las lenguas indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional;
- V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y su literatura;
- VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate;
- VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias, así como, promover su enseñanza;
- VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones depositarias que conserven los materiales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales



- XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español
- XII. Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga conocimientos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios;
- XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero;
- XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación, y

Art. 44 de la Ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Los pueblos y comunidades indígenas, así como las madres y padres de familia indígenas, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación del Estado de México y del Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, tendrán derecho a participar socialmente en el fomento de la instrucción y enseñanza en sus propias lenguas

- e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo.
- f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de

Art. 2 de la Lectoescritura en Lenguas Indígenas Nacionales.

El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades.

- XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso en el territorio.



IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la información y documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas nacionales.

a) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como comunidades indígenas, y de las instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Art. 21 la Lectoescritura en Lenguas Indígenas Nacionales.

El patrimonio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará con los bienes que enseguida se enumeran:

La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal, a través del Presupuesto de Egresos.

II. Con los productos que adquiera por las obras que realice y por la venta de sus publicaciones, y los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones públicas o privadas.

Art. 22 la Lectoescritura en Lenguas Indígenas Nacionales.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones señaladas en esta Ley y conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Apartado B, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígena, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS

Derecho al desarrollo de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos del Estado de México

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho al desarrollo tiene su fundamentación jurídica en los artículos 3, 20, 23, 26, 29, 32, 38, 41, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los artículos 2, inciso b) y c), 7, 15, 17, 18, del Convenio 169 de la OIT, los artículos 2, apartado “A”, inciso VI, apartado “B”, incisos i, V, VI, VII, VIII Y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los artículos 5, 8, 9, 21, 22, 23, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 77, 82 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.

El proceso de cambio que emerge hoy en el Estado de México, desde la visión de los pueblos ancestrales originarios, irradia y repercute en el entorno nacional, promoviendo un paradigma, uno de los más antiguos: el **“paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien”**, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado.

Los pueblos originarios del Estado de México desde nuestras cosmovisiones proponemos una reflexión profunda, sobre cómo la humanidad debe vivir de ahora en adelante, ya que el mercado mundial, el crecimiento económico, el corporativismo, el capitalismo y el consumismo, que son producto de un paradigma occidental, son en diversos grados las causas profundas de la grave crisis social, económica, política, cultural y ambiental.



Bajo el influjo de este momento histórico, toda la sociedad está inmersa en tiempos de cambio y a la vez, todos y cada uno de los seres humanos somos corresponsables, como generación, de coadyuvar a estos cambios, sustentados en nuevos (aunque antiguos) paradigmas de vida, en lugar de aquellos individualistas y homogenizadores que están causando tanto daño en las relaciones interpersonales y sociales.



Los paradigmas de vida dominantes perciben al individuo como el único sujeto de derechos y obligaciones, sustituyéndolo como el único referente de vida. Por lo tanto, los sistemas jurídico, educativo, político, económico y social se adecuaron y responden a los derechos y obligaciones meramente individuales. La visión del capital como valor fundamental del pensamiento occidental generó enormes brechas entre ricos y pobres. Estos referentes de vida han propiciado un escenario de desencuentros y han ido profundizando cada vez más los abismos entre los seres humanos y todo lo que les rodea, llevando a la humanidad a un alto grado de insensibilización. Más allá de lograr “una mejor calidad de vida”, cual fuera la promesa de la modernidad, la humanidad avanza cada día más hacia la infelicidad, la soledad, los desplazamientos, la discriminación, la enfermedad, el hambre, la desigualdad y la destrucción de la Madre Tierra.

Ante esta realidad, surge como respuesta / propuesta la cultura de la vida, que corresponde al paradigma ya no individualista sino comunitario, el cual llama a reconstituir la visión de comunidad (común-unidad) de las culturas ancestrales. Esta herencia de las primeras naciones considera a la comunidad como estructura y unidad de vida, es decir, constituida por toda forma de existencia y no solo como una estructura social (conformada únicamente por humanos). Ello implica una desaparición de la individualidad, sino que ésta se expresa ampliamente en su capacidad natural en un proceso de complementación con otros seres dentro de la comunidad.

En estos tiempos en que la modernidad está sumergida en el paradigma individualista y la humanidad está en crisis, es importante escuchar y practicar la herencia de nuestros abuelos y abuelas: esta cosmovisión emergente que pretende reconstituir la armonía y el equilibrio de la vida con la que convivieron nuestros ancestros, y que ahora es la respuesta estructural de los pueblos originarios: el horizonte del vivir bien o buen vivir.

Mientras los Pueblos indígenas proponemos para el mundo el “Vivir Bien”, el capitalismo se basa en el “Vivir Mejor”. Entre ambas visiones existen diferencias: el vivir mejor significa vivir



A costa del otro, explotando al otro, saqueando los recursos naturales, violando a la Madre Tierra, privatizando los servicios básicos; en cambio el Vivir Bien es vivir en solidaridad, en igualdad, en armonía, en complementariedad, en reciprocidad. La lógica del sistema capitalista está destrozando el planeta porque prioriza la obtención de más y más ganancia por sobre todas las cosas, protege a las empresas transnacionales a las que sólo les importa aumentar las utilidades y bajar los costos, promueve un consumo sin fin, la ganancia de mercados, explotación de los recursos naturales como los bosques y el agua con condiciones de trabajo inhumanos. El Vivir Bien está reñido con el lujo, la opulencia y el derroche, está reñido con el consumismo.

Esto implica la contraposición de dos culturas, la cultura de la vida, del respeto entre todos los seres vivos, del equilibrio en contra de la cultura de la muerte, de la destrucción, de la avaricia, de la guerra, de la competencia sin fin. Nuestros ojos y corazones lo ven y sienten, nuestros hijos e hijas lo están viviendo: el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Decimos Vivir Bien porque no aspiramos a vivir mejor que los otros. No creemos en la concepción lineal y acumulativa del progreso y el desarrollo ilimitado a costa del otro y de la naturaleza. Tenemos que complementarnos y no competir. Debemos compartir y no aprovecharnos del vecino. Vivir Bien es pensar no sólo en términos de ingreso per-cápita, sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra Madre Tierra. El “Vivir Bien” es un sistema que supera al capitalista, pero que además plantea un desafío que también pone en jaque algunos preceptos clásicos de la izquierda que en un ánimo desarrollista se planteaba el *dominio de la naturaleza por el ser humano*.

Considerando lo anterior observamos que para lograr un desarrollo humano y en equilibrio con la madre tierra es necesario modificar los siguientes artículos de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México.



PROPUESTA

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:

SE MODIFICA

Artículo 18.- Corresponde al Estado procurar el desarrollo integral de los pueblos y personas, garantizando que fortalezca la Soberanía del Estado y su régimen democrático y que, mediante la competitividad y **cooperación**, el fomento del crecimiento económico **autosustentable**, una política estatal para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos, clases sociales, **pueblos indígenas, residentes y afromexicanos**, cuya seguridad protege esta Constitución y las disposiciones legales de la Federación. La competitividad y **cooperación** se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico **autosustentable**, promoviendo la inversión y la generación de empleo digno y bien remunerado. El desarrollo se basará en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, cuidando la integridad de los ecosistemas, fomentando un justo equilibrio de los factores sociales y económicos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras y **pueblos indígenas, residentes y afromexicanos.**

Las autoridades en coordinación con los pueblos **indígenas, residentes y afromexicanos** ejecutarán programas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción, así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental.

.....
.....
.....



La Legislatura del Estado establecerá en la Ley la existencia de un organismo en materia de agua, integrado por un Comisionado Presidente aprobado por la Legislatura a propuesta del Gobernador, por representantes del Ejecutivo del Estado, de los municipios, por ciudadanos y representantes de los **pueblos indígenas**, residentes y afroamericanos, el cual regulará y propondrá los mecanismos de coordinación para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de agua residuales y, en general, el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.

SE ADICIONA

La planeación del desarrollo deberá realizarse en conjunto con los pueblos indígenas, residentes y afrodescendientes.

Los pueblos , residentes y afrodescendientes tenemos derecho a definir el tipo de desarrollo que queremos de manera individual y colectiva, de lo que afecte a nuestra vida y la de nuestras tierras, territorios y recursos naturales.

La fecha de elección de los representantes indígenas en el Ayuntamiento deberá realizarse en el mes de enero, previo a la realización del plan de desarrollo de cada uno de los municipios indígenas o con presencia de población migrante y/o afroamericana.

El plan de desarrollo de cada uno de los municipios indígenas o con presencia de pueblos residentes y/o afrodescendientes del Estado de México deberá estar alineado con la Ley de Consulta Indígena y Afroamericana del Estado de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:



Artículo 139.- El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la libertad y la democratización política, social y cultural del Estado y que tiene como base el Plande Desarrollo del Estado de México:

I. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los planes y programas que formulen las autoridades estatales, municipales y los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos y considerará en su proceso: El planteamiento de la problemática con base en la realidad objetiva, los indicadores de desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos para la estructuración de planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. Las Leyes de la materia proveerán la participación de los sectores público, privado y social en el proceso y el mecanismo de retroalimentación permanente en el sistema.

.....

.....

II. En materia metropolitana, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los municipios deberán en forma coordinada y en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

- a)
- b)
- c)
- d)



- e) Suscribir convenios con la Federación, los Estados y municipios limítrofes y **la Ciudad de México**, en su caso, para la ejecución de obras, operación y prestación de servicios públicos o la realización de acciones en las materias que fueren determinadas por las comisiones metropolitanas y relacionados con los diversos ramos administrativos.
- f)

LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, RESIDENTES Y AFROMEXICANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DERECHO AL DESARROLLO: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS, LOCALIDADES Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

PROPUESTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las circunstancias actuales en el contexto internacional, las características de pluralidad y multiculturalidad al interior de nuestro país y las condiciones asimétricas del desarrollo, resultante en particular con las poblaciones originarias que durante el proceso histórico de nuestro país bajo una perspectiva de resabio social, en proceso de extinción, modificó la grandeza de las raíces que todos los mexicanos tenemos en nuestros orígenes y devolver la dignidad de una de las partes que compartimos todos y que se modifique para siempre el atraso y la explotación de quienes aportaron al mundo la riqueza de sus tierras; su cultura y la grandeza de una sociedad diversa que generó una cultura de antigüedad de más de 30,000 años, que aún existe con dignidad y de la que formamos parte;



insistimos, todos los mexicanos por sus descendientes.

Los componentes de esta visión sobre el derecho al desarrollo, son el punto de partida para ser incluidos como iguales en el contexto del estado de derecho que pretendemos sustentar en los cambios dentro del proceso de la globalidad en marcha. Se están realizando las modificaciones que adecuen lo correspondiente en la normatividad de nuestro Estado de México a esta realidad.

El objetivo de actualizar el marco normativo de la ley secundaria a la que nos referimos debe evitar las injusticias y abusos que en el pasado se cometieron hacia los pueblos indígenas de la entidad; respetando los derechos humanos de todos y que se adicione el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes existentes desde siempre y actualmente en el Estado de México. Sobre los recursos naturales de los territorios que ocupan y su explotación racional mediante procesos de producción sustentables y sostenibles así como la distribución de sus productos y utilidades de manera equitativa entre quienes intervienen, respetando en todo momento lo establecido en el marco legal vigente para alcanzar la justicia social aplazada y que ahora es posible gracias a la transformación sustantiva de las actuales estructuras de organización humana en el planeta, en nuestro país y en lo particular en el Estado de México y sus 125 municipios para lograr un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos siendo que es la piedra angular para lograr un estado de derecho sano que permita enfrentar los retos del desarrollo integral de los pueblos y lograr disminuir la asimetría resultado de nuestro pasado histórico.

PROPUESTA

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 5, fracción VII, para quedar como sigue:



VII. Derechos Sociales: Facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden jurídico mexicano reconoce a los pueblos y **comunidades indígenas, residentes y afromexicanas** en los ámbitos político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, **así como bienes y recursos naturales que se encuentran en sus territorios** para garantizar su existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a los pueblos originarios;

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 8, fracción VI, para quedar de la siguiente forma:

IV. Promover el desarrollo **integral,** equitativo y sustentable de las comunidades indígenas, **residentes y afromexicanas a partir** del respeto a su **identidad,** cultura, usos, costumbres, tradiciones y autoridades tradicionales;

ARTÍCULO TERCERO: Se reforma el artículo 9, fracción II, inciso a), para quedar como sigue:

II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:

a) Consultar a los pueblos **indígenas, residentes y afromexicanos** mediante procedimientos apropiados, **particularmente, en asambleas con sus autoridades y representantes tradicionales,** en temas de su desarrollo, así como en aquellos en los que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles **de manera directa y/o indirecta;**

ARTÍCULO CUARTO: Se reforma el artículo 21 para quedar como sigue:



Artículo 21.- Los pueblos y las comunidades indígenas, residentes y afroamericanas tienen el derecho de decidir sobre su desarrollo, con base en sus creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural para la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México.

En la entidad, las comunidades indígenas, residentes y afroamericanas deben participar de manera proporcional e incluyente en la formación de los planes y programas de desarrollo estatal, regional y sectorizados, que tengan aplicación en el territorio de la comunidad, con documentos probatorios de la participación.

ARTÍCULO QUINTO: Se reforma el artículo 22 para quedar como sigue:

Artículo 22.- Los procesos de planeación estatal y municipal trabajarán en mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de salud, educación y de todas las áreas de atención necesarias para el desarrollo de los pueblos originarios, con su participación y colaboración, sin que esto implique comprometer el medio ambiente y los recursos naturales necesarios para la vida.

ARTÍCULO SEXTO: Se reforma el artículo 23 para quedar como sigue:

Artículo 23. El Estado, los gobiernos municipales y las comunidades indígenas, residentes y afroamericanas de manera coordinada deberán analizar y realizar estudios para asegurar el desarrollo económico, social, cultural y con perspectiva de protección al ambiente.

Los resultados de estos estudios se considerarán como criterios fundamentales de la inversión para la ejecución de las actividades del desarrollo.



ARTÍCULO SEPTIMO: Se reforma el artículo 50 para quedar como sigue:

Artículo 50.- Solo los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas tendrán acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, regionales, municipales o por localidades, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales adoptados por nuestro país y aplicables, las leyes reglamentarias y demás disposiciones conducentes.

El Estado, en coordinación con las autoridades federales competentes y las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanas en los términos de la legislación aplicable, establecerá mecanismos y programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los territorios regionales, municipales o en las localidades y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas. Para ese efecto, impulsará la constitución de fondos o fideicomisos regionales cuyo objetivo sea otorgar financiamiento y asesoría técnica a los pobladores de las localidades y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas.

ARTÍCULO OCTAVO: Se reforma el artículo 51 para quedar como sigue:

Artículo 51.- Los pueblos, localidades y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas junto con el Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en coordinación con los consejos comunitarios, conforme a la normatividad aplicable, convendrán las acciones y medidas necesarias para conservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales comprendidos en sus territorios, de tal modo que éstas sean ecológicamente sustentables, técnicamente apropiadas y adecuadas para mantener el equilibrio ecológico, así como compatibles con la libre determinación de los pueblos, localidades y comunidades para la preservación y usufructo de sus propios recursos naturales.



ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo **52** para quedar como sigue:

Artículo 52.- Las autoridades deberán consensar con las comunidades **indígenas**, residentes y afroamericanas los proyectos e iniciativas de obras que impacten los recursos naturales comprendidos en sus territorios **y ser aprobados por los consejos comunitarios respectivos.**

ARTÍCULO DECIMO. Se reforma el artículo **53** para quedar como sigue:

Artículo 53.- La constitución de las áreas naturales protegidas y otras medidas tendientes a preservar los territorios regionales, municipales o por localidades de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afroamericanas deberán llevarse a cabo con base en acuerdos explícitos entre el Estado, los municipios, los pueblos y **sus consejos comunitarios**, incluyendo a sus representantes agrarios **con previa aprobación en asamblea comunitaria.**

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Se reforma el artículo **54** de la Ley de Derechos y Cultura **Indígena** del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 54.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en coordinación con las dependencias de la administración pública federal, en los términos de los convenios que se celebren, y con la participación de las comunidades **indígenas, residentes y afroamericanas** implementarán programas técnicos apropiados que tiendan a renovar y conservar el medio ambiente, a fin de preservar los recursos naturales, flora y fauna silvestres de esas comunidades.



Estos programas incluirán acciones de inspección y **vigilancia coordinada entre los tres órdenes de gobierno y las comunidades**, con el propósito de evitarla caza inmoderada y el saqueo de la fauna silvestre, así como la explotación irracional de los recursos naturales.

Las comunidades **indígenas, residentes y afromexicanas** tienen la obligación de realizar actividades de protección, restauración, conservación, aprovechamiento sustentable e investigación de recursos naturales, con el apoyo técnico y financiero del Estado de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales y de particulares, para lo cual se suscribirán previamente los acuerdos correspondientes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo **55** de la Ley de Derechos y Cultura **Indígena** del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 55.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos procurarán evitar el establecimiento, en las tierras ocupadas por comunidades **indígenas**, migrantes y afromexicanas de cualquier tipo de industria que emita desechos tóxicos, **niveles de toxicidad** o desarrolle actividades que puedan contaminar o deteriorar el medio ambiente.

En caso de exención, previa aprobación de las comunidades se garantizará la **retribución en grado de beneficio de desarrollo de los pueblos originarios.**

Las comunidades **indígenas, residentes y afromexicanas** coadyuvarán con la autoridad en acciones de vigilancia para la conservación y protección de los recursos naturales de sus territorios, **sin que esto se convierta en un factor de riesgo, violencia o persecución para las personas originarias que denuncian actos que vayan en contra de la protección de los recursos naturales.**

El Ejecutivo del Estado creará mecanismos de protección para personas de los pueblos



indígenas, residentes y afromexicanos defensores y también para activistas en favor del medio ambiente.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforma el artículo **56** de la Ley de Derechos y Cultura **Indígena** del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 56.- Las comunidades **indígenas, residentes y afromexicanas** podrán exigir y verificar ante las autoridades correspondientes, que los infractores reparen el daño ecológico causado, en términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma el artículo **57** de la Ley de Derechos y Cultura **Indígena** del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 57.- Cuando se suscite una controversia entre dos o más comunidades **indígenas, residentes y afromexicanas** o entre los integrantes de éstas, por la explotación de recursos naturales, el Estado procurará y promoverá, a través del diálogo y la concertación, que dichos conflictos se resuelvan por la vía de la conciliación, con la participación de las autoridades competentes.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforma el artículo **58** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 58.- Los Ayuntamientos procurarán establecer programas y acciones de apoyo a las localidades y comunidades **indígenas, residentes y afromexicanas** establecidas en su municipio, a efecto establecerán las previsiones presupuestales correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el artículo **2º apartado B fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**



ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforma el artículo **59** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 59.- El Ejecutivo del Estado, a través de las instancias de planeación competentes, **incorporará** la participación de los pueblos y las comunidades **indígenas**, residentes y afromexicanas **de acuerdo con la Ley de Consulta** en la formulación, diseño, aplicación y evaluación de programas de desarrollo del interés para mejorar las condiciones de vida en sus territorios regionales, municipales o por localidades, en los términos que establezcan las previsiones presupuestales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo **2º apartado B fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. - Se reforma el artículo **60** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 60.- El Ejecutivo del Estado podrá **acordar con los consejos comunitarios** de la población asentada en los territorios regionales, municipales o por localidades **de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos** la operación de programas y proyectos productivos conjuntos, tendientes a promover su propio desarrollo.

A través de los programas y proyectos productivos encaminados a la comercialización de los productos de las comunidades **indígenas, residentes y afromexicanas** se fomentará el aprovechamiento directo **mediante la venta directa** y se evitará el intermediarismo y el acaparamiento.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - Se reforma el artículo **61** de la Ley de Derechos y



Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 61.- El Ejecutivo del Estado en el diseño de sus políticas de descentralización, **deberá considerar** a las comunidades **indígenas, residentes y afroamericanas** asentadas en territorios regionales, municipales o por localidades, para facilitarles el acceso a los servicios públicos **que requieran** y que puedan prestarse éstos con **calidad, calidez y eficiencia, con respeto al medio ambiente.**

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - Se reforma el artículo **62** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 62.- El Estado y los municipios **deberán** promover el desarrollo equilibrado y armónico **con la naturaleza** de las comunidades **indígenas, residentes y afroamericanas** junto con **el resto de la población, la vocación productiva de la región y la forma de organización del sector, primario, secundario y terciario de la economía.**

ARTÍCULO VIGÉSIMO. - Se reforma el artículo **63** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 63.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos facilitarán el impulso para la creación de **empresas sustentables y sostenibles**, cuya propiedad corresponda a las propias comunidades originarias, con la finalidad de fortalecer el desarrollo y optimizar la utilización de las materias primas, fomentar la creación de fuentes de trabajo y **reducir los impactos negativos en el medio ambiente.**

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - Se reforma el artículo **64** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:



Artículo 64.- El arte, las industrias rurales y comunitarias, las actividades tradicionales y todas aquellas relacionadas con la economía de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos se reconocen como factores fundamentales del mantenimiento de su cultura y desarrollo económico. La Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, la Secretaría de Turismo del Estado de México, ejercerán las atribuciones que la ley les encomienda, con arreglo a las prescripciones del presente ordenamiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - Se reforma el artículo 66 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 66.- El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, a fin de proteger el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, difundirá, promoverá y asegurará los derechos de la niñez indígena, residente y afromexicana de tal forma que el trabajo que estos desempeñen no sea excesivo, perjudique su salud, les impida continuar con su educación o el goce de sus derechos, por lo que instrumentarán servicios de orientación social encaminados a concientizar a los integrantes de las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas en la necesidad de fortalecer esa protección; en el Estado de México no debe existir el trabajo infantil.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - Se reforma el artículo 68 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:



Artículo 68.- En el Estado de México, las entidades públicas y los particulares deben respetar el derecho de los indígenas, residentes y afromexicanos de igualdad de acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso, así como la remuneración igual por trabajo de igual valor. **Quienes contraten deberán capacitar a las personas y ésta capacitación, deberá ser pagada conforme a la ley.**

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - Se reforma el artículo **69** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 69.- **En el Estado de México los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos como todas las personas, ejercerán sus derechos y libertades para ocupar cargos de dirección en los sectores público y privado, fortaleciendo los principios de creatividad y liderazgo, ejerciendo el pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales, físicas, biológicas, sociales, culturales y espirituales.**

Las personas de los pueblos indígenas, residentes y afromexicanos pueden desenvolverse en todas las áreas laborales de todas las esferas sociales de la vida, tanto en su comunidad como fuera de ella, gozando de todos los derechos laborales que señala la ley y sin discriminación alguna.

Para el caso de trabajadores **indígenas, residentes y afromexicanos** empleados en la agricultura o en otras actividades fundamentales para la subsistencia de la sociedad en general, así como los empleados por contratistas de mano de obra, etc., gozarán de la protección que confieren la legislación y la práctica vigente a otros trabajadores de estas



categorías en los mismos sectores. El gobierno instrumentará campañas para mantenerlos debidamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponga.

Los trabajadores indígenas, **residentes y afromexicanos** no podrán estar sujetos, bajo ninguna modalidad, a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas.

Los trabajadores indígenas, **residentes y afromexicanos** gozan de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y están protegidos por la ley contra el hostigamiento sexual y laboral que será penalizado según lo dispuesto por todas **las leyes que aseguren su bienestar emocional, espiritual, mental, físico y cultural.**

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - Se reforma el artículo **71** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 71.- El Estado promoverá, en el marco de las prácticas tradicionales y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, **residentes y afromexicanas** la participación plena de las mujeres en tareas, actividades y cargos de representación de las comunidades, y pueblos en igualdad de circunstancias y condiciones con los varones, de tal forma que contribuyan a lograr su realización y superación, así como el reconocimiento y el respeto a su dignidad.

Para fomentar la participación en igualdad de condiciones, el Estado propiciará la



información, capacitación y difusión de los derechos de las mujeres y **de la niñez**, en las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas en sus territorios regionales, municipales o por localidades.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. - Se reforma el artículo **77** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 77.- La Secretaría del Trabajo fomentará programas para la capacitación laboral y el otorgamiento de becas de empleo y **estudio** a los jóvenes indígenas **as, residentes y afromexicanos**

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - Se reforma el artículo **82** de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 82.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, establecerá programas y acciones **para garantizar a los adultos mayores** y a las personas con discapacidad, **un trabajo digno e incluyente conforme a la ley, que les reconozca como personas valiosas para la sociedad y que sin importar su estado se les garanticen las condiciones necesarias para desenvolverse en el ámbito productivo.**

Toluca, Estado de México a 29 de junio de 2021



PROPONENTES

Carolina Santos Segundo (Pueblo ñãatrjo)

**Tonakuahutli Hernández Aguilar
(Comunidad indígena de Corupo en la Sierra Purhepecha)**

José Germán Garibay Gallardo (Pueblo Nahua Akolwa)

**Miguel Angel Reyna Castillo
(Pueblo Otomí)**

**Héctor Benito Sampedreño Muñoz
(Pueblo Otomí)**

**Regino Héctor Velázquez Jiménez
(Pueblo Otomí)**



Iniciativa que modifica y adiciona el artículo 17 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa está fundamentada en los artículos 9, 3, 4, 33, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2, 6 inciso “c”, 71 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2, segundo, cuarto, último párrafo del apartado “A” y el inciso IX del apartado “B”.

Todos los derechos son importantes, pero algunos son fundamentales y corresponde la palabra porque sin el ejercicio de ellos, los demás no llegarán. Y es el caso precisamente del derecho a una identidad propia, porque ello nos hace ser sujetos de derecho, si esto es importante para el individuo lo es también para una colectividad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 2 que somos una nación con una composición pluricultural y otorga a las entidades federativas la atribución de reconocer en sus constituciones locales a los pueblos y comunidades indígenas que lo integran.

Así que en la Constitución Local se reconocen 5 pueblos indígenas originarios de nuestra entidad; mazahuas, otomíes, tlahuicas, matlazincas y nahuas, sin embargo ha dejado en el olvido a los acolhuas, tepanecas y chalcas que han reclamado su reconocimiento.

Por otra parte, la actual Constitución Estatal no contempla procedimiento alguno para el reconocimiento de las comunidades indígenas y es hasta la Ley de Derechos y Cultura Indígena que se retoma.

Adicionalmente, en fechas recientes se adicionó en la Carta Magna el apartado “C” en el artículo 2, reconociendo al pueblo afromexicano y es necesario armonizar nuestra Constitución local.



En otro plano, uno de los puntos torales en la lucha indígena desde hace décadas es la búsqueda del reconocimiento como sujetos de derecho público; Se trata entonces de una personalidad jurídica con amplitud suficiente que permita, por una parte, ejercer sus derechos y, por otra, ejercer atribuciones que hagan viable la libre determinación, el ejercicio de la jurisdicción indígena y adoptar sus formas propias de organización, entre otras. Esta personalidad sólo puede ser la personalidad de derecho público

En consecuencia presentamos esta iniciativa que pretende subsanar lo ya manifestado.

Artículo 17.- El Estado de México tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada en sus pueblos indígenas, residentes y afromexicanos. Esta Constitución reconoce como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Náhua, Matlazinca, Tlahuica, Tepaneca, Acolhua, Chalca y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena y se encuentren en territorio estatal como residentes, así como al pueblo afromexicano cualquiera que sea su denominación, quienes tienen el carácter de sujetos de derecho público; con personalidad jurídica, con capacidad de emitir actos de autoridad y tomar decisiones plenamente válidas, con base en sus sistemas normativos, y de establecer un diálogo con el Estado y la sociedad en su conjunto y para el ejercicio de sus derechos y atribuciones colectivas se constituirán en un Concejo Estatal Autónomo, permanente, colectivo, apartidista, laico, pluricultural y con patrimonio propio, electo por sus sistemas normativos tradicionales, con los alcances y modalidades que señale su ley constitutiva y que se denominará Concejo de Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos del Estado de México

Las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas serán reconocidas por la Legislatura Local mediante decreto, a propuesta del Concejo de Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos del Estado de México, conforme al protocolo señalado en la Ley que crea dicho Concejo.

Las comunidades indígenas, migrantes y afromexicanas que decidan mediante sus sistemas normativo tradicionales asumir las responsabilidades de autonomía comunitaria o municipal deberán manifestarlo al Concejo de Pueblos Indígenas, Residentes y Afromexicanos del Estado de México, quien propondrá a la Legislatura del Estado de México en turno el reconocimiento respectivo mediante decreto que señale los alcances del mismo.



Toluca, Estado de México a 29 de junio de 2021

PROponentes

ENRIQUE SOTENO REYES
MARLEN TORRES GARCIA
REGINO HÉCTOR VELAZQUEZ JIMENEZ
JOSÉ GERMÁN GARIBAY GALLARDO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO

DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

La identidad indígena está implícita no solo en la lengua, o en el atuendo, va más allá, se encuentra en saberse y asumirse como parte elemental de un pueblo, reconocerse así mismo, tener un sentido de pertenencia.

Actualmente mucha de esta identidad social está construida por el proceso de colonización-mestizaje (en un sentido ideológico) si bien en algunos pueblos este proceso fue de manera casi inmediata, para otros fue lenta, incluso hoy en día persisten pueblos que aún se niegan como parte del país al que pertenecen, aunque su cultura se encuentre contaminada con la influencia del pensamiento occidental Eurocéntrico en mayor o menor grado.

Durante la historia reciente de México, el territorio de los pueblos originarios siempre ha estado en conflicto. Para muchos pueblos nativos la tierra, su tierra, es parte de su cultura, con una vinculación muy profunda, en la cual el territorio no es considerado una mercancía, la tierra está viva y con ella se aspira a su autosuficiencia, sin ella prácticamente no hay nada. El despojo y desplazamiento de los pueblos o culturas enteras hacia otras zonas ha causado resentimientos y resquebrajamientos culturales, guerras, levantamientos y revoluciones.

La transformación sufrida a causa de la colonización nos ha creado una base social que se subordina al sistema capitalista, violentando a los pueblos nativos originarios, a nuestros pueblos, desplazándose de su territorio y convirtiéndolos en un objeto de trabajo.

La cosmovisión occidentalocéntrica considera que la evolución es un progreso necesario en las sociedades capitalistas, pero no toma en cuenta la existencia de sociedades con otras ideas. El desarrollo, claro está, es diferente en las sociedades humanas.

No solamente se trata del hecho de ser heredero de los ancestros, puesto que el proceso de mestizaje colonizador sólo ha provocado un desapego total a nuestras verdaderas raíces, en que por un lado se rechaza al indígena, pero por el otro se favorece su folclor. La búsqueda de una identidad indígena no es tampoco homogeneizar a las diferentes culturas que conforman nuestro territorio, ya que cada una tiene sus características y diferencias, que son únicas. Nuestra identidad como herederos de los ancestros debe o debería ser identificarnos totalmente, radicalmente con nuestra herencia cultural de los pueblos originarios.

Las tradiciones, lenguajes, costumbres de cada uno de nuestros pueblos, pero también sus territorios, son parte vital de nuestra identidad como descendientes de los antiguos Anahuacas.

PROPUESTA

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 17 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:

Artículo 17.- El Estado de México tiene una composición pluricultural, pluriétnica y plurilingüe, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta constitución reconoce como pueblos originarios dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Nahuatl, Matlazinca, Tlahuica, Acolhua, Chalca, Tepaneca y aquellos que se identifiquen con algún otro pueblo indígena o afroamericano.

Las comunidades indígenas, residentes y afroamericanas serán reconocidas por la Legislatura Local mediante decreto, a propuesta del Consejo de Pueblos Originarios, Migrantes y Afroamericanos del Estado de México, conforme al protocolo señalado en la Ley que crea dicho Consejo.

LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL ESTADO DE MEXICO DE LOS PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS, RESIDENTES Y AFROAMERICANAS DEL ESTADO DE MEXICO

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad, una de las demandas centrales de los pueblos indígenas es el reconocimiento de su derecho a la autonomía. El reclamo tiene sentido en la medida en que se corrobora que desde hace cinco siglos han sido sometidos a relaciones coloniales. Antes de que los españoles llegaran al Anáhuac y Aridoamérica, allí habitaban grandes sociedades con culturas diferentes y un alto grado de desarrollo, que los invasores convirtieron en *indígenas*. El *indígena* fue inventado con el propósito de someter y explotar a los pueblos originarios.

La guerra de independencia no cambió la situación colonial de los pueblos indígenas. Los Estados que surgieron de los escombros de las antiguas colonias se fundaron bajo la idea de un solo poder soberano y una sociedad homogénea, compuesta de individuos con derechos iguales. El discurso de la igualdad jurídica sirvió a los criollos para legitimar la negación y violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos la propiedad y posesión colectiva de sus tierras y el mantenimiento de sus gobiernos. En el primer caso, se consideró que la posesión colectiva de las tierras de los pueblos indígenas atenta contra el derecho de propiedad privada y para fraccionarlas se promovieron leyes, afines a las políticas de colonización. Para el caso de los gobiernos indígenas se esgrimió el argumento falso de que reconocerlos equivalía a otorgarles un fuero y eso atentaba contra la igualdad como derecho humano. El daño fue tal, que los estudiosos de este fenómeno han hablado de una segunda conquista, más dañina incluso que la promovida por los invasores.

La Revolución mexicana y la constitución política emanada de ella no cambiaron la situación a pesar de la masiva participación de los pueblos en la primera y del marcado sentido social de la segunda. El Congreso Constituyente de 1917 sólo estableció la restitución de las tierras a los pueblos que hubieran sido despojados de ellas y ordenó

que a los que no tuvieran se les dotará, al tiempo que reprimía todo gobierno intermedio entre los municipios y los gobiernos estatales. El colonialismo no terminó, sólo cambió de forma. Pablo González Casanova lo explicó afirmando que para remontar el problema, el Estado mexicano creó instituciones y políticas específicas para pueblos indígenas, dando origen a lo que se conoció como *indigenismo*. El asunto estaba claro: los pueblos indígenas eran considerados un lastre, un obstáculo para el desarrollo del país, por eso había que integrarlos a la nación y para lograrlo había que terminar con su cultura. El indigenismo tuvo muchas expresiones a lo largo de las décadas, pero al final fracasó: los pueblos indígenas no desaparecieron.

PROPUESTA

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 1 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y tiene por objeto reconocer y regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, residentes ,y afromexicanas asentadas de manera continua en comunidades y, en su caso, municipios de la entidad; normas que se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas ,residentes ,y afromexicanas que reconoce la presente Ley serán ejercidos a través de sus respectivas comunidades

Es obligación de las autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 2 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.- El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanos cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas y post hispánicas ; hablen o no hablen una lengua propia en la actualidad; han ocupado sus territorios en forma continua y permanente; han construido sus culturas específicas. Son sus formas e instituciones sociales, económicas y culturales las que los identifican y distinguen del resto de la población del Estado.

Dichos pueblos y comunidades existen desde antes de la formación del Estado de México y contribuyeron a la conformación política y territorial del mismo. Estos pueblos indígenas, residentes y afromexicanos descienden de poblaciones que habitaban en una región geográfica al iniciar la colonización dentro de lo que hoy corresponde a las actuales fronteras estatales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Los pueblos de origen nacional procedentes de otro estado de la república y avecindados en el Estado de México, denominados residentes en esta ley podrán acogerse en lo conducente a los beneficios que esta norma, el orden jurídico mexicano y los Tratados Internacionales les reconocen, respetando las tradiciones de las comunidades donde residan, pudiendo tener acceso a dichos beneficios en forma colectiva o individual.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 3 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.- La conciencia de la identidad indígena ya sea por autoadscripción individual o colectiva, residente o afromexicana es el criterio fundamental para determinar los pueblos y comunidades a los que se aplican las disposiciones del presente ordenamiento, así como para identificar las comunidades y, en su caso, municipios con presencia de los mismos.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 4 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 4.- La utilización del término "pueblos" en esta ley no deberá interpretarse en el sentido de las implicaciones que atañen a los derechos que pueda conferirse a dicho término el derecho internacional, o bien como entidad depositaria de la soberanía que corresponde únicamente al Pueblo del Estado de México.

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 5 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. El Estado: Estado de México, parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Pueblos Indígenas: Colectividades humanas, descendientes de poblaciones que, al inicio de la colonización, habitaban en el territorio de la entidad, las que han dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros antes de la conformación del Estado de México, que afirman libre y voluntariamente su pertenencia a cualquiera de los pueblos señalados en el artículo 6 de esta ley;

III. Comunidad Indígena: Unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sistemas normativos tradicionales.

IV. Pueblo Residente.-Los pueblos de origen nacional procedentes de otro estado de la república y avecindados en el Estado de México, Tendrán en lo conducente los derechos señalados para los pueblos indígenas en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social

V. Pueblo Afromexicano. Se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural del Estado de México. Tendrán en lo conducente los derechos señalados para los pueblos originarios en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

VI. Autonomía: Expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas del Estado de México, para asegurar la unidad estatal en el marco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, adoptar por sí mismos decisiones y desarrollar sus propias prácticas relacionadas, entre otras, con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización socio-política, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura;

VII. Territorio Indígena: Región del territorio estatal constituida por espacios continuos ocupados y poseídos por las comunidades indígenas, residentes o afromexicanas, en cuyo ámbito se manifiesta su vida comunitaria y confirman su cosmovisión, sin detrimento alguno de la Soberanía del Estado de México, ni de la autonomía de sus municipios;

VII. Derechos Individuales: Garantías que el orden jurídico mexicano otorga a todo hombre o mujer, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo o comunidad indígena, residente o afromexicana por el sólo hecho de ser persona;

IX. Derechos Colectivos: Facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden jurídico mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, residentes o afromexicanas en los ámbitos político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, para garantizar su existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a sus pueblos indígenas:

X. Sistemas Normativos Tradicionales: Conjunto de normas de regulación, orales y de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican en la resolución de sus conflictos;

XI. Usos y Costumbres: Base fundamental de los sistemas normativos tradicionales y que constituye el rasgo característico que los individualiza;

XII. Autoridades Municipales Tradicionales: Aquellas que están expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley Orgánica Municipal del Estado; y que son electas conforme a sistemas normativos tradicionales;

XIII. Autoridades Tradicionales: Aquellas que los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas reconocen de conformidad con sus sistemas normativos tradicionales, derivados de sus usos y costumbres.

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el artículo 6 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 6.- En el Estado de México se reconoce la existencia de los siguientes pueblos indígenas:

I. Mazahua, asentados en las localidades reconocidas legalmente, por la costumbre o la conciencia de identidad, ubicadas principalmente en los municipios de: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria.

II. Otomí, asentados en las localidades reconocidas legalmente, por la costumbre o la conciencia de identidad, ubicadas principalmente en los municipios de: Acambay de Ruiz Castañeda, Aculco, Amanalco, Capulhuac, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquipilco, Lerma, Metepec, Ocoyoacac, Oztolotepec, Morelos, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Temoaya, Tianguistenco, Timilpan, Toluca, Villa del Carbón, Xonacatlán y Zinacantepec. Huixquilucan, Calimaya, Polo, valle de chalco

III. Náhua, asentados en las localidades reconocidas legalmente, por la costumbre o la conciencia de identidad, ubicadas principalmente en los municipios de: Capulhuac, Joquicingo, Malinalco, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tianguistenco, y Xalatlaco.

IV. Tlahuica, asentados en las localidades reconocidas legalmente, por la costumbre o la conciencia de identidad, ubicadas principalmente al municipio de Ocuilan.

V. Matlazinca, asentados en las localidades reconocidas legalmente, por la costumbre o la conciencia de identidad, ubicadas principalmente en el municipio de Temascaltepec.

VI. Acolhua, asentados en las localidades reconocidas legalmente, por la costumbre o la conciencia de identidad, ubicadas principalmente en los municipios de: Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca y La Paz, Ecatepec de Morelos y Tecámac, Acolman, Axapusco, Chiautla, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán y Tepetlaoxtoc, Coyotepec, Tepetzotlán, Tonanitla, Teoloyucan, Jaltenco, Melchor Ocampo y Nextlalpan, Atenco, Chiconcuac, Texcoco y Tezoyuca, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Tultepec y Tultitlán, Apaxco, Hueypoxtla, Huehuetoca, Tequixquiac, y Zumpango.

VII. Tepaneca, asentados en las localidades reconocidas legalmente, por la costumbre o la conciencia de identidad, ubicadas principalmente en los municipios de: Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan de Juárez y Xonacatlán, Ocoyoac, Tlalnepantla, Atizapan de Zaragoza y Naucalpan.

VIII. Chalca, asentados en las localidades reconocidas legalmente, por la costumbre o la conciencia de identidad, ubicadas principalmente en los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco.

Asimismo, la presente Ley reconoce a los pueblos de origen nacional procedentes de otro estado de la república y avecindados en el Estado de México y a los pueblos residentes y afromexicanos independientemente de su autodenominación.

ARTÍCULO SEPTIMO. Se reforma el artículo 6 bis de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 6 Bis.- La Legislatura del Estado de México, para efectos de otorgar precisión y certeza jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas , residentes y afromexicanas y con la finalidad de que puedan acceder a los beneficios de las políticas públicas sectorizadas, integrará un catálogo, que no será limitativo, de las comunidades con presencia indígena a partir de la información que le proporcione el Consejo de Pueblos indígenas, residentes y Afromexicanos del Estado de México.

Las comunidades indígenas , residentes y afromexicanas del Estado de México que la presente Ley reconoce, serán las que apruebe la Legislatura del Estado, con base en la información referida.

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el artículo 6 ter. de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 6 Ter.- La presente Ley reconoce a los pueblos indígenas procedentes de otro estado de la república y vecindados en el Estado de México, quienes podrán acogerse en lo conducente a los beneficios que esta ley, el orden jurídico mexicano y los Tratados Internacionales les reconocen, respetando las tradiciones de las comunidades donde residan, pudiendo tener acceso a dichos beneficios en forma colectiva o individual.

ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo 7 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 7.- La aplicación de esta ley corresponde a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los Ayuntamientos, a las autoridades tradicionales, autoridades municipales tradicionales y a las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de sus dependencias y organismos auxiliares:

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a favor de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y Afromexicanos;

II. Asegurar que los integrantes de las comunidades indígenas, residentes y afromexicanos gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de la entidad;

III. Promover que las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social, operen de manera conjunta y concertada con las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas;

IV. Promover el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas impulsando el respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y autoridades tradicionales;

V. Promover estudios sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas.;

VI. Las demás que señale la presente ley y otros ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 9 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas:

I. Los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Ayuntamientos deberán:

a) Reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá considerarse la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo;

c) Reconocer los sistemas normativos internos en el marco jurídico general en correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las garantías individuales y a los derechos sociales.

II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les concierne.

CAPITULO II

Derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas, residentes y afromexicanos en el Estado de México.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 11 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 11.- Las comunidades indígenas, residentes y afromexicanos del Estado de México tendrán personalidad jurídica para ejercer los derechos establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 12 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 12.- Los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanos tienen derecho social a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos diferenciados y a gozar de plenas garantías contra cualquier acto de discriminación, violencia, reacomodos o desplazamientos ilegales, separación de niñas y niños indígenas, residentes y afromexicanos de sus familias y comunidades.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforma el artículo 13 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 13.- En el Estado de México se reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanos en toda su amplitud política, económica, social y cultural, fortaleciendo la soberanía nacional, el régimen político democrático, la división de Poderes, los tres niveles de gobierno, las garantías individuales y sociales, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma el artículo 14 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Esta ley reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, residentes y afromexicanas nombradas por sus integrantes de acuerdo a sus propias costumbres, garantizando la participación efectiva y equitativa de las mujeres y de los jóvenes mayores de dieciocho años, en un marco que respete la soberanía del Estado y la autonomía de sus municipios.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforma el artículo 15 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 15.- Las comunidades indígenas, residentes y afromexicanos y sus integrantes tienen el derecho de promover por sí mismos o a través de sus autoridades tradicionales de manera directa y sin intermediarios cualquier gestión ante las autoridades. Sin menoscabo de los derechos individuales, políticos y sociales.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforma el artículo 16 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 16.- Para asegurar el absoluto respeto de los derechos humanos de los indígenas, residentes y afromexicanos se incorporará en el Consejo de la Comisión

Estatad de Derechos Humanos, a un representante de la totalidad de los pueblos indígenas, residentes y afroamericanos.

Texcoco Estado de México a 05 de Julio del 2021,

**Gloria Hernández Velázquez
José Germán Garibay Gallardo
Rigoberto Nepomuceno Secundino
Simón Paulino Escamilla
Luis Ángel Ortiz Montoya
Maribel Sánchez Nava
Juan Manuel Garfias Cano
Yesenia Hernández José María**

- **Dulce María Eusebia Peña Reyes**